

Causa Rol N° 1-2016.

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre.

Temuco, veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro. -

VISTOS:

ÍNDICE

Relación de la Sentencia.....	2-5
Resumen ejecutivo.....	5-6
Actuarios de tramitación y dato técnico.....	6-7
En cuanto a la Acción Penal:	
Declaraciones	7-82
Documentos	82-111
Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....	111-113
Calificación jurídica de los hechos.....	113-119
Concepto de Lesa Humanidad.....	119-122
Declaraciones indagatorias y sus respectivos análisis.....	122-239
En cuanto a las Defensas.....	239-250
Consideraciones previas al análisis de las defensas:	
Resumen ejecutivo del auto acusatorio.....	250-251
Estado de Derecho.....	251-256
Obligación de Investigar.....	256-275
Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por Tribunales alemanes	275-286
Convenios de Ginebra.....	253-287
Análisis de las defensas específicas.....	287-323
Reflexiones de lesa humanidad.....	323-329
Adhesión a la acusación fiscal y análisis.....	329-330
Acusación particular y análisis.....	330
Eximentes de responsabilidad penal.....	330-332
Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:	
Atenuante de responsabilidad penal.....	332-336
Prescripción gradual de la acción penal	336-339

Agravantes de responsabilidad penal..... 339-341

Determinación de la Pena.....341-344

Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....344-352

Cumplimiento en el domicilio.....352-354

En cuanto a la Acción Civil:

Demanda civil.....354-356

Contestación de la demanda civil.....356-363

Análisis de la contestación de la demanda civil.....363-375

Acreditación probatoria del daño moral.....375-377

Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....377-378

Aspectos Resolutivos.....378-385

RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N°1-2016** del ingreso de la Corte de Apelaciones de Valdivia, para investigar los delitos de detención ilegal, aplicación de tormentos, homicidio calificado e inhumación ilegal en las personas de Héctor Alejandro y Guido Ricardo, ambos Barria Bassay, y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. LUIS ALBERTO OYARZUN ARRIAGADA, R.U.N. 6.564.748-6, chileno, natural de Riachuelo, casado, 74 años, ex funcionario de Carabineros de Chile, domiciliado en Vicente Reyes N°1060, Osorno, región de Los Lagos, extracto filiación y antecedentes de fs. 1705 (Tomo V) y de fs. 3007 (Tomo IX).

2. HANS EDUART SCHERNBERGER VALDIVIA, R.U.N. 3.607.882-0, chileno, natural de Providencia, casado, 89 años, ex funcionario de Carabineros de Chile, domiciliado en 10 Norte N°563, departamento 32, Viña del Mar, región de Valparaíso, extracto filiación y antecedentes de fs. 1706 (Tomo V).

3. JOSÉ HERNAN GODOY BARRIENTOS, R.U.N. 6.079.250-K, chileno, natural de Santa Juana, casado, 76 años, ex funcionario de Carabineros de Chile, domiciliado en Parcela Coñico S/N, Purranque, región de Los Lagos, extracto filiación y antecedentes de fs. 1704 (Tomo V), fs. 3006 (Tomo IX).

Se inició la causa por querrela criminal de Mahmud Segundo Aleuy Peña, Subsecretario del interior, que consta a fs. 15 a fs. 27(Tomo I), por los delitos de detención ilegal, aplicación de tormentos o tortura, homicidio calificado e

inhumación ilegal en contra de todos aquellos que resulten responsables y en definitiva condenarlos y aplicar el máximo de las penas legales, con costas.

De fs. 1072 a fs. 1080(Tomo III), querella criminal por el abogado Vladimir Riesco Bahamondes en representación de 1) Inés del Carmen Barria Basay, 2) Zinia Amelia Barria Basay, 3) Luis Eliecer Barria Basay, 4) Ricardo Alejandro Barria Ralil, 5)Cecilia Andrea Barria Ralil y 6) Maria Cristina Barria Caro, por los delitos de secuestro calificado, homicidio calificado y detención ilegal, cometidos en contra de las personas Guido Ricardo Barria Basay y Héctor Alejandro Barria Basay, en contra de todos aquellos que resulten responsables y en definitiva condenarlos a las penas legales pertinentes, con costas.

A fs. 1707 a fs. 1724 (Tomo V), con fecha 04 de abril de 2023, se **sometió a proceso a Hans Eduart Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos y Luis Alberto Oyarzún Arriagada** como autores de los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado, en contra de Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barria Basay, perpetrados en la comuna de Riachuelo, desde el 16 de octubre de 1973. Otorgándoles la medida cautelar personal de arresto domiciliario total.

A fs. 1867 (Tomo II), con fecha 24 de mayo de 2023, la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco confirmo la resolución del 04 de abril de 2023, en cuanto sometió a proceso a Hans Schernberger Valdivia.

A fs. 1946 (Tomo V), con fecha 09 de agosto de 2023, **se declaró cerrado el sumario.**

A fs. 1950 a fs. (Tomo V), con fecha 31 de agosto de 2023 se dictó **auto acusatorio en** contra de **Hans Eduart Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos y Luis Alberto Oyarzún Arriagada** en calidad de autores de los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barria Basay, perpetrados en la comuna de Riachuelo desde el 16 de octubre de 1973.

A fs. 1046 a fs. 1048 (Tomo VI), la abogada Catalina Ross Fredes en representación del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos formula acusación particular en contra de Hans Eduart Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos y Luis Alberto Oyarzún

Arriagada, en su calidad de autores de los delitos de secuestro calificado, detención ilegal y apremios ilegítimos en contra de Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barria Bassay solicitando se le reconozca la agravante contemplada en el artículo 12 N°8 del Código Penal.

A fs.2.083 a fs. 2108 (Tomo VI), el abogado Vladimir Riesco Bahamondes, en representación de **1) Inés del Carmen Barria Basay, 2) Zinia Amalia Barria Basay, 3) Ricardo Alejandro Barria Ralil, 4) Cecilia Andrea Barria Ralil y 5) Maria Cristina Barria Caro**, en lo principal se adhiere a la acusación fiscal. Al primer otrosí de su presentación deduce acción civil en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por Álvaro Sáez Willer, abogado procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Temuco, solicitando se condene al demandado a la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos) para cada uno los demandantes civiles, o la suma que el Tribunal determine en justicia, con reajustes de acuerdo al IPC desde la fecha de notificación de ésta demanda, más interés legales y las costas del juicio.

De fs. 2.262 a fs.2305 (Tomo VI), el abogado Procurador Fiscal de Temuco, **Diego Acuña Gálvez**, en representación del Fisco de Chile, **contesta las demandas civiles** deducidas por el abogado Vladimir Riesco Bahamonde, solicitando tener por contestada la demanda y, en definitiva, acoger las excepciones o defensas opuestas (Excepción de reparación integral. Improcedencia de las indemnizaciones reclamadas alegadas por haber sido ya indemnizado los demandantes que se indican. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada por preterición legal de los demandantes que comparecen en calidad de hermanas de ambas víctimas directas. Excepción de prescripción extintiva), negando lugar a dicha demanda en todas sus partes; y, en el evento improbable de que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de la suma demandada por concepto de indemnización, de perjuicios, además de acoger la excepción que mira los reajustes e intereses y su cómputo, e improcedencia de condena en costas.

A fs. 2342 a fs. 2400 (Tomo VII), el abogado Tomas Zamora Maluenda en representación de **José Hernán Godoy Barrientos** en lo principal de su escrito interpone excepciones de previo y especial pronunciamiento; al otrosí: en subsidio, contesta acusación.

A fs. 2404 a fs. 2479 (Tomo VII), el abogado Maximiliano Murath Mansilla en representación de **Luis Alberto Oyarzún Arriagada**, en lo principal de su escrito solicita inhabilidad por aplicación del artículo 19 número 3 de la Constitución Política de la Republica; y solicita inhabilidad del juez por control de convencionalidad: al primer otrosí: solicita suspensión del procedimiento; al segundo otrosí: solicita la nulidad de las declaraciones del proceso que se indica; al tercer otrosí: en subsidio, excepciones de previo y especial pronunciamiento; en el cuarto otrosí: en subsidio, contesta acusación fiscal y particulares y adhesiones de los querellantes particulares; al quinto otrosí, lista de testigos de conducta; al sexto otrosí: lista de testigos de descargo; al séptimo otrosí: medios de prueba.

A fs. 2632 a fs. 2671 (Tomo VIII), el abogado Hernán Benavides Navarro en representación de **Hans Eduart Schernberger Valdivia** en lo principal de escrito excepciones de previo y especial pronunciamiento; al primer otrosí: en subsidio, contesta acusación fiscal; al segundo otrosí: contesta acusaciones particulares; al tercer otrosí: medios de prueba; al cuarto otrosí: beneficios de la ley 18.216 y otros y al quinto otrosí: media prescripción.

A fs. 2767 (Tomo VIII), con fecha 18 de junio de 2024, se recibió la causa a prueba.

A fs. 2908 (Tomo IX), el 25 de julio de 2024 se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A fs. 2909 (Tomo IX) del 25 de julio de 2024 se trajeron los autos para efectos del **artículo 499 del Código de Procedimiento Penal**.

A fs. 2910,2952, 2956, 2957, 2961, 2978, 2989, 2996,2998, 3005 3008, 3009 (Tomo IX), se dictaron medidas para mejor resolver.

A **fs. 3024 (Tomo IX)**, del 25 de noviembre de 2024, se trajeron los autos para fallo.

Resumen ejecutivo:

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL 1° al 64 °: 1°) y 2°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones y Documentos; **3°)** Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; **4°) y 5°)** Calificación jurídica de los hechos; **6°) y 7°)** Concepto de Lesa Humanidad; **8°)** Declaración Indagatoria de Luis Oyarzún Arriagada; **9°),10°), 11°) y 12°)** Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; **13°)** Declaración Indagatoria de Hans Schernberger Valdivia; **14°), 15°) y 16°)** Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; **17°)** Declaración Indagatoria de José Godoy Barrientos; **18°), 19°), 20 °) y 21°)**

Análisis de la declaración del acusado, corroboración con sus propios dichos y ponderación en relación a la prueba del proceso; **22°)** Defensa del Abogado Maximiliano Murath Mansilla en representación de Luis Oyarzún Arriagada; **23°)** Defensa del Abogado Hernán Benavides Navarro en representación de Hans Schernberger Valdivia; **24°)** Defensa del abogado Tomas Zamora Maluenda en representación de José Godoy Barrientos; **25°) Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa: 26°)** Resumen ejecutivo del auto acusatorio; **27°)** Estado de Derecho; **28°)** Obligación de investigar. **29°)** Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán.; **30°)** Convenio de Ginebra; **31°)** Análisis de la Defensa Específica del Luis Oyarzún Arriagada; **32°)** Análisis de la Defensa Específica del Acusado Hans Schernberger Valdivia; **33°)** Análisis de la Defensa Específica del acusado José Godoy Barrientos ;**34°), 35°), 36°), 37°), 38°), 39°), 40°), 41°) 42°) y 43°)** Reflexiones sobre lesa humanidad; **44°) y 45°)** Adhesión a la acusación fiscal y análisis del Tribunal; **46°) y 47°)** Acusación particular y análisis del Tribunal; **48°) y 49 °)** Eximentes de responsabilidad penal; **Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal: 50°) y 51°)** Atenuante de responsabilidad penal y análisis del Tribunal; **52°)** Prescripción gradual; **53°) y 54°)** Agravantes de responsabilidad penal y análisis del tribunal; **55°), 56°), y 57°)** Determinación de la pena; **58), 59°),60°), 61°), 62°)** Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores; **63°) y 64°)** Solicitud de cumplimiento en el domicilio y análisis del tribunal;

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 65° al 70°); 65°) Demanda Civil interpuesta por el abogado Vladimir Riesco en representación de Inés del Carmen Barría Bassay, Zinia Amelia Barría Bassay, Ricardo Alejandro Barría Ralil, Cecilia Andres Barría Ralil y Maria Cristina Barria Caro **66°)** Contestación de la Demanda Civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Diego Acuña Gálvez, en representación del Consejo de Defensa del Estado; **67°)** Análisis de la contestación de la demanda civil efectuada por el Fisco de Chile; **68°)** Acreditación probatoria del daño moral; **69°)** Montos; **70°)** Reajustes e intereses de la suma demandada.

Actuarios de tramitación y dato técnico:

- a. Fecha de inicio de la causa: 06 de mayo de 2016.
- b. Actuario de Tramitación Sumario: Tamara Chihuailaf Fuentealba.
- c. Actuario de Tramitación Plenario: Jocelyn Fuentes Cortés, Cecilia Cruces Valdebenito, Leslie Villalobos Retamal y Francisca Rabié Figueroa
- d. Tomos IX
 - Tomo I de fs. 1 a fs. 524
 - Tomo II de fs. 525 a fs. 899
 - Tomo III de fs. 900 a fs. 1351
 - Tomo IV de fs. 1352 a fs. 1690
 - Tomo V de fs. 1691 a fs. 2010
 - Tomo VI de fs. 2011 a fs. 2341
 - Tomo VII de fs. 2342 a fs. 2631

Tomo VIII de fs. 2632 a fs. 2877

Tomo IX de fs. 2878 en adelante

Un cuaderno con investigación de Fiscalía de Rio Negro.

Cuaderno separado de fs. 1 a fs. 86 y cuaderno separado que contiene CD de expediente a la vista.

e. Fojas:385

f. Considerandos: 70°)

CONSIDERANDOS:

En cuanto a la acción penal.

1°) Que de **fs. 1950 a fs. 1983(Tomo V)**, con fecha 31 de agosto de 2023, se dictó auto acusatorio en contra de Hans Eduart Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos y Luis Alberto Oyarzún Arriagada como autores de los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Héctor Alejandro Barría Bassay y Guido Ricardo Barría Bassay, perpetrados en la comuna de Riachuelo, desde el 16 de octubre de 1973.

2°) Que con el objeto de establecer en autos la existencia del señalado ilícito penal, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de **fs.1950 a fs. 1983(Tomo V)**, (que corren de **fs. 1 a fs. 1949**), como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de las pruebas rendidas durante el plenario.

A. Declaraciones (27).

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

- 1 Ricardo Alejandro Barría Ralil
- 2 Inés Del Carmen Barría Bassay
- 3 Elvecia Bassay Alvear.
- 4. Luis Eliser Barría Bassay
- 5 Patricia Del Carmen Torres Naguián
- 6 José Vitalino Soto Cumián
- 7 Inés Patricia Navarro Martínez
- 8 Héctor Ulloa Mardones
- 9 Juan Carlos Soto Ampuero
- 10 Oscar Hernán Vargas Cárdenas
- 11 Armando Pezo Medina
- 12 Salvador Heriberto Caro Pino

- 13 Rumilio Jersan Bustamante Bustamante
- 14 Robert Santiago Teylorl Escobar
- 15. Raúl Estatiro Guzmán Del Río
- 16.Eduvino Federico Schell Wetzel
- 17 Alfonso Huenchan Melillanca
- 18. José Rómulo Catalán Oyarzún
- 19 Lastenia Mercedes Casas Maldonado
- 20 Víctor René Guzman Del Rio
- 21 Pedro Alejandrino Barría Navarro
- 22. Pedro Segundo Soto Godoy
- 23. Luis Clemente Chodín Céspedes
- 24. Quintiliano Rogel Alvarado
- 25. Joel Cornelio Norambuena Hinostroza

26. Juan Guzmán Tapia

27. Juan Hilario Bassay Alvear

A.1 Ricardo Alejandro Barría Ralil (0 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depuso de fs. 33 a fs.35 (Tomo I) y de fs. 264 a fs. 266 (Tomo I).

En declaración judicial de fecha 23 de mayo de 2016, **rolante de fs. 33 a 35 (Tomo I)**. Acota que es hijo de Guido Ricardo y sobrino de Héctor Alejandro, ambos de apellidos Barría Bassay, quiénes fueron detenidos el 16 de octubre de 1973 por personal de Carabineros de Río Negro, específicamente por el Capitán Hans Schernberger, el Teniente Hernán Godoy, los Cabos Pedro Soto, Robert Teylorl y Carabineros Alberto Oyarzún, Quintiliano Rogel y otros de apellido Catalán, Alvarado y dos más cuyos apellidos no recuerda actualmente. Todos estos datos los supo por su madre de crianza, que en realidad es su abuela de nombre Helvecia Bassay (fallecida), quién le narró desde su infancia cómo su padre a mediodía fue detenido por este grupo de Carabineros que llegó al aserradero donde trabajaba su padre y su tío Héctor, ubicado en el sector Los Riscos de la Comuna de Purranque. Ellos eran dirigentes del partido socialista, motivo por el cual deben haber sido detenidos. Desde la fecha de su detención nunca más supieron de su paradero, sin embargo, en la causa seguida en la ciudad de Santiago por estos mismos hechos hay declaraciones de Carabineros que confirman que su padre y su tío fueron asesinados. No obstante lo anterior, nunca dijeron en qué lugar fueron enterrados o qué pasó con sus cuerpos. Ahora bien, el jueves 28 de abril mientras realizaba su trabajo es decir, manejar un bus, una pasajera de nombre Patricia Torres le pregunta si era familiar de los Bassay, ante lo cual respondió positivamente. Luego ella le pide bajar del bus y hablar en privado, lo que hicieron, contándole que ella trabajó en el fundo de don Germán Pasenau (fallecido) como nana por el lapso de un año hace unos seis o siete años atrás, época en la cual escuchó una conversación entre la hija de ese señor de nombre María Isabel y su madre, doña María Luisa (fallecida) y que la niña le decía que contaran todo lo que sabían de los Barría y que la señora decía que no podía hacerlo por temor a su marido. La señora Patricia Torres también le contó que había un sector dentro del Fundo, que era cuidado celosamente por un trabajador de nombre Marcelino Molina, donde era de comentario popular que ahí había restos óseos y que el punto para llegar a él era donde un tractor se había volcado, donde en algún momento un tractor se accidentó, sector que era denominado “El Cementerio”. Posteriormente, el día 29 de abril conversó con su amigo Mario Gallegos, que trabaja en el fundo contiguo al de

Pasenau, al que le conversó el tema del tractor, respondiéndole éste que sabía dónde estaba ubicado ese sector. A él le pidió que lo llevar y le dijo que al día siguiente, a las 9:00 am lo llevaría. Fue así como a la hora indicada y después de atravesar el Río Blanco llegaron al lugar buscado. Ahí vieron que en algunos puntos más bajo sería lo más probable que pudiera haberse enterrado los restos humanos, pero eso sólo por lógica, sin tener ningunos datos reales sobre ese entierro. Al llegar a su casa ese día, conversó con su hermana Cecilia y junto a ella y a su señora Priscila Martínez fueron de nuevo al lugar, pero esta vez llevando una pala, con la cual cavó en un solo lugar, pero al escuchar unas motos se asustaron y se fueron de ahí. El día domingo les mostró el sector a sus tíos Inés y Luis, pero no cavaron. El día lunes trató de ubicar a doña Patricia, logrando dar con su domicilio, quién le narró con un poco más de detalles que en la casa de los Pasenau había un subterráneo que impresionaba como un lugar para torturar. También quiere agregar que su abuela contó a la familia que un trabajador de Pasenau de nombre Juan Emilio Pacheco Soto, señaló haber visto cuando Carabineros llegó al fundo y observó al papá del deponente sentado en la carrocería de la camioneta policial y a su tío botado y tapado con sacos, sin saber si este último estaba vivo. Con todos estos antecedentes, más los entregados por un médium hace más de un año atrás coincidían, por lo cual volvió a cavar donde antes había comenzado a hacerlo, logrando encontrar unas osamentas, específicamente, un trozo de cráneo, una muela y como seis huesos, todos los cuales metió en una bolsa para luego llevarlos hasta la PDI de Osorno, donde narró todo lo ocurrido. Con el transcurso de los días y cuando llegó el servicio médico legal a trabajar en el lugar del descubrimiento, supieron que le dicen “El Cementerio”, porque años antes había habido una pandemia que mató a una familia, la cual habría sido enterrada justo ahí. Finalmente señaló que una hija de un trabajador de ese Fundo se le acercó y le dijo que los trabajadores de Germán Pasenau habitualmente eran maltratados por los Carabineros del sector, previa orden de Pasenau. Ella le dio los nombres de esas personas y ahora las acompaña en documento adjunto a este Tribunal. Específicamente, Carlos Pérez Martínez escuchó de parte de Javier, de que le habría escuchado decir a Jorge Pasenau, hijo de Germán, que habrían aprovechado el llamado “Cementerio” para enterrar cuerpos de detenidos desaparecidos.

Además, por dichos de Verónica Muñoz su tío Óscar Villarroel (fallecido) y Carlos Escobar habrían encontrado un cráneo mientras hacían labores en el campo, el que pusieron en conocimiento de su jefe Germán Pasenau, quién dio la orden de enterrarlo nuevamente. También se le acercó Héctor Ulloa Mardones para comentarle que conversó con Vitalino Soto, quién le comentó que también vio a su padre detenido y en la camioneta de Carabineros, sin contar más porque habría explotado en llantos. Éste era mozo en la casa de Pasenau, por lo que puede tener mayores datos.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2016, **rolante de fs. 264 a fs. 266 (Tomo I)**. Aduce que es la tercera vez que declara en la presente causa, por el secuestro de su padre Guido Barría Bassay y su tío Héctor Alejandro ante la Policía de investigaciones de Chile. Respecto a los hechos investigados, manifiesta que el día jueves 31 de marzo, a eso de las 11:00 horas, mientras trabajaba como de costumbre conduciendo un bus rural, en la ruta de Riachuelo a Osorno, se subió una mujer a la cual no conocía, quien le manifestó que tenía información respecto a detenidos desaparecidos y le preguntó si era familiar de los Bassay. El deponente contestó que efectivamente eran su padre y su tío los desaparecidos y ella le indicó que había trabajado hace seis años como asesora del hogar en el Fundo Río Blanco y que había escuchado una conversación entre su patrona de nombre María Luisa Bielefel y su hija María Isabel, en que esta última le decía a su madre “mamá digamos la verdad sobre los chicos Barría”. Seguidamente le comentó que en ese fundo existía un lugar cercano al río que era celosamente cuidado por “Chelino Molina”, a quien el deponente ubica, puesto que vive en el camino entre Riachuelo y el Fundo Río Blanco. Agregó que en ese mismo lugar, en una oportunidad un tractor quedó varado y que el dueño del fundo don Germán Pasenau mandó a retirar a toda la gente que intentó ayudar a sacarlo y que solo los dueños se avocaron a esa tarea. En lo personal, como se encontraba conduciendo e impactado por la información recibida, olvidó preguntarle el nombre y otros datos personales de ella y en el terminal de buses de Río Negro descendió del bus. Luego, el día viernes 1 de abril concurrió al terminal a preguntar si alguien conocía esta mujer y no obtuvo resultados positivos. No obstante, a eso de las 19:00 horas, se encontró en Riachuelo con un amigo de nombre Mario Gallegos, a quien le comentó

lo sucedido con el tractor y le dijo que efectivamente conocía ese sector porque trabajaba cuidando animales en el fundo contiguo. Agregó que a ese lugar le decía “el cementerio” y acordaron concurrir al día siguiente en la mañana, lo cual hicieron a eso de las 09:00 de la mañana. Una vez en el lugar, dejó marcas en algunos bajos y al cabo de un rato se fue a su domicilio. En la tarde de ese mismo día, regresó junto a su esposa y hermana, portando además una pala y les mostró el sector, acto seguido comenzó a cavar, pero al sentir el ruido de unas motos en las cercanías decidieron tapar y regresar a su casa. El día lunes 4 de abril en el terminar de buses de Rio Negro conversó con un comerciante de nombre Walter, a quien le preguntó si conocía a la mujer que le había entregado la información en el bus, indicando que se llamaba Patricia Torres y además le proporcionó su domicilio. Ese mismo día, finalizada su jornada laboral acudió a la casa de Patricia, quien accedió a conversar con él y ratificó lo que le había comentado en el bus. Una vez obtenidos los antecedentes de esta mujer, conversó con su tía Inés y ella le entregó en forma de una declaración simple para que tanto Mario como Patricia, consignara por escrito los hechos, a lo que ambos accedieron. Su tía, a su vez, adjuntó esos documentos a la querella presentada en la Corte de Apelaciones de Valdivia por la desaparición de su padre y tío en el año 1973. Mientras esperaban los resultados de la querella presentada y al no soportar más la angustia y la espera, acudió el día sábado 30 de abril a eso de las 14:30 horas en compañía de su hermana Cecilia y de su hija Pilar hasta el lugar antes mencionado y comenzaron a excavar en el mismo lugar que antes habían intentado. Pasado unos minutos, bajo unos 60 centímetros de tierra, encontraron un hueso a la vista, parecía ser un pedazo de cráneo y luego unos huesos pequeños de unos 10 centímetros y 1 diente que guardaron en una bolsa plástica y acudieron al Cuartel de la Policía de Investigaciones de la ciudad de Osorno, donde expuso los hechos y le tomaron la declaración respectiva. Finalizado lo anterior, acudió en compañía de Oficiales de la Brigada de Homicidios de la PDI hasta el lugar del hallazgo y la Fiscalía a cargo del hallazgo solicitó que se presentara también su amigo Mario para consultarle por su conocimiento de los hechos. Eso así que el día lunes 2 de mayo concurrió personal del Servicio Médico Legal, quienes fijaron y ampliaron el radio de búsqueda para las excavaciones que

se realizaron el día martes 3 y miércoles 4 de mayo del presente, ocasión en que se encontraron más restos óseos.

A.2 Inés Del Carmen Barría Bassay (11 años a la fecha de ocurrencia de los hechos.). Depone de fs. 39 (Tomo I), fs. 259 a fs. 261 (Tomo I), 559 a fs. 560 (Tomo II), fs. 701 (Tomo II) copia de fs. 778 (Tomo II), fs. 1.425 a 1.427 (Tomo IV), copia de fs. 1.544 a 1.546 (Tomo IV), fs. 1428 (Tomo IV), fs. 1.429 a 1.430 (Tomo IV), 1.431 a 1.433 (Tomo IV) y de fs. 1630 (Tomo V).

En declaración judicial de fecha 23 de mayo de 2016, **rolante de fs. 39 (Tomo I)**. Advierte que es la hermana de Héctor y Guido Barría Bassay, quiénes el 16 de octubre de 1973 fueron detenidos por personal de Carabineros de Río Negro, mientras estaban trabajando en un aserradero en el Fundo Los Riscos, campo Río Blanco, que pertenecer al pueblo de Riachuelo, Comuna de Río Negro. Desde esa época no han sabido de ellos y suponen que los detuvieron porque eran dirigentes del partido socialista. Su madre doña Helvecia Bassay Alvear los buscó por mucho tiempo, sin dar con su paradero. Sin embargo, un trabajador del Fundo de Germán Pasenau, vio cuando Carabineros llegaron al Fundo trayendo a Guido, a quién bajaron semidesnudo y que posiblemente también estaba Héctor, porque un cuerpo se mantuvo en la camioneta cubierto con sacos. Ese mismo día Pasenau les dijo a sus trabajadores que se fueran del campo y, bajo amenaza, les ordenó guardar silencio de lo que habían escuchado. Todos estos datos fueron entregados en la querella que se interpuso en Santiago, la cual acreditó la participación de los Carabineros, quiénes confesaron la detención y las torturas cometidas en contra de sus hermanos y también cómo mataron a su hermano Guido, más nunca dijeron dónde ellos fueron enterrados. Esa causa es la Rol 2182-98 "Episodio Río Negro" y terminó el año 2007 decretándose la prescripción de la acción penal. Respecto de los hechos nuevos, puede decir que como nunca han dejado de buscar a sus hermanos, hace poco tiempo se acercó una señora a conversar con su sobrino Ricardo Barría Ralil, logrando dar con la ubicación de un sector dentro del ex Fundo de Pasenau (actualmente de otro dueño), donde su sobrino excavó encontrando restos óseos que fueron entregados a la PDI de Osorno, donde se hizo la denuncia, que actualmente está a cargo de la Fiscal Leyla Chahin y que ordenó la búsqueda a la unidad especializada del Servicio Médico Legal, quiénes encontraron

osamentas de tres personas, una de un adulto y dos de semi-adultos, es decir, menores de 18 años y que ahora están en estudio. A su sobrino y restos de sus hermanos les tomaron muestras de sangre para examen comparativo.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2016, **rolante de fs. 259 a fs. 261 (Tomo I)**. Adopta que es secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la provincia de Osorno hace dos años, pero integra la agrupación desde el año 1993. Hace presente que el día 31 de marzo de 2016 llegó a su domicilio su sobrino Ricardo Alejandro Barría Ralil, quien le comentó que alrededor de las once de la mañana del mismo día, en la comuna de Rio Negro, una persona de nombre Patricia Del Carmen Torres Naguian se acercó a su sobrino, manifestándole que los hermanos de la deponente, Héctor y Guido Barria estaban en el Fundo Río Blanco, ubicado desde Riachuelo a unos cinco kilómetros hacia Rio Blanco, ya que ella había escuchado a la esposa del antiguo propietario del fundo, de nombre Germán Pasenau Siebert y a su hija María Isabel Pasenau Bielefeld, comentado porque no les comunicaban a la familia que los hermanos de la deponente estaban enterrados al interior del fundo, respondiendo la madre que le tenía temor a su esposo, por eso no lo hacía. El día 01 de abril de 2016, su sobrino logró ubicar nuevamente a la señora Patricia, trasladándose hasta su domicilio, con la finalidad de preguntarle si ella estaba dispuesta a declarar sus dichos ante la policía, con la finalidad de llegar a los restos de sus hermanos, respondiendo que no tenía problema y que en el lugar donde podrían estar había caído un tractor hace un tiempo atrás, ignorando la fecha exacta. Con esa información, Ricardo se reunió con un amigo de nombre Mario Gallegos Napayan, quien había sido un ex trabajador del fundo de Pasenau, consultándole el lugar donde había caído el tractor que mencionaba Patricia, respondiendo que ese accidente había ocurrido hace dos años atrás y que identificaba el lugar exacto, el cual se denominaba “El Cementerio”. Al día siguiente, alrededor de las nueve horas, Ricardo junto a Mario salieron hasta el fundo con la finalidad de que mostrara el lugar exacto, una vez terminada la inspección regresaron a Riachuelo. Seguidamente, Ricardo se trasladó nuevamente al lugar con su cónyuge Priscilla Martínez Yefi y su hermana Cecilia Andrea Barría Ralil, retirándose del fundo sin hacer nada. El día tres de abril del 2016, se trasladó junto

a su hermano Luis Barría Bassay, a la casa de su sobrino Ricardo, con la finalidad de conocer el lugar donde podrían estar los restos de sus hermanos, sacando algunas fotografías del lugar, retirándose sin hacer nada. Adosa que una vez que habló con la señora Patricia, se trasladó a la ciudad de Santiago y el día once de abril se dirigió al Programa de Derechos Humanos, con la finalidad de poner los antecedentes en conocimiento de esa entidad y con dicha información lograr interponer una querrela criminal por el delito de homicidio e inhumación ilegal. Una vez que llegó a Osorno informó a su familia lo acontecido en la ciudad de Santiago en una reunión familiar y por la demora de la presentación de la querrela, su sobrino Ricardo Barría no pudo esperar más y se dirigió hasta el fundo antes mencionado, el día 30 de abril de 2016, recordando que alrededor de las 16:00 horas recibió un llamado de Ricardo, quien le manifestó que había ido nuevamente al fundo y que había cavado con una pala en el lugar indicado por Mario Gallegos, encontrando restos óseos, trasladándose en forma inmediata a la PDI de Osorno, para poner en conocimiento de los hechos acontecidos. Hace presente que alrededor de las 22:00 horas se trasladaron junto a la Brigada de Homicidios y la Fiscal de Río Negro Leyla Chahin hasta el sector donde se encontraron las osamentas, aislando el sitio del suceso, sacando fotografías y quedando con custodia policial. Afirma que el día lunes llegó personal del Servicio Médico legal de la ciudad de Santiago, quienes fijaron fotográficamente ampliando el perímetro de búsqueda, encontrando el resto de las osamentas que había encontrado Ricardo, al día siguiente encontraron otro más, de al parecer de menos de dieciocho años y un adulto. Agrega que en el sector de Riachuelo, un señor de nombre Vitalino Soto, quien trabajaba como mozo en la casa patronal de Pasenau, mientras se encontraba bebiendo en una cantina hace dos semanas, habría comentado a Héctor Ulloa Mardones que vio a los hermanos de la deponente detenidos al interior del fundo.

En declaración judicial de fecha 27 de abril de 2017, **rolante de fs. 559 a 560 (Tomo II)**. Ratifica la declaración policial que rola de fs. 259 y siguientes y la declaración judicial de fs. 39 que le han sido leídas. Alega que han ido en el transcurso del tiempo, luego de haber encontrado las osamentas, recopilando nombres de personas que antes no tenían. Anexa que tienen los nombres, pero no han querido ubicarlos para no entorpecer la labor judicial. Todas estas personas son

ex trabajadores del fundo, entre ellos Carmelo Huentrutrupay, actualmente trabaja en un fundo cercano a San Pablo; Chelino Molina, quien trabaja en un campo cercano al Fundo Río Blanco. Su hija o nuera, de nombre Verónica, les comentó que esta persona sabría lo que pasó con sus hermanos. También un señor de nombre Carlos Pérez le comentó a Andrade que sus hermanos estaban enterrados cerca de un cerezo. Tiene entendido que este señor Pérez está dispuesto a declarar. Su sobrino ayer en la mañana estuvo recorriendo la zona y pilló un sector cercano a un cerezo, donde hay un rectángulo y que la tierra se nota que ha sido removida. Recuerda que a fines de 1973 se acercó un vecino de nombre Juan Pacheco y le comentó a su mamá que estaban los trabajadores en sus faenas cuando llega esta camioneta con sus hermanos, bajando a su hermano Guido semidesnudo y que en la camioneta quedaron dos personas tapadas con saco, pero que no pudo identificar. Anima que han buscado por todos lados a lo largo de los años, haciendo todo lo posible por encontrar a sus hermanos, sin ningún resultado. En esa época hubo un trabajo de terror, muchas personas fueron detenidas y torturadas. Había un temor generalizado y hasta el día de hoy las personas no quieren hablar.

En declaración extrajudicial de fecha 27 de febrero de 2018, **rolante a fs. 701 (Tomo II)**, copia de lo cual se encuentra a fs. 778 (Tomo II). Añade que, con posterioridad del hallazgo de osamentas en el sector de Riachuelo, comuna de Río Negro, el cual estaría relacionado con el caso de sus hermanos Guido y Héctor Barria Bassay, se le acerco una persona del sector de “La Barra” (Trumao), quien le informó que mantenía antecedentes en relación a posibles personas arrojadas desde el puente Pilmaiquén hacia el río de la comuna de Río Bueno. De esta información se está en coordinación con las personas que aportaron dichos antecedentes, quienes tienen toda la voluntad de ayudar en la presente investigación, no obstante por temor a represarías solicitan la reserva de sus identidades, con la finalidad de protegerse. De lo anterior y durante el transcurso de esta semana, previa coordinación con estas personas asistirá a dicho lugar, donde posiblemente estarían osamentas de personas relacionadas con delitos contra los derechos humanos, además de fotografiar y fijar las coordenadas, para llegar al sitio exacto en la diligencia que se realizará en un futuro cercano. Finalmente, desde el

sector de trumao, existe un embarcadero desde donde salen diversas embarcaciones hacia el sector de “La Barra”, las cuales serían de utilidad para el trabajo que se realizará en un futuro próximo, desconociendo los valores por tramo a realizar.

En declaración extrajudicial de fecha 28 de marzo de 2001, **rolante de fs. 1.425 a fs. 1.427 (Tomo IV)**, copia de cual se encuentra de fs. 1.544 a fs. 1.546 (Tomo IV). Ratifica íntegramente la querella criminal que interpuso ante el señor Ministro de Fuero don Juan Guzman Tapia por el delito de secuestro calificado cometido en perjuicio a sus hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barria Bassay y por los ilícitos de asociación ilícita, genocidio y torturas. Así como también ratifica íntegramente la carta enviada con fecha 22 de los corrientes al abogado don Juan Bustos Ramírez, donde le proporcionó información que puede ayudar a establecer el paradero de sus hermanos. Advierte que es hija de Pedro Alejandrino Barria Navarro y Elvecia Bassay Alvear y eran 8 hermanos, Héctor Alejandro, Elia Etelvina, Luis Elicer, Guido Ricardo, Juana Elvecia y Zinia Amelia, de los que hay dos “detenidos desaparecidos” que son Héctor Alejandro y Guido Ricardo. Adopta que los hechos que motivaron la presentación de la querella se basan en que durante el año 1973 en el Fundo Los Riscos, ubicado en el sector de Rio Blanco, a unos 10 kilómetros del pueblo llamado Riachuelo, funcionaba el aserradero de don Julio Escobar, en donde trabajaban sus hermanos Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barria Bassay, quienes en esa fecha tenían la edad de 19 y 27 años respectivamente y también trabajaba en ese lugar su padre Pedro Alejandrino Barria Navarro. Es el caso que el día 16 de octubre del año 1973, siendo cerca de las 12:00 horas se presentaron en el aserradero un piquete de Carabineros, compuesto por doce a quince funcionarios que se movilizaban en una camioneta, de la que ignora datos, de propiedad de los hermanos René y Raúl Guzman Del Rio, que viven en Riachuelo, comandados por el Teniente José Hernán Godoy Barrientos, quienes una vez en el lugar llegaron preguntando por sus hermanos Guido y Héctor. Una vez que los individualizaron fueron obligados a desnudarse, dejándolos solamente con calzoncillos. Siendo golpeados en diferentes partes del cuerpo con las culatas de los fusiles que portaban, especialmente por dos funcionarios, Pedro Soto y Alberto Oyarzún. Posteriormente fueron subidos a la camioneta a punta de

golpes y con las manos atadas a la espalda con alambres de púas, retirándose del lugar con rumbo desconocido. En ese momento se dirigieron a sus hermanos con múltiples insultos y los trataban de “Comunistas”, amenazando al resto de los trabajadores que se encontraban en el lugar y especialmente a su padre, que si abandonaban el lugar no regresarían con vida. Sus dos hermanos eran militantes del Partido Socialista y Héctor Alejandro era dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación desde hacía bastante tiempo, ya que toda su familia ha sido de izquierda siempre, específicamente vinculados al Partido Socialista. En lo que respecta a las identidades de los Carabineros que llegaron hasta el lugar a detener a sus hermanos, se encuentran: el Teniente José Hernán Godoy Barrientos, Cabo Pedro Segundo Soto Godoy, Carabinero Luis Alberto Oyarzún Arriagada, Sargento del Retén de Riachuelo Sergio Aguilar y los Carabineros René Alvarado, Duhalde, Barrientos, Rogel, Catalán, además de otros de los cuales ignora datos. Todos ellos aparentemente jubilados y el Teniente José Godoy sabe que se jubiló en el año 2000 como General de Carabineros en la quinta zona de Puerto Montt y vive en el Fundo Coñinco en Purranque. Además, a muchos de estos Carabineros los siguieron viendo, ya que viven en Osorno y Rio Negro, tales como Luis Alberto Oyarzún Arriagada que vive en Calle Efraín Vásquez de Osorno; los Carabineros René Alvarado, Rómulo Catalán, Duhalde y Rogel viven aun en Rio Negro; el Sargento Sergio Aguilar vive en Castro y el Cabo Pedro Soto Godoy vive en Temuco, en calle Pontevedra N°1484, Villa Galicia. Todos ellos han declarado en el proceso que llevó el Ministro en Visita que investigó esto en el año 1979 en Rio Negro y que después pasó al Juzgado Militar de Valdivia, en donde se archivó sin condenarse a nadie ni establecer el paradero de sus hermanos. Adosa que su padre al día siguiente llegó hasta la casa y les contó lo sucedido. Por lo anterior, su madre Elvecia Bassay Alvear se dirigió hasta el Retén de Riachuelo, donde habló con el Sargento Aguilar con la finalidad de saber los motivos de la detención de sus hermanos y establecer donde se encontraban, quien le manifestó que nunca habían ido hasta el Fundo y que no los tenían detenidos en el cuartel. Después de eso fue a la Comisaría de Carabineros de Rio Negro, donde le informaron que sus hermanos no se encontraban en el lugar y que no sabían de su paradero. De ahí comenzó una peregrinación de su madre por los distintos centros de detención que había en

Osorno y Valdivia, sin obtener resultados para la ubicación de sus hermanos. Pasaron algunos años y se recibió un papel que alguien dejó por debajo de la puerta de la casa de sus padres en Riachuelo, el que estaba manuscrito y decía “estamos vivos, Tito tiene visita yo no – Palena”, siendo la letra parecida a la de su hermano Guido. Por lo anterior, un tío hermano de su madre, fue hasta la ciudad de Palena, en donde buscó a sus hermanos en todos los posibles lugares de detención, sin que se obtuvieran resultados para su ubicación. También su madre fue a la Fiscalía Militar y Carabineros de Osorno, en donde un Oficial llamado Tomás Palmovich le aseguró que sus hermanos estaban vivos, ya que estaban siendo procesados y serían trasladados a la cárcel pública de Osorno. Al día siguiente acompañó a su madre a la cárcel de Osorno, llevando comida y ropa, la que fue recibida por los Gendarmes, pero no les confirmaron si es que sus hermanos estaban ahí o no, luego, más tarde a la hora de la visita, los Gendarmes les devolvieron lo que habían llevado, informándoles que sus hermanos no estaban detenidos en ese lugar. Ante eso, su madre fue a hablar de nuevo con el Oficial Palmovich, el que le dijo que ponía su honor como uniformado para asegurar que la información que había entregado era fidedigna, o sea insistió en que sus hermanos se encontraban en la cárcel de Osorno. Volvieron a la cárcel, pero nunca pudieron saber dónde se encontraban. Ahora último tuvieron la información de parte de don Joel Norambuena Inostroza, persona que fue Carabinero en los años 80, respecto a que en esos años escuchó una conversación dentro de las dependencias del cuartel de la Comisaría de Rio Negro, referida al problema que tenían una personas, aparentemente Carabineros, para enterrar un cuerpo, lo que fue transmitido por este señor a su hermano Luis Barria, suponiendo que podría referirse a que alguno de sus hermanos detenidos – desaparecidos se encontraba enterrado en el terreno donde funcionó la segunda Comisaría de Carabineros en Rio Negro. Además, hace poco tiempo atrás, se les acercó don Raúl Guzmán Del Río, el que les ofreció su colaboración para declarar lo que él sabía al respecto de la detención de sus hermanos. Y doña Inés Patricia Navarro Martínez, domiciliada en calle Jorge Aubel N°1409, población García Hurtado, segundo sector, Osorno, también se contactó con ellos y les asegura que ella vio a sus hermanos cuando eran bajados de la camioneta que estaba estacionada frente al Retén de Carabineros en Riachuelo,

amarrados de manos con alambre, siendo ingresados al Retén. Por último, unos lugareños del sector “La Capilla”, ubicado en el camino de Riachuelo a Río Negro, le dijeron que en el año 1977 ellos fueron a hacer una sepultura de un familiar en el “cementerio indígena”, ubicado en el sector La Capilla y que cuando estaban haciendo el hoyo de la tierra, a unos 50 centímetros de profundidad se encontraron con un cadáver humano en vuelto en nylon y amarrado con pita, por lo que se asustaron, tapando el hoyo y realizaron la excavación en otro lugar, para realizar la sepultación de su familiar. Afirma que fue hasta el lugar y conoce la ubicación precisa en donde estaría este cadáver. Agrega que en ese lugar no hay rastros de tumba alguna y los mismos lugareños dicen haber visto muchas veces en las noches a los Carabineros en el lugar, todo esto durante el periodo después del año 1973, por lo que tuvieron miedo y no quisieron contarle a nadie lo sucedido. Alega que se tomó las muestras para examen de ADN en Temuco hace más de un año atrás.

En declaración judicial de fecha 28 de marzo de 2001, **rolante a fs. 1.428 (Tomo IV)**, ratifica en todas sus partes y reconoce como suyas las firmas estampadas en su declaración extrajudicial.

En declaración judicial de fecha 03 de enero de 2002, **rolante de fs. 1.429 a 1.430 (Tomo IV)**. Habla al Tribunal la información que le fue entregada por Maximiliano Flores, quien era el concesionario del Cementerio Municipal de Rahue Alto, Osorno, en dicho lugar se encuentran enterradas en una fosa de no más de un metro por un metro y de 60 centímetros de profundidad, el cadáver de un hombre, el de una mujer y el de un bebé, que aparentemente no alcanzó a nacer. La ubicación específica dentro del cementerio de esta fosa, consta en las dos fotografías que acompaña al Tribunal. Además, le llegó el antecedente que en otra fosa que estaba en el interior del mismo cementerio, la cual no tenía ningún tipo de indicación, se encontraban sepultados restos humanos, se extrajeron restos de osamentas humanas que fueron depositadas en una bolsa de plástico blanca, de la cual deja una fotografía como también deja otra del lugar donde se encontraron los estos restos, los que luego fueron arrojados al interior de una fosa común existente en el cementerio. Esto último sucedió a fines del mes de octubre pasado y el hallazgo de la pareja a que hizo referencia anteriormente sucedió el día 5 de

noviembre último. Añade que el actual administrador del cementerio don Víctor Aros Del Rio, dio cuenta de que habían sido encontrados sepultados más de un cuerpo en el cementerio a su cargo, a la Jefa de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Osorno, donde por radio se escuchó que solicitada una camioneta municipal para el traslado de los restos que allí se encontraban con destino desconocido. Apunta que con fecha 20 de diciembre pasado, concurrió hasta el Cuarto Juzgado del Crimen de Osorno a preguntar si existía una denuncia por el hallazgo de las osamentas al interior del cementerio de Rahue Alto, informándose en dicho tribunal que no había sido ingresada ninguna denuncia a ese respecto.

En declaración judicial de fecha 03 de enero de 2002, **rolante de fs. 1.431 a 1.433 (Tomo IV)**. Ratifica íntegramente y en todas sus partes la querella interpuesta el día 23 de enero del año 2001. Apoya que es hermana de Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barria Bassay, quienes fueron detenidos el día 16 de octubre de 1973, en el aserradero Los Riscos, sector Rio Blanco, Riachuelo. Las detenciones de ambos fueron efectuadas por personal de Carabineros de Rio Negro y Riachuelo, entre los cuales se encontraba el entonces Teniente de la Comisaría de Rio Negro, Hernán Godoy Barrientos (actualmente retirado y reside en el sector Coñico, Purránque), era el jefe del grupo a cargo de la detención; también lo acompañaba el Cabo Pedro Soto Godoy (actualmente retirado, quien vive en Pontevedra N°1848, de la ciudad de Temuco); el Carabinero Luis Alberto Oyarzún Arriagada (actualmente retirado, quien vive en calle Vicente Reyes N°1060, Osorno); el carabinero René Alvarado Ampuero (domiciliado en Prat 1203 de Rio Negro); el Carabinero Rómulo Catalán Oyarzún (domiciliado en Pedro Aguirre Cerda 649 de Rio Negro); el entonces Jefe del Retén de Riachuelo, el Sargento Sergio Leónidas Aguilar Miranda (domiciliado en Población Ralco, calle Francisco Silva N°17, de la ciudad de Castro. En la actualidad todos estos Carabineros se encuentran retirados de la institución. Aproxima que no fue testigo de la detención de sus hermanos, pero si lo fue su padre don Pedro Barria Navarro, quien vive en Los Vilos N°1214 de Osorno, el vio junto a una veintena de personas cuando los Carabineros llegaron al aserradero perteneciente a Julio Escobar y se llevaron detenidos a sus hermanos, en dicha diligencia a nadie más detuvieron. En la localidad de Los Castaños, Riachuelo, vive don Raúl Guzmán Del Río, que es un

testigo que afirma haber visto a sus hermanos cuando Carabineros los descendía de la camioneta y los ingresaba al Retén de Riachuelo, también afirma esto mismo la testigo doña Inés Patricia Navarro Martínez, quien vive en calle Santa Maria de la ciudad de Osorno. Aquilata que su madre Elvecia Bassay Alvear, quien vive en Osorno junto a su padre, fue hasta Carabineros del Retén de Riachuelo, donde le negaron el hecho de haber sido detenidos sus hermanos. Tanto en las unidades de Carabineros de Riachuelo como de Rio Negro, siempre se le negado a su madre la detención de Guido y de Héctor. Luego su madre peregrinó por la cárcel de Osorno y Comisaría de la misma ciudad, siempre con el mismo resultado negativo. Actualmente sus hermanos figuran en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como detenidos desaparecidos. Los hechos que rodearon la muerte de sus hermanos fueron investigados en el IV Juzgado Militar de Valdivia, proceso N°852/80, causa que terminó por sobreseimiento definitivo y también en el Juzgado de Letras de Rio Negro, proceso N°24.365 M, la que también termino por sobreseimiento definitivo. Acompaña en el acto copias simples de ambos procesos. Arguye que por dichos de un testigo que le pidió mantener reserva de su nombre, éste le afirmó que cuando él fue a sepultar a una mujer al Cementerio Indígena La Capilla del sector de Riachuelo, al cavar una fosa encontraron en su interior un cadáver envuelto en bolsas plásticas negras, sin ningún tipo de identificación en el lugar que indicara que existía un cuerpo sepultado en dicho sitio. Un conocido suyo llamado Alfredo Toledo, quien vive en Riachuelo, le comentó a un muy amigo de su familia llamado Ignacio Martínez Gómez, quien vive actualmente en Osorno y antes en Riachuelo, que habla escuchado en un asado decir al Carabinero Alberto Oyarzún, que a uno de los hermanos Barria Bassay lo habían sepultado en el Cementerio La Capilla de Riachuelo, que éste había sido muy valiente, pues cuando estaba cavando su propia tumba no había dejado de cantar el himno de su partido político. Cuando el comisario De La Torre de la Policía de Investigaciones de Valdivia estaba investigando los hechos materia de esta causa, se presentaron a declarar el ex Carabinero Alberto Oyarzún Arriagada, quien amenazó de muerte al testigo que afirmo haber visto a sus hermanos bajando de la camioneta e ingresando al Retén de Riachuelo, don Raúl Guzmán Del Rio, la amenaza fue que si lo involucraba en los hechos tarde o temprano le iba a dar muerte. El señor

Guzmán al momento de declarar le hizo saber de esta amenaza al Comisario De La Torre y tiene entendido que después efectuó una denuncia por el delito de amenazas en contra del Carabinero Oyarzún, en este Tribunal de Río Negro. El Comisario De La Torre el día antes de ser trasladado a la ciudad de Punta Arenas le dijo que le faltaron por hacer diligencias, tales como interrogar a los Carabineros Pedro Soto Godoy y Sergio Aguilar.

En declaración judicial de fecha 15 de julio de 2003, **rolante a fs. 1.630 (Tomo IV)**. En lo pertinente entrega individualización y nombre de testigo Juan Omar Ampuero Sánchez, el cual hace un mes, aproximadamente, le comentó que, en octubre de 1973, el Sargento Aguilar, encargado del Retén de Riachuelos, fue hasta su trabajo a buscarlo para que fuera al Retén a preparar un asado. En el lugar y como los funcionarios de Carabineros se encontraban celebrando y muy contentos le consultó cual era el motivo de la celebración. Pedro Soto respondió que celebraban la muerte de los hermanos Barria Basay, el no preguntó nada más. Y se encuentra dispuesto a declarar.

A.3 Elvecia Bassay Alvear. (43 años a la fecha de ocurrencia de los hechos RUT: 3.570.671-2). Depuso de fs. 217 a fs. 220 (Tomo I), 1.453 a 1.454 (Tomo IV), 1471 (Tomo IV), fs. 1.505 (Tomo IV) fs. 1.528 (Tomo IV) y de fs. 1533 (Tomo IV).

En declaración extrajudicial de fecha 27 de junio de 1978, **rolante de fs. 217 a 220 (Tomo I)**. Asevera que es casada con Pedro Alejandrino Barría Navarro, de dicho matrimonio nacieron ocho hijos, entre ellos Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barría Bassay, de 19 y 27 años, al mes de octubre de 1973 y que a la fecha tendrían en consecuencia 24 y 32 años respectivamente. El primero de ellos trabajaba como obrero en el aserradero de Julio Escobar, cuyas labores realizaba en el fundo de Eduardo Geisse, ubicado en los Riscos, Riachuelo. El segundo se desempeñaba en la escuela N°2 de Río Negro, pero el día de su desaparecimiento se hallaba en dicho fundo, en razón de que el Teniente de Carabineros de Río Negro, José Hernán Godoy Barrientos lo había notificado de que abandonase el pueblo y que si lo veía lo detendría, habiéndole ella misma aconsejado que se fuese al lado de su padre y hermano en las labores madereras de Escobar. Ambos hijos eran militantes del Partido Socialista de Río Negro y Héctor Alejandro era delegado de los trabajadores en el S. U. T. E (Sindicado Único de Trabajadores de la

Educación). Atestigua que la desaparición de sus dos hijos se produjo en las siguientes circunstancias: el día 16 de octubre de 1973 se encontraban en las labores del mencionado aserradero cuando a eso de las 12 horas interrumpieron en el fundo un grupo de Carabineros de la Comisaría de Río Negro, comandados por el Teniente José Hernán Godoy Barrientos e integrada entre otros, por el Cabo Pedro Soto, por los Carabineros Alberto Oyarzún, Sergio Aguilar, René Alvarado y otros cuyos apellidos son Duhalde, Barrientos, Rogel, Catalán. Los Carabineros llegaron en una camioneta de propiedad de los hermanos René y Raúl Guzmán, comerciantes de Riachuelo, quienes se quedaron a la distancia. Al parecer estos funcionarios iban en busca exclusiva de sus hijos, ya que apenas llegaron los tomaron detenidos, maltrataron y torturaron, lanzándoles puntapiés, culatazos y golpes, entre insultos y groserías, echándolos y arrojándolos al vehículo. Esta detención y malos tratos los efectuaron en presencia de los trabajadores del aserradero, entre ellos, el propio padre de sus hijos, Armando Pezoa, Juan Ojeda, Armando Nilián, Alfonso Huenchuán, Alejandrino Barrientos, Oscar Vargas, Clemente Chodín, Hayde Hernández, María de Catalán, Mercedes de Schell y otros obreros de los cuales sabe solo sus apellidos; Oyarzún, Angulo, Soto, pero son fáciles de ubicar, porque son del lugar. Los detenidos fueron llevados a Riachuelo, en donde estuvieron hasta el día 17 de octubre, para ser llevados a la Comisaría de Río Negro. Atina que fue a verlos al Retén de Riachuelo y después a la Comisaría, pero en las dos partes se los negaron e incluso en el Retén la amenazaron con proceder en su contra si seguía molestando. Desde esa instancia de la detención nunca más se volvió a ver a sus hijos. Hizo las gestiones ante todas las autoridades de la fecha para que le permitieran verlos o ubicarlos. Así habló con la visitadora social del Juzgado de Menores, en octubre se presentó a Investigaciones de Osorno, sin que le dieran respuesta. En la intendencia habló con el Teniente de apellido Retamal (de Ejército), sin que tampoco le informara y así deambuló todos esos meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1973. Fue a la Fiscalía de Carabineros, en donde la atendió un Teniente de nombre Tomás y de apellido que suena como Palmovich, ya que no es apellido Español, quien le dijo terminantemente que sus hijos habían sido procesados en esa Fiscalía y ese mismo día habían pasado a la cárcel de Osorno, pero al preguntar por ellos en este

establecimiento le aseguraron que no estaban ingresados. Volvió donde el Teniente Tomás Palmovich y éste le reafirmó que sus hijos habían pasado a la cárcel e incluso agregó que comprometía su honorabilidad de uniformado para asegurar el procesamiento de ellos en esa Fiscalía. Por insinuación de él fue al Regimiento, hablando allí con el Teniente de Ejército de apellido Cossio y el Mayor Ramírez, pero ambos negaron rotundamente la existencia de sus hijos en ese recinto. En su desesperación fue a la Fiscalía Militar de Valdivia, bajo cuya dependencia estaba la de Osorno y allí se limitaron a decirle que sus hijos “no podían estar muertos y tenían que estar en un campo de concentración o de detenidos”. Recuerda que una vez llevó ropa y comida a la cárcel para serles entregada sus hijos, las que recibieron los Gendarmes, pero después en la tarde le devolvieron todo, porque según dijeron, no estaban allí. Así han pasado todos estos años sin que pueda ubicar sus hijos. Como antecedente declara que a principio de año recibió un papel escrito al parecer por su hijo Guido, que decía en forma muy escueta “estamos vivos. Tito tiene visita, yo no”; estaba escrito con lápiz pasta, letra de imprenta, se hacía parecer este papel como que venía de la cárcel de Puerto Natales, pero al hacer averiguaciones allí no estaban sus hijos; después se le dijo que estarían en Punta Arenas, en la cárcel, pero tampoco se les ubicó allí. Y ahora último se le quiere hacer ver que estaría en Santiago, noticias que lejos de traerle una esperanza solo aparecen como una nueva forma de tortura espiritual y de dolor. Barbullá que cuando fueron detenidos sus hijos vestían Guido: con blue jeans, camisa celeste, chompa azul marino, casaca verde usada, botas de goma y Héctor: парка verde casi nueva, chomba, polera de nylon naranja, pantalón de cotelón verde, botas de cuerdo viejas. Basa que por datos que ha podido ubicar, tiene conocimiento que en la Fiscalía Militar de Osorno existen dos procesos en los cuales aparecen como acusados sus hijos: el N°1666-73 en donde estaban ambos hijos y el N°1668-73 en que solo figura Guido Ricardo. Al parecer allí están mezclados con otros acusados, pero jamás supo que se haya celebrado algún Consejo de Guerra en donde podría haberlos visto o por lo menos haber atendido la defensa de ellos. Reitera que hace esta declaración en forma libre, consciente y voluntaria y la firma después de leída y ratificada en todas sus partes.

En declaración judicial de fecha 08 de julio de 1979, **rolante de fs. 1.453 a 1.454 (Tomo IV)**. Ratifica la querella de fs. 36 en todas sus partes. Colige que el día en que detuvieron a sus dos hijos se encontraba en casa, por lo tanto, no presencié cuando se les detuvo, porque fue en el lugar de trabajo. Pero su marido, Pedro Alejandrino Barría estuvo presente en esa ocasión. Desde el día siguiente que detuvieron a sus hijos ha preguntado por ellos, hasta la fecha inclusive, pero no tienen ningún testigo que haya visto a Guido y Héctor en recinto de Carabineros o cárceles detenidos, solamente sabe cuándo los detuvieron, porque estaban varios obreros presentes. Ha buscado a sus hijos en toda la provincia de Osorno y en todos los lugares de detención, también fueron a Valdivia y por un dato que alguien les dio llegaron hasta Chaitén, sin resultado. El único dato certero que recuerda es que a fines de 1973, con fecha que no recuerda, conversó con el Oficial de apellido Tomás Palmovich, en la Prefectura de Osorno, quien le dijo que sus hijos estaban siendo procesados por la Fiscalía de Carabineros y que estaban en la cárcel. Al día siguiente concurrió a la cárcel trayéndole ropa a sus hijos, las que fueron recibidas por Gendarmería, ignorando qué personas fueron, pero no vio a sus hijos. Luego en la tarde, cuando compareció a conversar con sus hijos le dijeron que no estaban en la cárcel y le devolvieron la maleta con ropa que le había traído en la mañana. Al día siguiente compareció de nuevo a conversar con el Oficial Tomás Palmovich, quien le dijo que sus hijos habían pasado a la Fiscalía Militar, pero consultado al Oficial Cossio y Mayor Ramírez, estos nada le informaron.

En declaración judicial de fecha 13 de diciembre de 1979, **rolante a fs. 1.471 (Tomo IV)**. Ratifica su declaración de fs. 46. En cuanto a las gestiones que hizo para encontrar a sus hijos, ocurrieron más o menos en octubre del año 1973. Lo único concreto que consiguió fue de parte del Teniente de Carabineros Tomás Palmovich de la Prefectura de Osorno, quien le dijo que sus hijos estaban siendo procesados por la Fiscalía de Ejército de Osorno. Fue a la cárcel y les dejó ropa y cuando volvió en la tarde le dijeron que no estaban. Al final llegó donde el mayor Ramírez de la Fiscalía Militar, quien le dijo que sus hijos no habían sido habidos y que no siguiera molestándolos. Comunica que sus dos hijos desaparecidos eran militantes del Partido Socialista.

En declaración diligencia de careo con Sergio Aguilar Miranda, de fecha 23 de abril de 1980, **rolante a fs. 1.505 (Tomo IV)**. Ratifica sus declaraciones anteriores. A la persona allí presente la conoce, era Sargento de Carabineros en el año 1973 en la localidad de Riachuelo. Comenta que no presencié la detención de sus hijos, por lo que no sabe si la persona allí presente habría participado en ella. Conjetura que le preguntó en esa oportunidad a esta persona por sus hijos, pero le contestó en muy mala forma, sin darle ninguna respuesta. Cimentó que cuando fue al Retén vio que una camioneta estaba tapada con una carpa y a pesar de no haber visto que iba en su interior, cree que eran seres humanos y a lo mejor ahí estarían sus hijos.

En declaración judicial de fecha 11 de noviembre de 1993, **rolante a fs. 1.528 (Tomo IV)**. Cuenta que no recuerda el mes o la fecha, pero efectivamente su hijo Guido Ricardo Barría Bassay estuvo detenido en la cárcel de Osorno, esto según recuerda, a raíz de que su hijo antes aludido tuvo problemas tan solo de palabras con los Carabineros de Riachuelo, quienes procedieron a su detención. Posteriormente y la verdad que tampoco recuerda al cuanto tiempo, su hijo logró su libertad, habiendo incluso ella misma pagado la fianza, regresando entonces con su hijo a su domicilio. En todo caso la detención y desaparición que denuncia de su hijo fue con fecha posterior a los hechos antes descritos.

En declaración judicial de fecha 11 de enero de 1994, **rolante a fs. 1.533 (Tomo IV)**. Decanta que no tiene la menor idea del domicilio actual de Juan Carlos Soto Ampuero. Hace muchos años que no sabe nada de esa persona. Agrega que varias personas que aparecen mencionadas en la querella están muertas, pero mayores datos al respecto los ignora.

A.4. Luis Eliser Barría Bassay (años a la época de los hechos). Depuso de fs. 262 a fs. 263 (Tomo I) y de fs. 267 a fs. 272 (Tomo I).

En declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo de 2016, **rolante de fs. 262 a fs. 263 (Tomo I)**. Deduce que hace tres años atrás, tuvo una conversación con un señor llamado Sergio Alvarado (fallecido), quien era secretario del Juzgado de Río Negro y a su vez hijo de uno de los Carabineros que participó en la muerte de su hermano, quien le señaló que en los días posteriores al 11 de septiembre del año 1973, se reunieron un grupo de agricultores Alemanes en la casa de la familia

Pasenau, en el sector de Río Blanco, con el objeto de reunir fondos para mandar a matar a ciertos dirigentes sociales de la comuna entre los cuales aparecían sus hermanos Héctor, Guido y un señor que era regidor de la comuna de Río Negro. Haciendo presente que, una vez ocurrida la detención de sus hermanos por los Carabineros Alberto Oyarzún, Robert Teylorl, Pedro Soto, el Teniente Hernán Godoy y el Capitán Hans Schernberger, y los hermanos Raúl y René Guzman Del Río (civiles), todos confesos del crimen de sus hermanos, pero no recordaron el lugar en que los sepultaron. Delibera que llegaron al Fundo Río Blanco a través de su sobrino Ricardo Alejandro Barria Ralil, quien le comentó que habían informado que al interior de este fundo podrían estar los cuerpos de sus, hermanos. Dicho fundo estaría ubicado el Fundo Río Blanco, desde Riachuelo a unos cinco kilómetros hacia Río Blanco. Y por comentarios se enteró que tendrían conocimiento de este suceso los hijos del antiguo propietario del fundo, de nombre Germán Pasenau Siebert. En reuniones familiares se comentó este hecho, por lo tanto, el día 03 de abril del presente año, se trasladó junto a su hermana Inés Barria Bassay a la casa de su sobrino Ricardo, con la finalidad de conocer el lugar donde podrían estar los restos de sus hermanos, sacando algunas fotografías del lugar, retirándose sin hacer nada. Después que fueron al lugar, su hermana Inés se trasladó hasta la ciudad de Santiago, con la finalidad de poner en conocimiento de los hechos al Programa de Derechos Humanos, con el objeto de presentar una querrela para investigar los nuevos antecedentes. Difunde que su sobrino Ricardo el día 30 de abril del presente año, alrededor de las 16:00 horas se habría trasladado al fundo, cavando con una pala en el lugar indicado por un amigo de él que trabajó en el fundo en cuestión, recordando su nombre como Mario Gallegos, encontrando restos óseos, trasladándose en forma inmediata a la PDI de Osorno para poner en conocimiento los hechos acontecidos. Ese mismo día fueron al fundo en compañía de la Brigada de Homicidios y la Fiscal de Río Negro Leila Chahin hasta, el sector donde se encontraron las osamentas, procediendo la PDI a aislar el sitio del suceso y realizar las pericias de rigor. Posteriormente llegó personal del Servicio Médico Legal de la ciudad de Santiago, quienes fijaron fotográficamente ampliando el perímetro de búsqueda, encontrando el resto de las osamentas que había encontrado Ricardo.

En **declaración extrajudicial** rolante de **fs. 267 a 272 (Tomo I)**. Desarrolla que en los días posteriores al golpe militar del 11/09/73 se reúne un grupo de agricultores alemanes en la casa de la familia de German Pasenau en el Fundo Río Blanco, comuna de Río Negro. Esta reunión tiene como objetivo reunir fondos en dinero para mandar a matar a los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, más otros dirigentes de la comuna que no eran del agrado de estos alemanes. De esta reunión se toma el acuerdo en que la familia Pasenau queda a cargo de recepcionar el dinero acordado y además, hacer los contactos para entrevistarse con los Carabineros oficiales, encargados de la 2° Comisaría de la comuna de Río Negro. De tal forma que la segunda quincena de septiembre de 1973, la familia Pasenau se contacta con los hermanos Raúl y René Guzmán para comenzar su macabro acuerdo. ¿Por qué se contactan con los hermanos Guzmán? Muy sencillo, éstos dos hermanos Guzmán son muy amigos del Carabinero Alberto Oyarzún A., y éste a su vez tenía muy buena relación con el Teniente de Carabineros Hernán Godoy Barrientos, perteneciente a la 2° Comisaría de Río Negro. Esta buena relación era debido a que una de las hermanas de Oyarzún tenía algunas relaciones amorosas con Godoy Barrientos. Dicho esto, se forma el puente perfecto entre la familia Pasenau, los hermanos Raúl y René Guzmán, Alberto Oyarzún y Hernán Godoy Barrientos, junto al Capitán de Carabineros Hans Schernberger. Hace presente que todos estos oscuros personajes fueron pagados por la familia Hans Pasenau, por todas las acciones efectuadas para preparar el plan. Es así que el día 16 de octubre de 1973 el mando de Carabineros de la 2° Comisaría de Río Negro, apoyado por la logística y vehículos de los hermanos Guzmán hacen su funesto operativo, previamente acordado y van a detener a los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, que se encontraban junto a su padre y trabajadores en un aserradero de don Julio Escobar Winklen, ubicado en el Fundo Los Riscos del sector de Río Blanco en la comuna de Río Negro. Fueron detenidos y amarrados con alambres de púas de ahí tirados en el piso de la carrocería de la camioneta de los hermanos Guzmán; tapados con unas carpas y pisoteados por contingente de Carabineros. De allí fueron llevados al Retén de Riachuelo y posteriormente a la 2° Comisaría de Río Negro. Todo este operativo estaba a cargo del Capitán Schernberger y el Teniente Godoy. Hace presente que Carabineros siempre negó la detención de los hermanos

Guido y Héctor Barría Bassay, tanto a su madre y familiares que lo andaban buscando. Descarga que Carabineros de Chile de la 2° Comisaría de la comuna de Rio Negro trasladó a los hermanos Barría Bassay a diferentes sectores dentro de la comuna, para justificar en alguna medida la detención, todo según ellos, en busca de armas, armas que nunca existieron. Tanto fue que, en uno de los tantos traslados a diferentes partes, fueron llevados a la estación de ferrocarriles de Chahuilco, comuna de Rio Negro y se internaron en el Fundo La Campana, de propiedad de la familia Engel. Y en un cobarde acto, el Teniente Godoy Barrientos preguntó ¿quién quiere matar a este?, indicando a Héctor Barría Bassay. A lo que el uniformado Robert Teylorl se ofreció y procedió a darle muerte con su arma de servicio a la persona indicada. Al día siguiente se dirigieron a la casa de la familia Pasenau los uniformados, Capitán Hans Schernberger, el Teniente Hernán Godoy, uniformados o Carabineros Pedro Soto, Robert Teylorl, Alberto Oyarzún, hermanos Raúl y René Guzmán. El plan estaba prácticamente conversado, pero llevaron los cuerpos de Héctor Barría y otro cuerpo, presumiblemente de un señor Sandoval del puesto de Rio Negro. En ese momento Guido Barría todavía estaba con vida, pero no por mucho tiempo, pues una vez que la familia Pasenau les concede el dinero acordado a todos estos asesinos. Estos se fueron directamente a completar su siniestro plan. Se van a un lugar desconocido dentro del sector y Carabineros ordena a Guido Barría hacer una excavación en la tierra. Posteriormente le ordenan colocar en dicha excavación el primer cadáver. Luego le ordenan a Guido hacer lo mismo con el segundo cuerpo. Y cuando estaba colocado este cuerpo, el Teniente Hernán Godoy acribilló a balazos por la espalda a Guido Barría Bassay, según él, como un acto de valor frente a estos siniestros personajes. A continuación taparon los cuerpos, quedando sepultados estos tres cadáveres en una sola fosa, quedando el cuerpo de guido en la parte superior.

A.5 Patricia Del Carmen Torres Naguián (6 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración extrajudicial** de fecha 17 de mayo de 2016, **rolante de fs. 273 a 275 (Tomo I)**. Destaca que en el año 1996 y 1997 trabajó en la casa patronal de Germán Pasenau Siebert, percatándose que tenían muchas discusiones como matrimonio, además de peleas con su hija María Isabel Pasenau Bielefeld. Detalla que siempre debía estar a los llamados de su hija, quien les

comunicaba cada vez que veían un vehículo extraño y que tuvieran cuidado. Distingue que en esa casa trabajaba una persona de nombre Marcelino Molina, quien era capataz de la casa y se encargaba de informar cada vez que venía un vehículo extraño a la casa, eso le parecía muy extraño. Recuerda que, en una oportunidad su hija María les señalaba que dijeran la verdad, pero ellos comenzaban a hablar en alemán y la deponente no entendía, pero siempre recalca que dijeran la verdad. Glosa que en esa casa nunca se salía por la puerta principal, estaba prohibido para todo el mundo, ni siquiera para las visitas de ellos. Recuerda que había unos trabajadores que señalaban que había un cementerio indígena y otros manifestaban que al interior del fundo había un cementerio de animales y que en una oportunidad había una peste en el país y por eso tenían que enterrar los animales en ese lugar. Ensaya que en abril del año 1986 tuvo un sueño con cinco jóvenes más otros que no podía ver bien, los cuales estaban debajo del agua en una cueva, dejándolo pasar, pensando que estaba asustada. En febrero del año 2016 tuvo un nuevo sueño con cinco personas, pero uno de ellos era un niño pecoso con rulitos y piel clara, quien estaba a punto de llorar, señalaba “por favor ayúdenos”, respondiéndole que estuviera tranquilo, que ya llegaría la ayuda. Esgrime que en su primer sueño tuvo la imagen de dos sujetos, los cuales una vez que pasó por la garita de lago Budy, se percató que correspondía a los hermanos Barría Bassay y a raíz de estos sueños se acercó a Ricardo Barría, para contarle el sueño, manifestándole que la descripción que le hacía correspondía a su tío cuando era chico, este niño tenía ocho años. Manifiesta que en dos ocasiones ha tenido sueños con personas a punto de fallecer, los cuales le han pedido ayuda, por lo tanto, ha comunicado lo acontecido a sus familiares, quien han encontrado objetos importantes de sus familiares, por eso se acercó a Ricardo. Espeta que el hijo del matrimonio le comentó que en un lugar murió una persona asesora del hogar, ignorado donde la enterraron. Rememora que, en una oportunidad cayó un tractor que era de unos chicos de apellido Maldonado, que viven en el sector de Crucero, Hueyusca, comuna de Purranque, llamándole la atención a Marcelino, manifestándole que él sabía que tenía que tener cuidado en ese lugar. Finalmente escruta que a Ricardo Barría, solo le comentó sus sueños, nunca que podría ser en

el fundo de Germán Pasenau. En general siempre había malos comentarios de don Germán Pasenau.

A.6 José Vitalino Soto Cumián (24 años de edad a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 24 de abril de 2017, **rolante de fs. 535 a 537 (Tomo II)**. Aproxima que llegó a trabajar al fundo de German Pasenau cuando tenía 16 años. Su señora era de apellido Biedefeldt, sus hijos eran Jorge, Verónica y María Isabel. Dos de ellos viven en Osorno y el otro, cercano a lo que era el fundo de don Germán. Trabajó en ese lugar por 25 años, estando hasta la década del 90 en ese lugar. Para el año 1973 Jorge era el mayor de los hermanos, eran jóvenes en esa época. Verónica tendría unos 12 o 13 años más o menos. Con esas personas eran de la misma edad más o menos. En esa época el deponente vivía con sus padres dentro del fundo de los Pasenau y la casa estaba ubicada al otro lado del río, cerca al denominado “cementerio”. Sus labores diarias consistían en estar en la lechería y hacer trabajos en el campo, como por ejemplo hacer cercos. Respecto a Héctor y Guido Barría Bassay desconoce todo antecedente respecto a ellos. En relación a don Héctor Ulloa Mardones, aquilata que lo conoce, son amigos de toda la vida, hace poco tiempo estuvo en su casa, porque su padre está enfermo. Ellos se conocieron por la liga de futbol, pero él nunca trabajó con la familia de German Pasenau. Arguye que Héctor Ulloa estuvo detenido en Osorno para la época de 1973. A él lo detuvieron Carabineros y fue trasladado hasta esa ciudad. Todo esto se lo contó él, después de haber estado detenido. Ellos supieron en el campo que él fue detenido, se sabía por comentarios. Cuando el gringo Pasenau tenía fiestas, el deponente iba a hacer asados, trabajó en la casa. Recuerda que una camioneta Ford verde de los militares pasó a la casa de don Germán Pasenau, quedando un militar en la entrada. El deponente estaba trabajando y vio que sobre la camioneta tirado, cubierto con sacos, había dos personas. En ese momento un hermano, Bernabé Soto, estaba cortando pasto y fue a acercarse, pero el militar lo echó. Asegura que su hermano actualmente vive en el norte, por la comuna de San Fernando. Recuerda que uno de los militares entró a la casa de los Pasenau y luego salió, tomando rumbo con el vehículo hacia Riachuelo. Se rumoreaba que los dos sacos que vieron con su hermano eran los hermanos Barría Bassay, pensaron esto porque el mismo día que llegó este vehículo militar fueron detenidos los hermanos

Barría Bassay. Los militares usaban vestimenta oficial de esa institución. Por otra parte, rememora a Clemilda Antilef, quien era empleada de los Pasenau y su hija Ariana Antilef, quien fue criada por esta familia. Había otra empleada que tiene que haber tenido unos 40 años en esa época y trabajó un poco tiempo en ese lugar. No sabe el nombre de esa persona ni donde podría vivir actualmente. Era una mujer soltera. Asevera que el trato de don German Pasenau era de un caballero con sus trabajadores. Con el deponente nunca tuvo un problema. Además, recuerda a los Villarroel entre ellos a “don Chuma”, que es de Riachuelo, como parte de los trabajadores del fundo. Atestigua que nunca había ido una camioneta militar hasta el lugar o de Carabineros. Por esa razón le llamó la atención que estuvieran en ese lugar. También es raro que el militar haya ido a hablar con German Pasenau. Nunca supo cuál era el destino de los hermanos Barría. Los hermanos se desaparecieron y listo. Nunca escuchó comentarios respecto a ellos. Atina que el capataz o encargado del fundo era Leislado Rebolledo, pero al parecer está fallecido.

A.7 Inés Patricia Navarro Martínez (24 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Declaraciones De fs. 538 (Tomo II), fs. 632 a fs. 633 (Tomo II) y de fs.1547 (Tomo IV).

En **declaración judicial** de fecha 25 de abril de 2017, **rolante a fs. 538 (Tomo II)**. Respecto al caso que se le da a conocer, desconoce todo antecedente en relación a los hermanos Barría Bassay, de los cuales se le informa. Blasona que nunca ha vivido en Riachuelo y en su infancia vivió en Guayusca, cercano a Purranque. Después vivió en Punta Arenas y vivió más de 30 años en esa comuna.

En **declaración extrajudicial** de fecha 08 de junio del año 2017 **rolante a fs. 632 a fs. 633 (Tomo II)**. Señala que es prima lejana de los hermanos Barria Bassay, ya que sus padres eran parientes. Respecto a los hechos que se investigan debe señalar que en el año 1973, el día de la detención de Guido y Héctor, ella tenía 13 años, al pasar por las afueras del retén de carabineros de Riachuelo, en compañía de su hermana menor Ema Navarro, vieron un camión estacionado en las afueras del recinto policial. Este camión era un camión particular, con barandas de madera. En su interior en la parte de la carga estaba lleno de personas dentro de las cuales pudo identificar a Guido y Héctor. Sólo los vieron, no conversaron, ya que como eran pequeñas se asustaron al ver esta imagen y se fueron corriendo a contarle lo

que estaba pasando a su mamá. Eso es todo lo que recuerda en relación a lo que se le pregunta. Pregunta: ¿Recuerda a alguna otra persona que haya estado al interior del camión? No, sólo a ellos. Luego, según lo que recuerda, comentarios de la gente de la zona, señalaban que se los habían llevado al sector del Bolsón, en la cordillera.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de septiembre de 2001, **rolante a fs. 1.547 (Tomo IV)**. En lo pertinente basa que el día de la detención de los hermanos Barria Bassay tenía como 12 o 13 años. A ellos los conocía, ya que vivían al frente de su casa. Ese día, que no sabe cuál fue, pero está segura de que fue en el mes de octubre después del “golpe militar”, era ya la tarde, no sabe a qué hora, pero estaba de día, iba con su hermana Ema Ester Navarro Martínez, quien en esa época tenía unos 10 años de edad, caminaban por calle donde está el Retén de Carabineros y estaban como a media cuadra de llegar a este cuando vieron que se estacionó una camioneta grande particular, tipo camión pequeño, cree que era la camioneta de Raúl Guzmán y desde la carrocería de este vehículo los Carabineros bajaron a unas personas detenidas, pudiendo reconocer a Guido y al Tito Barria Bassay, los que venían amarrados de manos a la espalda, con alambre, ambos con ropa, los que ingresaron al Retén. Después pasaron por frente al Retén sin ver nada de importancia y se fueron para la casa. Los Carabineros que estaban bajando los detenidos no recuerda quienes eran, pero si está segura de que eran los Carabineros que estaban en esa época en el Retén de Riachuelo, ya que no le llamaron la atención, como habría ocurrido en caso de haber sido funcionarios desconocidos. Después supieron que los hermanos Barria Bassay habían desaparecido luego de esa detención hecha por los Carabineros y nunca más se les ha vuelto a ver. No sabe si ese día andaban militares en Riachuelo, pero antes se les había visto patrullando por el lugar.

A.8 Héctor Ulloa Mardones (16 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). **En declaración judicial** de fecha 27 de abril de 2017, **rolante de fs. 540 a fs. 542 (Tomo II)**. Colige que para el 11 de septiembre de 1973 fue detenido por personal de Carabineros de Retén Riachuelo, según explica en los documentos que exhibe y quiere acompañar al Tribunal. Comunica que los maltratos consistían en golpes en la parte baja del cuerpo, le aplicaron electricidad en la cabeza y la boca, por eso

perdió prácticamente toda la dentadura. Los metían en un recipiente con estiércol de caballo. Fueron colgados junto a los otros detenidos. Luego fue trasladado al hospital de Osorno, ubicándose en una pieza donde lo amarraron y aplicaron electricidad en varias partes del cuerpo, preguntándole por diferentes actividades que había realizado, su militancia y dónde tenía las armas. Le decían que sus compañeros habían declarado en un sentido, para que el deponente pudiera declarar o caer en los engaños que los interrogadores hacían. Finalmente dijo que hicieran lo que quisieran con él. Junto a los otros detenidos fueron sometidos a los mismos apremios, éramos sindicados como los extremistas de Riachuelo. Posteriormente fueron llevados al Estadio Español y luego a la cárcel de Osorno, continuando los interrogatorios por parte de la Policía de Investigaciones. Fue condenado por infracción de la Ley 17.798, a tres años y un día. Su causa se encuentra a la vista en el Consejo de Guerra de Osorno de 21 de marzo de 1974 y la causa es 1.666-73 comenta que actualmente es beneficiario de la Ley Valech. Además, exhibe una declaración jurada realizada en 2 de marzo de 2010 ante el Notario y Conservador José Dolmestch Urra; comprobante de ingreso de antecedentes de 24 de febrero de 2004 para la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; un oficio de Gendarmería de Chile, décima Región, de 12 de marzo de 2004, donde se acredita que Héctor Ulloa Mardones cumplió tres años y un día en causa rol 1.666-73 de la Fiscalía Militar de Osorno, IV Juzgado Militar de Valdivia; certificado de Gendarmería de Chile, Río Negro, de 05 de marzo de 2004, donde señala que por la misma causa permaneció recluido en esa unidad penal; un documento de Gendarmería de 26 de febrero de 2004, específicamente del Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno donde se detalla que Héctor Ulloa Mardones inició la condena el 19 de noviembre de 1973 y la cumplió el 20 de noviembre de 1976; también exhibe un testimonio denuncia de diciembre de 2003, donde relata el episodio que le tocó vivir en el Retén de Riachuelo junto a sus compañeros Juan Bassay, Salvador Caro, Ego Kemp y Renato Invernichi; copia simple del Consejo de Guerra de Osorno de causa rol 1.666-73, en contra de José Hilario Bassay y otros. El Tribunal ordena agregar copia al proceso de los documentos mencionados anteriormente y además, el deponente ratifica en todas sus partes la declaración jurada antes indicada y el testimonio denuncia del que ha

hecho referencia en forma detallada al inicio de esta declaración. Agrega que la camioneta en la que detuvieron a los hermanos Barría era de color rojo, modelo Chevrolet, de propiedad de Raúl Guzmán. Cimentan que Tito Sporman, German Pasenau, Carlos Vere, eran civiles que acusaban a la gente de comunistas e ingresaban al Retén de Carabineros y se mofaban de quienes estaban detenidos. Ellos se prestaban para cualquier cosa con Carabineros, se hacían muchos favores. Cuenta que a ellos les hicieron un simulacro de fusilamiento en el Retén de Riachuelo, en las caballerizas. Les vendaron los ojos, los hicieron ponerse contra una pared con los brazos abiertos. Decanta que ese Retén nunca ha sido modificado, se mantiene la estructura desde el año 1973. Respecto al caso de los hermanos Barría Bassay, menciona que en esa época estaba detenido, pero hace más de 5 años, Vitalino Soto, con quien nacieron y se criaron en la zona, estaban tomando un trago y le comentó que él había visto la camioneta roja de 2500 kilos que llegó al patio con Carabineros donde su patrón. Él no le dio una fecha exacta, pero se presume que era en la misma época en que desaparecieron los hermanos Barría. Se supone que los Carabineros pasaron ahí a comerse un asado, eso era lo que se comentó. Delibera que Vitalino Soto, trabajaba como mozo en la casa de los Pasenau, porque era jovencito. Era mozo de casa. Dice que, según su recuerdo, por la zona no vinieron militares a recorrer, sólo fueron a buscar a los detenidos. Las detenciones las hacían los Carabineros. Difunde que quiere contar algo que pasó mientras los trasladaron a Osorno: cuando iban en el camión militar pararon al frente del puente Rahue y Colipán dijo “aquí paramos porque a estos hueones hay que matarlos”. Ellos quedaron pensando e iban a ponerse a llorar. En ese momento el subalterno de Copilan dijo: “mire jefe, ya le sacamos la ... a estos ... hay cabros jovencitos, pásémoselos al Regimiento, que allí los maten, nosotros no nos ensuciamos las manos”. Este subalterno logró convencer a Colipán, pero ellos pensaron que los iban a matar allí. Nunca supo el apellido del militar que les salvó la vida, porque Colipán estaba decidido a matarlos.

A.9 Juan Carlos Soto Ampuero (29 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 611 a fs. 612 (Tomo II), fs. 636 a fs. 637 (Tomo II), fs. 1.463 (Tomo IV) y de fs. 1.495 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2017, **rolante de fs. 611 a 612 (Tomo II)**. El Tribunal le lee las declaraciones que rolan a fs. 796, fs. 800 vta., y a fs. 846 de la causa rol 2182-98 de la Corte de Apelaciones de Santiago, episodio “Río Negro”, a la vista en la presente causa. Blasona que ratifica la declaración. El Tribunal le lee la declaración prestada el día 01 de junio de 2017 y que se encuentra contenida en el informe policial que consta a fs. 619 y siguientes, respecto de lo cual indica que ratifica la declaración que se le ha leído. Divulga que no lo vio, porque los tiraron al suelo y después de eso ya no supo más lo que ocurrió. Vio cuando fueron los Carabineros, eran más o menos 8, pero los dos que conocía ya los indicó, pero no vio el momento mismo de la detención, porque los tiraron al suelo. Supo que los detuvieron por comentarios posteriores de los trabajadores y familiares. Desarrolla que le pegaron dos culatazos, a saber uno en el estómago y otro en la cabeza, un golpe cada uno de los dos Carabineros, de ellos, Alfonso Vargas está vivo, vive en Purranque. Desarrolla que los vehículos no los vio, porque ellos iban subiendo a pie para el aserradero. Descarga que no supo nunca más nada respecto de ellos, los conoció bien poco, al papá si lo conocía porque era tractorista. Destaca que los Carabineros no le dijeron por qué motivo los querían detener, es más lo amenazaron. Detalla que nunca ha denunciado nada, no ha reclamado nada, porque no tiene como verificar qué es lo que le han hecho, a él lo pillaron solo, incluso lo amenazaron con que lo iban a matar. Nada de eso ha reclamado, hasta ahora porque sabe que no hay peligro. Distingue que en ese tiempo estaba casado, le contó a su mujer que lo habían maltratado, pero no le dejaron marca en ninguna parte del cuerpo. Glosa que si ubicaba a don Germán Pasenau y respecto a los cuerpos de los Barría nunca supo nada de eso. Ensaya que iba almorzar cuando se encontró a los Carabineros, le preguntaron donde vivían los Barría y le dijeron que lo iban a matar (al deponente). Esgrime que no está dispuesto a denunciar y no tiene como comprobar los hechos.

En declaración extrajudicial de fecha 01 de junio de 2017, **rolante de fs. 636 a 637 (Tomo II)**. Espeta que para el mes de septiembre de 1973 se encontraba trabajando y viviendo en el Fundo “El Parque”, de propiedad de Julio Escobar Bieler. Un tiempo después del Golpe de Estado se encontraba trabajando en el aserradero del fundo, junto a Angulo y Chodin, entre otros. Eran alrededor de 10 personas, pero

no recuerda sus nombres. Al medio día llegó una patrulla de Carabineros, entre los que reconoció a Alfonso Vargas y Pedro Soto, quienes eran del Retén de Crucero y Río Negro, respectivamente. Le preguntaron si conocía a los hermanos Barría Bassay, a lo cual dijo que vivían en una “monjita”, que era una especie de casa rodante, que les habían facilitado. Al decir esto lo golpearon con la culata del fusil. Luego de esto les ordenaron tirarse al piso, con las manos en la nuca. Se sentían disparos, los hicieron recoger las vainillas. Escruta que no vio cuando detuvieron a los hermanos Barría Bassay. Estos fueron los únicos detenidos del Fundo.

En declaración judicial de fecha 14 de agosto de 1979, **rolante a fs. 1.463 (Tomo IV)**. Estimula que en el mes de octubre de 1973 trabajaba en el Fundo El Parque de propiedad de Julio Escobar y cuando iba a almorzar al medio día, se encontró con un Teniente y Capitán de Carabineros y varios Carabineros, no conociendo a ninguno de ellos, quienes le pidieron que los acompañara al lugar donde estaban los hermanos Barría y una vez que llegaron al aserradero, los hicieron tender a todos boca abajo, por lo cual no vio la detención de los hermanos Barría e ignora donde los llevaron. Además, no preguntó por ellos, porque no es amigo. Evidencia que no fue maltratado por Carabineros en esa ocasión y no vio si fueron maltratadas otras personas, porque estaban botados en el suelo, por un tiempo de 15 minutos más o menos. Expresa que no ha vuelto a ver a los hermanos Barría e ignora lo que ha sido de ellos.

En declaración judicial de fecha 20 de marzo de 1980, **rolante a fs. 1.495 (Tomo IV)**. Ratifica la declaración de fs. 70 vta., (correspondiente a su declaración de fs. 1.463, Tomo IV de la presente causa) y explicita que, si mal no recuerda, en octubre de 1973 estaba trabajando en el Fundo El Parque, cuando a medio día se encontró con una patrulla de Carabineros. A los jefes no los conoció, pero uno era rubio y el otro un poco moreno. Exclama que los guio hasta un aserradero donde estaban los hermanos Barría y lo hicieron tender boca abajo, seguramente para no ver y ellos siguieron actuando. Explana que no vio la detención, ni menos supo que sucedió, pues se levantó hasta que el mayordomo les dijo que podían levantarse. A los Carabineros no los conoció, tampoco sabe el nombre de los Oficiales, a quienes si volviera a ver no los podría reconocer, dado el tiempo transcurrido.

A.10 Oscar Hernán Vargas Cárdenas (27 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depuso de fs. 615 a fs. 616 (Tomo II), fs. 634 a fs. 635 (Tomo II) y de fs. 1.442 (Tomo IV).

En declaración judicial de fecha 16 de agosto de 2017, **rolante de fs. 615 a 616 (Tomo II)**. El Tribunal le lee las declaraciones que rolan a fs. 739 y a fs. 796 de la causa rol 2182-98 de la Corte de Apelaciones de Santiago, episodio “Río Negro”, las que ratifica. El Tribunal le lee la declaración prestada ante la policía, contenida en el informe policial que consta a fs. 619. La cual también ratifica. Inquieta que ese día estaba en la casa, la cual se ubica más o menos a tres kilómetros del aserradero junto a su señora, doña Uberlinda Quintul. Eran alrededor de las 12:00 horas y vio a Carabineros cuando fue al aserradero, media hora después, se fue caminando. Demoraba unos 20 minutos en llegar al aserradero. Cuando llegó estaba la embarrada, estaban todos asustados por los disparos. Desde su casa escuchó los disparos y por eso partió para arriba, pero no logró conversar con nadie. Se encontró con Carabineros antes de llegar al banco, deben haber sido unos cinco Carabineros, quienes andaban de a pie, ya que los vehículos estaban abajo y no se podía llegar en vehículo al aserradero. Al encontrarlos ellos lo llamaron, lo esquivaron primero, cree para que no mire a los cabros, pero vio a los Barría que iban sangrando. Manifiesta que iba en el camino, venían los Carabineros, eran como cinco, vio a los hermanos Barría, esto debe haber sido a una distancia de cincuenta metros, los dos venían sangrando hasta por las orejas. Los Carabineros lo vieron y lo tiraron para al lado, para que no los viera, pero sabía que eran ellos porque los conocía desde pequeños. Musita que un Carabinero lo tiró para al lado, le dijo, cuidado te voy a cortar la cabeza con el machete y ahí se quedó un rato parado, siendo agarrado a culatazos, le pegaron en la guata con la culata. Ahí miró para el frente y todos los Carabineros estaban encima de los cuerpos de los hermanos Barría, los hermanos Barría estaban ahí en silencio, no escuchó quejidos, deben haber sido unos cinco o siete Carabineros. Después de eso lo largaron y partió al aserradero. Luego de ello no supo nada más. Nunca más supo algo de los hermanos Barría Bassay.

En declaración extrajudicial de fecha 01 de junio de 2017, **rolante de fs. 634 a fs. 635 (Tomo II)**. Narra que para el mes de septiembre de 1973 trabajaba

como obrero en el fundo “Los Parques”. Ostenta que el padre de los hermanos Barría Bassay, trabajaba en el fundo como tractorista. Sus hijos llegaron unos cinco días antes de que fueran detenidos. Explica que el día de la detención de los hermanos Barría, se encontraba almorzando en su casa, con su esposa Uberlinda Del Carmen Quintrel, cuando de pronto siente unos disparos que provenían del sector del aserradero. Puntualiza que a esa hora desconocía la presencia de Carabineros de Chile al interior del fundo. Luego de los disparos se dirigió al sector del aserradero. Camino para allá, se encuentra con un grupo de Carabineros que traían a los hermanos, lo cuales venían en mal estado, golpeados y sangrando. Lo llamó uno de los Carabineros y le dijo que le iba a cortar la cabeza con un machete y le pegó un culatazo. Luego de eso se los llevaron, desconoce con qué destino. Fundamenta que no pudo identificar a ningún carabinero.

En declaración judicial de fecha 09 de mayo de 1979, **rolante de fs. 1.442 (Tomo IV)**. Precisa que por haber sido compañero de escuela de Guido Barría lo conocía, como también sabía que tenía un hermano cuyo nombre ignora. Proclama que estas personas llegaron a trabajar al fundo El Parque de propiedad de Julio Escobar, como diez días antes de que los detuvieran, sin que se mezclaran mucho con los demás trabajadores. Prefiere que los hermanos Barría fueron detenidos en el mes de octubre de 1973, por un grupo de Carabineros de cinco, al mando de un Capitán de nombre Hans y al que reconoció, Carabinero Adolfo Vargas, de crucero. Sobre la detención, lo único que sabe fue que se los llevaron detenidos, pero ignora a qué lugar, ni en que vehículo, aunque en el camino vio dos furgones. Prefiere que Guido Barría andaba vestido con pecosbill ese día, siendo lo único que recuerda. En el lugar había varios obreros, pero dispersos y algunos almorzando, también estaba el padre de los Barría, que trabajaba en el fundo. Recalca que no sabe si los hermanos Barría están vivos o muertos, porque en realidad no era amigo de ellos, como tampoco sabe si los habrían buscado los familiares. Respecto de Guido Barría sabe que era bastante político, pero del hermano desconoce su color político. La edad de Guido Barria debe haber sido de unos 20 años a esa fecha.

A.11 Armando Pezo Medina (29 años de edad a la época de los hechos) quien depone a de fs. 638 a fs. 640 (Tomo II) y a fs. 1496 (Tomo IV).

En **declaración extrajudicial** de fecha 17 de mayo de 2017 rolante a **fs. 638 a fs. 640 (Tomo II)**. Aduce que ha declarado en varias ocasiones en causas relacionadas con los hermanos Barría Bassay, el año 1973 trabajaba en el fundo de don Eduardo Heize, el cual se llamaba Río Blanco, como maderero, es decir, llevaba la madera de los bosques al aserradero. Vivía al interior del fundo, junto a su esposa Haydee Fernández Barra, y sus hijos menores de edad en esa época (3 niños). El caso es que el entre los días 5 o 15 del mes de octubre de 1973, llegó al fundo una patrulla de alrededor de 15 Carabineros a cargo de un capitán de apellido Godoy de la Comisaría de Río Negro juntaron a todos los trabajadores, alrededor de 25 personas y los dejaron en el suelo con las manos en la cabeza. En el intertanto él se encontraba trabajando en el monte e iba bajando con dos carros de madera. Al acercarse a alrededor de 70 metros de distancia, dispararon al aire y le ordenaron acercarse a ellos, con las manos en la cabeza, lo cual hizo. Uno de los carabineros dijo: “uno de ustedes se va a levantar” y lo nombró a él, cuando se paró, iba llegando un tractor cuyo chofer era don Alejo Barría y su hijo Guido Barría. Los hicieron bajar, los carabineros le hicieron sacarse la ropa a Guido, mientras lo golpeaban con los fusiles. Mientras tanto se dirigía a su casa que estaba al interior del fundo en compañía del carabinero de apellido Ovando, al cual conocía de niño y el capitán Godoy, ellos sabían que los hermanos Barría vivían al lado de su casa y comían ahí también. Llegaron a su casa y le pidieron un revolver de su propiedad. Le sacaron las balas y se lo llevó a Godoy. Además revisaron la pieza donde dormían los hermanos Barría. Aclara que esa fue la segunda ocasión en que fueron carabineros a su casa, ya que previamente habían revisado la casa en presencia de su esposa, ese día. En la segunda visita carabineros señaló que habían encontrado una pistola y una granada. Anexa que Alejo Barría tomaba pensión en su casa, junto con Guido y Héctor. Al percatarse de la presencia de Carabineros, al interior del fundo, su esposa señaló que Héctor le dijo que los iban a buscar presos, por lo que en una primera instancia huyó hacia el monte y luego se entregó a la patrulla. Esa fue la última vez que los vio con vida.

En **declaración judicial** de fecha 25 de marzo de 1980 rolante a **fs. 1496 (Tomo IV)**. Expone que trabajó en el fundo los carrales, ubicado en Riachuelo desde el mes de julio de 1973 hasta mediados del año 1974. En ese fundo trabajaban los

hermanos Barría Bassay si mal no recuerda en el mes de octubre de 1973 al medio día en circunstancias que él iba llegando a su casa con una carga de mochos, vio llegar a un grupo de Carabineros, todos uniformados y que cree serían aproximadamente uno diez y preguntaron por él porque él les daba pensión a los hermanos Barría. Fueron junto a su persona a su casa y ahí detuvieron a Héctor y a Guido lo detuvieron al lado de afuera y lo llevaron caminando. Él no vio en que vehículos andaban. No conoció a ninguno de los Carabineros y si los viera no podría reconocerlos.

A.12 Salvador Heriberto Caro Pino (17 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depuso a fs. 641 a fs. 642 (Tomo II) y de fs. 747 a fs. 747 bis (Tomo II).

En **declaración extrajudicial** de fecha 17 de mayo de 2017 rolante a **fs. 641 a fs. 642 (Tomo II)**. Aduce que los conoció desde los ocho años de edad, por cuanto residían en la misma población Awuey, ubicada en la comuna de Río Negro, sector Riachuelo. Acerca de lo que se le consulta, recuerda que el día 19 de septiembre del año 1973, arribaron a Riachuelo aproximadamente unos 30 funcionarios militares pertenecientes al Regimiento Arauco de Osorno, quienes a eso de las 08:00 de la mañana, detuvieron desde sus domicilios a sus amigos Juan Bassay (tío de las víctimas), Renato Invernizi, Egon Kem y Héctor Ulloa. Él, que para esa fecha tenía 16 años fue detenido a eso de las 11:00 de la mañana de ese día, desde su trabajo en Correos de Chile. Las motivaciones de dicha detención se basan en que todos pertenecían al partido Socialista. Todos fueron trasladados al Retén de Carabineros de Riachuelo, donde permanecieron tres días, uno de los cuales fueron llevados al sector de la cordillera pues los acusaban de mantener armamento oculto allí. Seguidamente, el día 21 de septiembre fue liberado desde el citado retén, mientras que al resto de sus amigos fueron llevados Osorno. Durante los días que permaneció detenido fue interrogado y golpeado por funcionarios de Ejército y Carabineros, quienes insistían en que mantenían armas ocultas. Además, los consultaban acerca del paradero de los hermanos Guido y Héctor Barría, amigos que también militaban en el Partido Socialista, lo cual desconocían. Dentro de los Carabineros que presenciaron sus interrogatorios recuerda el nombre de Pedro Soto, Alberto Oyarzún y Raúl Pailalef, actualmente su cuñado. El nombre de los militares no los recuerda, pero sí tiene la certeza que pertenecían al Regimiento

Arauco. Respondiendo a su pregunta, luego de ser liberado, no recuerda si para el mes de octubre o noviembre del año 1973, recibió una notificación que debía presentarse en la 1 º Comisaría de Osorno, al igual que su amigo Héctor Ulloa. El resto de sus amigos aún permanecían detenidos, y el caso es que en aquella ocasión fueron condenados por la ley de armas y explosivos, no recuerda la ley exacta, aun cuando no encontraron nada en su poder. En lo personal, fue sentenciado a una condena de 3 años y un día, cumpliendo la mitad del tiempo en la cárcel de Osorno y el resto en la Río Negro. El resto de sus compañeros también fueron sentenciados, con distintos años, pero todos quedaron privados de libertad. Respecto de la detención de Guido y Héctor Barría Bassay, recuerda que se enteró por comentarios que habían sido detenidos en el fundo Los Riscos, donde trabajaba su padre, a quien también conocía. Ignora los detalles de su detención, tal como desconoce los responsables del hecho, sólo recuerda haber oído que fueron detenidos por funcionarios de Carabineros, pero desconoce quiénes. Respondiendo a su pregunta, la última vez que compartió y vio con vida a las víctimas de autos, fue aproximadamente una semana antes de su detención del día 19 de septiembre de 1973, y no mantiene información respecto a ninguna acción que ellos estuvieran planeando, por cuanto hace presente que eran muy jóvenes en aquel tiempo, recuerda que Guido tenía aproximadamente 18 años, mientras que Héctor era el mayor y tenía 24 años de edad. Por último, desconoce si alguna persona podrá mantener más antecedentes acerca de las circunstancias de detención de ambos hermanos.

En **declaración judicial** de fecha 18 de abril de 2018 rolante a **fs. 747 a fs. 747 bis (Tomo II)**. Ratifica su declaración extrajudicial de fecha 17 de mayo del año 2017, que le ha sido leída. Quiere modificar que la fecha de su detención fue el 17 de septiembre de 1973. A su pregunta, el jefe era un Sargento de apellido Aguilar. Lo golpeó Oyarzún, Pailalef, su cuñado, Soto. Los golpes fueron patadas, churrazos por las orejas, como fue en ese tiempo. A su pregunta, Héctor era casado con su hermana, pero nunca supieron nada. En ese entonces estaban separados. Para la fecha del episodio ya estaban separados. Tenían contacto porque vivían en la misma población. él sabía que el papá trabajaba en un aserradero. Supieron el comentario de que los habían detenido, pero solo eso. A su pregunta, los del

regimiento llegaron el 17 en la mañana. Estuvieron como una semana más o menos. A su pregunta, acá había una radio, La Sago y La Minería. A su pregunta, no supo qué oficial iba al mando del regimiento Arauco de Osorno. No lo recuerda. Lo que si recuerda es que llegaron hartos vehículos de militares. A su pregunta, conocía a los señores Guzmán. Son de allá. Tienen fundos allá. Otros han vendido. A su pregunta, él no vio a los Guzmán. Pero sus vehículos sí. Quien la conducía era Alberto Oyarzún. Era una Chevrolet de 2500 kilos. Él vio la de Raúl Guzmán, porque en esa lo detuvieron. A su pregunta, si conoció a la familia Pasenau. El lugar es un barrio muy chico y los conoció a ellos. Quiere manifestar que le gustaría que se investigue los apremios a los que fue sometido y está dispuesto a hacerse el protocolo de Estambul en el Servicio Médico Legal respectivo. Actualmente tiene una jubilación de por vida por la comisión Valech I.

A.13 Rumilio Jersan Bustamante Bustamante (18 años a la época de los hechos). En **declaración extrajudicial**, sin fecha, rolante a **fs. 800 a fs. 804 (Tomo II)**. Funda que para el pronunciamiento militar de 11 de septiembre de 1973 residía en el hotel Oscarain en el sector denominado la barra del río Bueno. En dicho lugar trabajaba como mozo de casa junto a Aladín Catalán. Del mismo modo, su antigua conviviente doña Maria Fresia Uterra Urrea desempeñaba labores de lavandería para la patrona que era Raquel Oscarain Martínez, dueña del hotel antes indicado. El juez de campo que había en la zona era Domingo OSCARAÍN Martínez quien se preocupaba de todos los problemas de los lugareños. Es el caso que a fines del mes de septiembre de 1973 en los momentos que se encontraba pescando en su bote en el río Bueno, cercano a la desembocadura del mar, se pudo percatar de la presencia de varios cuerpos que flotaban en las aguas. Estos cuerpos en algunos casos estaban vestidos y en el caso de mujeres los vio semi desnudos. Como se sabía, si alguien se acercaba a los cuerpos podía pasar cualquier cosa por los tiempos que se vivían, no se atrevieron a sacarlos del agua, pero si se pudo percatar que estos estaban con sus cuerpos quemados. Respecto de sus dichos era usual que bajaban por el río patrullas policiales los cuales amenazaban a la gente para que no dijeran nada, entre los carabineros recuerda al teniente Rodríguez de la tenencia San Pablo. Con relación a los cuerpos, algunos de estos alcanzaban el mar, donde se les veía por un tiempo flotando y luego la misma marea los hacia

desaparecer, de estos hechos son testigos René Ascenjo, Aladín Catalán, Armando Millapán, Hugo Huenchul, Juan Reilas, entre otro que no recuerda en el momento. Un episodio que es importante señalar es que siempre a fines de septiembre de 1973 el juez de campo don Domingo Oscarain le ordenó que fuera a enterrar dos cuerpos de sexo masculino que habían varado en la ribera del río Bueno, así al llegar a la desembocadura. Estos cuerpos estaban completos y su característica especial es que su rostro estaba quemado. Debido a que él estaba cortando leña, no cumplió la orden del juez de campo, el cual antes esta situación, le ordenó a don Armando Millapán que le diera cristiana sepultura a estas personas, hecho que le consta que realizó don Aladín Catalán, ya que después comentaron que habían realizado una fosa donde habían depositado estos cuerpos. Este procedimiento se realizó en el sector de la playa mirando hacia el mar, no frente a las casas de la familia Schotz. Dice esto debido que frente a estas casas desde antes del año 1973, en el lugar existía una cruz donde sus patrones dejaban flores y decían que correspondían a personas enterradas producto de un naufragio. Esta cruz estaba en el lugar desde que él llegó al lugar en el año 1965 a la edad de 14 años. Debe desmentir su participación en la inhumación de los cuerpos que se encontraron varados en la barra del río Bueno, sin embargo, es su deseo afirmar y asegurar que en este procedimiento participó Armando Millapán y Aladín Catalán, quienes debieran saber el lugar exacto donde sepultaron a estas personas. De esta forma, no obstante haberse visto numerosos cuerpos, solamente estos dos fueron enterrados por las personas antes mencionadas. Preguntado por si ha recibido algún tipo de amenazas para entregar la información relatada en su presente declaración policial, señala no haber recibido ningún tipo de presión en este sentido y que nadie ha tomado contacto con él para amenazarlo. Actualmente se desempeña en trabajos de obrero agrícola en el sector de nogal al interior de San José de la Mariquina para el contratista de la empresa ANCHILE don Juan Oliva quien reside en la ciudad de Osorno. No tiene otro antecedente que aportar que los detallados con absoluta precisión y verdad, hechos que está en condiciones de ratificar judicialmente.

A.14 Robert Santiago Teylorl Escobar (33 años de edad a la época de los hechos) declara de fs.973 a fs. 975 (Tomo III), fs. 919 a fs. 922 (Tomo III), fs. 1.573

(tomo IV), fs. 1.586 (tomo IV), fs. 1.589 (tomo IV), fs. 1.590 (tomo IV), fs. 1.595 (tomo IV), fs. 1.604 (tomo IV), fs. 1.620 (tomo IV), fs. 1.623 (tomo IV), fs.1.633 (tomo IV) y de fs. 1.670 (tomo IV).

En **declaración extrajudicial** de fecha 05 de septiembre de 2018 rolante a **fs. 973 a fs. 975 (Tomo III)**. Expone en lo pertinente que para septiembre de 1973 estaba en la Comisaría de Rio Negro, no tiene claro si era carabinero antiguo o habían ascendido a cabo. Respecto a la detención de los hermanos Guido y Héctor Barria Bassay no recuerda la fecha, pero se produjo en un aserradero del sector de Riachuelo, no recuerda de quién era el fundo. Era una patrulla de alrededor de 15 Carabineros, a cargo del capitán Schernberger y del Teniente Godoy. También andaban los carabineros Catalán y Rogel, además Pedro Soto. Habla que no conocía a los hermanos, ellos fueron los únicos detenidos en el lugar, fueron trasladados al sector de la Comisaría de Rio Negro. Al día siguiente de su detención, se hizo una patrulla hacia el sector cordillerano, específicamente Millantue, él andaba manejando un jeep, se juntaron en el lugar y un grupo se dirigió a la cordillera. Él se quedó en la base. Además, fue uno de los hermanos, no recuerda cual. Del otro hermano, no recuerda que pasó con él. Volvió la gente del patrullaje realizado y al parecer no encontraron nada, por lo cual se volvieron a Rio Negro. Descarga que volvió con Catalán y dos carabineros de Riachuelo (Hernández y otro), anexa que no rememora en que vehículo se volvió Barria, y también desconoce para dónde lo llevaron. Al parecer estaba en la Comisaría al día siguiente. Rectificando lo señalado anteriormente, el capitán Schernberger le dice que lo acompañe junto al Carabinero Quilaqueo, a un campo, porque tenían algo que hacer. En la Comisaría subieron a un cuerpo humano tapado que aún estaba vivo, el cual correspondía a uno de los hermanos, ignora cual. No pudo verle la cara, ya que iba tapada la cabeza. El cuerpo estaba en el jeep, le dieron la orden que se movieran. Iba manejando Schernberger, el deponente iba de copiloto y en la parte de atrás Quilaqueo y la persona, no sabe si alguien los habría visto salir del cuartel. Se dirigieron a un punto ubicado en el sector Chapaco, de propiedad de una persona de apellido Bolhe, el cual está a orillas del Rio Negro. Una vez en el lugar, el joven Barria iba amarrado y encapuchado, al parecer seguía vivo, el capitán ordenó que lo tiraran al agua. Lo cual hizo el deponente junto a Quilaqueo, precisar que aún se

movía cuando fue arrojado al río. Posteriormente vieron como la corriente se lo llevaba. Precisa que nadie efectuó disparos en contra de esta persona. El capitán dijo que se quedaran callados con lo que había pasado. Luego de eso volvieron a la unidad y no se conversó más del tema.

En **declaración judicial** de fecha 10 de octubre de 2018 rolante a **fs. 919 a fs. 922 (Tomo III)**. Ratifica íntegramente sus declaraciones que rolan a fs. 461; de fs. 551 a fs. 553, de fs. 558 a fs. 560, a fs. 562; fs. 1.139 a fs. 1.140, de causa rol 2182-98 del ingreso de la Corte de Apelaciones de Santiago. Respecto a la declaración de fs. 461, aclarar que siempre ha hablado de un solo hermano, del otro no tiene la menor idea que paso con él. En la detención participaron el Mayor Hans Schernberger, el Teniente José Godoy, el Suboficial Catalán, que era el chofer, el Suboficial Alvarado, el Cabo Pedro Soto y los Carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún. A su consulta, Quilaqueo estaba arriba de la camioneta cuando tiraron a Guido Barría Basay al río. Respecto de la declaración de fs. 551 a fs. 553, deja en claro que cree que al otro hermano lo tiraron al río al igual que su hermano Guido, pero ignora que paso con él realmente. El tribunal le pregunta que aclare si fue Soto o Quilaqueo el que estaba en la camioneta, a lo que el deponente señala, que debe haber sido Soto, a esta altura ya no recuerda bien. Hace el alcance que cuando retornó a la Comisaría de Río Bueno, después de todo lo acontecido con Guido Basay, su hermano no se encontraba en los calabozos, presume que fue tirado al Río. A su consulta, el Teniente o el personal ignora si tenían antecedentes sobre lo acontecido con los hermanos Barría Basay. Cree que el Teniente debe haber sabido lo acontecido. Cuando uno se refiere al cuartelero, el cuartelero cuando le toca el turno debe revisar todo, por lo tanto no cree que el hermano Héctor Barría Basay haya sido sepultado en el patio de la Comisaría. Ratifica íntegramente su declaración extrajudicial del 05 de septiembre de 2018, que en este acto se le lee. A su consulta, Guido Barría Basay fue el que los acompañó a la Cordillera, Héctor se quedó en la Comisaría. Guido iba con una capucha, no vio su rostro. Blasona que tiene sus dudas, entre Soto y Quilaqueo, cree que era Quilaqueo quien estaba arriba de la camioneta custodiando el cuerpo de Guido, el día que llevaban a Guido a la Cordillera. Soto era alto y maceteado. Quilaqueo tenía su físico, pero era más pequeño. El Tribunal le pregunta cuál era la situación de acuartelamiento que regía

en esa época, es decir, si las unidades inferiores tuvieron que "recogerse" a las superiores. Declara que lo único que sabe es que se eliminaron algunos Retenes y otros se recogieron a otras bases. El acuartelamiento grado uno significaba que debía estar en el cuartel, pero a veces uno hablaba con el jefe para ir a la casa porque había niños pequeños, siempre debía pedir permiso a pesar del acuartelamiento. Después que tomaron detenidos a los hermanos Barría Bassay se fue a la casa. El Tribunal le consulta en forma detallada a qué unidades pertenecían los funcionarios Hans Schernberger, el teniente José Godoy, el suboficial Catalán, el suboficial Alvarado, el cabo Pedro Soto, los carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún, todos mencionados a fs. 461. Habla que respecto de Hans Schernberger este funcionario era de la Segunda Comisaría, al igual que José Godoy, el Suboficial Catalán y Alvarado, el Cabo Pedro Soto era chofer de la Segunda Comisaría, al igual que Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún. Respecto de lo mismo, el Tribunal le pregunta respecto a Pablo Araya, Osvaldo Quilaqueo, Alfonso Vargas Gallardo, Rómulo Catalán, a quienes sindicó como aprehensores de los hermanos Barría. Descarga que Pablo Araya era practicante de la Segunda Comisaría, respecto de Osvaldo Quilaqueo, Alfonso Vargas Gallardo, Rómulo Catalán, todos eran funcionarios de la Segunda Comisaría. El Tribunal le lee lo declarado a fojas 551, en lo pertinente, a fin de que señale ¿Quién conducía esos vehículos.? Responde que de la Comisaría de Río Negro a Riachuelo eran Rómulo, Catalán, Alarcón o Oyarzún. Oyarzún andaba. El Tribunal le lee lo declarado a fojas 552 en lo pertinente, a fin de que indique color de la camioneta, marca y si es que era de propiedad de la institución de carabineros o fue facilitada por civiles. La camioneta era ika renal, de color crema, estas camionetas fueron requisadas a CORA e INDAP, en si a instituciones. El Tribunal le pregunta donde estaba ubicado el Fundo la Campana mencionado a fs. 552. Invoca que está ubicado al norte de la Comisaría, queda como a unos 20 kilómetros aproximadamente. El Tribunal le pregunta respecto a lo declarado a fs. 558, a fin de que señale ¿De qué grado era esta persona? ¿Recuerda su rostro o podría reconocerlo si ve una foto de él? A lo que el deponente manifiesta que no recuerda el nombre, podría reconocer si ve una foto de él. Para que diga si alguna de las personas que fueron procesadas con anterioridad, al igual que él, familiares o abogados de ellos, o cualquier otra persona

que no sea el tribunal o personal de PDI, han tratado de contactarse o concertar alguna reunión por los hechos que se investigan. Utiliza que un día fue una hermana de los Barría Basay y otro hermano Basay que cuando lo ve en la calle lo insulta, le saca la madre y lo amenazó de muerte, hay una causa en fiscalía. Reconoce que en la unidad de Carabineros de Río Negro, hubo detenidos por motivos políticos, estaban a cargo de su custodia, el funcionario que estaba de guardia no sabe quién estaba a cargo de sus detenciones. A veces, por ejemplo, uno se desempeñaba por turnos, dependía la rotativa. A su consulta, a él no le correspondía la función de ingresarlos en los libros de guardia, los que se encargaban de aquello eran los oficiales. Estaban a cargo de las interrogaciones los Jefes, es decir, los que ha nombrados. No recuerda que hubiera detenidos pertenecientes a otras unidades. A su consulta, sobre si se aplicaron tormentos a los detenidos, lo único que recuerda es el calabazazo, es decir, que estén desnudos en los calabozos. El Tribunal le lee la siguiente declaración prestada por Luis Alberto Oyarzún Arriagada, que rola a fs. 457 de causa rol 2182-98, que se tuvo a la vista. Musita que don Luis Alberto Oyarzún mintió, porque él nunca fue careado con su persona. A su consulta, no se le aplicaba golpes de culata. Describe que Luis Alberto Oyarzún era prepotente. Recalca que la dotación de la Comisaría de Río Negro no era tan grande, debían quedar dos personas. No subieron a la Cordillera el Sargento Hesse, Oyarzún, Alarcón, Alquinta, estos siempre estaban en la Comisaría. Atestigua que no vio en la Comisaría a Héctor Barría Basay después de haber sido detenidos. No vio a ninguno al interior de la Comisaría, Guido Barría Basay estaba en la camioneta tapado con sacos, amarrado de manos, tapado por completo, boca abajo. En esa época solo estaban detenidos los Hermanos Barría Basay. Funda que Guido Barría Basay cuando iba a la Cordillera con ellos, iba al anca del Caballo y no iba caminando, el señalaba lo que sabía y Pedro Soto como conocía la zona, él era el Vaqueano, dirigía a la patrulla. No recuerda que los hermanos Barría Basay hayan sido golpeados, arrastrados o torturados una vez que fueron detenidos. El registro de su detención debe haber quedado en el libro de guardia. No se conversó en la Comisaría respecto de lo acontecido con los hermanos Barría Basay. Respecto a lo acontecido con Guido Barría Basay, se lo comentó a su esposa. Hace presente que se retiró antes de tiempo porque estaba saturado. A su consulta, los que pueden

dar cuenta a la Fiscalía Militar sobre lo pasado con los hermanos Barría Basay, son los altos mandos. Cuenta que fueron los familiares a la Comisaría a preguntar por los hermanos Barría Basay. Reconoce haber participado en la detención de los hermanos Barría. En segundo lugar, los hermanos Barrías fueron llevados a la Comisaría esposados, a lo que declara que uno sí. Deben haber quedado en calabozos diferentes los hermanos Barría. En cuarto lugar, usted declara que se fue a su casa después de la detención de los Hermanos Barría Basay, a lo que declara que sí. Depone que volvió a la Comisaría al otro día de ocurrida la detención de los Hermanos Barría Basay. Dice que el mayor le ordenó ir a la camioneta donde estaba Guido Barría. Declara que Quilaqueo el que estaba custodiando a Guido. Reconoce que fueron al fundo la campana y parece que llegaron al río Negro. Especula Quilaqueo bajo de la camioneta a Guido. Anexa que el mayor dio la orden de tirar a Guido al río, inclusive andaba con un cuchillo, además al regresar al lugar el mayor dijo que nadie hablara. En esos días los hermanos Barria eran los únicos detenidos en la Comisaría, con posterioridad llegaron más detenidos. No recuerda que haya habido participación de civiles o militares en la detención de los hermanos Barría. Ignora el motivo de la detención, quien dio la orden de detener a los Hermanos Barría Basay, no lo sabe los escribientes recibían las ordenes, recuerda al escribiente de apellido Pacheco, la información se le pasaba al Jefatura. No sabe lo acontecido con Héctor Barría Basay.

En **declaración judicial** de fecha 18 de abril de 2002 rolante a **fs. 1573 (Tomo IV)**. Efectivamente en el mes de octubre de 1973, estando de servicio en la Comisaría de Carabineros de Río Negro, donde servía, recibió una orden del mayor Han Schernberger, jefe de la unidad, de acompañarlo a una diligencia que se realizaría fuera de la unidad. Le ordenó subirse a la camioneta IKA Renault, lugar en que se encontraba en la parte trasera, con su vista vendada y las manos amarradas a la espalda los hermanos Barria Bassay, se dirigieron hasta el fundo la campana, distante a unos 14 o 15 kilómetros desde la Comisaría, en ese lugar se internaron por un camino particular, y cuando llegaron a la ribera del río Negro, el mayor ordenó detener la marcha y bajar a los detenidos del vehículo. Luego, los hizo pararse a un lado del cauce del agua y pretendió darle a cada uno un corte con un cuchillo a lo que le dijo que no los lesionara. Acto seguido, el mismo Han

Schernberger los empujó maniatados como estaban, a las aguas del río Negro, que eran caudalosas por efecto de los deshielos de primavera. Preguntado por el tribunal, para que diga si a los detenidos se les disparó, se les hicieron cortes con armas blancas o bien se les amarró algún elemento de peso a sus cuerpos, antes de lanzarlos al agua, el deponente responde: no, no les disparó, ni se les hicieron cortes, ni se amarró objeto alguno a los cuerpos de los Barría Bassay antes de que el mayor Hans Schernberger los lanzara a las aguas. Narra que se encontraban presentes el mayor Hans Schernberger, el teniente José Godoy, el suboficial Alvarado, el cabo Pedro Soto, que era el brazo derecho de los oficiales, y los carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún, quienes también habían participado en la detención de los hermanos Barría Bassay. Dice que está en condiciones de guiar al tribunal hasta el lugar donde fueron arrojados al río, Guido y Héctor Barría.

En **declaración judicial** de fecha 07 de mayo de 2002 rolante a **fs. 1586 (Tomo IV)**. Ratifica en todas sus partes la declaración que rola a fs. 461 (causa diferente). Se refiere en términos similares a los precedentes, reiterando que participó de la detención de los hermanos Barría Bassay, en costa río blanco en sector de Riachuelo, a unos 25 kilómetros de la comisaría de Río Negro, en el fundo del señor Pasenau, en un aserradero que allí se ubicaba. Reitera a los funcionarios que integraron la patrulla. Desde ese lugar los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Río Negro, ambos hermanos, Guido y Héctor, fueron ubicados en calabozos separados. La Comisaría tenía tres calabozos. Al día siguiente llegó alrededor del mediodía, y recibió la orden de integrar la patrulla que se trasladaría hacia el sector cordillerano de Huelleshue porque según lo que escuchó al mayor Schernberger, éste dijo que irían a ese lugar en busca de un extremista al parecer o posiblemente cubano, esta información se la habría proporcionado Guido Barría Bassay. Por esta razón Guido Barría participó de esta diligencia. Desde la Comisaría de Río Negro se trasladaron en vehículos de la unidad policial al lugar en que se realizaría el patrullaje. El procedimiento se inició en el fundo de propiedad del señor Martínez, y en ese lugar ya se encontraba el camión con los caballos, medio de transporte que utilizarían para realizar la búsqueda del extremista pues tenían que internarse en la cordillera, donde no era posible acceder con vehículos, ya que son senderos o huellas muy angostas, sólo puede pasar un caballo o un ser humano,

se recorrió todo el sector cordillerano que ha mencionado, pero la búsqueda resultó infructuosa, ya que no encontraron a ninguna persona, en ese lugar existen viviendas, más bien eran unas construcciones tipo rucas, que son ocupadas por las mismas personas que trabajaban en las maderas en el sector, en todo caso había rastro de que dichas rucas habían sido ocupadas recientemente. En lo pertinente y reiterando sus dichos precedentes narra quienes participaron en el procedimiento cordillerano, en lo pertinente, nombra al mayor Schernberger y el teniente José Godoy. A esta diligencia fue llevado Guido Barria Bassay, en calidad de detenido, quien en todo momento tuvo que desplazarse a pie durante todo el trayecto al interior de la cordillera, nunca montó un caballo. Ignora la identidad del propietario del camión utilizado, empero los caballos algunos eran de propiedad del retén de Riachuelo, otros de particulares, incluso participó un caballo de carrera cuyo dueño era uno de los hermanos Guzman. Piensa que Héctor quedó en la Comisaría, ignorando que sucedió con él ni la forma en que murió. Especula que a lo mejor fue lanzado al río el día anterior. Al regresar a la Comisaría del patrullaje, Guido permaneció en la camioneta conducida por el mayor Schernberger, tapado con sacos y maniatado de pies y manos a la espalda. Estando en la Comisaría de Río Negro el mayor le ordena acompañarlo en el vehículo, junto a Pedro Soto y se trasladaron hacia el fundo la campana distante a unos 15 kilómetros de la comisaría. Recalca que el detenido Guido iba siempre maniatado de pies y manos. Tirado en la carrocería. El mayor detuvo la camioneta en la ribera del río Esmeralda, sector Chahuilco y ordenó bajar al detenido. Ahí lo trasladaron hacia la orilla, de pies y siempre maniatado. Acto seguido el mayor Schernberger lo empuja al cauce del río, que en este momento iba con un fuerte caudal. Recuerda que Guido gritaba cuando el caudal se lo llevaba río abajo para luego desaparecer. Adopta que no se le disparó a la víctima. Descarga que Pedro Soto antes de ser carabinero fue obrero del fundo la campana, de propiedad de Fernando Eggers. Soto conocía el fundo como la palma de su mano. Además es compadre del mayor Schernberger. Hace entrega al Tribunal de una fotocopia del reglamento N° 11 de disciplina inserto en el Código de Justicia Militar y Reglamento sobre ética profesional que dicen relación con las órdenes superiores que lo obligaron a participar en los hechos que se investigan sin tener la opción de discutir las ordenes más que cumplirlas.

En **declaración judicial** del 08 de mayo de 2002, de **fs. 1589 (Tomo IV)**. Rectifica su declaración en la parte que dice “el mayor Schernberger, lo empuja al cauce del río”, ya que fue él quien dio la orden para asesinarlo y tuvo que obedecer. Agrega que lo empujó de espalda al cauce, mientras el detenido Guido Barría Bassay seguía vivo. La razón por la que lo empujó fue por obedecer al mayor Schernberger. Describe que Guido fue lanzado al río con los ojos vendados y amarrado pie y mano con un alambre de fardo, mientras el cuerpo del muchacho era arrastrado por las aguas caudalosas del río Esmeralda. Los gritos lo impresionaron, pero ya no había nada que hacer, porque si desobedecía las ordenes de Comisaría corría riesgo de su vida. Anexa que junto a ellos había otro funcionario de Carabineros, pero no recuerda su nombre y esa persona llegó junto a ellos en la camioneta, pero se encargó de custodiar al detenido quien fue trasladado hasta ese lugar en la parte posterior de la camioneta, amarrado, con sus ojos vendados y su cuerpo tapado con sacos. Ese funcionario fue quien lo ayudó a bajar a Guido de la camioneta y estuvo presente en los hechos.

En **diligencia de careo judicial** con la persona de José Hernán Godoy Barrientos, de fecha 08 de mayo de 2002, **rolante a fs. 1590 (Tomo IV)**. Ratifica sus declaraciones precedentes. Cuenta que el teniente Godoy Barrientos estuvo presente en la detención de los hermanos Barría Bassay, pero no participó en el procedimiento de ese día, esto es, en cuanto a los traslados de los detenidos hasta la Comisaría y/o su entrega a terceras personas. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría por el capitán en esa fecha señor Schernberger. El teniente Godoy los acompañó al siguiente día en la excursión al sector precordillerano, al mando del comisario señor Schernberger, también los acompañó Pedro Soto, el practicante Pablo Araya y otros funcionarios que señaló en su declaración anterior.

En **diligencia de careo judicial** con Hans Eduardo Schernberger de fecha 08 de mayo de 2002 **rolante a fs. 1595 (Tomo IV)**. Ratifica sus declaraciones anteriores. Efectivamente participó en la detención de los hermanos Barría Bassay. Una vez que fueron detenidos por orden del comisario de esa fecha don Hans Schernberger los detenidos fueron trasladados a la Segunda Comisaría de Río Negro, y al día siguiente por orden del comisario recibió la orden de que lo acompañará en la camioneta IK Renault de color beige, conducida por

Schernberger, en la parte posterior iba Guido quien se encontraba amarrado con alambre de fardo y vendado en sus ojos, su cuerpo estaba tapado con sacos. Espeta que el comisario puso en marcha el vehículo y se dirigieron hasta el fundo la campana a unos 15 kilómetros aproximadamente de la Comisaría. Una vez llegado al lugar el comisario le ordenó que bajara al detenido de la camioneta, él obedeció y lo dejó de pie junto al borde de la ribera del río, enseguida el comisario ordenó que empujara a Guido y él obedeció. Explica que el detenido estaba frente a ellos entonces él cumplió la orden y lo empujó, Guido estaba aún con vida, ya que se escuchaban los gritos en los momentos que su cuerpo era llevado por las aguas. En la detención de los hermanos Barría Bassay también participó el comisario y los otros funcionarios que señaló en su declaración anterior. Delibera que los dos hermanos fueron detenidos el mismo día en el aserradero de propiedad del señor Pasenau, en el sector de Riachuelo. El capitán Schernberger fue quien dio la orden de la detención de los hermanos Barría a todos los funcionarios que componían el grupo y fue personalmente con ellos a dicha detención. Con respecto a la excursión en vehículos motorizados y luego desde el predio del señor Martínez en la precordillera para ir al lugar indicado con Guido Barría Bassay donde se pensaba que había armas y personas, concurrió el capitán Schernberger en calidad de comisario, también fue el Teniente Godoy, además él era comisario subrogante. Tras haber regresado de la excursión siempre con el detenido Guido Barría en la parte posterior de la camioneta, amarrado, con sus ojos vendados y tapado con sacos, él no se bajó del vehículo, fue el señor comisario Schernberger quien bajó unos minutos y luego salieron los dos con destino a la campana, donde recibió la orden de su jefe quien le dijo que lo empujara, tuvo que obedecer o de lo contrario lo sancionarían, Más aún en ese tiempo no podían oponerse a la orden de un superior. En la camioneta también viajaba otro funcionario, no recuerda bien que funcionario.

En **declaración judicial** de fecha 30 de diciembre de 2002 rolante de **fs. 1604 a fs. 1606 (Tomo IV)**. Agrega en lo pertinente que en la tarde al volver del operativo el capitán le ordenó que lo acompañara sin decirle dónde ni para qué, subió en el asiento del acompañante, el capitán manejaba el vehículo y se pudo dar cuenta que en la parte de atrás que era descubierta, iba un carabinero. Presume

que era el carabinero Quilaqueo y tendido en el suelo una persona tapada con sacos. Se dirigieron por el camino viejo a Osorno, pasando por el sector Chifín, él no le preguntó a su capitán hacia donde se dirigían, según su parecer se trataba de un detenido que tenían que entregar a los militares, pero cuando llegaron al cruce Chahuilco, sector rural de esta comuna en que no habían militares, se desvió hacia la estación de ferrocarriles de Chahuilco, tomando camino hacia el fundo la campana, al cual ingresó con gran seguridad, como que conocía muy bien el lugar hasta llegar a la ribera del río Negro, que desemboca en el Rahue. En ese lugar se detuvo el vehículo y el capitán ordenó bajar al detenido y ponerlo de pie al lado de la ribera del río, diciendo que “lo vamos a cortar”, a lo que él se opuso, pensando en que tajarlos sería ensañarse con él e incluso lo soltó por algunos momentos, y en esos instantes el capitán y el carabinero lo empujaron para hacerlo caer a las aguas del río con las manos atadas en la espalda con alambre de fardo y una capucha cubriéndole la cabeza. Solo el capitán y el carabinero lo empujaron, ya que como dice, él soltó al detenido para expresarle al capitán que no debía cortarlo. Incluso esta reacción suya significó una llamada de atención severa de su capitán, que in pudo haberle costado la salida de la institución ya que las ordenes no se pueden debatir. Por las características físicas y sólo cuando llegaron al lugar y bajaron al detenido del vehículo se percató que se trataba del menor de los hermanos Barría Bassay, al parecer de nombre Guido y el otro de nombre Héctor, que era más corpulento, debería haber estado en los calabozos. Piensa que el detenido Héctor Barría Bassay pudo haber corrido la misma suerte que su hermano, el día anterior, en el lapso en que él estaba en su domicilio después de su servicio, y el capitán pudo haber sido acompañado por Pedro Soto, quien habría sido trabajador del fundo la campana de propiedad de don Fernando Eggers y conocía perfectamente el lugar. Seguramente la eliminación de Héctor Barría Bassay pudo haberla hecho en compañía de Pedro Soto, a cualquier hora del día ya que el capitán vivía en la misma unidad o comisaría. Agrega que el camión en que transportaron los caballos para el operativo Huelleshue eran de propiedad de don Fernando Aguirre según le comentó el carabinero Alberto Oyarzún Arriagada a quien se lo preguntó por cuanto fue él quien lo condujo.

En **diligencia de careo judicial** con Quintiliano Rogel de fecha 19 de junio de 2003 rolante a **fs. 1620 (Tomo IV)**. Depone que no recuerda haber mencionado a Rogel como uno de los integrantes de los procedimientos en los cuales se detuvo a los hermanos Barría ni a la expedición a la cordillera, no recuerda bien quiénes participaron. Lo que si tiene claro es que luego de detener a los hermanos Barría Bassay, fueron llevados a la Comisaría, a él se le autorizó a retirarse a su hogar. Al día siguiente al presentarse solo vio a uno de los hermanos, Guido. En cuanto al otro desconoce su destino. Guido fue llevado a ribera del río Negro y empujado. Aquella noche desconoce quien se encontraba a cargo de la Comisaría. El mensaje que llegó al Ministerio del Interior no puede ser cierto ya que él vio como uno de los hermanos cayó al río y tampoco en la Comisaría hay lugar donde excavar, él se habría dado cuenta si se hubiera excavado. Al parecer hubo un relevo de guardia, y ahí deben revisar toda la Comisaría y por lo tanto se hubieran dado cuenta de una excavación.

En **declaración judicial** del 01 de julio de 2003 rolante a **fs. 1623 (Tomo IV)**. Ratifica la declaración de fs. 41, respecto a quienes participaron en la detención de los hermanos Barría Bassay, el Mayor Schernberger, el Teniente Godoy, el Suboficial Catalán y Alvarado, cabo Pedro Soto y los carabineros Alarcón y Oyarzún. Al día siguiente como lo declaró a fs. 562 sale un grupo a la cordillera a investigar, comandado por el Mayor Schernberger, Teniente Godoy, Pedro Segundo Soto, ahora tiene la duda si fue Quintiliano Roger, el practicante Pablo Araya, Osvaldo Quilaqueo, cabo Vargas y Rómulo Catalán. En el operativo se usaron varios vehículos. El deponente fue en un furgón. El camión fue conducido por Alberto Oyarzún, quién además transportaba los caballos que se usarían en el operativo. Insiste en sus declaraciones anteriores que Guido Barría fue empujado al río, aunque podría estar confundido si en el Río Esmeralda o Río Negro. En relación a las localidades por las que se le consulta, ignora donde estaban ubicados el fundo Alquihue y no conoce donde está ubicado el fundo Alquihue, no conoce a Víctor Aguilar. Ignora la razón por la cual se buscó y detuvo a los hermanos Barria Bassay.

En **declaración judicial** de fecha 07 de agosto de 2003 rolante a **fs. 1633 a fs. 1635 (Tomo IV)**. Funda que siempre ha dicho la verdad, que tanto el mayor

Schernberger como el teniente Godoy estuvieron presentes cuando se detuvo a los hermanos Barría, eran ellos los que ordenaron su detención. Fueron muchos funcionarios, no puede precisar el número porque unos eran del retén de Riachuelo, cuyo jefe era Sergio Aguilar, otros eran de la tenencia de Purranque cuyo jefe le parece era Godoy y los de Río Negro, no le consta si quedaron registrados en el libro de guardias, pero los vio en calabozos separados. Como había terminado su servicio se fue a comer a su casa. Volvió al día siguiente a sus labores en la Comisaría, ahí el mayor organizó el viaje a la cordillera, porque Guido algo había declarado, sobre armamento que estaría oculto y que un cubano lo esperaba arriba. Fueron casi los mismos del día anterior, dentro de ellos, el teniente Godoy, pero la Comisaría que mandaba el grupo era el teniente Schernberger. En la cordillera se anduvo a caballo, animales del retén Riachuelo y otros prestados por un particular, Fernando Aguirre, de quien era el camión en que se habían llevado allí los caballos, que estaban ahí al llegar ellos, no se encontró nada, volvieron a la comisaría. Él estaba allí y llega el mayor Schernberger, quién le ordena que lo acompañe en la tarde, no recuerda hora exacta. Fueron con otro carabinero en una camioneta manejada por el mayor y sentado atrás, el carabinero Quilaqueo. Suma, iba Guido amarrado con alambre de fardo y tenía la cabeza tapada, le vio la cara cuando ya estaban en la cordillera, era el menor de los hermanos. Llegaron al fundo la campana, y el mayor les ordena que lo bajen, para tirarlo al agua. Lo bajaron y lo llevaron a la orilla, ahí lo pararon y el mayor le ordena que lo tiren al agua. Además escuchó que dijo que quería cortarlo. No le vio el arma cortante, pero ahí le protestó que para que lo iba a cortar, se le enojó y empujó al Guido al agua, como lo dijo en el careo con el mayor a fs. 565. Por lo tanto es falso lo que dice el mayor respecto de haber entregado a los hermanos Barría al Fiscal Militar. En cuanto a qué pasó con el otro hermano, presume que el día anterior lo mataron. Primero porque al otro no lo volvió a ver en la Comisaría. Segundo porque se dio cuenta que cuando entraron al fundo la campana, el mayor que manejaba conocía perfectamente el lugar. Señala el camino principal y a la izquierda hay un desvío que sigue hacia Osorno. Por ello pensó que lo llevaban a Osorno, pero tomó el otro camino y en el cruce para Chahuilco, ahí se pasa un puente y se entra al fundo la campana. Pasaron una tranca y le llamó la atención que estaba abierta ya que siempre los

dueños del fundo la mantienen cerrada. Además, ese lugar estaba lejos de la casa patronal, piensa que el mayor conocía el lugar porque debe haber ido el día antes con el hermano. Héctor Barría, acompañado de Pedro Soto quien conocía el lugar, pues había sido obrero ahí, antes de ser carabinero. Se refiere a la exactitud con que el mayor llega al lugar a pesar de que había varios caminos. Tiene que haber ido antes que con el Guido. Insiste en que él cumplió la orden que le dio el mayor Schernberger. Orden que no podía discutirle porque habría sido insubordinación. Hace presente que él le representó al mayor que para que iba a cortar al detenido antes de echarlo al agua. Por lo tanto, él no estaba concertado para matarlo, se dio cuenta a última hora de lo que pasaba. Además, el mayor podía haber eliminado ahí mismo si no cumplía su orden. Dice que cuando lo carearon con el general Godoy en la dirección general en un hall estaba el mayor Schernberger conversando con Pedro Soto, su compadre, ya que es padrino de una hija de Soto, y ahí el mayor lo amenazó, lo tomó de un brazo y le dice anda a decirle al señor ministro que son puras mentiras las que dijiste. Le contestó que no, que no iba a cambiar su declaración y muy alterado lo amenaza y le dice entonces te voy a meter preso porque tú eres el culpable y tú vas a responder por el asunto.

En **declaración judicial** de fecha 26 de febrero de 2004, **fs. 1.670 a fs. 1672 (tomo IV)**. Relata los mismos hechos señalados anteriormente en sus declaraciones, sin aportar nuevos antecedentes.

A.15 Raúl Estatiro Guzmán Del Río (35 años a la época de los hechos) declara de fs. 976 a fs. 977 (Tomo III), a fs. 1.457 (tomo IV), a fs. 1.493 (tomo IV) y de fs. 1.548 (tomo IV).

En **declaración extrajudicial** de fecha 04 de septiembre de 2018 rolante a **fs. 976 a fs. 977 (Tomo III)**. Indica que luego del golpe de estado llegaron a su domicilio en el sector de Riachuelo militares los cuales le quitaron una camioneta Chevrolet modelo apach 1940 de 2500 kg, color blanco y rojo. Estos militares usaban esta camioneta para transportarse en el sector. Agrega que a su hermano René también le quitaron su vehículo una camioneta Chevrolet, más pequeña no se acuerda del modelo, pero era de color rojo. Quiere agregar que nunca condujo esos vehículos durante ese tiempo. A fines de octubre le devolvieron los vehículos. Respecto a la detención de los hermanos Barría Bassay, supo posteriormente que

habían sido detenidos por carabineros los cuales se movilizaban en su camioneta. Respecto al paradero de ellos no sabe qué pasó con ellos ni conoce detalles de la detención.

En **declaración judicial** de fecha 26 de junio de 1979 rolante a **fs. 1.457 (Tomo IV)**. Aduce que en el mes de septiembre de 1973, le prestó su camioneta a los militares, ignorando el objeto del préstamo, aunque al parecer fue el 15 o 16 de septiembre, pero en el mes de octubre no ha prestado su camioneta a militares ni a carabineros. Ignora la detención de los hermanos Barria.

En **declaración judicial** de fecha 20 de marzo de 1980 **rolante a fs.1.493 (Tomo IV)**. Ratifica declaración de fs. 53 y señala que efectivamente el 16 o 17 de septiembre de 1973 le prestó su camioneta a funcionarios del ejército, pero era manejada por el carabineros Alberto Oyarzún, la tuvieron en su poder 2 días, no es efectivo que haya manejado su vehículo.

En **declaración extrajudicial** de fecha 13 de septiembre de 2001 rolante a **fs. 1.548 a fs. 1.549 (Tomo IV)**. Agrega que para el golpe militar vivía con su madre y su hermano Víctor René en una casa ubicada en el pueblo riachuelo, frente del retén de carabineros. En los días posteriores al golpe, cree que el 16 de septiembre llegaron varias patrullas de militares, los que le pidieron o mejor dicho le quitaron la camioneta Chevrolet C-40 de 4000 kg de carga, pintada de rojo y tenía el capot y el techo color blanco, diciéndole que había unos bandos que ordenaban a la gente cooperar con los militares. El vehículo se lo devolvieron el día 20 de septiembre de ese año y días después se fueron de la zona, quedando solo los carabineros. El retén de Riachuelo estaba a cargo del sargento Sergio Aguilar Miranda, además de los funcionarios Robert Teylorl, René Hernández, Sixto González y el conductor era Alberto Oyarzún Arriagada. Él tenía harto contacto con los carabineros y después de que se fueron los militares comenzaron ellos a pedirle la camioneta, ya que no tenían vehículo, sin que se pudiese negar ya que, como dijo antes, su casa estaba al frente del cuartel, entregándosela en varias oportunidades y se la devolvían más tarde. El 16 de octubre en horas de la tarde fue a su casa el carabinero Alberto Oyarzún a pedirle la camioneta, que le entregó como había hecho las veces anteriores, sin que le dijeran para qué la iban a ocupar y él tampoco preguntó ya que no se podía hacer. Ese día había carabineros de Rio Negro en el retén de

Riachuelo, porque rato antes había visto llegar a un furgón y más tarde supo que llegaron en un jeep de carabineros. A eso de las 22:00 horas, el carabinero Oyarzún le fue a entregar la camioneta, quedando estacionada en su casa, dio las gracias y se fue al retén. En ese momento estaba en el garaje de su casa la señora Helvecia Bassay, quien le pidió permiso para estar ahí, por cuanto quería saber que pasaba con sus hijos, porque Carabineros los había detenido y ella había visto a uno de ellos cuando lo bajaron del jeep y lo ingresaron al retén. Después se entró a su casa y no supo más del asunto por esa noche, ya que todos tenían miedo, quedando la señora Helvecia en la vereda fuera de su casa. Llorando ya que había ido a consultar por sus hijos al retén y no la habían escuchado. Después del golpe, los militares y carabineros andaban buscando a estos jóvenes Barría Bassay, ya que habían sido utilizados por algunos politiqueros de la zona y eran un poco desordenados pero no supo más de ellos. En todo caso no eran extremistas ni guerrilleros. Pocos días después de que fueron detenidos, el padre de los jóvenes Alejandro Barría, le contó que estaba trabajando con sus hijos en un aserradero cuando los fueron a buscar detenidos los carabineros, y no sabía de su paradero y que los habían buscado sin tener resultados. También le dijo que al aserradero no habían llegado los carabineros en su camioneta, ya que los carabineros la habían dejado unas trancas que había antes de llegar al aserradero. No le contó qué carabineros fueron los que detuvieron a sus hijos, pero era evidente que eran los carabineros de Riachuelo y Rio Negro, aunque no sabe cuáles. En todo caso tiene que haber andado el carabinero Alberto Oyarzún, ya que él manejaba su camioneta cada vez que la ocupaban. Desconoce el destino final de estos hermanos, solo por comentarios sabe que los habrían matado los carabineros, pero no sabe más detalles ni qué hicieron con sus cuerpos. Reitera que nunca condujo su camioneta a los carabineros y nunca anduvo con ellos deteniendo gente o haciendo alguna cosa con ellos.

A.16 Eduvino Federico Schell Wetzel (46 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 1.490 (Tomo IV), fs. 1491 (Tomo IV) y de fs. 1.524 (Tomo IV).

En **declaración judicial** de fecha 14 de febrero de 1980 rolante a **fs. 1490 (Tomo IV)**. Soflama que fue administrador del fundo de Julio Escobar domiciliado

en Rio Blanco, en esa época conoció al tractorista Pedro Alejandro Barría Navarro, quien trabajaba con dos operarios, pero no sabe si serían sus hijos. El día 16 de septiembre más o menos encontrándose en su casa almorzando, llegó una patrulla de carabineros uniformados y le preguntaron si él era el encargado del fundo. A lo anterior respondió que era el administrador y tenía que ver con los animales. En cuanto al personal únicamente conoció a Pedro Alejandro Barría, pero no a sus hijos. Ese día venia padre e hijos en el tractor y carabineros detuvieron al hijo cuyo nombre ignora. Cuando él salió ya estaba detenido y únicamente vestía ropa interior, no vio que le pegarán y después se lo llevaron. Supo que su padre lo andaba buscando.

En **diligencia de careo judicial con Pedro Bernardino Barria Navarro** de fecha 14 de febrero de **fs. 1491 (Tomo IV)**. Ratifica su declaración que acaba de prestar, vio a la persona que andaba en el tractor con Barría, se lo llevaron los carabineros a pie porque no había vehículos. Niega lo que dice Barría que él haya visto la detención de su otro hijo y que le hubiese dicho que estaba herido en la cara, a los carabineros aprehensores no los conoció.

En **declaración judicial** de fecha 15 de julio de 1983 rolante a **fs. 1524 a fs. 1525 (Tomo IV)**. Basa que es cónyuge de Lastenia Casas, estuvo trabajando algo de dos a tres años como administrador del fundo de don Julio Escobar, ubicado en el sector Riachuelo, para el año 1973. Había un aserradero en el predio y en él, una persona de apellido Barría trabajando como tractorista, tenía dos hijos este hombre, a quienes sólo conoció de vista, ignora sus nombres, pero esos jóvenes no trabajaron en el aserradero. En el año 1973, en el mes y fecha no recuerda, se encontraba en su domicilio almorzando cuando llegaron dos carabineros a su casa, querían hablar con él, le preguntaron si era el administrador del fundo, les contestó en forma afirmativa. Acto seguido le preguntaron si en el fundo trabajaban unos hermanos Barría. Respondió que el padre de ellos trabajaba en el aserradero. Así se dirigieron a dicho lugar, donde tomaron detenido a uno de los jóvenes y después se fueron a buscar al otro que parece andaba en un tractor. Es todo lo que vio. A su casa solo llegaron dos carabineros uniformados, ignora sus nombres. No sabe si andarían más carabineros ni en qué vehículos, ya que se quedó en su casa y no vio nada más. Días más tarde, el maestro Barría pasó a su casa a avisar que iba a ir a

Valdivia a ver a sus hijos que estaban detenidos, para llevarles frazadas, nunca más volvió a saber nada sobre esos jóvenes, esto porque no recuerda si Barría se retiró del fundo. Él se fue a trabajar a otra parte.

A.17 Alfonso Huenchan Melillanca (32 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 1438 a fs. 1439 (Tomo IV), fs. 1493 (Tomo IV) y de fs. 1.527 (tomo IV).

Declaración judicial del 3 de mayo de 1979, **de fs. 1438 a fs. 1439 (tomo IV)**. Proclama que del año 1970 trabajaba en el fundo del señor Julio Escobar, ubicado en río Blanco, hacia la cordillera. A ese lugar llegaron en el año 1973 después del mes de septiembre aunque no puede precisar qué mes, un grupo de carabineros de algo así como diez, detuvieron a unos de los hermanos Barría, cuyo nombre ignora y lo dejaron en la casa de Armando Pezoa, mientras fueron a buscar al otro hermano Barría que se había escondido en los montes, después de una búsqueda lo encontraron y lo llevaron hasta el camino, sacándolo de la propiedad. Lo mismo hicieron con el Barría que estaba en casa de Pezoa. Adosa que no conocía muy bien a los hermanos Barría ni a su padre, ya que estos llegaron a trabajar al fundo del señor Escobar después del 11 de septiembre de 1973, cuando estaban siendo perseguidos por sus actividades políticas, por eso tampoco puede precisar la edad de ellos, aunque recuerda que era algo moreno, de estatura mediana a baja, de contextura regular. Apunta que no recuerda si usaba bigote o no, y su pelo al parecer lo usaba corto. Comenta que después que sacaron a los hermanos Barría del fundo, no tiene idea hacia donde los llevaron, pero no los volvió a ver, al parecer vivían en Riachuelo a 14 kilómetros del río Negro. Cuenta que ignora en que vehículo llegó carabineros a buscar detenido a los hermanos Barría y de las personas que estaban en el lugar dispersos en el predio recuerda a Armando Pezoa, a Alejandro Barría, padre de los hermanos Barría, a esos solamente recuerda. Descarga que cuando carabineros detuvo a los hermanos Barría, no hicieron nada al menos delante de ellos, es decir no lo golpearon ni lo maltrataron. No rememora la actividad política de los hermanos Barría; él tampoco pertenecía a ninguna actividad política y lo que ha declarado, es todo lo que sabe por eso no puede decir más.

Declaración judicial del 27 de marzo de 1980, **de fs. 1493 (tomo IV)**. Ratifica su declaración de fs. 5. Destaca que no conoció a ninguno de los carabineros que detuvieron a los hermanos Barría. Detalla que con respecto a Armando Pezo ignora su actual domicilio pues era obrero maderero accidental.

Declaración judicial del 23 de julio de 1993, **de fs. 1527 (tomo IV)**. Cuenta que conoció de vista a dos hijos de Alejandrino Barría, cuando estuvo trabajando en un aserradero que funcionaba en los riscos, de propiedad de don Julio Escobar. Esgrime que esta persona tenía arrendado un bosque a don Eduardo Geisse y esos jóvenes estuvieron solamente unos días en el aserradero. Evidencia que, en el mes de octubre de 1973, la fecha exacta no la recuerda debido al tiempo transcurrido, pudo haber sido más o menos las 15:00 horas, llegó un grupo de Carabineros a quienes no conoce, a buscar detenidos a los hermanos Barría Bassay. Explaya que eran alrededor de 20 carabineros los que andaban a pie. Presume que tienen que haber dejado su vehículo en el camino, ya que el aserradero se encontraba como a dos kilómetros del camino. Narra que no vio que Carabineros haya golpeado o insultado a los hermanos Barría Bassay, solamente los tomaron detenidos y se los llevaron fuera del aserradero. Agrega que no ha vuelto a ver más a esos jóvenes.

A.18. José Rómulo Catalán Oyarzún (25 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 1444 (Tomo IV), fs. 1.519 (Tomo IV) y de fs. 1552 a fs. 1553 (Tomo IV).

Declaración judicial del 22 de mayo de 1979 **de fs. 1444 (Tomo IV)**. Expresa que el día 16 de octubre de 1973 no es efectivo que haya andado en operativo militares, toda vez que desempeñaba funciones administrativas en la Segunda Comisaría de Río Negro. Por lo tanto, nada sabe de la detención y si es que hubo detención de los hermanos Barría Bassay, como tampoco le consta que haya andado en estos operativos el Teniente Godoy u otros Carabineros. Indica que solamente conoció a un joven Barría y cuyo nombre ignora y trabajaba de mensajero del correo, sin saber qué actividad política desempeñaba o a qué partido político pertenecía. Precisa que nada le consta sobre si la familia de los hermanos Barría hayan buscado o intentado buscarlo o preguntado por él en las Comisarías, además es retirado del 16 de mayo de 1976.

Declaración judicial del 12 de julio de 1993 **de fs. 1519 (Tomo IV)**. En lo pertinente no narra ningún hecho vinculante a la presente causa.

Declaración extrajudicial del 13 de septiembre de 2001 **de fs. 1552 a fs. 1553 (Tomo IV)**. En lo pertinente espeta que ha declarado en múltiples ocasiones por la causa de los hermanos Barria Bassay. Se refiere a su carrera funcionaria. Detalla que para el "pronunciamiento militar" del 11 de septiembre del año 1973, él prestaba servicios en la Segunda Comisaría de Río Negro, con el grado de Sargento. Glosa que a cargo de la Unidad el Mayor Hans Schernberger Valdivia, y el subjefe era el Teniente Hernán Godoy Barrientos. Espeta que formaban parte de la dotación los siguientes funcionarios: Quintiliano Rogel, Luis Alberto Oyarzún Arriagada, Raúl Alarcón Asenjo, Guillermo Barrientos Arriagada y Pedro Soto Godoy. Explicita que no recuerda otros nombres, pero eran en total unos 13 o 14 en esa unidad, siendo la dotación total de la jurisdicción, incluyendo retenes y destacamentos, de unos 45 funcionarios. Indica que dentro de la jurisdicción estaba el Retén de Riachuelo y en ese entonces era; el jefe el Sargento Segundo Sergio Aguilar Miranda y tenía una dotación de 4 Carabineros de los que no recuerda nombres. Precisa que para ese entonces él cumplía funciones como "agregado" en la Oficina de Partes de la Comisaría ya que faltaba personal y el año 1972 lo habían agregado a esa oficina, ya que era muy "viejo" para andar en la calle y tenía una preparación intelectual que le permitía desenvolverse bien en esa dependencia. Acota que en lo que respecta a los hermanos Barria Bassay debe señalar que él no los conocía, o sea conocía en Río Negro a uno de ellos, del que no sabe su nombre pero si sabe que era el encargado de llevar la correspondencia del correo entre Río Negro y Riachuelo, el que en una oportunidad ellos llevaron detenido al Cuartel ante una denuncia de la encargada de la oficina de correo por una pérdida de un dinero, pero después lo dejaron ellos en libertad ya que al allanarlo no le encontraron nada. Aduce que además, unos días antes del "pronunciamiento Militar" se produjo un desorden entre los estudiantes del liceo de Río Negro, los que se tomaron una de las calles, por un lado los de derecha y por otro los de izquierda, por lo que él fue a cargo de un piquete de Carabineros a restaurar el orden, retirándose los de derecha pero al tratar de convencer a los alumnos de izquierda que entregaran la calle, fue escupido en la cara por una de las mujeres que había en ese grupo, e insultado por

ellos, por lo que tomó su sable y con él, sin desenvainarlo de su funda de cuero, le propinó varios golpes a los sujetos, hombres y mujeres, ante lo cual salieron huyendo. Supone que en este grupo estaba al menos uno de los Barría Bassay y puede ser que él le haya pegado unos sablazos, pero no lo sabe a ciencia cierta, no quedando nadie herido. Atestigua que respecto a los "operativos" que se hacían, no sabe si en conjunto con los militares o sólo de Carabineros, debe manifestar que él no participó en ninguno de ellos y que no que hicieron sus colegas en estos asuntos. Destaca que no le consta que hayan llegado "listas" con nombres de personas para detener y cree que la gente que se detuvo fue porque eran "políticos" o por infringir el "toque de queda". Destaca que en lo relativo al "supuesto" operativo en que se habría detenido a los hermanos Barría Bassay, ignora absolutamente todo eso ya que él no participó en eso y sólo tomó conocimiento de que los Barría Bassay habían sido detenidos por Carabineros y estaban desaparecidos al tiempo después y lo supo por los comentarios de la gente del pueblo. Detalla que Incluso se decía que un tío de estos jóvenes también estaba desaparecido, pero después se supo que estaba vivo y viviendo en Holanda. Reitera que él no participó en esa detención y no sabe que fue del destino final de esas personas. Tampoco sabe que Carabineros participaron en esto si es que fue así y menos sabe si es que están muertos o su posible lugar de entierro.

A.19 Lastenia Mercedes Casas Maldonado (35 años a la fecha de ocurrencia de los hechos.). Depone de fs. 1447 (Tomo IV), de fs. 1.522 a fs. 1523 (Tomo IV).

Declaración judicial del 28 de mayo de 1979 **de fs. 1447 (Tomo IV)**. Blasona que en el mes de octubre de 1973 estuvo viviendo en el fundo los Riscos en una mediagua, lugar donde trabajaba su marido, pero no vio ni se acuerda que el 16 de octubre de ese año Carabineros haya detenido a los hermanos Barría Bassay, a quienes no los conoce y además no trabajaban en el lugar. Expresa que le parece que su padre era tractorista.

Declaración judicial del 15 de julio de 1993 **de fs. 1522 a fs. 1523 (Tomo IV)**. Narra que es la cónyuge de Eduvino Scheel y en el año 1973, su esposo se encontraba trabajando como administrador del fundo de propiedad de don Julio Escobar en el sector de Riachuelo. Soflama que en dicho fundo había instalado un

aserradero en el cual trabajaba bastante gente, pero él no tenía contacto con los trabajadores, debido a que desde hace muchos años padece diabetes. A consecuencia de lo cual esta con medicamentos y no sale para nada de su casa. Descarga que escuchó que en el aserradero andaban unos jóvenes de apellido Barría Bassay, pero no los conoció, solo al padre de estos, incluso ese hombre a quien ubicaba por su apellido Barría. Advierte que ignora su nombre, estuvo viviendo con su esposo y en una oportunidad, la fecha no la recuerda debido al tiempo transcurrido, presume que tiene que haber sido en el año 1973, el maestro Barría dijo que ya no iba a alojar en la casa donde vivían ellos, porque habían llegado sus dos hijos, a los cuales nunca vio. Agrega que desde entonces se quedó a vivir en el campamento de aserradero al parecer con unos hijos. Aproxima que a los pocos días de haberse ido de la casa el maestro Barría, después de almuerzo llegaron a tocar a la puerta de su casa, funcionarios de Carabineros uniformados, a quienes no conoce, preguntaron por ella y su esposo. Salió su esposo a hablar con ellos y este le contó que andaban buscando a los Barría, pero no puede precisar si le señaló que buscaban al maestro o a los hijos. Cuenta que a los pocos días de haber ocurrido esto fue a su casa el maestro Barría, para avisarles que tenía que ir a ver a sus hijos que estaban detenidos, a fin de llevarles frazadas. Precisa que su esposo andaba en los potreros y que ella le iba a avisar. Revela que le dio unos panes para que llevara; pero no se le ocurrió preguntarle donde estaban detenidos y él tampoco le dijo.

A.20 Víctor René Guzman Del Rio (35 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 1457 a fs. 1458 (Tomo IV), de fs. 1.494 (Tomo IV) y de fs. 1.511 (tomo IV).

Declaración judicial del 26 de junio de 1979 de fs. 1457 a fs. 1458 (Tomo IV). Arguye que no ha prestado su camioneta a Carabineros ni Militares para operativos militares en el año 1973, 1974 ni siguientes, como tampoco ha manejado su vehículo trasladando una patrulla de Carabineros para detener a los hermanos Barría, a quienes conoció porque eran del lugar, le parece eran del partido socialista y activista político. Descarga que no sabe si en la actualidad los hermanos Barría están vivos o muertos.

Declaración judicial del 20 de marzo de 1980 **de fs. 1494 (Tomo IV)**. Ratifica su declaración de fs. 53 y destaca que su camioneta estuvo a disposición de Carabineros, pero no la ocuparon. Detalla que no ha manejado su vehículo conduciéndole a Carabineros para practicar detenciones en esa época.

Declaración judicial del 08 de junio de 1983 **de fs. 1511 a fs. 1512 (Tomo IV)**. Barbullá que en el año 1973 vivían con su familia frente al Retén de Carabineros de Riachuelo, tenían una camioneta marca Chevrolet, apache 40, de 2.500 kilos y días después del golpe militar, ocurrido en septiembre de 1973, llegaron Carabineros y Militares a esa localidad, estos uniformados decían a los vecinos que había que proporcionarles el máximo de ayuda y facilidades para poder transportarse a los alrededores. Aduce que es así como procedieron a requisarles las camionetas pertenecientes a su hermano Raúl y del deponente. Advierte que él estaba ausente de su domicilio cuando fueron a buscarla, por lo que no recuerda si fueron carabineros o los militares los que requisaron vuestro vehículo. Agrega que en todo caso su hermano Raúl fue quien la entregó y debe recordar este dato. Asegura que sobre lo que se le interroga fue aproximadamente una semana, tiempo en la cual estuvo requisada la camioneta e ignora el destino que le dieron al vehículo durante esa semana. Atestigua que conocía a los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay por ser domiciliados en Riachuelo, pero no es efectivo que sus hermanos o él hayan presenciado cuando esas personas fueron arrestadas o maltratadas como se señala en la querella que se le ha leído, eso es falso. Destaca que por comentarios que había en Riachuelo se enteró que esos jóvenes fueron detenidos, pero ignora quienes practicaron la detención, a saber los Carabineros o los Militares. Detalla que no ha vuelto a ver más a esas personas e ignora si estarán vivos o muertos. Ensaya que nada tiene que ver en la desaparición de esas personas. Es totalmente falso que él haya estado presente cuando fueron detenidos.

A.21 Pedro Alejandrino Barría Navarro (49 años a la fecha de ocurrencia de los hechos.). Depone de fs. 1459 (Tomo IV), fs. 1477 (Tomo IV), fs. 1.484 a fs. 1485 (Tomo IV), fs. 1486 (Tomo IV), fs. 1487 (Tomo IV), fs. 1488 (Tomo IV), a fs. 1489 (Tomo IV), fs. 1491 a fs. 1492 (Tomo IV), y fs. 1504 (tomo IV).

Declaración judicial del 29 de junio de 1979 **de fs. 1459(Tomo IV)**. Utiliza que el día 16 de octubre de 1973 estaban trabajando en el fundo El Bosque de don Julio Escobar, cuando llegó una patrulla de Carabineros al mando del Teniente Godoy, reconociendo a los Carabineros Pedro Soto, René Alvarado y un tal Catalán, quienes procedieron a detener en forma violenta a sus dos hijos, Guido y Héctor y después del golpearlos con la carabina los dejaron en slip y los metieron a unas camionetas que manejaban los hermanos Guzmán para llevárseles del lugar. Ignora el lugar al cual los trasladaron e ignora el paradero actual de sus hijos. Advierte que su señora fue la que los ha buscado y preguntado por ellos, como también la que presentó la querella de fs. 36. Adosa que la foto de fs. 32 corresponden a sus dos hijos. Agrega que sus hijos eran de la juventud socialista, deportistas y tranquilos.

Declaración judicial del 24 de enero de 1980 **de fs. 1477 (Tomo IV)**. Apunta que el día 16 de octubre de 1973 se encontraba trabajando con sus hijos Guido Ricardo en el fundo Los Riscos de propiedad de un señor Escobar, cuando llegó una patrulla de Carabineros comandada por el Teniente Godoy y los Carabineros que señaló en la declaración de fs. 56. Posterior a la detención, los trasladan caminando hacia unas camionetas que manejaban los hermanos Guzmán cuyo nombre son René y Raúl, agricultores domiciliados en Riachuelo. Asegura que, dentro del grupo de Carabineros, vio como Pedro Soto botó al suelo a su hijo Guido Ricardo lo hizo desnudar y le pegó. Comenta que el domicilio de ellos fue varias veces allanado por militares, Carabineros e Investigaciones y dieron vueltas todas las cosas buscando armas. Dice que los Carabineros intervinieron en la detención.

Diligencia de careo con Pedro Segundo Soto Godoy, del 14 de febrero de 1980, **de fs. 1484 a fs. 1485 (Tomo IV)**. Ratifica sus declaraciones precedentes. Identifica al Carabinero con quien se le carea, como uno de los funcionarios que detuvo a sus hijos, porque estuvo varios años en Riachuelo y actualmente en Rio Negro. Detalla que no puede decir que grado tenía pues andaban en traje de campaña, pero él lo conoció como Carabinero. Ensaya que el día de los hechos venía con su hijo Guido Ricardo en tractor y al aparecer en la cuesta vieron varios Carabineros, como ocho o diez y dos de los cuales en cuanto los vieron, empezaron a disparar. Explaya que les hicieron un alto, los detuvieron y llamaron a su hijo. el cual se bajó del tractor y el policía presente le empezó a pegar con la carabina, le

hizo sacar su ropa, quedando en slip, le siguió pegando hasta que llegó el Teniente y Soto dijo, este es Guido Barria llevándolo hacia los vehículos. Expresa que a su hijo Héctor Alejandro lo tomaron en otro lado, él no presencio su detención ni sabe quiénes lo hicieron. Se mantiene en sus dichos.

Diligencia de careo con José Rómulo Catalán Oyarzún del 14 de febrero de 1980 **de fs. 1486 (Tomo IV)**. Cuenta que conoce a Catalán ahí presente el cual en 1973 era Carabinero, pero no sabe el grado, si Cabo 1° o 2°. Esa persona formaba parte del grupo de Carabineros que aprehendieron a su hijo Guido. Advierte que lo conocía porque era de Rio Negro y continuamente él lo veía y sabía quién era. Destaca que se conocían desde hace diez o doce años, no eran amigos, pero sabía su nombre. Asevera que no sabe cómo puede decir que no estuvo en la diligencia de la detención, pues es una persona conocida y hubo testigos que lo vieron.

Diligencia de careo con Luis Alberto Oyarzún Arriagada del 14 de febrero de 1980 **de fs. 1487 (Tomo IV)**. Destaca que conoce al funcionario presente, desde hace muchos años, pues fue obrero del padre de este en la localidad de Riachuelo. Detalla que no vio al funcionario ahí presente en el grupo de carabineros que detuvieron a su hijo, pero según dichos de Raúl Guzmán, sería esta persona quien manejaba la camioneta de su propiedad, una Chevrolet roja.

Diligencia de careo con Marcelino René Alvarado Ampuero, del 14 de febrero de 1980 **de fs. 1488 (Tomo IV)**. Ratifica sus declaraciones anteriores. Explica que lo conoce desde 1944, pues hicieron juntos el Servicio Militar. Reitera que él participó en la detención de su hijo Guido Ricardo, estaba en el grupo de Carabineros, pero no tomo ninguna actitud agresiva en contra de él. Adosa que como dijo, estaba en el grupo. Anexa que muchas otras personas lo vieron, entre ellas las que menciona a fs.1. Se mantiene en sus dichos, Alvarado andaba entre los carabineros aprehensores.

Diligencia de careo con Quintillano Rogel Alvarado del 14 de febrero de 1980 **de fs. 1489 (Tomo IV)**. La persona con la que se le carea era miembro del grupo de Carabineros que detuvieron a su hijo. Desarrolla que no mostro ninguna actitud agresiva en su contra, él lo vio como a cinco o diez metros y andaba de uniforme, a quien conoció en Rio Negro. Ratifica lo expuesto.

Diligencia de careo con Eduvino Federico Schell Wetzel, del 14 de febrero de 1980 **de fs. 1491 a fs. 1492 (Tomo IV)**. La persona con la que se carea, lo conoce pues en el año 1973 fue administrador del fundo donde él trabajaba con sus hijos. Relata que esta persona le dijo que a su hijo Héctor lo habían detenido en otra parte del fundo y que estaba herido en la cara. Relata que él fue testigo de la detención de su hijo Guido. Ratifica lo expuesto.

Diligencia de careo con Sergio Aguilar Miranda del 23 de abril de 1980 **de fs. 1504(Tomo IV)**. Ratifica sus declaraciones anteriores e indica que la persona ahí presente lo conoció como el Sargento Sergio Aguilar, pero esta no estuvo presente en el momento de la detención de sus hijos.

A.22 Pedro Segundo Soto Godoy (45 años a la fecha de ocurrencia de los hechos.). Depone de fs. 1109 (Tomo III) con copia a fs. 1594 (Tomo IV), fs. 1142 (Tomo III) copia a fs. 1593 (Tomo IV), fs. 1156 (tomo III), fs. 1449 (Tomo IV), fs. 1559 a fs. 1560 (Tomo IV), fs. 1566 a fs. 1568 (Tomo IV), fs. 1584 a fs. 1585 (Tomo IV), fs. 1622 (Tomo IV) y de fs. 1680 (tomo IV).

Diligencia de careo con Hans Eduart Schernberger Valdivia de fecha 8 de mayo de 2002 **de fs. 1109 (tomo III), con copia a fs. 1594 (Tomo IV)**. Ratifica sus declaraciones anteriores. Acota que participó en la detención de los hermanos Barría Basay, una vez que fueron detenidos por orden del Comisario don Hans Schernberger, los cuales fueron trasladados a la Segunda Comisaría de Río Negro. Al día siguiente por orden del Comisario recibió la orden que lo acompañara a buscar armas a la cordillera Huellehue. A la excursión fueron junto al detenido Guido, mientras Héctor quedó en la Comisaría. Advierte que Guido fue llevado hasta la cordillera al anca de su caballo y tenía esposadas sus manos a la espalda. Agrega que cuando regresaron de la excursión Guido fue llevado hasta el lugar donde estaban los vehículos en su caballo. Luego introducido al interior de una camioneta Renault, de color amarilla, de propiedad del SAG, no recuerda quien la conducía. El Capitán Schernberger estuvo en las detenciones de los hermanos Barría Basay y en la excursión a precordillera. Espeta que la ida al predio donde estaría el río, que expresa el Sargento Primero Robert Teylorl, esos hechos para él no existen porque él no estuvo allí, nada supo de ella ni tampoco tiene conocimiento de que ella haya sucedido.

Diligencia de careo con José Hernán Godoy Barrientos, de fecha 14 de febrero de 1980 **de fs. 1142 (tomo III)**. No ratifica su declaración de fs. 15 y de fs. 28, a pesar de haberla firmado, cree que en ese rato tuvo un mal momento y seguramente confundió los hechos. Aduce que si bien es cierto reconoce al Capitán Godoy como jefe en Rio Negro durante dos años. Asegura con más calma que no es efectivo que haya participado en algún operativo para detener a los hermanos Barría en Riachuelo. Asegura que a los hermanos Barría Bassay, los conocía por ser de la localidad y eran activista del partido socialista. Ratifica lo expuesto.

Diligencia de careo con José Hernán Godoy Barrientos de fecha 08 de mayo de 2002 **de fs. 1156 (tomo III), copia a fs. 1593 (Tomo IV)**. Blasona que a dicho operativo concurrió el Teniente don José Godoy Barrientos juntamente con el Comisario Schernberger, el practicante Pablo Araya, el Cabo Primero Robert Teylorl y otros funcionarios que no recuerda. A cargo del operativo estaba el Comisario Schernberger. Precisa que puede recordar lo recién señalado sin lugar a duda ya que ese operativo se realizó por orden del Comisario para buscar armamento y fue en la oportunidad en que el deponente trasladó al anca de su caballo al detenido Guido Barría Basay y de regreso a los camiones en la misma forma. Acota que en todos los operativos que realizaba el Comisario Schernberger siempre lo acompañaba el Teniente Godoy Barrientos. Así el operativo que se realizó en la cordillera con la presencia del detenido Guido Barría estuvo presente el Teniente Godoy Barrientos.

Declaración judicial del 23 de mayo de 1979 **de fs. 1449 (Tomo IV)**. Acota que en el mes de octubre de 1973 integró una patrulla de carabineros al mando del teniente Godoy, en la que integraba también, los carabineros, Alberto Oyarzún, Sergio Aguilar, René Alvarado, José Rómulo Catalán Oyarzún, quienes detuvieron en Riachuelo a los hermanos Barría Bassay, miembros del partido comunista y conocido activistas políticos. Aduce que una vez detenido los hermanos Barría, lo que fue como a las once de la mañana, aunque no recuerda bien, lo entregaron a una patrulla militar, pero como él se fue a la cordillera en otro patrullaje con militares, no puede precisar si los hermanos Barría fueron entregados en Riachuelo o Rio Negro. Agrega que supo, pero no le consta que los hermanos Barría fueron

trasladados al estadio Español y nada sabe sobre el destino de estas personas. Finalmente añade que en patrullaje a la cordillera estuvo más o menos ocho días.

Declaración extrajudicial del 12 de abril de 2002 **de fs. 1559 a fs. 1560 (Tomo IV)**. Hace una reseña de su carrera funcionaria. Expresa que de esta Comisaría dependía el Retén de Riachuelo, a cargo del Sargento Sergio Leónidas Aguilar Miranda. Indica que entre los Carabineros que trabajaban en Río Negro recuerda a, Robert Teylorl Escobar, René Alvarado Ampuero, Raúl Alarcón Asenjo, Osvaldo Quilaqueo Huenchullanca, actualmente fallecido, y otros más que no recuerda. Puntualiza que, en el mes de octubre del año 1973, fue designado por el Mayor Hans Schernberger Valdivia, para realizar un patrullaje en río Blanco, sector del retén Riachuelo. Relata que este servicio iba a cargo del Mayor e integrado por el Teniente José Godoy Barrientos, los Sargentos José Rómulo Catalán Oyarzún, René Alvarado Ampuero y Sergio Aguilar Miranda, el cabo Robert Teylorl Escobar y los Carabineros Raúl Alarcón Asenjo y Alberto Oyarzún Arriagada. Soflama que se movilizaban en un jeep de cargo de la unidad y un Renault ika, modelo de propiedad del S.A.G. Acota que los conductores de los vehículos eran Oyarzún y Alarcón, sin poder precisar quien conducía cada vehículo. Aduce que llegaron al sector como a las 14:00 horas, en un campo donde funcionaba un banco aserradero. Agrega que en el lugar, el Mayor ordena detener a "Tito" Barría, cosa que así sucede e inmediatamente es subido a uno de los vehículos. Luego de esta primera detención, el Mayor ordena la búsqueda de su hermano Guido, por lo cual se realiza una búsqueda, que arroja resultados positivos al cabo de media hora. Añade que Guido es subido al vehículo junto a su hermano Tito. En el vehículo donde estaban los detenidos se sube el Mayor junto al Teniente Godoy, iniciando viaje en dirección a la Segunda Comisaría de Río Negro. Comenta que, por su parte, junto a los demás Carabineros abordaron el otro vehículo, también para dirigirse a la unidad. Divulga que transitaron por caminos diferentes, por lo cual ellos llegaron a la Comisaría como a las 18:00 horas, ocasión en la cual sintió la voz de los hermanos Barría Bassay, que estaban detenidos en los calabozos. Destaca que, debido a la hora, procedió a hacer entrega de su turno, para luego retirarse a su domicilio particular. Al día siguiente, a las 8:30 horas, al ingresar a su servicio de turno, se percató que en la unidad no estaban detenidos los hermanos Barría

Bassay, por lo cual preguntó por el Mayor Schernberger, pero el funcionario que estaba de guardia le informo que había salido temprano en un vehículo, junto al Teniente Godoy, el Cabo Teylorl y el Carabinero Oyarzún, presumiendo que este grupo de funcionarios salió con los hermanos con destino desconocido. Distingue que por su parte procedió a salir a su servicio de rutina, desentendiéndose desde ese momento de los hermanos Barría Basay. Nunca se comentó detalles sobre lo que sucedió con estas personas. Debido a que estos jóvenes nunca más aparecieron, puede pensar que fueron ejecutados y sus cuerpos hechos desaparecer por los funcionarios que los sacaron de la Comisaría. Precisa que del Cabo Teylorl puede señalar que tenía un carácter muy duro y era una persona de total confianza de los jefes, al igual que el conductor Oyarzún. Precisa que el Mayor Hans Schernberger tenía un buen trato con los funcionarios, al igual que el Teniente Godoy.

Declaración judicial del 17 de abril de 2002 **de fs. 1566 a fs. 1568 (Tomo IV)**. Ratifica íntegramente y en todas sus partes las anteriores declaraciones, que rolan a fs. 70 y las diligencias de careo de fs. 141 y fs. 142 vta., prestadas ante el Juzgado Militar de Valdivia y la de fs. 398 declaración extrajudicial. Proclama que si participó en las detenciones de los hermanos Guido Ricardo y Héctor Alejandro Baría Bassay, sucedidas el día 16 de octubre de 1973 en la localidad de Riachuelo, junto al Mayor de Carabineros Hans Schernberger Valdivia, Comisario de la Segunda Comisaría de Carabineros de Río Negro, el Teniente Hernán Godoy Barrientos, el Sargento Rómulo Catalán Oyarzún, el Sargento René Alvarado Ampuero, el Cabo Primero Robert Teylorl Escobar, los Carabineros Raúl Alarcón Asenjo, y Alberto Oyarzún Arriagada. Aduce que la detención de los hermanos se produjo en un aserradero cercano a la localidad de Riachuelo. Advierte que andaban en los siguientes vehículos, uno tipo Ika Renault de color amarillo, que antes había sido del SAG, un Jeep de la unidad, no recuerda si participó otro vehículo. Funda que no participaron civiles en el procedimiento. Fueron trasladados a la Comisaría de Río Negro. No recuerda si quedo consignado en algún libro de la unidad de ingreso de los hermanos Barría Bassay como detenidos, y de haber sido así los libros, por el tiempo transcurrido están incinerados. No tiene conocimiento de lo sucedido con los detenidos una vez ingresados a la Comisaría. Narra que nunca se

aplicó ningún tipo de tormentos o torturas a detenidos, ni por él ni por otro funcionario de carabineros, eso lo afirma categóricamente. Habla que participó como testigo de la muerte de Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay, según recuerda al tercer día de producida la detención, el mayor Hans Schernberger, le ordeno abordar la camioneta de la unidad porque saldrían. Recalca que él se subió a la camioneta, a saber Renault de color amarillo, en la parte de la carga o carrocería, en cuyo interior pudo ver que iban los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay, con su vista vendada y las manos esposadas a la espalda. Acota que se dirigieron hasta el sector de Chahuilco, se salieron del camino y se internaron por un campo hasta donde existe un pequeño barranco, ahí el Mayor dio orden de descender de los vehículos, también se bajaron los detenidos y el Mayor Hans Schernberger preguntó quién de ellos quería darles muerte a los detenidos. Continúa, el Cabo Primero Robert Teylorl Escobar, dio un paso adelante ofreciéndose como voluntario para cumplir la orden de dar muerte a los hermanos, hecho que se produjo un instante después cuando Teylorl disparó su arma un revólver de servicio sobre los hermanos, los que estaban de rodillas frente al grupo. Soflame que ambos hermanos cayeron sobre sus costados, no recuerda cuantos tiros le dio a cada uno, pero sí que fueron en la cabeza. Acota que no fue necesario un tiro de gracia. Aduce que el Mayor Hans Schernberger no dio lectura a ningún tipo de documento o sentencia donde se ordenara la muerte de los detenidos Barría Bassay. Colige que estuvieron presentes los mismos que participaron en la detención, es decir el Mayor Schernberger, el Teniente Godoy, los Sargentos Catalán y Alvarado, el Cabo Robert Teylorl y los carabineros Alberto Oyarzún y Raúl Alarcón Asenjo. Precisa que en esa diligencia no se dio muerte a otras personas. Aclara que los cuerpos fueron arrojados al barranco. Puntualiza que él no vio que los cuerpos fueron luego subidos a la camioneta. Atestigua que no está en condiciones de guiar al tribunal, hasta el lugar donde se produjo la muerte de los hermanos Barría Bassay por el tiempo transcurrido, no lo puede recordar.

Declaración judicial del 7 de mayo de 2002 **de fs. 1584 a fs. 1585 (Tomo IV)**. Ratifica su declaración anterior a excepción de aquella parte donde señala que se dirigieron con los hermanos Héctor y Guido Barría Basay hasta el sector de Chahuilco donde el Mayor habría dado la orden de descender a dichos hermanos y

preguntar quien quería darles muerte a los detenidos y todo lo demás que refirió en aquella ocasión. Aduce que declaró en la forma señalada por temor a que el Tribunal lo dejara detenido. Advierte que lo cierto es que participó en la detención de los hermanos en Río Blanco del sector del Retén Crucero, diligencia que fue dirigida por el Mayor Comisario don Hans Eduart Schernberger Valdivia y el Teniente José Hernán Godoy Barrientos. Afirma que primero se detuvo a Guido que se encontraba trabajando en el banco aserradero y a los veinte minutos, encontraron a Tito que estaba en el monte. Agrega que el funcionario que participó en la detención como chofer de Carabineros fue Raúl Alarcón Asenjo. A los hermanos Barría Basay les colocaron un saco en la cabeza, fueron esposados por la espalda y luego los colocaron en la carrocería de una camioneta Renault, de propiedad del SAG. Habla que los caballos y camiones se fueron el día antes al sector, él se fue con un jeep y carros policiales al sector de Huellethue. Cuenta que ese mismo día llevaron a Guido e iba en el mismo vehículo que los transportó a ellos. Describe que Guido iba con las manos atadas por la espalda, con esposas. Detalla que no recuerda quien conducía el vehículo. De los Oficiales de la Comisaría fue el Comisario Hans Eduart Schernberger y el Teniente José Hernán Godoy Barrientos. Distingue que estos siempre salían juntos. Espeta que él llevo a Guido al anca de su caballo. Anduvo a pie Guido cuando llegaron al lugar de destino, donde se buscaban armas y decían que había gente. Escruta que no había armas y tampoco gente. Salvo una casa en el sector con gente, pero eran personas de campo. Explaya que en la expedición a caballo recuerda que andaba el practicante Pablo Araya, que se encuentra fallecido. También andaba Oyarzún y Raúl Alarcón Asenjo y parece que andaba Teylorl. Manifiesta que no había en el sector donde él anduvo una "casamata" o ramada. Probablemente habría una más abajo, pero que él no vio. Preguntado cómo regresó Guido Barría Basay desde el sitio por el señalado, hasta el lugar donde habían tomado los caballos (camino público), relata que él lo llevó al anca del caballo, que él en ese momento cabalgaba. Acota que se dirigieron hacia la propiedad de Rubén Martínez Oliva para tomar los camiones, el sector donde se encuentra el campo de Martínez se denomina Millantue y queda, precisamente en el camino público. El dueño del camión era no recuerda si un Dodge o un Chevrolet y era de propiedad de don Fernando Aguirre, vecino del pueblo de Río Negro. Atestigua que era amigo

de la jefatura, era amigo de todos ellos. Cuenta que los caballos también eran de Aguirre, era corralero, parece que Aguirre falleció luego de haber quedado no vidente. Descarga que vio a los hermanos Barría Basay en los calabozos de la Comisaría, y les llevo agua porque ellos se la pidieron, empero no los vio lesionados. Detalla que esa fue la última vez que los vio en la Comisaría. Al día siguiente, no los vio más y tampoco supo que pasó con ellos.

En declaración judicial de fecha 1 de julio de 2003 **de fs. 1622 (tomo IV).**

Ratifica su declaración que rola a fs. 546, de fecha 07 de mayo del 2002, respecto de quienes participaron en la detención de los hermanos Barría Basay, destaca que la expedición iba comandada por el Mayor Schernberger, el Teniente Godoy Barrientos, y todos los funcionarios mencionados en su declaración. Puntualiza que al detener a los hermanos los sacaron de un aserradero, los llevaron a la Comisaría, al día siguiente salieron a un sector de la cordillera con Guido Barría a buscar armas, desconoce dónde quedó Héctor Barría. Narra que en aquella ocasión el deponente concurrió con el Mayor Schernberger, Teniente Godoy, Teylorl, no recuerda si iba Oyarzún, el practicante Pablo Araya, y Quilaqueo. Relata que en cuanto al destino de los hermanos Barría Basay lo desconoce. Soflama que jamás escucho algún comentario en relación a que los hermanos Barría habían sido enterrados.

En declaración judicial de fecha 27 de febrero de 2004 **de fs. 1680 (tomo IV).** Barbulla que son compadres con el capitán Schernberger, padrino de bautizo de una de sus hijas, pero en esa ocasión sólo concurrió a la ceremonia su esposa. Reitera que participó en la detención de las dos personas que se mencionan, entregándolas a la guardia de la Segunda Comisaría de Río Negro, y no supo más de ellos, porque al otro día de la detención, cuando llegó, ya no estaban allí. Advierte que el operativo policial lo comando directa y personalmente el capitán Schernberger. El Teniente José Hernán Godoy Barrientos participó en la detención y búsqueda de armas y explosivos que se hizo a caballo, en el lugar Millantue y en la que llevaron a Guido Barría Bassay.

A.23. Luis Clemente Chodín Céspedes (24 años de edad para el año de los hechos investigados). **En declaración judicial** de fecha 18 de noviembre de 1993 **de fs.1529 (Tomo IV).** Funda que no recuerda exactamente la fecha debido al tiempo transcurrido, pero le parece en el mes de octubre del año 1973, que

encontrándose en ese entonces trabajando en un aserradero de propiedad de Julio Escobar, ubicado en el Fundo Los Corrales, comuna de Purranque, sector Riachuelo. Un día en que iba hacia su trabajo a pie, se encontró con unos carabineros que llevaban en calidad de detenidos a unos hermanos de apellidos Barría Bassay; recuerda que entre los policías andaba un Teniente al que conocía de vista y sabe que su apellido es Godoy, pero ignora donde estará actualmente. En ningún momento vio de parte de Carabineros hacia los detenidos actitudes abusivas y tampoco vio que alguien haya agredido en algún momento a los detenidos. Supo de la desaparición de esas personas cuando los familiares los comenzaron a buscar, pero por comentarios de terceras personas. Él trabajó en el sector de Riachuelo hasta más o menos el año 1976, para luego irse a la ciudad de Osorno, y que es donde actualmente se encuentra viviendo.

A.24. Quintiliano Rogel Alvarado (44 años de edad para el año de los hechos investigados), quien declaró de fs. 1445 (Tomo IV), fs. 1489 (Tomo IV), fs. 1535 (Tomo IV), fs. 1554 (Tomo IV), fs. 1565 (Tomo IV), fs. 1619 (Tomo IV) y fs. 1620 (Tomo IV).

En declaración judicial, de fecha 25 de mayo de 1979, **fs. 1445 (Tomo IV)**. Niega que haya andado en una patrulla al mando del Teniente Godoy con el objeto de detener activistas políticos, como tampoco detener a los hermanos Barría, a quienes no conoce. Las labores que desempeñaba en Río Negro eran servicio de calle y turno. Estando de servicio en Río Negro se detuvo a gente de la Unidad Popular, pero ignora el nombre de los Carabineros o Militares que integraron grupos para realizar ese tipo de trabajo, los que eran designados en secreto. Él llegó a trabajar a Río Negro en el año 1956, y el Fundo Los Riscos correspondía al sector de Riachuelo, a catorce kilómetros de la ciudad.

En careo judicial con Pedro Alejandrino Barria Navarro, de fecha 14 de febrero de 1980, **de fs. 1489 (Tomo IV)**. Ratifica su declaración y reitera no participó en la detención de los hermanos Barría y jamás salió a operativos, debe haber sido por la edad, pues estaba para jubilar. No conoció a los hermanos Barría y a la persona con quien se le carea la conocía de vista en Río Negro.

En declaración judicial, de fecha 25 de enero de 1994, **de fs. 1535 (Tomo IV)**. Blasona es funcionario de Carabineros en retiro, pero nunca concurrió a

efectuar ningún operativo al sector de Riachuelo durante el año 1973, y menos con fecha posterior. Como era un funcionario ya antiguo, es decir, que tenía muchos años de servicio, su trabajo siempre lo desempeñaba en la ciudad, es decir, lo designaban para hacer tránsito y servicios de guardia, además de población. No hacía patrullajes rurales. Por tanto nada sabe respecto al desaparecimiento de los hermanos Barría Bassay. Delibera que hace varios años, le parece que más de 10 años, fue citado a declarar por estos mismos hechos a la ciudad de Osorno. En esa oportunidad se encontraba presente el padre de los jóvenes Barría Bassay con el propósito de reconocer a los funcionarios de carabineros que habrían tenido participación en la detención de sus hijos en octubre de 1973, y al verlo manifestó que no podía mentir porque él no andaba en ese operativo.

En declaración extrajudicial de fecha 13 de septiembre de 2001, **de fs. 1554 a fs. 1555 (Tomo IV)**. Aquilata que ha estado detenido, fue procesado por el delito de abusos deshonestos por el Juzgado de Río Negro durante el año 1999. Se refiere a su carrera funcionaria. Para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre del año 1973 estaba trabajando en Río Negro y el jefe era el Mayor Hans Schernberger Valdivia, luego le seguía el Teniente José Hernán Godoy Barrientos, y de los funcionarios de planta estaban Guillermo Barrientos Arriagada, José Rómulo Catalán Oyarzún, Carlos Hesse Soto, Pedro Segundo Soto Godoy, Luis Alberto Oyarzún Arriagada y Raúl Alarcón Asenjo. Después del golpe se presentaron a prestar cooperación en la Comisaría varios jubilados de Carabineros, cree que fueron como tres o cuatro, los que fueron traspasados de inmediato como si estuvieran en servicio activo, o sea, hacía de todo lo que se ordenaba por la jefatura. Nombra a los jubilados. No recuerda que hubiese algún funcionario de apellido Duhalde durante los años que estuvo en esa unidad. Después del golpe comenzaron a llegar patrullas de militares a la zona, pero no tuvo mayor contacto con ellos e ignora que actividades realizaban. Él salía a cumplir servicios al área rural y normalmente cumplía sus labores en la ciudad o en la unidad. Eso porque no era de mucha confianza para el Comisario jefe, ya que en esos años estaba muy inclinado al trago, y al parecer esa actitud suya no le daba confianza a él. En lo que respecta a los hermanos Barría Bassay, nada tiene que ver en ese asunto, ya que no tuvo ninguna participación en eso y no sabe que les pudo haber ocurrido, ni

quienes los detuvieron ni donde fueron a parar, en todo caso él no los vio detenidos ni participó en su detención y menos en sus muertes y desapariciones. No sabe quiénes participaron en la supuesta detención de esas personas y no tiene ningún antecedente que sirva para establecer el destino final de esos jóvenes. No sabe si fueron muertos o no, ni quién los pudo haber matado. Dice que en enero del año 1994 fue citado a uno de los Juzgados de Osorno, en donde el padre de los Barría fue a hacer un reconocimiento de los carabineros que supuestamente detuvieron a sus hijos, sin que lo reconociera como uno de ellos. En cuanto a que Carabineros ocupara vehículos de particulares para hacer patrullajes, en esos años eso a veces ocurría, dada la escasez de combustible y vehículos, por lo que era de normal ocurrencia. La camioneta de propiedad de los hermanos René y Raúl Guzmán del Río, constantemente facilitaban el vehículo al personal del Retén de Riachuelo, ya que vivían cerca de ese poblado y siempre ayudaban en lo que se les pedía para apoyar la gestión del personal de ese Retén, pero no sabe si se ocupó ese vehículo cuando supuestamente se detuvo a los hermanos Barría.

En declaración judicial, de fecha 17 de abril de 2002, **de fs. 1565 (Tomo IV)**. Ratifica sus declaraciones anteriores y careo, reconociendo como suya las firmas estampadas en dichos documentos. Reitera dichos aportados en declaraciones precedentes.

En declaración judicial de fecha 19 de junio de 2003, **de fs. 1619 (Tomo IV)**. El tribunal le pregunta por un e-mail que se recepciono el Ministerio del Interior, según informes proporcionados por abogados de esa cartera, manifiesta que no tiene idea de quien puede provenir ese mensaje. Interrogado sobre la posibilidad de que en el patio de esa Sub-Comisaría se hubieran enterrado cadáveres, invoca que jamás tuvo conocimiento de ello. La comisaría en el año 1973 se encontraba en calle Arturo Prat, entre Sargento Aldea y teniente Serrano, el patio era extenso, tenía un sitio hacia abajo, era como un estero e incluso se hacían siembras. La Comisaría en el año 1990, aproximadamente, se trasladó un poco más abajo, pero por la misma calle Arturo Prat hasta la esquina de O'Higgins; el terreno de la antigua Comisaría quedó desocupado, cree que es terreno municipal. Añade que no tiene nada que ver con la detención de los hermanos Barría, cree que estaba de franco. Eso lo dijo en un careo que tuvo con el padre los Barría y piensa que lo confunde

porque era muy conocido en ese lugar. Impuesto de que también lo inculpa Robert Teylorl, dice que está mintiendo.

En careo judicial con Robert Teylorl Escobar, de fecha 19 de junio de 2003, **fs. 1620 a fs. 1621 (Tomo IV)**. Esgrime que no tiene nada más que agregar, insistiendo que no ha participado.

A.25. Joel Cornelio Norambuena Hinostroza (15 años de edad para la fecha de los hechos investigados). **En declaración judicial**, de fecha 15 de julio de 2003, **de fs. 1628 a fs. 1629 (Tomo IV)**. Musita que anteriormente no relató un hecho que le confidenció René Alvarado, Sargento Primero de Carabineros de la Comisaría de Río Negro y que en dicha declaración se sintió intimidado de contarle por temor a Alvarado. Esa persona falleció, por lo tanto, cree necesario declarar sobre esos nuevos antecedentes. Con el señor Alvarado en circunstancias que existía gran confianza, en el año 2000 le comentó que en la Segunda Comisaría de Río Negro hay cuerpos enterrados por orden de Capitán Schernberger y el Teniente Hernán Godoy Barrientos; esos hechos ocurrieron en el año 1973, agregando que él también participó en esos hechos. En cuanto a las personas enterradas en la Comisaría, se encontraría el menor de los hermanos Barría Bassay, Guido. Otros funcionarios que participaron en esos hechos son Teylorl, Rogel, Alvarado, Oyarzún, Soto, Moncada, Catalán y un civil de apellido Sandoval, conocido como “El Maña”, quién ayudó a enterrarlos. Los cuerpos fueron enterrados y encima les echaron concreto; el sector donde se encontrarían los cuerpos es en el sector donde antes estaban ubicadas las caballerizas, pero no le dio detalles del sector preciso de la ubicación de los cuerpos. Actualmente la Comisaría se encuentra donde antes funcionaba el liceo de Río Negro. En cuanto a la detención de los hermanos Barría Bassay, Alvarado Ampuero habría participado en esos hechos, pero no dio detalles como esos ocurrieron. Añade que en circunstancias que se encontraba en una convivencia familiar, ya que sus hijos Jorge Alvarado es casado con su hermana María Angélica Norambuena y Patricio Alvarado es casado con su hermana Zenaida Orieta Norambuena. Comenzaron a conversar con Alvarado, estaban con alcohol, apartados del resto de la familia, le dijo que quería contarle algo, pero que no debía decirle a nadie. Comenzó a preguntarle por los hermanos Barría, si sabía lo que había pasado con ellos, diciéndole que uno de los hermanos Barría, el menor,

estaba enterrado en la comisaría de Río Negro. Él se refirió a uno de los hermanos, el menor; no le preguntó por el otro hermano, tampoco lo contó. En esa misma conversación le dio los nombres de los funcionarios que participaron en las detenciones de los hermanos Barría Bassay. Dejó pasar tanto tiempo antes de contar esos hechos y se debe a que Alvarado está muerto y lo más importante para él es quedar con su conciencia tranquila y cooperar con la señora Inés Barría y su hermano don Luis, quienes financiaron su viaje a Santiago. Los hechos se los contó a don Luis Barría hace unos quince días atrás, aproximadamente. Agrega que tenía otra relación con Alvarado, puesto que ingresó a Carabineros en 1979, fue destinado a la ciudad de Temuco. En el año 1983 fue dado de baja de carabineros por falta de ética profesional, se le instruyó el sumario respectivo y por la gran cantidad de arrestos fue dado de baja. En cuando a Raúl Estatiro Guzmán, no recuerda que Alvarado se lo mencionara como quién facilitó la camioneta para detener a los hermanos Barría. Esta es la primera vez que comenta esos hechos; no ha enviado ningún telegrama al Ministerio del Interior.

A.26 Juan Guzmán Tapia (34 años de edad para la fecha de los hechos investigados), quien declaró de fs. 1631 (Tomo IV) con copia a fs. 1682 a fs. 1683 (Tomo IV) y de fs. 1681 (Tomo IV).

En declaración mediante informe, de fecha 28 de julio de 2003, **de fs. 1631 a fs. 1632 (Tomo IV) con copia fs. 1682 a fs. 1683 (Tomo IV)**. Basa que en cumplimiento a lo solicitado mediante oficio N° 839-S 2003, declara por informe y bajo juramento como a continuación expone: dentro del primer semestre del año pasado, cuando en su calidad de Ministro de Fuego aún instruía la causa relacionada con el secuestro de los hermanos Barría Bassay, dispuso una orden de detención contra el general de Carabineros José Hernán Godoy Barrientos, quien fue conducido hasta la Auditoría General de Carabineros, ubicada en avenida Bulnes de la capital, junto con el coronel ® Schernberger (no recuerda su nombre ni segundo apellido). Debió, conforme recuerda, tomar declaraciones a los mencionados oficiales y careos con otros testigos, relacionadas esas diligencias con las acciones que condujeron a la desaparición de los nombrados hermanos. Después de efectuadas dichas diligencias se reunió con ambos exoficiales anteriormente nombrados y con los abogados señores Harry Grünewaldt, Rodolfo

Arriagada y otro abogado de apellido Rossi, encargado de la defensa del coronel ® Schernberger. Además, estaba presente en dicha reunión un Oficial de Carabineros cuyo nombre desconoce, estaba a cargo del traslado y custodia del general Godoy. En el curso de esa reunión se produjo un diálogo entre el coronel ® Schernberger y quién suscribe el presente informe en el cual dicho coronel en retiro expresó: “Yo asumo la responsabilidad por los hechos relacionados con los hermanos Barría Bassay. La responsabilidad del señor Godoy subsistió hasta la detención de esos hermanos en Río Negro. Respecto a todo lo que ocurrió después a los hermanos Barría Bassay, nada tuvo que ver Godoy con ello”. Acto continuo añadió el coronel ® Schernberger: “Esos hermanos fueron trasladados a alguna parte y en dicho traslado no intervino Godoy, quien los habría entregado al fiscal a cargo”. Por último, el nombrado Coronel agregó que él (Schernberger) era a la fecha el Oficial más antiguo y que en esa calidad cumplía funciones como gobernador y policiales. El general Godoy quien era, según recuerda, Teniente a la época de los hechos, estuvo de acuerdo en dicha reunión con todo lo señalado por Schernberger. No puede aseverar que las palabras utilizadas hayan sido exactamente aquellas que señala, pero las ideas fundamentales corresponden a las que ha señalado. Desea agregar que lamentablemente no dejó constancia en el expediente de las referidas expresiones prestadas por el coronel Schernberger, debido a que ya se habían realizado las diligencias que habría decretado para la referida ocasión de las que estimaba suficientes para decretar la libertad incondicional del general Godoy Barrientos.

En declaración mediante informe de fs. 1681, señala que en cumplimiento de lo solicitado informa al tenor de los oficios 106-S-2004 de fecha 21 de febrero último y N° 187-S-2004 del presente mes, bajo juramento, señalando que ratifica en todas sus partes lo declarado por el suscrito, bajo juramento, con fecha 28 de julio de 2003 referente a haber oído las expresiones referidas por el coronel en retiro Schernberger con referencia a la participación que el general de Carabineros, teniente a la época de los hechos, José Hernán Godoy Barrientos tuvo en la detención de los hermanos Barría Bassay en Río Negro, habiéndose limitado dicha participación solamente a la detención de esos hermanos, sin que tuvieran responsabilidad en los sucesos que continuaron luego de dicha detención y que

asumía (Schernberger) la responsabilidad por los hechos relacionados con los nombrados hermanos.

A.27. Juan Hilario Bassay Alvear (34 años para el año de los hechos investigados). **En declaración extrajudicial** del 08 de agosto de 2003, **fs. 1642 a fs. 1653 (Tomo IV)**. En lo pertinente de sus dichos cuenta y describe la dinámica de su detención y hechos vivenciados.

B. Documentos (42).

1. Fotocopias de páginas pertinentes del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
- 2 Certificados de nacimientos emitidos por el Registro Civil e Identificación:
- 3 Copia de sentencia definitiva dictada por don Alejandro Solís Muñoz, Ministro de Fuero, en causa rol 2182-98 “Episodio Río Negro” de 03 de mayo de 2004,
- 4 Copia de sentencia de segunda instancia dictada por la Séptima Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol 2182-98 “Episodio Río Negro”, con fecha 06 de julio de 2005,
- 5 Copia de sentencia de casación dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 27 de diciembre de 2007
- 6 Copia de sentencia de reemplazo dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 27 de diciembre de 2007.
- 7 Actas de nacimiento emitidas por el Registro Civil e Identificación
- 8 Carta enviada al General Director de Carabineros de Chile por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 02 de octubre de 1990,
- 9 Documentos remitidos por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

10. Oficio del Director Nacional del Servicio Médico Legal.
- 11 ORD N°17427 del 24 de agosto de 2016 del Dr. Juan De Dios Reyes Magallanes, Director Nacional (P y T) del Servicio Médico Legal.
- 12 Documentos acompañados en el escrito del Programa de Derechos Humanos:
13. Certificado de defunción de Lizardo Simón Abarca Maggi.
14. Informes de domicilio emitido por el Registro Civil e Identificación
15. Fotocopia de Hoja de vida.
- 16 ORD N°5486 de 23 de marzo de 2017 del Director Nacional del Servicio Médico Legal.
- 17 Declaraciones extrajudiciales de Héctor Leonardo Ulloa
- 18 Certificado de la Alcaide del Centro de Detención Preventiva de Río Negro.
- 19 Comprobante de ingreso de antecedentes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 24/02/2004.
- 20 Acta de inspección personal al Fundo Río Blanco de fecha 28 de abril de 2017.
- 21 Acta de inspección personal al Fundo Río Blanco de fecha 08 de mayo de 2017.
- 22 Informe de Resultados Análisis de Radiocarbono, Protocolos del Servicio Médico Legal.

23 Fotocopias de páginas de prensa correspondientes al Diario Austral de Osorno, de fecha 30 de mayo de 2002.

24 Acta de inspección personal al sector La Barra de 08 de marzo de 2018.

25 Informe de Inspección del Servicio Médico Legal, de fecha 26 de marzo de 2018.

26 Reservado de la Fuerza Aérea de Chile.

27 Carta N°000133 de 11 de abril de 2018 del Centro de Información de Recursos Naturales.

28 Reservado N°1595/3826 de 26 de abril de 2021, el Estado Mayor del Ejército de Chile.

29 Oficio de Televisión Nacional de Chile N°011, de fecha 25 de abril de 2018.

30 Consejo de Momentos Nacional de Chile, en Ord. N°2386 de 28 de mayo de 2018

31 Relación del personal de Carabineros de Chile.

32 ORD. N°21347 de fecha 06 de noviembre de 2018, en virtud del cual el Servicio Médico Legal

33. Carta enviada al Señor Ministro de Fiero, don Alejandro Solís Muñoz, de fecha 23 de julio de 2003.

34 ORD. N°33798 de fecha 11 de diciembre de 2019, del Servicio Médico Legal.

35 ORD. N°400, en causa N°22.744 de fecha 19 de abril de 1979, remitido por la Penitenciaría de Osorno.

36 Informe N°450 de fecha 04 de mayo de 1979, remitido por la Prefectura de Carabineros de Osorno.

37 Informe N°2295 en causa rol N°22.743 de fecha 04 de junio de 1979, remitido por el del Regimiento de Ingenieros N°4 Arauco.

38 Informe N°546 de fecha 05 de junio de 1979, remitido por la Prefectura de Carabineros de Osorno al Primer Juzgado de Letras de Osorno.

39 ORD. N°2011/182/15 de fecha 22 de junio de 1979, remitido por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile.

40 Res. N°960 de 26 de marzo de 1980, remitida por el Ministerio del Interior.

41. Acta de constitución en la localidad de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno con fecha 08 de abril de 1980,

42. Oficios diligenciados por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.

B.1. De fs. 8 a fs. 10 (Tomo I), fotocopias de páginas pertinentes del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo 1, acompañado en la querella de Mahuad Segundo Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior de fs. 15 y siguientes, el cual señala que: El 16 de octubre de 1973 una patrulla de Carabineros de Río Negro detuvo en su lugar de trabajo a los hermanos: Guido Ricardo Barría Bassay, quien tenía 19 años, era obrero agrícola y militante socialista. Héctor Alejandro Barría Bassay, quien tenía 27 años, era auxiliar de la Escuela N°2 de Río Negro, delegado al Sindicato Único de Trabajadores de la

Educación (SUTE) y militante socialista. El día indicado, una patrulla de Carabineros de Río Negro, compuesta por aproximadamente diez efectivos, llegó al aserradero donde trabajaban las víctimas y los detuvo ante varios testigos, llevándoselos en una camioneta. Desde ese momento no se vuelve a tener noticia alguna sobre el paradero y la suerte final de los detenidos. Es convicción de la Comisión que la desaparición de los hermanos Barría es de responsabilidad de agentes del Estado que incurrieron en violación a los derechos humanos. Son circunstancias de convicción las siguientes: que la detención se encuentre acreditada por testigos, que en un proceso judicial un funcionario de Carabineros reconoció la detención señalada, que fueron trasladados a la Unidad de Carabineros de Río Negro, que tras sus desapariciones no haya habido más noticias de los afectados y que ante los requerimientos de la Comisión a la autoridad policial no haya habido información oportuna y precisa.

B.2 Certificados de nacimientos emitidos por el Registro Civil e Identificación:

- a) A fs. 40 (Tomo I), fs. 210 (Tomo I) y fs. 1.084 (Tomo III), de Héctor Alejandro Barría Bassay, quien nació con fecha 25 de abril de 1946, registrando como padre a Pedro Alejandrino Barria Navarro y como madre a Elvecia Basay Alvear.
- b) A fs. 41 (Tomo I), fs. 168 bis (Tomo I) y fs. 1.083 (Tomo III), Guido Ricardo Barría Bassay, quien nació con fecha 13 de septiembre de 1954, registrando como padre a Pedro Alejandrino Barria Navarro y como madre a Elvecia Basay Alvear.
- c) A fs. 1.066 (Tomo III), Inés del Carmen Barría Bassay, quien nació con fecha 11 de julio de 1961, registrando como padre a Pedro Alejandrino Barria Navarro y como madre a Elvecia Basay Alvear.
- d) A fs. 1.067 (Tomo III), Zinia Amelia Barría Bassay, quien nació con fecha 17 de mayo de 1964, registrando como padre a Pedro Alejandrino Barria Navarro y como madre a Elvecia Basay.
- e) A fs. 1.068 (Tomo III), Luis Eliser Barría Bassay, quien nació con fecha 01 de agosto de 1952, registrando como padre a Pedro Alejandrino Barria Navarro y como madre a Elvecia Basay Alvear.
- f) A fs. 1.069 (Tomo III), Ricardo Alejandro Barría Ralil, quien nació con fecha 23 de noviembre de 1973, registrando como padre a Guido Ricardo Barria Basay y como madre a María Sofia Ralil Altamirano.

- g) A fs. 1.070 (Tomo III), Cecilia Andrea Barría Ralil, quien nació con fecha 09 de mayo de 1972, registrando como padre a Guido Ricardo Barria Basay y como madre a María Sofia Ralil Altamirano.
- h) A fs. 1.071 (Tomo III), María Cristina Barría Caro, quien nació con fecha 28 de julio de 1969, registrando como padre a Héctor Alejandro Barria Basay y como madre a Rosa Emilia Caro Pino.
- i) A fs. 1.082 (Tomo III), Pedro Alejandro Barría Navarro, quien nació con fecha 28 de junio de 1924, registrando como padre a Pedro Alejandrino Barria Navarro y como madre a Elvecia Basay Alvear.

B.3 Copia de sentencia definitiva dictada por don Alejandro Solís Muñoz, Ministro de Fuero, en causa rol 2182-98 “Episodio Río Negro” de 03 de mayo de 2004, rolante a fs. 45 y siguientes (Tomo I), en virtud de la cual se declara en lo pertinente que: “Que con el mérito de estos antecedentes, apreciados según las normas respectivas, constitutivos de presunciones judiciales que reúnen todos los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra legalmente acreditado en el proceso que el día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 12:00 horas, una unidad operativa de Carabineros a cargo del Teniente José Hernán Godoy Barrientos, bajo el mando del Mayor Hans Schernberger Valdivia, Comisario de la Comisaría de Carabineros de Río Negro y Gobernador del Departamento del mismo nombre, con participación del Sargento Quintiliano Rogel Alvarado, del sargento Rómulo Catalán Oyarzún, del cabo primero Robert Santiago Teylorl Escobar y del cabo primero Pedro Segundo Araya Soto Godoy, detuvieron sin portar orden judicial alguna, desde el lugar de su trabajo en el aserradero del fundo “El Risco”, ubicado en Riachuelo de la comuna de Río Negro, a los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo, Barría Bassay, personas que fueron conducidas desde ese recinto maderero hacia la Comisaria de Carabineros de Riachuelo y luego la de Río Negro, donde fueron torturados e interrogados sobre armas que presumía escondían y que no se encontraron, para finalmente ser llevado Guido Ricardo Barria, por Schernberger Valdivia y Teylorl Escobar, hacia un sector del fundo La Campana, distante a unos quince kilómetros de la referida Comisaría, por haberse incinerado antes de tiempo los registros de ingreso y egreso de los detenidos, perdiéndose todo rastro de ambos hasta la fecha, sin que los privados de libertad hayan tomado contacto con sus familiares,

realizando gestiones administrativas ante organismos del estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que consten, tampoco sus defunciones. Que estos hechos son constitutivos de sendos delitos de secuestro calificado, previstos en el artículo 141 del Código Penal, según el tenor de la norma antes de la modificación introducida por la ley 19.029, en virtud del principio de la no retroactividad de la ley penal y, por ende, sancionados con las penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados.”

B.4 Copia de sentencia de segunda instancia dictada por la Séptima Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol 2182-98 “Episodio Río Negro”, con fecha 06 de julio de 2005, rolante a fs. 130 y siguientes (Tomo I), en virtud de la cual en lo pertinente se resuelve en lo pertinente que se aprueba el referido fallo, en lo consultado, y se lo confirma, en lo apelado, con declaración que José Rómulo Catalán Oyarzún queda condenado a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autor de los delitos de secuestro calificado que ella describe. Consecuente con lo que viene de decidirse, déjese sin efecto la alternativa de libertad vigilada que a favor de Catalán venía dispuesta en el apartado VIII de la parte decisoria de la resolución que se revisa, rigiendo de ese únicamente el abono a que se refiere.

B.5 Copia de sentencia de casación dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 27 de diciembre de 2007, rolante a fs. 141 y siguientes (Tomo I), en virtud de la cual se resuelve que: Se acoge el recurso de casación en la forma promovido por la defensa del condenado Catalán Oyarzún en el primer otrosí del libelo de fojas 2.535 y en consecuencia se invalida, la sentencia de seis de julio de dos mil cinco, escrita de fojas 2.490 a 2.500, la que es nula en todas sus partes y se reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

B.6 Copia de sentencia de reemplazo dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 27 de diciembre de 2007, rolante a fs. 149 y siguientes (Tomo I), en virtud de la cual se resuelve en lo pertinente que: Se revoca la sentencia de tres de mayo de dos mil cuatro, escrita de fojas 2.292 a 2.372 y, en su lugar, se decide que se absuelve a Hans Eduart Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy

Barrientos, Robert Santiago Teylorl Escobar, Quintiliano Rogel Alvarado, Pedro Segundo Soto Godoy y José Rómulo Catalán Oyarzún, de la acusación judicial formulada en su contra a fojas 1.712 y de las adhesiones de fojas 1.720, 1.727 y 1.740, por encontrarse extinguida la acción penal que emana de los delitos de secuestro materia de la presente investigación.

B.7 Actas de nacimiento emitidas por el Registro Civil e Identificación de las siguientes personas:

- a) A fs. 168 (Tomo I), Guido Ricardo Barría Bassay, quien nació con fecha 13 de septiembre de 1954 en Riachuelo, registrando como padre a Pedro Alejandrino Barria Navarro y como madre a Elvecia Basay Alvear.
- b) A fs. 211 (Tomo I), Héctor Alejandro Barría Bassay, quien nació con fecha 25 de abril de 1946 en Riachuelo, registrando como padre a Pedro Alejandrino Barria Navarro y como madre a Elvecia Basay Alvear.

B.8 A fs. 169 y 189 y siguientes (Tomo I), 228 y siguientes (Tomo I), Carta enviada al General Director de Carabineros de Chile por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 02 de octubre de 1990, en virtud de la cual la Comisión indica que, dado que en alguno de los antecedentes que se están reuniendo se mencionan nombre de personas en actual servicio de esa institución.

B.9 Documentos remitidos por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a fs. 166 y siguientes (Tomo I), que se desglosa de la siguiente forma:

- a) A fs. 168 (Tomo I), acta de nacimiento Guido Ricardo Barría Bassay, detallada precedentemente.
- b) A fs. 168 bis (Tomo I), certificado de nacimiento de Guido Ricardo Barría Bassay, detallado precedentemente.
- c) A fs. 169 (Tomo I), Carta enviada al General Director de Carabineros de Chile por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 02 de octubre de 1990, detallada precedentemente.
- d) A fs. 171 y siguientes (Tomo I), Documentos del Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, “Detenidos desaparecidos”, que se desglosan de la siguiente forma:
 - i) A fs. 172 y siguientes (Tomo I), Oficio N°1.468 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación a la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, de fecha 06 de noviembre de 1990, en virtud de la cual solicita

informe si las personas que se individualizan registran en sus archivos salidas e ingresos del país, a contar del 11 de septiembre de 1973 a la fecha, entre ellos Barría Bassay Guido y Barría Bassay Héctor Alejandro.

ii) A fs. 175 y siguientes (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 224 y siguientes (Tomo I), ORD. N°11478/16825 de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de fecha 11 de diciembre de 1990, en virtud del cual informa los movimientos migratorios de las personas consultadas, aduciendo que el resto de las personas consultadas no registran anotaciones de viajes (no registrando a las víctimas de autos).

iii) A fs. 179 y siguientes (Tomo I), Oficio N°1492 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación a Martita Woerner, Subsecretaria de Justicia, de fecha 06 de noviembre de 1990, en virtud del cual solicita copia de los protocolos de autopsia correspondientes a las personas detalladas, indicándose la fecha, cuando es conocida y el lugar de defunción, entre ellos Guido Ricardo Barría Bassay y Héctor Alejandro Barría Bassay.

iv) A fs. 185 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 221 (Tomo I), Oficio ORD. N°400 del Secretario Ministerial Regional de Justicia de la X región a la Corporación Nacional de Reparación, en virtud del cual remite la información obtenida del Director Regional de la Décima Región del Servicio de Registro Civil e Identificación, lo que se encuentra a fs. 186 y siguientes (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 222 (Tomo I), en ORD. N°2.041, en virtud del cual se informa que no es posible remitir antecedentes sobre nacimiento y defunción de Guido Ricardo Barría Bassay, ya que no se registra inscrito en la circunscripción de Purrunque ni Rio Negro.

v) A fs. 191 y siguientes (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 233 y siguientes (Tomo I), Oficio N°686 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación al Director General de Carabineros, de fecha 01 de octubre de 1990, en virtud del cual solicita los documentos y otros antecedentes o informaciones que pudiere tener sobre las situaciones que se enumeran, entre ellas, la referida a la desaparición de Héctor Alejandro Barría Bassay y Guido Ricardo Barría Bassay.

vi) A fs. 197 y siguientes (Tomo I), copia de cual se encuentra a fs. 239 y siguientes (Tomo I), Oficio N°874 del Consejo Asesor Superior de Carabineros a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de fecha 18 de diciembre de 1990, en virtud del cual señala en lo pertinente que: *Sobre el numeral dos:* b) En cuanto al personal aludido se puede señalar lo siguiente: Coronel (R) Hans Schernberger Valdivia, expresó su deseo de cooperar, para lo cual solicitó se le hiciera llegar por escrito el cuestionario correspondiente, a través de la Dirección General, para ser respondido. Mayor José Godoy Barrientos, Sargento (R) Pedro Soto Godoy y Cabos 1°s. Jaime Mondaca Ovalle y Luis Oyarzún Arriagada, notificados del requerimiento manifestaron que no concurrirán, por no tener ningún antecedente que aportar.

vii) A fs. 200 (Tomo I), Oficio DF N°532 de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación al Director del Cementerio de Osorno, de fecha 02 de mayo de 1994, en virtud del cual solicita informar si Guido Ricardo Barría Bassay se encuentra sepultado en dicho establecimiento y en tal caso, el lugar de su inhumación. Del mismo modo, si se hubiera producido su traslado, se indique su destino posterior.

viii) A fs. 201 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 243 (Tomo I), Informe de la Parroquia San Mateo, Adm., Cem, Católico a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, de fecha 26 de mayo de 1994, en virtud del cual informa que respecto a Guido Ricardo Barría Bassay y Héctor Alejandro Barría Bassay, entre otros, no hay antecedentes referidos a su sepultación.

ix) A fs. 202 (Tomo I), ORD N°00711 del Alcalde de la comuna de Purránque a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, de fecha 05 de agosto de 1994, en virtud del cual informa que no se encuentran sepultadas las personas Guido Ricardo Barría Bassay y Héctor Alejandro Barría Bassay, entre otros.

x) A fs. 203 (Tomo I), copia de cual se encuentra a fs. 244 (Tomo I), oficio de la Parroquia Sagrada Familia de Río Negro a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, de fecha 12 de agosto de 1994, en virtud del cual informa que respecto al Cementerio Católico en Río Negro, éste sí existe, pero no fue posible encontrar ninguna de las personas señaladas, tampoco inhumaciones de N. N o desaparecidos durante el periodo correspondiente a los años 1973 a 1974.

xi) A fs. 205 y siguientes (Tomo I), ficha W-485, que indica que Guido Ricardo Barría Bassay, tenía 19 años de edad, era casado y tenía tres hijos, el menor de ellos, póstumo. Era empleado de correos y trabajaba también en el campo. Militaba en el Partido Socialista. Fue detenido con su hermano el día 16 de octubre de 1973 desde su lugar de trabajo, por Carabineros de Río Negro. Desde el momento de su detención, Guido Barría y su hermano se encuentran desaparecidos. Aproximadamente a las 12:00 horas del día 16/10/73 cuando los obreros del aserradero existentes en el fundo de Eduardo Gueisse se preparaban para almorzar, entre ellos los hermanos Barría Bassay y su padre, vieron llegar a una patrulla de Carabineros, compuesta por aproximadamente 10 efectivos, los que llegaron en una camioneta de propiedad de los hermanos René y Raúl Guzmán, comerciante de la región, quienes se mantuvieron a cierta distancia de los hechos. La patrulla de Carabineros detuvo inmediatamente a los hermanos Barría Bassay y solamente a ellos. Al resto de los obreros los obligaron a tenderse boca abajo, mientras golpeaban y maltrataban de hecho y palabra a los detenidos. Luego procedieron a lanzarlos violentamente dentro de la camioneta y los llevaron personalmente al Retén de Riachuelo, donde habrían estado hasta el 17/10/73, para luego ser trasladados a la Comisaría de Río Negro. En ambos lugares se les negó a los familiares la detención. De todos estos hechos, detención y maltrato hay testigos, pues se efectuaron en presencia de los trabajadores del aserradero, entre ellos, en lo pertinente, el propio padre de los detenidos.

xii) A fs. 212 (Tomo I), Carta enviada por Elvecia Bassay Alvear a la Fiscalía Militar de Valdivia, en virtud de la cual cuenta que, con fecha 16 de octubre de 1973 fueron detenidos por Carabineros sus hijos Guido y Héctor Alejandro Barría Bassay, de 19 y 27 años de edad en aquel entonces, dicha detención fue practicada por Carabineros de Río Negro, tales como, el Teniente José Hernán Godoy Barrientos, quien estaba al mando del operativo; el Cabo Pedro Soto Godoy; los Carabineros René Alvarado, Duhalde, Barrientos, Roguet; Alberto Oyarzún Arriagada y el Sargento de Carabineros de Riachuelo Sergio Aguilar y otros. Ambos hijos fueron detenidos en el aserradero del señor Julio Escobar (fundo de don Eduardo Guisse), ubicado en Los Riscos, lugar en el cual laboraban. Fueron testigos visuales entre otros, Pedro Alejandrino Barría Navarro, padre de ellos; Armando Pezo, Edivino Shell, Edmundo Catalán, Erminio Pezo, Juan Ojeda,

Armando Nilian, Alfonso Huencuán, Alejandrino Barrientos, Oscar Vargas, Clemente Chodín, Hyadee Hernández, María de Catalán, Mercedes de Shel, Oyarzún, Angulo y Soto. Justifica que a contar de la fecha de su detención ha buscado por muchas partes datos sobre su paradero, todo ha sido inútil. Sin embargo, en diciembre del año recién pasado, en la Fiscalía de Carabineros de Osorno, el Teniente Tomás Palmovich le aseguró escuetamente que en dicha Fiscalía habían sido procesados y que ese mismo día a las 12:00 horas habían sido llevados a la Penitenciaría de Osorno. Pero al consultar en dicha penitenciaría se le dijo que no habían sido llevados ahí. Fue entonces cuando volvió a consultarle al Teniente de Carabineros Tomás Palmovich sobre lo recién expuesto, a lo que éste le aseguró nuevamente en forma total e inclusive puso en juego su honorabilidad de uniformado diciendo que ambos jóvenes habían sido procesados en dicha Fiscalía. De allí por insinuación de él se dirigió donde los militares, Teniente Cossio y donde el Mayor Ramírez, pero ambos negaron rotundamente la existencia de sus hijos en ese sentido. Por tanto, solicita tenga a bien darles alguna información definitiva y valedera sobre su paradero.

xiii) Fs. 213 y siguientes (Tomo I), informe del Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, "Detenidos desaparecidos", Documento de trabajo 1993, en virtud del cual se indica respecto a Héctor Alejandro Barría Bassay la siguiente situación represiva: Los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, de 19 y 27 años de edad respectivamente, militantes socialistas, fueron detenidos el 16 de octubre de 1973 alrededor de las 12 horas en el fundo Los Riscos, ubicado en el sector de Río Blanco, comuna de Río Negro, provincia de Osorno. El padre de ambos, Pedro Alejandrino Barría Navarro se desempeñaba como tractorista en el aserradero ubicado en el mencionado fundo. Hasta allí habían llegado pocos días antes los dos hermanos para alejarse de Riachuelo donde residían, ya que allí eran conocidos como militantes políticos y temían una posible represión. Uno de ellos, Héctor, había sido amenazado por un Teniente de Carabineros de Río Negro. El día 16 de octubre llegó al fundo un grupo de aproximadamente 10 carabineros al mando del Teniente de la 2da. Comisaría de Carabineros de Río Negro, José Hernán Godoy Barrientos. Preguntaron a los trabajadores la ubicación del aserradero y si allí se encontraban los hermanos Barría; llegados al lugar donde se realizaban las faenas, procedieron a detener a Guido Ricardo, quien venía junto

a su padre en un tractor. Uno de los Carabineros, Cabo 1ro. Pedro Segundo Soto Godoy, comenzó a golpearlo de inmediato con la culata de su arma de servicio y lo obligó a desnudarse, siendo posteriormente llevado hacia uno de los vehículos. Héctor Alejandro fue sacado desde la casa de uno de los trabajadores del fundo donde, al parecer había intentado refugiarse después de ver llegar a la patrulla. Los Carabineros efectuaron disparos al aire antes de proceder a las detenciones. Héctor fue también amarrado y conducido junto a su hermano a uno de los vehículos que se alejó posteriormente del lugar. Testigos de estos hechos fueron alrededor de catorce personas, entre ellas el propio padre de los afectados, el administrador del fundo, varios trabajadores del aserradero y algunas de las esposas. Varios de ellos pudieron identificar a los Carabineros de la patrulla, ya que los conocían con anterioridad. También los testigos señalan haber visto en el lugar de los hechos, a los hermanos Raúl Estatiro y Víctor René Guzmán Del Río, comerciantes de Riachuelo, quienes facilitaron su camioneta para acompañar a la patrulla de Carabineros y trasladar posteriormente a los afectados al recinto de detención. Los detenidos habrían sido llevados al Retén de Riachuelo y luego trasladados a la Comisaría de Río Negro. La madre de los detenidos, Elvecia Bassay Alvear, acudió a ambos recintos negándosele en ambos cualquier explicación respecto de sus hijos e incluso prohibiéndole regresar nuevamente. Ella insistió en su búsqueda por varios lugares de detención de Río Negro y Osorno, Intendencia de Osorno, Fiscalías de Valdivia y Osorno. En la Fiscalía de Carabineros de Osorno, un Teniente le informó que sus hijos estaban siendo sometidos a proceso y se encontraban en la cárcel de esa ciudad, lo que tampoco era efectivo. En la Fiscalía Militar de Valdivia le comentaron que sus hijos “no debían estar muertos sino que detenidos en algún campo de prisioneros”. Hasta la fecha los hermanos Barría Bassay continúan desaparecidos. En cuanto a las gestiones judiciales y/o administrativas, narra que: Con fecha 16 de abril de 1979 se inició causa rol N°22.743 y 22.744 en el Primer Juzgado de Letras de Osorno por presunta desgracia de Guido y Héctor Barría Bassay respectivamente. A estas causas se acumuló posteriormente la querrela por secuestro, lesiones graves y posiblemente homicidio, interpuesta por la madre de los detenidos el 28 de mayo del mismo año. De las diligencias realizadas durante la investigación, cabe señalar, entre otras, que la Prefectura de Carabineros de Osorno informó no contar

con antecedentes de la detención de los hermanos Barría en la fecha indicada, ni en el Retén de Riachuelo, ni en la 2da. Comisaría de Río Negro, por cuanto los libros de guardia y partes enviados a los Juzgados “se encuentran incinerados por tener una duración de 3 y 5 años respectivamente”. El IV Juzgado Militar de Valdivia informó que, revisados los documentos correspondientes de la Fiscalía Militar de Carabineros y de Ejército que funcionaban separadamente hasta junio de 1974, no aparece registrada la detención de Guido Barría Bassay. En cuanto a las declaraciones de testigos, comparecen cinco trabajadores del Fundo, tres de los cuales señalan haber visto a los Carabineros realizar la detención, dos de ellos indican nombres de algunos de los aprehensores. Respecto de los siete Carabineros que comparecen, cinco de ellos dicen no haber participado en operativos, ya que cumplían funciones de tipo administrativo. Por su parte, el Teniente Godoy Barrientos dice no recordar el nombre de las personas detenidas durante los sucesos del mes de septiembre de 1973 y tampoco recuerda haber participado en la detención de los hermanos Barría Bassay. En tanto, el Cabo 1ro. Pedro Soto Godoy expone que en octubre de 1973 integró una patrulla al mando del Teniente Godoy (da también nombres de otros cuatro carabineros participantes) y detuvieron a los hermanos Barría Bassay “miembros del Partido Comunista y conocidos activistas políticos”. Agrega que luego los entregaron a una patrulla militar, pero no puede precisar si fueron llevados a Riachuelo o Río Negro. Respecto de los civiles que acompañaban a los Carabineros, Raúl y Víctor Guzmán Del Río, el primero reconoce haber facilitado su camioneta a militares en septiembre de 1973 sin saber el uso que le darían; agrega conocer a los hermanos Barría como miembros del Partido Socialista y “activistas políticos que causaron problemas en Riachuelo”. Transcurridos algunos meses de investigación, el Juez del 1er. Juzgado de Letras de Osorno, Hugo Sandoval Poblete, dictó el sobreseimiento temporal el 22 de octubre de 1979 por considerar que “de los antecedentes investigados no resulta completamente justificada la perpetración del delito”. Apelada esta resolución, es revocada el 6 de diciembre por aparecer incompleta la investigación, se retrotrae la causa al estado de sumario y se decretan nuevas diligencias. En el mismo oficio la Corte de Apelaciones de Valdivia agrega además que, hubo importante negligencia en la tramitación de la causa y fue llevada en forma irregular por lo que pasan los antecedentes al

Tribunal Pleno. El 11 de diciembre se constituye como Ministro en Visita en el 1er. Juzgado de Letras de Osorno, la señora Juana González Insunza que continúa a cargo de la investigación. Durante la instrucción del proceso se efectuaron varios careos, casi todos entre el padre de los detenidos desaparecidos y cada uno de los Carabineros señalados como miembros de la patrulla que efectuó la detención. Cabe destacar que, en el careo con el Teniente Godoy, éste dice no conocer a Pedro Barría ni a sus hijos, ni tampoco el Fundo y que su fisonomía es distinta a la que tenía hace seis años atrás. Agrega que realmente el cabecilla de los activistas en Riachuelo era de apellido Barría o Bassay y después del año 1973, más o menos el año 1974 o 1975 supo que el activista era el padre de unos hermanos que estaban desaparecidos de apellido Barría". En careo realizado entre el Teniente Godoy y el Cabo Soto, éste cambia totalmente su declaración anterior señalando que en esa oportunidad "tuvo un mal momento y confundió los hechos". De los testigos interrogados, sólo uno aporta un antecedente nuevo, pues señala que un año después del golpe militar, encontró en su negocio ubicado en Riachuelo, una fotografía de uno de los hermanos Barría y un carnet de militante del Partido Socialista que entregó a su madre, Elvecia Bassay. También se tuvo a la vista durante esta parte del proceso, el expediente rol N°1.666-73 seguido en contra de José Hilario Bassay Alvear y otros por infracción al artículo 8 de la ley 17.798 y otros delitos, tramitado en la Fiscalía de Ejército de Osorno. Con fecha 8 de diciembre de 1973 se sobreseyó temporalmente a Guido Ricardo y Héctor Barría Bassay hasta que fueran habidos. Posteriormente, el 6 de marzo de 1974 se ordenó suspender el procedimiento respecto de ambos inculpados hasta que se presenten o sean habidos. Después de practicadas las diligencias mencionadas y otras, la Ministra en Visita, con fecha 8 de mayo de 1980, se declaró incompetente para seguir conociendo del proceso por considerar que "en los hechos investigados han tenido participación los miembros de Carabineros" y por tanto le corresponde su conocimiento a la Fiscalía Militar Letrada de Osorno. La Corte de Apelaciones confirmó esta resolución el 4 de julio de 1980.

xiv) A fs. 217 y siguientes (Tomo I), declaración jurada de Elvecia Bassay Alvear, detallada precedentemente.

xv) A fs. 228 (Tomo I), Oficio N°683 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación al Director General de Carabineros, de fecha 02 de octubre de

1990, en virtud del cual solicita las declaraciones de personas que pudieran tener conocimiento sobre los casos y dado que en algunos de los casos se mencionan nombre de personas en actual servicio de esa institución, estima indispensable recibir su declaración sobre situaciones o hechos en que se les menciona. Las situaciones y personas motivo específico de la presente comunicación son, entre otras, las siguientes, Héctor Alejandro Barría Bassay y Guido Ricardo Barría Bassay. Respecto a este hecho, la Comisión desea entrevistar a los funcionarios de la Comisaría de Río Negro, Osorno en la época de los hechos de nombres Jaime Moncada Ovalle, quien presta actualmente servicios, aparecer, en la Tenencia Carretera de Chullaca de Osorno y el funcionario de nombre Alberto Oyarzún Arriagada, quien se encontraría prestando servicios en la Primera Comisaría de Osorno. Documento firmado por don Raúl Rettig Guissen, Presidente y don Jorge Correa Sutil, Secretario.

xvi) A fs. 242 (Tomo I), Oficio DF N°535 de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación al Director del Cementerio de Osorno, de fecha 02 de mayo de 1994, en virtud del cual solicita informar si Héctor Alejandro Barría Bassay se encuentra sepultado en dicho establecimiento y en tal caso, el lugar de su inhumación. Del mismo modo, si se hubiera producido su traslado, se indique su destino posterior. Documento firmado por don Alejandro González Poblete, Presidente.

xvii) A fs. 245 y siguientes (Tomo I), ficha W-486, que indica que Héctor Alejandro Barría Bassay, tenía 27 años de edad, era casado y tenía una hija. Trabajaba como auxiliar en la Escuela N°2 de Río Negro, Osorno, y trabajaba también en el campo. Era militante del Partido Socialista. Fue detenido con su hermano el día 16 de octubre de 1973 en su lugar de trabajo, por Carabineros de Río Negro. Desde la fecha de su detención, él y su hermano se encuentran desaparecidos

B.10. A fs. 280 y siguiente (Tomo I), oficio del Director Nacional del Servicio Médico Legal, en virtud del cual informa que, en el mes de mayo del año 2016, por orden de la Fiscalía Local de Río Negro, un equipo de la Unidad Especial de Identificación Forense (UEIF) acudió al Fundo Río Blanco, comuna de Purranque, Provincia de Osorno, como respuesta a un hallazgo de osamenta realizado al interior del predio y diligencias realizadas al respecto.

B.11 Fs. 308 y siguientes (Tomo I), ORD N°17427 del 24 de agosto de 2016 del Dr. Juan De Dios Reyes Magallanes, Director Nacional (P y T) del Servicio Médico Legal, en virtud del cual remite los siguientes documentos:

- a. A fs. 309 y siguientes (Tomo I), Informe de Resultados de Análisis de Radiocarbono, Protocolo RM-UEIF-12-16, con fecha 04 de julio de 2016.
- b. A fs. 314 y siguientes (Tomo I), Informe de Terreno, Protocolo RM-UEIF-12-16, con fecha 04 de julio de 2016.

B.12 Documentos acompañados en el escrito de fs. 373 y siguientes (Tomo I), por la abogada Catalina Ross Fredes, en representación del Programa de Derechos Humanos:

- a. A fs. 339 y siguientes (Tomo I), Informe N°61/01, caso 11.771 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto al caso de la víctima Samuel Catalán Lincoleo, de 16 de abril de 2001 (), el que concluye que: La Comisión interamericana ratifica sus conclusiones expuestas en el Informe 116/00 citado: que el Estado chileno ha violado, respecto a Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, los derechos a la libertad personal, a la vida, y a la seguridad personal, consagrados en el artículo 1 de la Declaración Americana y en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Americana. Igualmente, la CIDH concluye que el Estado chileno ha violado en perjuicio de los familiares del señor Catalán Lincoleo. los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento. La Comisión Interamericana reitera asimismo que el Decreto Ley N°2.191 de autoamnistía, dictado en 1978 por el pasado régimen militar de Chile, es incompatible con los artículos 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana.
- b. A fs. 364 y siguientes (Tomo I), ficha técnica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Almonacid Arellano y otros vs Chile, en que consta que la Corte dispone que: La Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una forma de reparación; el Estado debe asegurarse que el Decreto Ley N°2.191 no siga representando un obstáculo para la continuación de las investigaciones de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano y para la identificación y, en su caso, el castigo de los responsables; el Estado debe asegurarse que el Decreto Ley N°2.191 no siga representando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, en su caso,

sanción de los responsables de otras violaciones similares acontecidas en Chile; el Estado deberá efectuar el reintegro de las costas y gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente fallo, en los términos de los párrafos 164 de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; el Estado deberá realizar las publicaciones señaladas dentro del plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas; supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.

B.13. Certificado de defunción de Lizardo Simón Abarca Maggi de fs. 412 (Tomo I), quien falleció con fecha 01 de octubre de 1996, en el Hospital Militar a causa de una sepsis de vía biliar y cáncer vía biliar.

B.14 Informes de domicilio emitido por el Registro Civil e Identificación de las siguientes personas:

- a. A fs. 416 (Tomo I), Marcelino Segundo Molina Elián, quien se encuentra domiciliado en Camino a Rio Blanco S/N, Rio Negro.
- b. A fs. 417 (Tomo I), Cecilia Andrea Barría Ralil, quien se encuentra domiciliada en Pasaje Toledo N°2088, Villa Alto Osorno.
- c. A fs. 418 (Tomo I), Vitalicio Soto, quien se encuentra fallecido.

B.15 Fotocopia de Hoja de vida de las siguientes personas:

- a. A fs. 429 y siguientes (Tomo I), José Hernán Godoy Barrientos, que en lo pertinente señala lo siguiente: **1)** A fs. 438 (Tomo I), se señala que con fecha 3-III-972 asciende a Teniente Grado 3°, con fecha 2-II-972, según boletín oficial 2332, permaneciendo en la Prefectura de Osorno, pasando de la 1era., a la 2da., Comisaría de Rio Negro. **2)** A fs. 439 (Tomo I), se señala que con fecha 16-II-974 *en conformidad al Radio N°657 Digcar. P. I. del 27-II-974, se traslada con derechos reglamentarios, desde la 2da. Comisaría Río Negro a la Tenencia Purrunque como Jefe". Presentándose en su nueva unidad el 2-III-974.*

b. A fs. 456 y siguientes (Tomo I), Hans Eduart Schernberger Valdivia, que en lo pertinente señala lo siguiente: **1)** A fs. 468 (Tomo I), se señala que con fecha 26-I-973 por resolución exenta N°9 de 24-I-973 es trasladado a la 2da., Comisaría de la Prefectura de Osorno, como Comisario, a contar del 16-I-973, radiograma Kardex P.1. N°292 B70. 2384-52196. Presentando a dicha unidad con fecha 10-III-973, tal como consta a fs. 469 (Tomo I). **2)** A fs. 469 (Tomo I), con fecha 22-II-1974 se le designó en la Fiscalía Militar de Carabineros de Osorno, en reemplazo del titular abogado asesor Fredy Rosas Arriagada, según Decreto 16 de 12-II-974.

c. A fs. 477 y siguientes (Tomo I), Robert Santiago Teylorl Escobar, que en lo pertinente señala lo siguiente: **1)** A fs. 480 (Tomo I), se señala que con fecha 04-05-73 asciende a Cabo por mérito, para su misma unidad, según O/D 5 de la Jefatura de la Va. Zona de Inspección de Valdivia, a contar del 01.01.1973. Y con fecha 16-05-73 pasa desde el Reten Riachuelo a la Base Unidad, sin gastos para el fisco y por razones de mejor servicio según O/D 20 de la Comisaría.

d. A fs. 489 y siguientes (Tomo I), Pedro Segundo Soto Godoy, que en lo pertinente señala lo siguiente: **1)** A fs. 494 (Tomo I), se señala que con fecha 02-72 se asciende a Cabo, por mérito para su misma Unidad, según anexo O/D 4 de Pref. Osorno a contar del 16.02.1972.

e. A fs. 503 y siguientes (Tomo I), Quintiliano Rogel Alvarado, que en lo pertinente señala lo siguiente: **1)** A fs. 508 (Tomo I), se señala que con fecha 09-65 ascendió a cabo por Merito con fecha 01.09.1965, para la 2da. Comisaría de la Prefectura Osorno, según O.D 11 de 1 Jefazona Austral.

B.16 A fs. 529 y siguientes (Tomo II), ORD N°5486 de 23 de marzo de 2017 del Director Nacional del Servicio Médico Legal, en respuesta al oficio N°332-2017 de 20 de marzo de 2017, donde ordena la exhumación de los restos de Héctor y Guido Barría Bassay, que presumiblemente se encuentran en el Fundo Río Blanco, informa el plan de trabajo para la presente diligencia.

B.17 Declaraciones extrajudiciales de Héctor Leonardo Ulloa:

a. A fs. 543 y siguientes (Tomo II), testimonio denuncia de diciembre de 2003, en virtud del cual expone que en lo pertinente su historia como preso político por tres años en la cárcel de Osorno, como así también su detención y torturas sufridas por funcionarios de Carabineros.

b. A fs. 546 y siguientes (Tomo II), Declaración Jurada ante Notario, de 02 de marzo de 2010, en virtud de la cual reitera dinámica de su detención y torturas sufridas.

B.18 A fs. 549 (Tomo II), Certificado de la Alcaide del Centro de Detención Preventiva de Río Negro, que informa que don Héctor Ulloa Mardones fue condenado por la Fiscalía Ejercito de Osorno en causa N° 1.666-73, a 3 años 1 día, y según los registros existentes permaneció recluido en esta Unidad Penal.

B.19 A fs. 551 y siguientes (Tomo II), Comprobante de ingreso de antecedentes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación correspondiente a Héctor Ulloa Mardones, de fecha 24/02/2004.

B.20 A fs. 577 (Tomo II), Acta de inspección personal al Fundo Río Blanco de fecha 28 de abril de 2017. Para tal efecto, siendo las 11:00 horas, se constituyó el Tribunal en el Fundo Río Blanco el día 24 abril en curso, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre; la Oficial Cuarto de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, Tamara Chihuailaf Fuentealba; peritos del Servicio Médico Legal de Santiago liderados por la Arqueóloga Constanza Gnecco Acuña y la Antropóloga Angela Melillán Sanzana; personal del Consejo de Monumentos Nacionales; la Abogada Catalina Ross Fredes y la Asistente Social Norma Muñoz, del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Tribunal da inicio a la diligencia el día 24 de abril de 2017, a las 11:00 h., finalizando la diligencia a las 18:00 h., del mismo. Los días 25, 26 y 27 las diligencias se iniciaron a las 09:00 h. prolongándose hasta las 18:00 h. El día 28 de abril de 2017 la diligencia comenzó en el mismo horario, finalizando a las 12:00 h. Para organizar un mejor trabajo de búsqueda, los peritos del Servicio Médico Legal sugieren al Tribunal comenzar a excavar cuadrículas, las que van enumerando a medida que van avanzando en los trabajos. El día 27 de abril de 2017, los peritos del Servicio Médico Legal dan cuenta de hallazgos de osamentas que eventualmente pudieran revestir interés médico legal, situadas en los primeros niveles de la cuadrícula C3 y otras que se hallaron en niveles 3 y 4 de la cuadrícula C9. El tribunal ordena que los peritos levanten dichos restos y se siga el protocolo correspondiente dentro de su institución para que en fechas posteriores se realice el examen para determinar la data de ellos, así como cualquier otra pericia que resulte necesaria. Finalizadas

las diligencias, se ordena a los peritos participantes del Servicio Médico Legal, remitir, en su oportunidad, los respectivos informes en relación esta diligencia.

B.21 A fs. 578 (Tomo II), Acta de inspección personal al Fundo Río Blanco de fecha 08 de mayo de 2017. Para tal efecto, siendo las 11:00 horas, se constituyó el Tribunal en el Fundo Río Blanco el día 08 de mayo en curso, participando en la diligencia el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Mesa Latorre; la Oficial Cuarto de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, Tamara Chihuailaf Fuentealba; peritos del Servicio Médico Legal de Santiago liderados por Arqueólogo Stefano de Luca; personal del Consejo de Monumentos Nacionales; y profesionales del Programa Continuación Ley 19.123 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Tribunal da inicio a la diligencia el día 08 de mayo de 2017, a las 11:00 h., finalizando la diligencia a las 18:00 h., del mismo. Los días 09, 10, 11 las diligencias se iniciaron a las 09:00 h., prolongándose hasta las 18:00 h. El día 12 de mayo de 2017 la diligencia comenzó en el mismo horario, finalizando a las 12:00 h. Para organizar un mejor trabajo de búsqueda, los peritos del Servicio Médico Legal sugieren al Tribunal comenzar a excavar cuadrículas, las que van enumerando a medida que van avanzando en los trabajos. Finalizadas las diligencias, se ordena a los peritos participantes del Servicio Médico Legal, remitir, en su oportunidad, los respectivos informes en relación esta diligencia.

B.22 A fs. 664 y siguientes (Tomo II), Informe de Resultados Análisis de Radiocarbono, Protocolos RM-UEIF-10-17, RM-UEIF-11-17, RM-UEIF-12-17 y RM-UEIF-14-17 del Servicio Médico Legal, de fecha 12 de septiembre de 2017.

B.23 A fs. 703 y siguientes (Tomo II), fotocopias de páginas de prensa correspondientes al Diario Austral de Osorno, de fecha 30 de mayo de 2002, cuya portada se titula “Carabineros desenterró 2 cadáveres. Rastrean barra del río Bueno”, que se desglosa de la siguiente forma:

a) A fs. 704 (Tomo II), noticia de presenta que se titula: “Hallan osamentas de 2 personas”, aduciendo en lo pertinente que: Los restos óseos correspondientes a dos personas fueron encontrados la tarde del viernes Santo en la barra del río Bueno, costado norte de la provincia de Osorno, en diligencias orientadas a ubicar los cuerpos de una treintena de detenidos desaparecidos que después de 1973 habrían sido sacados de las aguas y enterrados por lugareños en la ribera sur del río que desemboca en el océano pacífico. El hallazgo de las osamentas humanas

se realizó padas las 15 horas en un punto que había sido previamente demarcado el 26 de marzo por Arqueólogos de la Dirección de Monumentos Nacionales que realizaban un proyecto de la Conadi para ubicar un cementerio indígena en el mencionado sector situado en el litoral Osornino.

b) A fs. 705 (Tomo II), noticia de prensa que se titula: “Barreños desconocen existencia de fosa común. ¿Un secreto a Voces?”, la que habla en lo pertinente que: Nadie pareciera querer recordar los hechos posteriores al 11 de septiembre de 1973, especialmente entre los antiguos habitantes de la Barra del Río Bueno, sector enclavado a unos 100 kilómetros al este de Osorno, en la misma desembocadura del cauce que nace en el lago Ranco. Y es que los testimonios de los más antiguos de la localidad, especialmente aquellos que habitan en esa aislada zona hace 29 años, no solo se contradicen, sino que parecieran haberse perdido en el tiempo. Para nadie es un secreto el hecho de que en los días posteriores al Pronunciamiento Militar se vieron cadáveres flotando en las aguas del río, sin embargo, ninguno de los que aún viven en esa zona reconoce haber participado en el entierro de los cuerpos en la supuesta fosa común denunciada por los Diputados Sergio Ojeda y Guido Girardi. A continuación del subtítulo “Testimonios”, conjetura que Juan Atero, uno de los más antiguos habitantes que queda en la localidad explica que efectivamente se vieron muchos cuerpos pero no conoce a la nadie que se haya atrevido a sacarlos del agua y darles cristiana sepultura.

c) A fs. 706 (Tomo II), noticia de presenta que se titula: “¡Fue una denuncia irresponsable”.

d) A fs. 707 (Tomo II), noticia de presenta que se titula: “Fueron fruto de un malentendido”.

B.24 A fs. 720 (Tomo II), Acta de inspección personal al sector La Barra de 08 de marzo de 2018, en virtud de la cual se indica que el señor Ministro en Visita Extraordinaria, acompañado por la actuaria Cecia Cruces Valdebenito; los testigos doña Inés Barría Basay y don Javier Aguas; Peritos del Servicio Médico Legal de Santiago, Stefano de Lucas y Daniela Fernandoy; funcionarios de la Brigada Investigadora de los Delitos Contra Los Derechos Humanos, Comisario Luis Bravo y Detective Francisco Herrera; se constituyó personalmente en el sector La Barra del Río Bueno, el que está ubicado en la comuna San Juan de la Costa, Provincia

de Osorno, a fin de llevar a cabo la diligencia de inspección ocular decretada con fecha 27 de enero de 2018. En esta oportunidad fueron trasladados y asistidos por personal de la Armada de Chile, perteneciente a la jurisdicción de Valdivia, a cargo del Cabo Primero Jared Yañez. En dicho lugar, se encontraron con vecinos del sector, quienes pidieron resguardar su identidad, y les indicaron el lugar donde posiblemente pudieran encontrarse cuerpos inhumados, los que aparentemente habrían sido arrastrados por el mar y posteriormente enterrados por lugareños. Con dicha información, los peritos del Servicio Médico Legal procedieron a hacer la respectiva inspección del lugar, a fin de fijar los puntos donde posteriormente se deberá trabajar.

B.25 A fs. 730 y siguientes (Tomo II), Informe de Inspección RM-UEIF-T-05-18 del Servicio Médico Legal, de fecha 26 de marzo de 2018, el que concluye lo siguiente: **1)** Se realizó la inspección del lugar de la presunta fosa de inhumación, ubicado en el sector de La Barra del Río Bueno, Comuna de San Juan de la costa, Región de Los Lagos. **2)** Se recorrió a pie, y se georreferenció mediante un navegador GPS marca Garmin, un área específica de 4700 metros cuadrados y un perímetro de 256 metros. El área en cuestión se caracteriza por la presencia de una planicie fluviomarina de inundación con abundantes sedimentos cohesivos y no cohesivos, y vegetación compuesta por mirtáceas, arrayanes y temus. **3)** No se observó en superficie ningún rasgo relacionado con la realización de una fosa de inhumación reciente.

B.26 A fs. 748 siguientes (Tomo II), Reservado de la Fuerza Aérea de Chile, en virtud del cual se informa que el Servicio Aerofotogramétrico, en su archivo, cuenta con 09 imágenes obtenidas del sector mencionado, correspondientes a las fechas que se indican (referido a la solicitud de set de fotografías aéreas y líneas de vuelo del sector la Barra del Río Bueno, comuna de San Juan De La Costa, Provincia de Osorno, desde el año 1970 a la actualidad). Además, confirma que el Servicio Aerofotogramétrico envía los antecedentes relacionados con la materia consultado, lo que se desglosa de la siguiente forma:

- a)** A fs. 749 (Tomo II), Reservado C.J.F.A. S.G. OF. 4432/, I M.V.E de 17 de abril de 2018, en virtud del cual la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile informa lo siguiente: **1)** Al respecto, el Servicio Aerofotogramétrico mediante el documento de la referencia **2)** ha remitido 01 DVD, que se adjunta al presente

documento, con 09 imágenes aéreas y diagramas de líneas de vuelo, las cuales pertenecen a los proyectos que se detallan en el Acta de Búsqueda que también se adjunta. 2) Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el oficio de la referencia 3), se envía copia informativa del presente documento al Sr. Ministro de Defensa Nacional.

B.27 A fs. 751 y siguientes (Tomo II), Carta N°000133 de 11 de abril de 2018 del Centro de Información de Recursos Naturales, en virtud de la cual informa que respecto a la solicitud de información sobre las condiciones climáticas, curso de ríos y/o vertientes, caminos, senderos, entre otros escenarios presentes, durante los años 1973 a 1990 en el sector “La Barra” del Río Bueno, comuna San Juan de La Costa, Provincia de Osorno.

B.28 A fs. 772 (Tomo II), Reservado N°1595/3826 de 26 de abril de 2018, el Estado Mayor del Ejército de Chile informa que respecto a la solicitud de set de fotografías aéreas y líneas de vuelo correspondientes al sector “La Barra del Río Bueno”, comuna San Juan de la Costa, Provincia de Osorno, a partir del año 1970 a la actualidad; el Instituto Geográfico Militar solo cuenta con fotografías aéreas a escala 1:70.000 del área requerida, correspondientes al año 1998, línea de vuelo N°3, fotos 011029 y 011030.

B.29 A fs. 774 (Tomo II), Oficio de Televisión Nacional de Chile N°011, de fecha 25 de abril de 2018, en virtud del cual informa que respecto a la solicitud de remisión de toda información que posea en el Centro Documental de Televisión Nacional de Chile, respecto de reportajes realizados en el Sector Barra del Río Bueno, comuna de San Juan de la Costa, Provincia de Osorno, desde el año 1973 a la fecha; se adjunta copia en formato DVD del material disponible sobre reportajes del año 2017, no existiendo material de años anteriores.

B 30 A fs. 884 y siguientes (Tomo II), el Consejo de Momentos Nacional de Chile, en Ord. N°2386 de 28 de mayo de 2018 informa que respecto a la solicitud de remitir toda la información, documentación e imágenes que este Consejo posea del sector La Barra del Río Bueno, comuna San Juan de la Costa, provincia de Osorno, poniendo especial atención en los años 1973 a 1990, en el marco de la causa Rol N°1-2016, Corte de Apelaciones de Temuco; se remiten los siguientes antecedentes documentales que obran en poder del Centro de Documentación de este Consejo y que se desglosan de la siguiente forma:

- a) A fs. 831 y siguientes (Tomo II), Informe de inspección preliminar del patrimonio arqueológico sector La Goleta y La Barra curso inferior y desembocadura del río Bueno, provincia de Osorno, X Región. Documento en papel preparado por Claudia Prado y Mario Vásquez, arqueólogos Consejo de Monumentos Nacionales, mayo de 2002, el que señala que: En el curso inferior del mismo río, se ha podido detectar la presencia de distintos sitios arqueológicos de filiación indígena prehispánica. Ellos presentan distintas funcionalidades, como por ejemplo habitacional y de funebria, señalando que esta zona fue habitada por grupos indígenas, desde por lo menos el año 0 de nuestra era. Estos sitios presentan procesos de deterioro, los que son mayoritariamente por causas naturales. Entre ellas se encuentra la erosión producto ya sea de la acción del río (Sitio N°1 y 4), por el viento (Sitio N°2), o por el paso de personas o animales (Sitio N°3), lo que hace que cada cierto tiempo se encuentre material cultural en ellos. Estos sitios corresponden a importantes depósitos culturales que guardan la historia de la ocupación humana en la desembocadura del Río Bueno, por lo que es importante el compromiso de la comunidad en su preservación. Se recomienda la no extracción del material cultural de los sitios, a no ser que por causas naturales se encuentren expuestos.
- b) A fs. 848 y siguientes (Tomo II), Escuela Rural Illahuapi. Documento en papel que reúne trabajo realizado con niños de la Escuela Rural Illahuapi, comuna de Lago Ranco, enmarcado en Programa de Educación Intercultural Bilingüe, octubre de 2004.
- c) A fs. 862 y siguientes (Tomo II), Carta dirigida a Sr. César Millahueique, por Javier Aguas Deumacán, Comunidad Tripay Antu sector La Barra, sin fecha, donde comunica decisión de postular a proyecto del programa de pequeños subsidios PPS/ GEF - PNUD, denominado "Manejo sustentable de la cuenca del Río Bueno y Cordillera de la Costa a través de la implementación de propuesta Eco - etnoturística Mapuche Huilliche".
- d) A fs. 864 y siguiente (Tomo II), Ord. N°2556 del 04 de agosto de 2003, de Sr. César Millahueique, Encargado Área Patrimonio Indígena del Consejo de Monumentos Nacionales, a Sr. Javier Aguas Deucamán de la Comunidad Indígena Tripay Antu La Barra del Río Bueno, sobre la respuesta a la carta de comunidad indígena Tripay Antu, Barra del Río Bueno.

- e) A fs. 868 (Tomo II), Ord. N°1870 del 14 de mayo de 2002, de Sr. Angel Cabeza Monteiro, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, a la Sra. Gemma Contreras, directora de Prensa TVN, que solicita copia de filmaciones realizadas en el Sector de la Barra del Río Bueno, entre el 24 al 26 de marzo de 2002.
- f) A fs. 869 (Tomo II), Borrador de Ord. de fecha 11 de marzo de 2002, del Sr. César Millahueique, Coordinador Programa de Patrimonio Indígena, al Sr. Angel Cabeza Monteiro, Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, en que entrega antecedentes y fotografías respecto a hallazgos en el sector de La Barra del Río Bueno.
- g) A fs. 870 y siguiente (Tomo II), fotocopia de fax de fecha 08 de febrero de 2002 (ilegible), de Sr Javier Aguas Deucamán, de la Comunidad Indígena Tripay Antu Sector La Barra, al Sr. Angel Cabeza Monteiro, Director Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales.
- h) A fs. 872 (Tomo II), fotocopia de fax de fecha 18 de febrero de 2002, de Javier Aguas Deucamán, de la Comunidad Trupay Antu - La Barra, al Sr. César Millahueique, Coordinador Programa Patrimonio Indígena Consejo de Monumentos Nacionales, donde envía información sobre proyecto de muelle en sector de La Barra.
- i) A fs. 873 (Tomo II), fotocopia de fax de fecha 15 de febrero de 2002, del Sr. Jaime Bertín Valenzuela, Gobernador Provincial de Osorno, a la Sra. Marianela Atero Sandoval, Presidenta Comunidad Indígena Tripay Antu Sector La Barra, en que informa sobre construcción de muelles en sector La Barra del río Bueno.
- j) A fs. 874 (Tomo II), fotocopia de fax de 18 de febrero de 2018, de Javier Aguas Deucamán, de la Comunidad Trupay Antu - La Barra, al Sr. César Millahueique, Coordinador de Patrimonio Indígena del Consejo de Monumentos Nacionales, donde informa sobre visita a comunidades de Quitra-Quitra y Forrahue.
- k) A fs. 875 (Tomo II), fotocopia de periódico de Osorno de fecha lunes 25 de noviembre de 2002, página A4, con reportaje titulado “La tierra hasta la muerte” y otro titulado “El Patrimonio de su cultura”.

B. 31 A fs. 902 y siguientes (Tomo III), relación del personal de Carabineros de Chile, que se desglosa de la siguiente forma:

- a) A fs. 902 y siguiente (Tomo III), contiene la dotación de la Segunda Comisaría “Río Negro” entre los meses de marzo a diciembre de 1973, entre los que se encuentran: a) En el numeral 2, el Capitán Hans Eduart Schernberger Valdivia. b) En el numeral 3, el Teniente (O) José Hernán Godoy Barrientos.
- b) A fs. 904 (Tomo III), contiene dotación de la tenencia de “Purranque” entre los meses de marzo a diciembre de 1973.
- c) A fs. 905 (Tomo III), contiene dotación del Retén “Crucero” entre los meses de marzo a diciembre de 1973.
- d) A fs. 906 (Tomo III), contiene dotación del Retén “Corte Alto” entre los meses de marzo a diciembre de 1973.
- e) A fs. 907 (Tomo III), contiene dotación del Retén “Riachuelo” entre los meses de marzo a diciembre de 1973, entre los que se encuentran en el numeral 6, el Carabinero Luis Alberto Oyarzún Arriagada.
- f) A fs. 908 (Tomo III), contiene dotación del Retén “Maipue” entre los meses de marzo a diciembre de 1973, entre los que se encuentran en el numeral 4, el Carabinero Luis Alberto Oyarzún Arriagada.
- g) A fs. 909 (Tomo III), contiene dotación del Retén “Hueyusca” entre los meses de marzo a diciembre de 1973.
- h) A fs. 910 (Tomo III), contiene dotación del Retén “Huilma” entre los meses de marzo a diciembre de 1973.

B. 32 A fs. 1.024 (Tomo III), ORD. N°21347 de fecha 06 de noviembre de 2018, en virtud del cual el Servicio Médico Legal remite los resultados de los análisis efectuados a través de los Informes Periciales (Antropológico Protocolos RM-UEIF-10-17, RM-UEIF-11-17 y RM-UEIF-12-17, Odontológico Protocolo RM-UEIF-10-17, Genética Forense y Laboratorio GMI del Protocolo RM-UEIF-11-17) correspondientes al Protocolo que reporta la exclusión de Héctor Alejandro Barría Bassay y Guido Ricardo Barría Bassay, que se desglosan de la siguiente forma:

- a) A fs. 981 y siguientes (Tomo III), Reporte Antropológico, Protocolos RM-UEIF-10-17/ RM-UEIF-11-17/ RM-UEIF-12-17, de fecha 02 de mayo de 2018, elaborado por el Servicio Médico Legal.
- b) A fs. 999 y siguientes (Tomo III), Informe pericial Odontológico, Protocolo N°RM-UEIF-10-17, de fecha 03 de mayo de 2018, elaborado por el Servicio Médico Legal.

- c) A fs. 1.007 y siguientes (Tomo III), Informe Pericial de Genética Forense, Exclusión Guido Ricardo Barria Bassay, Protocolo RM-UEIF-11-17, de fecha 05 de noviembre de 2018, elaborado por el Servicio Médico Legal, el que concluye en lo pertinente que el resto óseo no es compatible con el grupo familiar de la víctima ID. N°207, Guido Ricardo Barria Bassay.
- d) A fs. 1.012 y siguientes (Tomo III), Informe Pericial de Genética Forense, Exclusión Héctor Alejandro Barria Bassay, Protocolo RM-UEIF-11-17 de fecha 05 de noviembre de 2018, elaborado por el Servicio Médico Legal, el que concluye en lo pertinente, que el resto óseo no es compatible con el grupo familiar de la víctima I.D N°208 , Héctor Alejandro Barría Bassay.

B.33 A fs. 1.167 y siguientes (Tomo III), Carta enviada al Señor Ministro de Fuero, don Alejandro Solís Muñoz, de fecha 23 de julio de 2003, por José Hernán Godoy Barrientos, en virtud de la cual señala que a la fecha cumple 41 días privado de libertad, narrando su estado de salud y dinámica de los hechos de la causa sublite.

B. 34 A fs. 1.321 (Tomo III), ORD. N°33798 de fecha 11 de diciembre de 2019, en virtud del cual el Servicio Médico Legal remite lo siguiente:

- a) A fs. 1.222 y siguientes (Tomo III), Informe Asesoría “Acciones de mitigación y conservación para el manejo de un contexto de arqueología histórica”, de fecha 06 de diciembre de 2017, elaborado por el Laboratorio de Arqueología del Centro de Conservación y Restauración.
- b) A fs. 1.239 y siguientes (Tomo III), Inventario de Evidencias Óseas, Protocolo RM-UEIF-13-17, de fecha 26 de agosto de 2019, compuesto de 05 fojas, en que se detallan todos los fragmentos óseos que fueron encontrados y levantados durante el procedimiento de harneo del sedimento extraído de la unidad “T7S”, durante la diligencia de excavación y búsqueda, realizadas durante el 27 y 28 de abril del año 2017 en el Fundo Río Blanco, comuna de Purranque, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos.
- c) A fs. 1.244 y siguientes (Tomo III), Informe de Terreno RM-UEIF-T-21-16, Protocolos RM-UEIF-10-17, RM-UEIF-11-17, RM-UEIF-12-17, RM-UEIF-13-17 y RM-UEIF-14-17, de fecha 29 de noviembre de 2019, compuesto de 77 fojas, que en lo pertinente concluye que tras la revisión en terreno y laboratorio de las

osamentas, datación y análisis genéticos llevados a cabo, no fue posible encontrar los restos mortales de los hermanos Héctor y Guido Barría Bassay.

B. 35 A fs. 1.436 (Tomo IV), ORD. N°400, en causa N°22.744 de fecha 19 de abril de 1979, remitido por la Penitenciaría de Osorno al Primer Juzgado de Letras de Osorno, en virtud del cual señala que: Conforme a lo decretado por el Tribunal el día 18 del actual, en causa rol N°22.744 por presunta desgracia, cumple con informar que los ciudadanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay no se registran en los libros de la unidad que hayan ingreso el día 15 de octubre de 1973, como tampoco figuran su ingreso posterior a esa fecha. Pero si existe constancia que con fecha 16 de agosto de 1973 ingresó a este recinto penal el último de los nombrados en causa N°15.357 de ese Primer Juzgado del Cr., por infracción a la Ley de Armas y quien obtuvo su libertad el día 28-8-73 por haber rendido fianza.

B.36 A fs. 1.440 (Tomo IV), Informe N°450 de fecha 04 de mayo de 1979, remitido por la Prefectura de Carabineros de Osorno al Primer Juzgado de Letras de Osorno, en virtud del cual señala que: En atención a su Oficio s/n., de fecha 18 de abril ppdoo., recaído en Causa Rol N°22.743 por Presunta Desgracia, por medio del cual solicita informe si el ciudadano Guido Ricardo Barria Bassay estuvo detenido el 16 de octubre de 1973, en el Retén Riachuelo de la Segunda Comisaría Rio Negro de esta dependencia, informa que revisados los archivos se constató que en la actualidad no existen antecedentes al respecto. Que debido a que la documentación esto es, Libros de Guardia y Partes enviados a los Juzgados se encuentran incinerados por tener una duración de 3 y 5 años en los archivos, respectivamente de acuerdo con lo previsto y determinado en el artículo 22° del Anexo del Reglamento de Documentación N° 22 de Carabineros de Chile.

B.37 A fs. 1.452 (Tomo IV), Informe N°2295 en causa rol N°22.743 de fecha 04 de junio de 1979, remitido por el del Regimiento de Ingenieros N°4 Arauco al Primer Juzgado de Letras de Osorno, en virtud del cual indica que: En conformidad a lo solicitado en nota del día 25 de mayo de 1979, en relación con la causa rol N°22.743 informa que en los meses de septiembre y octubre no se registra la detención de los ciudadanos Guido y Héctor Alejandro Barría Bassay.

B.38 A fs. 1.466 (Tomo IV), Informe N°546 de fecha 05 de junio de 1979, remitido por la Prefectura de Carabineros de Osorno al Primer Juzgado de Letras

de Osorno, en virtud del cual señala que: En atención a lo solicitado en causa rol N°22.741 por presunta desgracia, se informa que en esta repartición y en las unidades dependientes no existen antecedentes sobre petición de búsqueda o constancia de arresto de, en lo pertinente, Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barría Bassay.

B.39 A fs. 1.469 (Tomo IV), ORD. N°2011/182/15 de fecha 22 de junio de 1979, remitido por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile al Primer Juzgado de Letras de Osorno, en virtud del cual justifica que: En atención a su oficio s/n de fecha 29 de mayo ppdo., mediante el cual se ordena informar si se registran egresos del país y si han sido requeridos para impedir la salida del país, en lo pertinente de Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barría Bassay. Dicho informe concluye que consultados los archivos de la sección control internacional de Frontera a contar del día 1° de enero de 1978 a la fecha, ninguna de las personas mencionadas registra anotaciones de viajes. Asimismo, consultado los archivos del Departamento de Informática Policial de la Institución, ninguna de las personas señaladas registra impedimentos de salida del país.

B.40 A fs. 1.497 (Tomo IV), Res. N°960 de 26 de marzo de 1980, remitida por el Ministerio del Interior, en virtud de la cual se indica que respecto al requerimiento de si entre el 11 de septiembre de 1973 y esta fecha se habría dispuesto el arresto, detención, relegación, expulsión del país o cualquier otra medida privativa de libertad contra los ciudadanos, en lo pertinente Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay, informa que ninguna de las personas señaladas ha sido afectada por orden o resolución de este Ministerio.

B.41 A fs. 1.498 (Tomo IV), Acta de constitución en la localidad de Riachuelo, Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno con fecha 08 de abril de 1980, de la Ministra en Visita Extraordinaria Sra. Juana González Inzunza y la Secretaria titular del Primer Juzgado de Letras de Osorno, doña Teresa Bedecartz Etchebarne, asistiendo el Fiscal Militar, Comandante Roberto Follert Dagnino en el Retén de Riachuelo. A cargo del recinto policial se encontraba el Sargento 2° Renato Lezana Lezana, procediendo a visar los libros que se llevan en el Cuartel y que son siguientes: **1)** Libro de entrega de detenidos, partes y dinero al Juzgado del Crimen y de Policía Local de Río Negro. Este libro empezó el 17 de febrero de

1980. **2)** Talonario de recibo de dinero depositado por contravenciones. **3)** Talonario de recibo de dinero y especies de detenidos. **4)** Libro de guardia que empieza el 27 de febrero de 1980. Agregando que el jefe de Retén informa que de acuerdo al Reglamento se incineraron todos los documentos desde hace tres años atrás, por lo que no existe documentación del año 1973.

B.42 Informes policiales debidamente diligenciados por la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente forma.

- a)** A fs. 247 y siguientes (Tomo I), Informe Policial N°3432/702 de 23 de junio de 2026, contiene declaraciones de testigos de la presente causa.
- b)** A fs. 283 y siguientes (Tomo I), Informe Policial N°3618/702 de 04 de julio de 2026, referida a la solicitud de constituirse en la zona cordillerana de Neltume y confeccionar un informe respecto a las posibles osamentas encontradas en la ruta internacional Hua-Hum, específicamente en el camino a Puerto Fuy, a metros del Puente Apablaza, como tomar declaración de testigos.
- c)** A 511 y siguientes (Tomo I), Informe Policial N°704/702 de 03 de febrero de 2017, contiene individualización y declaración de testigos.
- d)** A fs. 619 y siguientes (Tomo II), Informe Policial N°4096/703 de 11 de agosto de 2017, referida a la solicitud de ubicar e interrogar pormenorizadamente a diversos testigos.
- e)** A fs. 776 y siguientes (Tomo II), Informe Policial N°20180260809/01984/702 de 04 de mayo de 2018, contiene declaración de testigo.
- f)** A fs. 925 y siguientes (Tomo III), Informe Policial N°20180540542/03903/703 de 28 de septiembre de 2018, contiene declaración de testigo.
- g)** A fs. 932 y siguientes (Tomo III), Informe Policial N°20180537667/03864/703 de 27 de septiembre de 2018, contiene declaraciones de testigos y ex funcionarios policiales.
- h)** A fs. 1.181 y siguientes (Tomo III), Informe Policial N°20190329905/02741/703 de 12 de junio de 2019, contiene en lo pertinente declaraciones de testigos.
- i)** A fs. 1.214 y siguientes (Tomo III), Informe Policial N°20190451759/03803/703 de 13 de agosto de 2019, contiene individualización y declaración de ex funcionarios policiales.

- j) A fs. 1.218 y siguientes (Tomo III), Informe Policial N°20190457813/03868/703 de 16 de agosto de 2019, contiene declaración de ex funcionarios policiales.
- k) A fs. 1.328 y siguientes (Tomo III), Informe Policial N°20200444337/05352/703 de 15 de octubre de 2020, contiene declaración de testigos.

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado lo que se indicará a continuación.

A. Que los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay, de 27 y 19 años de edad respectivamente, fueron detenidos por funcionarios de Carabineros el 16 de octubre de 1973, mientras se encontraban realizando labores en el fundo Los Riscos, ubicado en la localidad de Riachuelo, región de Los Lagos. La patrulla de uniformados estaba compuesta por a lo menos 10 funcionarios de distintas unidades de Carabineros dependientes de la Comisaría de Osorno y que se movilizaban en la camioneta de un civil de la zona, entre ellos el Capitán Hans Eduart Schernberger Valdivia, el Teniente José Hernán Godoy Barrientos y los carabineros Luis Oyarzún Arriagada, Robert Santiago Teylorl Escobar (fallecido, según fs. 1686, tomo IV), Quintiliano Rogel Alvarado (fallecido, según fs. 1689, tomo IV), Pedro Segundo Soto Godoy (fallecido, según fs. 1688, tomo IV) y José Rómulo Catalán Oyarzún (fallecido, según fs. 1687, tomo IV). La aprehensión fue realizada en presencia de otros trabajadores del Fundo y del padre de ambos, don Pedro Alejandrino Barría Navarro (fallecido, según fs. 1700 tomo IV), quienes observaron cómo al detener a los hermanos, fueron golpeados por uno de los funcionarios uniformados y, además, obligados a desnudarse, quedando sólo en ropa interior. (*Según fs. 1438, fs. 1442, fs. 1459, fs. 1.463, fs. 1482, fs. 1490, 1529, 1.531 tomo IV, entre otros antecedentes*)

B. Que luego de ser aprehendidos, los hermanos Barría Bassay fueron trasladados hasta dependencias de la Comisaría de Carabineros de Río Negro e ingresados en calabozos diferentes en el subterráneo de la unidad. En aquel lugar fueron golpeados duramente por funcionarios de esa misma unidad, según lo expresado por Guido Barría a uno de los funcionarios policiales. (fs. 1.569, tomo IV). Al día siguiente Guido Ricardo Barría Bassay fue trasladado en un operativo hasta el sector Huelleshue, ya que según orden del Capitán Schernberger, se

dirigirían en búsqueda de armamento y de un extremista de posible nacionalidad cubana, participando de este operativo los mismos funcionarios policiales, entre ellos el Capitán Hans Eduart Schernberger Valdivia, el Teniente José Hernán Godoy Barrientos y los carabineros Luis Oyarzún Arriagada, Robert Santiago Teylorl Escobar, Quintiliano Rogel Alvarado, Pedro Segundo Soto Godoy, José Rómulo Catalán Oyarzún y Osvaldo Quilaqueo (fallecido según fs. 1.699, tomo IV) *(según antecedentes de fs. 1.569, fs. 1.586, 1.604, fs. 1.670, 1.680 tomo IV, entre otros)*

C. Que la búsqueda anterior resultó infructuosa, por lo que regresaron a la Comisaría de Río Negro. Allí, según dichos del carabinero Robert Santiago Teylorl Escobar, que se han mantenido en el tiempo y que rolan de fs. 1.573, fs. 1.586, fs. 1.589, fs. 1.590, fs. 1.595, fs. 1.604, fs. 1.620, fs. 1.623, 1.633, fs. 1.670 (tomo IV), pudo observar que Guido Barría Bassay se mantenía en la carrocería de una camioneta, tapado con sacos y maniatado de pies y manos en la espalda, ordenándole el Capitán Schernberger que lo acompañara en el vehículo, junto al carabinero Pedro Soto Godoy, dirigiéndose hasta el Fundo La Campana, distante a unos 15 km. de la Comisaría, trasladando a Guido Barría en la parte trasera del vehículo, amarrado de pies y manos. Al llegar a la ribera del río Esmeralda, sector Chahuilco, el Capitán Schernberger ordenó bajar al detenido y empujarlo a las aguas que en ese momento iba con un fuerte caudal, orden que fue cumplida por el carabinero Teylorl, quien escuchó los gritos de Guido Barría cuando el caudal se lo llevaba río abajo, para luego desaparecer.

D. Que a raíz de la detención de sus hijos, doña Elvecia Barría Bassay (fallecida, según fs. 1.701 tomo IV) efectuó diversas gestiones ante diferentes instituciones durante el año 1973 y en años posteriores, en especial ante la Fiscalía Militar Letrada del Ejército de Chile, constando a fs. 1.654, 1.655, 1.657, 1.659, 1.660 (tomo IV) lo respectivo. Incluso, a fs. 1.450 y a fs. 1.662 (tomo IV), el año 1978, se informa que Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay fueron procesados en causa rol 1666-73 y declarados rebeldes y sobreseídos temporalmente, el 08 de diciembre de 1973, por no haber sido habidos.

E. Que hasta esta fecha ningún funcionario público de las Fuerzas Armadas, en especial el mando de Carabineros de Chile que se desempeñaba en la época de los hechos, ha dado algún antecedente a la autoridad respectiva en relación a

lo sucedido con los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay y la ubicación de sus cuerpos, manteniendo hasta el día de hoy ocultamiento de todo tipo de antecedentes sobre los hechos que se han mencionado en los párrafos precedentes.

4°) Calificación. Que los hechos antes reseñados, constituyen los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado, en su carácter de lesa humanidad, en las personas de Guido Ricardo Barria Bassay y Héctor Alejandro Barria Bassay, previstos y sancionados en los artículos 148, 150 N°1 y 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos.

5°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de lesa humanidad. Así se ha pronunciado este Tribunal, la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excma. Corte Suprema, en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

1. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidios calificados de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

2. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

3. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidios calificados de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

4. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

5. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

6. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

7. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el delito de homicidios calificados de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

8. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

9.Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

10.Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

11. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

12. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

13. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

14. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

15.Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

16.Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

17. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

18. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de

muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

19. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

20. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por los homicidios calificados en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

21. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

22. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

23. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

24. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por los homicidios calificados en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

25. Causa rol 1-2013 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pucón, seguida por detención ilegal de Alberto Colpihueque Navarrete, Eleuterio Colpihueque Lican y Abel Florencio Colpihueque Lican; apremios ilegítimos de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Lican; y homicidios calificados de Alberto Colpihueque Navarrete y Eleuterio Colpihueque Licán, sentencia de 24 de mayo de 2019.

26. Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidios calificados en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

27. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de secuestro calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

28. Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

29. Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

30. Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

31. Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

32. Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

33. Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

34. Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

35. Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidios calificados y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

36. Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

37. Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

38. Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

39. Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por los homicidios calificados en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

40. Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de José Bernardino Cuevas Cifuentes, sentencia de 30 de marzo de 2019.

41. Causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de Alejandro Ancao Paine, sentencia de 03 de septiembre de 2021.

42. Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.

43. Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia del 13 de junio de 2019.

44. Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de secuestro calificado en la persona de José Edulio Muñoz Concha, sentencia del 30 de abril de 2021. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

45. Causa rol 5-2013 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por aplicación de tormentos de Harry Cohen Vera, sentencia de fecha 30 de septiembre de 2019.

46. Causa rol 113.999 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por aplicación de tormentos con resultado de muerte de Nolberto Seiffert Dossow, sentencia de fecha 03 de octubre de 2019.

47. Causa rol 114.058 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el delito de apremios ilegítimos de Manuel Antivil Huenuqueo, sentencia de 30 de octubre de 2019.

48. Causa rol 6.345 del ingreso criminal del Juzgado del Crimen de Chile Chico, seguida por el delito de homicidio calificado de José Ananías Zapata Carrasco, sentencia de fecha 09 de marzo de 2020.

49. Causa rol 114.043 del ingreso criminal Primer Juzgado del Crimen de Temuco seguida por el homicidio calificado de Gonzalo Hernández Morales, sentencia de fecha 15 de mayo de 2020.

50. Causa rol 45.464 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Benedicto Poo Álvarez, sentencia de fecha 06 de junio de 2021.

51. Causa rol 18.782 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por secuestro simple, apremios ilegítimos y homicidio calificado de Julio San Martín San Martín, sentencia de fecha 28 de julio de 2022.

52. Causa rol 114.039 del ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Diego Celso Saldías Cid, sentencia de fecha 21 de septiembre de 2022.

53. Causa rol 45.355 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Ignacio Beltrán Meliqueo, sentencia de 20 de abril de 2023.

54. Causa rol 18-2011 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio simple de José Avelino Runca, sentencia de 27 de julio de 2020.

55. Causa rol 63.551 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el secuestro calificado de Patricio Rivas Sepúlveda, sentencia de 23 de diciembre de 2022.

56. Causa rol 113.969 de ingreso criminal del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, sentencia de 2 de enero de 2020.

57. Causa rol 2-2013 del ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de homicidio de Domingo Pérez San Martín, sentencia de 14 de octubre de 2020.

58. Causa rol 24.428 del ingreso del Juzgado de Letras de Traiguén, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Antonio Inostroza Segura y otros, sentencia de 31 de octubre de 2023. Todos los fallos anteriores condenatorios.

59. Causa rol 114.034 del ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf, sentencia del 03 de agosto de 2022.

60. Causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por aplicación de tormentos y detención ilegal, sentencia del 09 de agosto de 2022.

61. Causa rol 25-2011 de ingreso criminal de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el delito de homicidio de Reinaldo Rosas Asenjo, sentencia del 19 de diciembre de 2022.

62. Causa rol 113.975 de ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por los delitos de homicidio calificado y apremios ilegítimos de Pedro Ríos Castillo y Guido Troncoso Pérez, sentencia del 26 de agosto de 2022.

63. Causa rol 45.357 de ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Sergio del Carmen Navarro Schifferli y José Andrés Meliquén Aguilera, sentencia del 22 de julio de 2021. Todos los fallos condenatorios.

6°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Que la Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes

permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena**. *Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad*. 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, "Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad" Eugenio Raúl Zaffaroni, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

7°) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la

realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que, si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si

realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (Michel Taruffo (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, N° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).

Declaraciones indagatorias.

8°) Declaración indagatoria de **LUIS ALBERTO OYARZUN ARRIAGADA** (23 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 938 a fs. 940 (Tomo III), de fs. 1.041 (Tomo III) copia a fs. 1520 (Tomo IV), de fs. 1.042 a fs. 1.043 (Tomo III) copia a fs. 1550 a fs. 1551 (Tomo IV), de fs. 1.044 a fs. 1.046 (Tomo III) copia a fs. 1569 a fs. 1571 (tomo IV), de fs. 1.047 a fs. 1.048 (Tomo III) copia a fs. 1582 a fs. 1583 (Tomo IV), de fs. 1.049 a fs. 1.050 (Tomo III) copia a fs. 1684 a fs. 1685 (Tomo IV), fs. 1.052 a fs. 1.055 (Tomo III); de fs. 1446 (tomo IV), fs. 1.487 (tomo IV), fs. 1.561 (tomo IV) y fs. 1.599 (tomo IV).

En **declaración extrajudicial** de fecha 05 de septiembre de 2018 rolante a **fs. 938 a fs. 940 (Tomo III)**. Hace una breve reseña de su carrera funcionaria. En el mes de marzo de 1973, fue trasladado al retén Riachuelo, con el grado de carabinero. El día 11 de septiembre estaba en el Retén Riachuelo, estando como jefe de Retén el Sargento 2° Sergio Aguilar Miranda, un Carabinero de apellido Hernández. Eran sólo 4 funcionarios. Dependían de la 2ª Comisaría de Río Negro. Luego, llegaron los militares a la zona, del Regimiento Arauco, por lo que le agregaron para trabajar con ellos, sirviendo como guía por su conocimiento de la zona ya que es oriundo del lugar. De los militares, sólo recuerda el nombre de un oficial de reserva de apellido Balladares y de un Cabo de apellido Colipan o Colipi. Eran alrededor de 30 personas. Durante ese periodo se hicieron bastantes detenciones, por listados que ellos llevaban. Una vez que eran detenidas eran llevadas al Retén de Riachuelo para después ser derivados a la Fiscalía Militar. Nombra a algunos detenidos, tales como Ulloa, Renato Invernise, Pattau, entre otros. En el retén los torturaron y golpearon los funcionarios militares, entre ellos Colipi. Los hermanos Barría Bassay, no fueron detenidos en esa época aún, el que

estaba detenido era su tío Juan Bassay, quien incluso los acompañó a la zona cordillerana el día 18 de septiembre, en busca del diputado Carlos Bogan. Después del 20 septiembre del mismo año fue trasladado a la comisaría de Río Negro, como chofer de vehículos policiales ya que tenía licencia para eso. Respecto de los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay los conoció de toda la vida, ya que se criaron juntos en Riachuelo. Su padre Alejandrino Barría, trabajaba en el taller mecánico agrícola de su padre Alfonso Oyarzún. Jugaron incluso fútbol. Los Hermanos Barría Bassay, eran reconocidos socialistas de la zona. Respecto de las circunstancias de la detención de Guido y Héctor Barría Bassay, no las conoce directamente ya que estaba franco ese día. Lo único que sabe es que participó un grupo bien cerrado de carabinero a cargo del Teniente Godoy y que había ido en la camioneta de Raúl Guzman. Igualmente participó el Cabo Pedro Soto, Godoy, Quintiliano Rogel y René Alvarado (era jubilado y se reincorporo para esa fecha). La detención habría ocurrido en un aserradero, en la costa de Río Blanco. Posteriormente en horas de la tarde, como se encontraba de franco y era soltero, por lo que tenía que dormir en el cuartel. Pasó por la guardia y escuchó comentarios que señalaban que los hermanos Barría, habían sido detenidos y que en los calabozos de la unidad policial, emplazados en el subterráneo, estaba Guido Barría. Se dirigió al lugar, donde lo pudo a través de las rejas y conversar con él. Le preguntó si lo habían golpeado mucho, a lo cual le dijo que sí. Le recomendó que dijera todo lo que sabía para que no lo siguieran golpeando. Él estaba sólo. Le preguntó por Héctor, pero dijo que no sabía que había pasado con él. Luego, tuvo que salir del lugar. Es todo lo que pudieron conversar Al día siguiente, le informaron que había un operativo al interior del sector Millantue, era un patrullaje montado. Este patrullaje se inició alrededor de las 5 de la mañana del día 17 de octubre, participando alrededor de 20 carabineros a caballo, los cuales habían sido llevados al campo un señor Martinez, en el sector de Millantue, por lo cual se desplazaron en vehículos al lugar y de ahí a la cordillera a caballo, al lugar que había señalado Guido, como que había gente de la Unidad Popular oculta. Una vez en el lugar, se dieron cuenta que si bien había un refugio, este había sido abandonado no se hace cuanto tiempo, ya que había conservas vacías. En ese patrullaje los acompañaba Guido, con quien dada la situación, no pudo volver a hablar. El procedimiento iba a cargo el Capitán Schernberger, seguido por el

Teniente Godoy, los Suboficiales Teylorl y Soto Godoy. Había también un amansador de caballos de apellido Roberto Gidden Hemon y un Sargento de nombre Guillermo Barrientos Arriagada. El resto no los recuerda. Volvieron a la base, en el sector Millantue, de propiedad del señor Martínez, quien facilitó un corral, para guardar los caballos y los vehículos. De ahí emprendieron la vuelta hacía Río Negro. Entregó los caballos y un camión en el lugar. Pidió permiso para salir a comer. Eso fue todo lo que supe en el instante, al otro día todo era tema cerrado. Es todo cuanto supo en ese momento. Entre los años 1979 y 1980, tuvo que prestar declaración en el undécimo Juzgado de Osorno, ante un Juez de apellido Sandoval y de una Ministro en Visita, cuyo nombre no recuerda. Todas estas declaraciones eran pauteadas ya que tenían que decir lo que les decía el asesor jurídico de la prefectura Freddy Rosas, actualmente fallecido. Prestó alrededor de tres o cuatro declaraciones. Alrededor del año 2002, cuando estos hechos estaban siendo investigados por el Juez Juan Guzmán, le tocó prestar declaración, en el cuartel de Investigaciones de Osorno, fueron detenidos y trasladados a la Corte en Santiago. Fue detenido Teylorl y Soto Godoy. Declaró con los antecedentes que conocía ante el Magistrado, esta vez sin las presiones de Carabineros. Afuera del Tribunal, en conversación con Teylorl, le pidió que contara todo lo que sabía, a lo cual le contó que cuando estaban en Millantue, el Capitán Schernberger y él, subieron a un vehículo de, propiedad del CORA, un jeep pequeño, color amarillo claro, para dos personas, a Guido, quien había sido amarrado con alambres y llevado hasta el sector Chahuilco, fundo La Campana, que queda a la orilla del Río Negro, lugar donde le habrían dado muerte y su cuerpo habría sido arrojado al agua. No le quiso contar quien había disparado. Desde esa fecha y cuando se dio el fallo del Ministro Solís, en el cual salió declarado inocente, ha sido amenazado y tratado de traidor, mediante llamadas telefónicas de personas desconocidas.

En **declaración judicial** de fecha 14 de julio de 1993 rolante a **fs. 1041 (Tomo III), copia a fs. 1520 (Tomo IV)**. Apunta que el año 1973 era funcionario de Carabineros de la dotación de la Segunda Comisaría de la ciudad de Río Negro, más o menos desde el 15 o 16 de septiembre de dicho año, anteriormente trabajaba en el retén de Riachuelo, por lo tanto con fecha 16 de octubre de 1973 se encontraba trabajando en esa ciudad y no tuvo ninguna participación en la

detención de los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barria Bassay. Destaca que ha prestado declaraciones anteriormente por estos hechos.

En **declaración extrajudicial** de fecha 13 de septiembre de 2001 rolante a **fs. 1042 a fs. 1043 (Tomo III), copia a fs. 1550 a fs. 1551 (Tomo IV)**. Reitera que ha declarado anteriormente por los hechos de la causa. Se refiere a su carrera funcionaria. Para el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 se encontraba prestando servicios en el retén de Riachuelo, cuyo jefe era el sargento segundo Sergio Aguilar Miranda, además estaba el cabo 1° Francisco Mancilla Altamirano y el carabinero José René Hernández, no recuerda segundo apellido y de él solo sabe que está en servicio activo en la tenencia de San Pablo. Unos días después del golpe llegó a Riachuelo una patrulla militar con dos tenientes y como treintas hombres pertenecientes al Regimiento Arauco, los que llegaron con una lista de nombres de personas a los que les informaron que había que detener. A todos él los conocía ya que es nacido y criado en Riachuelo y se trataba de Juan Bassay, Renato Invernice, y otros tres sujetos de los que solo recuerda los apellidos y que eran Patau, Caro y Ulloa. Ante eso se le consiguió a Raúl Guzman del Río que vivía al frente del retén su camioneta Chevrolet de gran tamaño, la que le parece que era roja con el capot y el techo blanco. La que él condujo y fueron con los militares a las casas de estas personas a buscarlos, encontrando a algunos y otros se detuvieron después en la calle. La finalidad de la detención de estas personas era porque según la información que tenían los militares estos sujetos tenían armas. En esa oportunidad él no participó en la detención de Juan Bassay, pero sí estuvo en las detenciones de los otros cuatro sujetos que antes nombró. A los detenidos los llevaron al retén de Riachuelo y ahí quedaron, siendo interrogados por los militares. Después los militares sacaron a Juan Bassay y lo subieron en uno de los camiones ordenándole que junto al cabo Pedro Soto Godoy, fuera con los militares. Continúa, se fueron en el camino junto a Bassay en dirección a la cordillera de la costa, con la finalidad de ubicar armas que estos sujetos tenían ocultas, y un vehículo que se habría internado en los cerros cargado de armas. Estuvieron como tres días buscando en diversos lugares sin encontrar nada, ni armas ni el vehículo, por lo que se regresaron a Riachuelo, trayéndose los militares los detenidos para Osorno. Unos días después fue destinado a la 2° Comisaría de Rio Negro, en donde comenzó a prestar servicios haciendo de chofer

en la Comisaría, su jefe en esa unidad era Hans Schernberger Valdivia, el oficial de ordenes era el teniente José Hernán Godoy Barría, y de la dotación recuerda que estaban José Rómulo Catalán Oyarzún, Guillermo Barrientos Arriagada, Robert Teylorl Escobar, Raúl Alarcón Asenjo, Quintiliano Rogel Alvarado y Pedro Soto Godoy, además se presentaron como voluntarios para prestar cooperación varios jubilados, entre los que rememora René Alvarado y a otro de apellido Azocar, Nunca hubo un carabinero de apellido Duhalde ni en Río Negro ni en Riachuelo, por lo menos él no conoció a nadie con ese apellido. En los que respecta a la supuesta detención de los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay él no participó en este hecho e ignora quiénes lo hicieron, pero en todo caso él no fue, de hecho en uno de los careos que tuvo con el padre de ellos hace años atrás, él dice que estaba presente cuando los detuvieron dijo que no lo había visto a él y que le nombraban ya que alguien dijo que él andaba, lo cual es falso, ya que él nunca estuvo en ese lugar, ni siquiera sabe dónde queda. Él los conocía y no eran gente problemática, no eran ni extremistas ni terroristas, aunque eran del partido socialista. En todo caso nunca tuvo conocimiento que llegara alguna orden de la fiscalía o de algún tribunal para detenerlos, lo cual se habría sabido, él no fue ese día 16 de octubre del año 1973 a riachuelo y no fue a conseguirle la camioneta a René Guzmán del Río, así que si él dice que eso fue así debe estar confundido con la oportunidad anterior, en septiembre cuando si fue a buscar para hacer el patrullaje con los militares y se detuvo a Juan Bassay que era tío de esos jóvenes y otras 4 personas como relató antes, pero ese día 16 él no fue y los militares ya no estaban en el río Negro. Desconoce el paradero de los hermanos Barría Bassay, no sabe quiénes los detuvieron ni qué les paso después. Reitera que él no fue manejando la camioneta cuando cien que los fueron a detener y si realmente andaba la camioneta de Guzmán debe haber sido conducida por otro funcionario, pero él no fue. Tampoco sabe que carabineros pueden haber andado, pero supone que el jefe del retén de Riachuelo de ese entonces podría saber algo.

En **declaración judicial** de fecha 17 de abril de 2002 rolante a **fs. 1044 a fs. 1045 (Tomo III), copia a fs. 1569 a fs. 1571 (Tomo IV)**. Ratifica íntegramente las declaraciones que prestó a fojas 58 ante el IV Juzgado Militar de Valdivia, fs. 233 del Juzgado de Letras de Río Negro, y la extrajudicial de fs. 357. Igualmente reconoce como suyas las firmas estampadas al final de dichos documentos. Debe

hacer presente que las citaciones a su nombre llegaban a la unidad de Carabineros, lugar desde el cual se le ordenaba concurrir previamente ante el abogado señor Freddy Rozas, asesor jurídico de la Prefectura de Carabineros de Osorno, quien le instruía que a todas las preguntas que formulara el Tribunal tenía que dar respuesta negativa. Del caso sublite depone que el día en que ambos fueron detenidos, esto es el 16 de octubre de 1973, él se encontraba de franco. Cuando se presentó a la unidad en horas de la tarde, fue informado por el oficial de guardia que estaba detenido en el calabozo Guido Barría, a quién él conocía desde que ambos eran niños, pues sus padres habían trabajado juntos, de hecho con ambos hermanos cuando niño jugaban a la pelota. Él se dio una vuelta por el calabozo que estaba en el subterráneo, en forma totalmente escondido, para que nadie lo viera, pudiendo ver a Guido quien le dijo que lo habían golpeado muy duramente, le aconsejó que dijera toda la verdad respecto de lo que le preguntaran, ante lo cual éste le dijo que ya había contado todo lo que sabía. Le preguntó dónde estaba Héctor Alejandro, a quién apodaban Tito, diciendo que no sabía dónde se encontraba en esos momentos. Como Guido Barría, dijo que en la zona precordillerana de Millantue, se encontraban ocultas armas, se preparó una especie de operativo, yéndose a la zona, ocupándose vehículos y caballos de otros retenes y el camión de don Fernando Aguirre; un vecino de la zona. Al llegar al lugar donde Guido dijo que se encontraban armas, solo vieron una especie de refugio cubierto de ramas con restos de comida, no se encontró ningún tipo de armas y tampoco se detuvo a nadie en ese operativo. La vuelta desde la cordillera fue en los mismos vehículos, a saber un Jeep Bronco de la Gobernación, un furgón marca Chevrolet de color verde del SAG, el Jeep tipo camioneta de color amarillo que según recuerda era un Ika Renault, que tiene sólo dos asientos y la parte posterior es para carga, vehículo de propiedad de la CORA o del INDAP, los que estaban a disposición de la Comisaría de Río Negro. Ignora en que vehículo trasladaron a Guido desde la zona en el camino de vuelta. Si escuchó, pero a él no le consta, que a Guido lo trajeron en el mismo vehículo marca Ika Renault, en que viajaron Mayor Hans Schernberger, comisario de Río Negro y el Cabo Robert Teylorl Escobar de la misma unidad, también escuché que a Guido lo traían amarrado con alambre de púas y en la parte posterior del jeep que era conducido por Schernberger. Él viajó más tarde en el camión donde fueron subidos los

caballos, llegando más tarde que los demás a la unidad. Él preguntó por Guido, y le dijeron que no se encontraba detenido en la unidad, no hizo más preguntas respecto de donde él se encontraba. Espeta que no vio detenido en la Comisaría de Río Negro, a Héctor Alejandro Barría Bassay. No participó ni siquiera como chofer, en las detenciones de los hermanos de Héctor Alejandro y Guido Héctor Barría Bassay. Adopta que lo escuchó respecto a la detención, fue que se produjo en la camioneta Chevrolet de los hermanos Raúl y René Guzmán del Río que ese tiempo no recuerda si era verde o roja, y que uno de ellos, Raúl Guzmán fue el chofer del vehículo cuando se les detuvo. Los Carabineros que participaron fueron el teniente José Hernán Godoy Barrientos, el cabo Pedro Soto Godoy, Quintiliano Rogel Alvarado y Barrientos Arriagada. Cuenta que al interior de la Comisaría de Carabineros de Río Negro se a los detenidos cuando se les interrogaba, se les golpeaba con las culatas de los fusiles, con el "tonto de goma" y con golpes de pies y puño en diferentes partes del cuerpo, también se les sumergía en un tambor con agua y por último, se les ataba en una escala que era colocada en un ángulo de 45 grados, al detenido se le amarraba con los pies hacia arriba y se le echaba agua en su boca. Estos tormentos eran aplicados por el teniente José Godoy Barrientos, el cabo Pedro Soto Godoy y por el cabo Robert Teylorl Escobar, a él le consta pues personalmente cuando los detenidos se les torturaba. No vio que los detenidos tuvieran su vista vendada. El vio cuando se torturó a un señor Briceño y a otro de apellido del Río o Ríos que vive en la población Maximiliano Kolbe de esta ciudad, él era auxiliar del Liceo de Río Negro. A Riachuelo llegó una patrulla del Ejército, y en compañía y por expresa instrucción de ellos, que portaban consigo una lista, participó conduciendo él la camioneta de los hermanos Guzmán del Río, en la detención de Renato Invernice, Kemp Patau, un señor de apellido Ulloa y otro de apellido Caro ellos fueron pasados detenidos y a disposición de la Fiscalía Militar, tiene entendido que estas personas viven actualmente en el extranjero. No participó en la detención del tío de los hermanos Barría Bassay, don Juan.

En **declaración judicial** de fecha 07 de mayo de 2002 rolante a **fs. 1047 a fs. 1048 (Tomo III), copia de fs. 1582 a fs. 1583 (Tomo IV)**. Ratifica solo la declaración que prestó el 17 de abril del año 2002, en la ciudad de Osorno. Explica que sí estuvo presente y condujo la camioneta de color verde de propiedad del

SAG a la expedición que se efectuó hacia la cordillera con motivo de información que habría proporcionado Guido Barría Basay en relación a la existencia de armas que estarían ocultas en la zona precordillerana de Millantue. El Mayor Schernberger estaba a cargo de dicha expedición, pero no recuerda si iba el teniente Godoy en dicha ocasión. Eran aproximadamente entre 20 a 25 carabineros que participaron, no hubo civiles, los vehículos que se utilizaron eran el Chevrolet verde del SAG que conducía, era un station, el camión de don Fernando Aguirre conducido por un particular, era un International de color rojo. Además de los vehículos policiales, los de la Comisaría y los de la Tenencia Purranque. En total deben haber sido seis vehículos los que se utilizaron. No recuerda en que vehículo iba Guido Barría Bassay. Él presenció cuando el Mayor Schernberger dio la orden que cabalgarían en patrulla simple, lo que significa que serían cinco hombres. Los vehículos los dejaron en un fundo de propiedad de un señor Martínez que se encuentra casi en la precordillera. Rubén era uno de los Martínez y era precisamente el dueño del campo. Los caballos fueron llevados de los Retenes, salvo seis caballos que proporcionó don Fernando Aguirre. Este señor, Aguirre era corralero y amigo del comisario. Prestó el camión que mencionó anteriormente como también seis caballos. Las personas que cabalgaron hacia el lugar donde Guido Barría habría señalado, fueron Alfonso Vargas Gallardo, Manuel Muñoz Mayorga, Roberto Gidin Emon, Pablo Araya que era el practicante de la unidad, él era Suboficial, también andaba Robert Teylorl. Todo este grupo era comandado por el Mayor Schernberger. Guido Barría Basay se desplazaba a pie. No presentaba sus brazos amarrados. Esta cabalgata duró aproximadamente seis horas, quizás un poco más. No encontraron armas ni persona alguna. Aclara que Guido les había indicado que en el lugar a donde los llevaba había personas y armas, pero solamente encontraron una casamata al costado izquierdo del sendero, se podía apreciar que había habido gente ahí, porque quedaran restos de comida. No rememora si vio a Guido al regreso de dicha cabalgata ni que vehículo lo trasladó de regreso Río Negro, porque él se avocó a hacer partir el camión que conducía con contacto directo, pues no tenía las llaves. Él regresó con los caballos de don Fernando Aguirre en la parte posterior del camión hasta Río Negro sector Chapín, distante a dos kilómetros. Depone que después del patrullaje no lo vio nunca más, pero antes del patrullaje lo vio y conversó con él en el

calabozo, a escondidas, él le dijo que estaba bien y le dijo que dijera todo para que no lo maltrataran, pero él le respondió que ya lo había dicho todo y que no se preocupara. Pudo conversar con él a través de una ventanilla que existía en la puerta del calabozo. Habla que no vio a Héctor Barría, ni tampoco supo si había estado detenido en la Comisaría. De haberlo sabido habría intentado hablar con él. Revela que escuchó decir que a Guido lo trajeron en el mismo vehículo marca lea Renault en el que viajaron el Mayor Schernberger y el Cabo Teylorl, también escuchó que a Guido lo traían amarrado con alambre de púa en la parte posterior del vehículo conducido por Schernberger. Aclara que con regular frecuencia, Schernberger conducía vehículos de la unidad. El chofer de servicio conducía normalmente. Preguntado por el tribunal acerca de que otros choferes policiales conducían en la unidad, responde: el sargento Primero José Rómulo Catalán Oyarzún, Sargento Primero en retiro René Alvarado, no recuerda el otro apellido, el carabinero Raúl Alarcón Asenjo, el teniente Godoy quien conducía con bastante frecuencia y su persona. En cuanto a los choferes los tres están con vida, en Río Negro reside José Catalán Oyarzún y René Alvarado y Raúl Alarcón Asenjo vive en Osorno.

En **declaración judicial** de fecha 22 de marzo de 2004 rolante **a fs. 1049 a fs. 1050 (Tomo II), copia a fs. 1684 a fs. 1685 (Tomo IV)**. Dice que no tuvo ninguna participación en la detención de los hermanos Barría Bassay, a quienes conoció desde su infancia en el sector Riachuelo lugar donde nació y se crio a la par de los hermanos Barría Bassay, ya que como ha declarado en varias oportunidades. En cuanto a la fecha del 16 de octubre de 1973 se encontraba trabajando en la Comisaría de Río Negro, con el grado de carabinero. Destaca que llevaba dos años en la institución. Recuerda haber efectuado un patrullaje a la cordillera de la costa, específicamente en el sector Huellethue, con Guido Barría Bassay, este último en calidad de detenido por la Segunda Comisaría de Río Negro. Anexa que al llegar en la noche del día 16 de octubre de 1973, después de haber permanecido franco, se enteró por el funcionario de guardia, no recuerda identidad, de que los hermanos Guido y Héctor Barria Bassay habían sido detenidos. A los cual consultó donde se encontraban, manifestándole el mismo funcionario de guardia que Guido se encontraba en los calabozos. Así él en forma oculta lo constató en el calabozo y conversó con él en la rejilla de la puesta de su

celda que se encontraba en el subterráneo de la Comisaría, dicha conversación fue breve, solo le preguntó cómo se encontraba, manifestándole que se encontraba bien y que confesaría todo lo que sabía para que no lo golpearan, luego se retiró del lugar porque la jefatura de la Comisaría, que se encontraba en esos momentos compuesta por el capitán Hans Schernberger Valdivia y el teniente José Herman Godoy Barrientos, habían ordenado para el día siguiente el patrullaje al sector de la cordillera de la costa. Dicho operativo se llevó a cabo en forma temprana al día siguiente, donde participó como escolta, además de alrededor de unos 25 carabineros montados de diversos retenes de la segunda Comisaría. Además, del jefe al mando, no recuerda si el teniente Godoy andaba. Se les informó que la finalidad de este patrullaje era encontrar armas y algunos personajes de los cuales ignora sus nombres a quienes se buscaba. Se concurrió al lugar con el detenido Guido Barría Bassay donde no se encontró nada, regresando al lugar de Millantue ubicado en la precordillera, desde donde habían salido montado. Una vez terminado el patrullaje, se le ordenó hacer andar un camión marca international, color rojo de propiedad del civil Fernando Aguirre. Esa persona igual habría facilitado seis caballos y el chofer que llevo el camión no iría a buscarlo durante ese día, se presumía que el patrullaje podría durar más tiempo. Tras hacer andar el camión, trasladó los caballos hasta Río Negro, lugar Chifín, y luego se devolvió a la Comisaría. Desde el lugar de Millantue, Carabineros a cargo del procedimiento relatado no llegaron a la segunda Comisaría de Río Negro con don Guido Barría Bassay, razón por la cual consultó a los colegas que andaban el procedimiento, sin darle ninguno una respuesta correcta, ya que todas eran evasivas a la situación. A través del tiempo supo que había sido traído desde Millantue, ignora hacia donde, transportado en una pequeña camioneta tipo jeep color amarillo, de propiedad del SAG, que se encontraba en la Comisaría después del 11 de septiembre, por el capitán antes señalado y cabo Robert Teylorl, sin saber más del detenido. En cuanto a Héctor como lo ha reiterado en tantas oportunidades no lo vio llegar a la segunda Comisaría en calidad de detenido, lo cual ratifica legalmente juramentado. Quiere aclarar que varias de las respuestas evasivas y de desconocimiento de los hechos, fue producto de instrucciones hechas por el asesor jurídico de la prefectura don Fredy Rosas, quien los citaba a su oficina y les entregaba instrucciones de lo que debían declarar, debido a que

aún eran parte de la institución y cualquier declaración mal hecha podía perjudicar su estabilidad funcionaria. En cuanto a la declaración de 14 de julio de 1993, ratifica en todas sus partes y no quiere agregar nada. Respecto a la extrajudicial del 17 de abril de 2002, la ratifica en todas sus partes.

En **declaración judicial** de fecha 04 de marzo de 2019 rolante a **fs. 1052 a fs. 1055 (Tomo III)**. Ratifica las declaraciones que rolan de fs. 1.040 a fs.1.050 agregadas al proceso y que fueron prestadas en causa rol 2182-98, episodio Rio Negro de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago y la declaración que rola de fojas 938 y siguientes. El cuerpo de militares que estuvo en Riachuelo no estuvo en la detención de los Hermanos Barría Bassay. El personal del Regimiento Arauco ya no estaba cuando se practicó esas detenciones. Respecto a la inhumación de los cuerpos de los hermanos Barría, lo desconoce. Lo único que sabe es lo que ha declarado. Sobre "Tito" no se supo nada más. No tenía nada personal contra ellos, ellos jugaban y Alejandrino, su padre, era una persona correcta. Delibera que tiene la percepción que no llegaron con "tito" a la comisaría, porque el de guardia le dijo "está Guido", que era el más joven. De ahí, pasado el tiempo, cuando se supo de las osamentas que se encontraron en la costa de río Blanco, presumió que pudieran ser de Tito. Estas son conjeturas suyas, porque piensa que pudieran haberlo matado en el camino y enterrado. Nunca se supo de su destino. De todo esto tiene que saber Godoy. Insiste que los militares no detuvieron a los hermanos Barría, ellos ya no estaban en la unidad cuando sucedieron esos hechos. No es efectivo que alguno de los hermanos los haya llevado a Osorno, esto lo afirma porque era chofer, soltero y gran parte de su vida la vivió en la unidad y por ello se habría enterado de un traslado, si así hubiera sido. La única información sobre Guido es la entregada por Teylorl en el pasillo del tribunal, como mencionó en sus últimas declaraciones. Los señores Guzmán, Raúl y René, vivían frente al retén de Riachuelo, entonces cuando fueron los hechos del 11 de septiembre, ambos se acercaron al Retén, les llevaban carnes, leche, etc. Bueno, no sólo ellos, sino también otros agricultores. Pensaba que era algo normal para la época, no sabía qué era un golpe militar, por lo que muchas cosas que se hicieron, pensó eran normales, con el tiempo se ha dado cuenta que las actuaciones de la época no fueron normales. Siguiendo su relato, los militares llevaron una lista con varias personas de la zona que ha señalado anteriormente,

entre ellos Ulloa, Pattau, Invernice y Caro. Se acuerda que Ríos, inspector del liceo de Río Negro, y Salladares fueron torturados. Godoy era quien los torturaba, era un verdadero "verdugo", junto a Soto y Teylorl. No le consta que los hermanos Guzmán hayan presenciado las torturas. Cuando ellos estaban en Riachuelo el comisario Schernberger, entró en las caballerizas donde estaban todos estos detenidos, entre ellos Ulloa, y escuchó los gritos de todas estas personas. Presume que los apremió, pero no lo vio. Este capitán fue al retén Riachuelo cuando los militares estaban allí. Él tiene que tener conocimiento de los apremios que los militares practicaban a los detenidos. Se acuerda que un oficial de reserva de apellido Balladares andaba con el grupo de militares. Esta persona aún vive en Osorno, no está seguro, pero al parecer es veterinario. También andaba un teniente, no recuerda su nombre, era una persona joven de tez blanca, con una caminata media "elegante". Este teniente andaba con el cabo Colipan o Colipi. Este cabo era comando o algo especial en el ejército y encargado de las torturas. A ellos se les pasó la casa del jefe del retén que estaba desocupada. Posiblemente, si se le exhibe una fotografía de la época podría reconocerlo. Recuerda que luego del 11 de septiembre de 1973, se quedaron en situación de acuartelamiento en la unidad de Riachuelo. El jefe de retén hacía vida de soltero en la unidad, dormía allí, porque su familia estaba en Chiloé. El único que vivía fuera era Mansilla Altamirano, que tenía su casa a media cuadra de la unidad. Pero el resto todos debían pernoctar en el retén, esto se prolongó por un par de semanas. Luego, lo trasladaron la Comisaría porque era chofer. En la comisaría igual había situación de acuartelamiento, es decir, había que alojar en la unidad, con las excepciones de los casados. Sin embargo, en esa época había sistema de turnos, uno realizaba su turno y luego quedaba de franco, pero por la situación del acuartelamiento no podía salir de la unidad de carabineros, debiendo quedarse allí. Esa era una orden para todas las unidades del país. Asevera que todos los carabineros les correspondió de alguna u otra forma participar de los hechos luego del 11 de septiembre de 1973. En específico, todos los funcionarios de Río Negro estaban en conocimiento de los tormentos o apremios que se aplicaban a los detenidos en Río Negro. El que diga que está en desconocimiento de lo sucedido, está mintiendo. A su pregunta, cuando los militares llegaron con un listado de personas que había que detener, se preguntó el motivo y señalaron que eran

activistas políticos. Ahora, él desconoce quién les dio ese tipo de información a los militares pero tiene que ser alguien de Riachuelo. Respecto a otros casos, José Rocha Hormazábal, amigo suyo, le contó sobre algunos casos que él escuchó por comentarios, sobre las patrullas que componía Adrián Fernández y que fue responsable de varios hechos de muerte en la zona de la 3º Comisaría de Osorno.

En **declaración judicial** de fecha 25 de mayo de 1979 rolante a **fs. 1446 (Tomo IV)**. Proclama que por ser de Riachuelo conoce a los hermanos, quienes eran activistas políticos, pero ignora a qué partido pertenecían. Desconoce haber integrado una patrulla con el objetivo de detenerlos como igualmente no le consta que el teniente Godoy y otro grupo de carabineros los hayan detenidos. El 16 de octubre estaba en la segunda comisaría de Rio Negro y detuvieron a varios extremistas, los que se pusieron a disposición de la Fiscalía Militar, pero desconoce los nombres de esas personas.

En **diligencia de careo judicial** con la persona de Pedro Barría Navarro, de fecha 14 de febrero de 1980, rolante a **fs. 1487(Tomo IV)**. Ratifica su declaración de fs. 17 (no consta). Alega que no participó en la detención de los hermanos Barría. En el lapso del 11 al 22 de septiembre participó en un operativo que hicieron los militares en el cual sirvió de chofer, de una camioneta de uno de los hermanos Guzman. La describe de color rojo, marca Chevrolet. Estos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Osorno, en ese grupo no iban los hermanos Barría Bassay a quienes conocía, a estos no los vio en la tenencia de Riachuelo ni en Rio Negro.

En **declaración extrajudicial** de fecha 12 de abril de 2002 rolante a **fs. 1561 (Tomo IV)**. Ratifica declaración policial. Atina que respecto al nombre de los funcionarios que conducían los vehículos policiales y de particulares asignados a las tareas operativas en el mes de octubre de 1973, puede señalar que esa función la cumplía junto a Raúl Alarcón Asenjo y José Rómulo Catalán Oyarzún.

En **declaración extrajudicial** de fecha 30 de octubre de 2001 **rolante a fs. 1599 (Tomo IV)**. Agrega que en el mes de septiembre del año 2001, no recuerda fecha exacta, concurrió hasta el cuartel de la Policía de Investigaciones de Osorno, con el fin de prestar declaración ante un funcionario de apellido De La Torre, procedente de la ciudad de Valdivia, el cual cumplía órdenes del ministro Sr. Juan Guzman Tapia, por tal motivo una vez que salió del interior de la unidad, se dirigió

hasta su vehículo particular estacionado frente al cuartel de Investigaciones, donde se encontró con Raúl Guzman del Río, por lo cual se acercó hasta él y le dijo “señor Guzman yo lo único que le pido que diga la verdad ante estos hechos, que separe las detenciones en que participé en su camioneta para el 1973 y la detención de los hermanos Barría Bassay, donde usted sabe claramente yo no conducía su vehículo en esa oportunidad” una vez que dijo esto, se retiró junto a su esposa, quien escuchó lo antes indicado. Desde esa fecha hasta el día de hoy, en diversas ocasiones se ha topado con él, en trámites en los bancos, etc. Pero nunca han conversado ni él le ha dirigido la palabra, por lo que no tiene más que agregar.

9º) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Luis Alberto Oyarzún Arriagada**, quien fue sometido a proceso de fs. 1707 a fs.1724 (Tomo V) con fecha 04 de abril de 2023. Acusado según el auto acusatorio de fs. 1950 a fs. 1983 (Tomo V) con fecha 31 de agosto de 2023, como autor de los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado en las personas de Guido Ricardo Barria Bassay y Héctor Alejandro Barria Bassay, perpetrados en la comuna de Riachuelo, a contar del 16 de octubre de 1973.

Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante, lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, puntualizando lo siguiente:

A. Declaraciones.

1. Raúl Estatiro Guzmán Del Río, de fs. 976 a fs. 977 (Tomo III), a fs. 1.457 (tomo IV), a fs. 1.493 (tomo IV) y de fs. 1.548 (tomo IV). En lo pertinente de sus dichos de fs. 1.548 a fs. 1.549 (Tomo IV) agrega que para el golpe militar vivía con su madre y su hermano Víctor René en una casa ubicada en el pueblo Riachuelo, frente del retén de carabineros. En los días posteriores al golpe, cree que el 16 de septiembre llegaron varias patrullas de militares, los que le pidieron o mejor dicho le quitaron la camioneta Chevrolet C-40 de 4000 kg de carga, pintada de rojo y tenía el capot y el techo color blanco, diciéndole que había unos bandos que ordenaban a la gente cooperar con los militares. El vehículo se lo devolvieron el

día 20 de septiembre de ese año y días después se fueron de la zona, quedando solo los carabineros. El retén de Riachuelo estaba a cargo del sargento Sergio Aguilar Miranda, además de los funcionarios Robert Teylorl, René Hernández, Sixto González y el conductor era Alberto Oyarzún Arriagada. Él tenía harto contacto con los carabineros y después de que se fueron los militares comenzaron ellos a pedirle la camioneta, ya que no tenían vehículo, sin que se pudiese negar ya que, como dijo antes, su casa estaba al frente del cuartel, entregándosela en varias oportunidades y se la devolvían más tarde. El 16 de octubre en horas de la tarde fue a su casa el carabinero Alberto Oyarzún a pedirle la camioneta, que le entregó como había hecho las veces anteriores, sin que le dijeran para qué la iban a ocupar y él tampoco preguntó ya que no se podía hacer. Ese día había carabineros de Rio Negro en el retén de Riachuelo, porque rato antes había visto llegar a un furgón y más tarde supo que llegaron en un jeep de carabineros. A eso de las 22:00 horas, el carabinero Oyarzún le fue a entregar la camioneta, quedando estacionada en su casa, dio las gracias y se fue al retén. En ese momento estaba en el garaje de su casa la señora Helvecia Bassay, quien le pidió permiso para estar ahí, por cuanto quería saber que pasaba con sus hijos, porque Carabineros los había detenido y ella había visto a uno de ellos cuando lo bajaron del jeep y lo ingresaron al retén. Después se entró a su casa y no supo más del asunto por esa noche. Todos tenían miedo, quedando la señora Helvecia en la vereda fuera de su casa llorando ya que había ido a consultar por sus hijos al retén y no la habían escuchado. Después del golpe, los militares y carabineros andaban buscando a estos jóvenes Barría Bassay, ya que habían sido utilizados por algunos politiqueros de la zona y eran un poco desordenados pero no supo más de ellos. En todo caso no eran extremistas ni guerrilleros. Pocos días después de que fueron detenidos, el padre de los jóvenes Alejandro Barría, le contó que estaba trabajando con sus hijos en un aserradero cuando los fueron a buscar detenidos los carabineros, y no sabía de su paradero y que los habían buscado sin tener resultados. También le dijo que al aserradero no habían llegado los carabineros en su camioneta, ya que los carabineros la habían dejado unas trancas que había antes de llegar al aserradero. No le contó qué carabineros fueron los que detuvieron a sus hijos, pero era evidente que eran los carabineros de Riachuelo y Rio Negro, aunque no sabe cuáles. En todo caso tiene que haber andado el carabinero Alberto Oyarzún, ya

que él manejaba su camioneta cada vez que la ocupaban. Desconoce el destino final de estos hermanos, solo por comentarios sabe que los habrían matado los carabineros, pero no sabe más detalles ni qué hicieron con sus cuerpos. Reitera que nunca condujo su camioneta a los carabineros y nunca anduvo con ellos deteniendo gente o haciendo alguna cosa con ellos.

2. Juan Guzmán Tapia, quien declaró de fs. 1631 (Tomo IV) con copia a fs. 1682 a fs. 1683 (Tomo IV) y de fs. 1681 (Tomo IV). En declaración mediante informe, de fs. 1631 a fs. 1632 (Tomo IV) con copia fs. 1682 a fs. 1683 (Tomo IV). Basa que en cumplimiento a lo solicitado mediante oficio N° 839-S 2003, declara por informe y bajo juramento como a continuación expone: dentro del primer semestre del año pasado, cuando en su calidad de Ministro de Fuego aún instruía la causa relacionada con el secuestro de los hermanos Barría Bassay, dispuso una orden de detención contra el general de Carabineros José Hernán Godoy Barrientos, quien fue conducido hasta la Auditoría General de Carabineros, ubicada en avenida Bulnes de la capital, junto con el coronel ® Schernberger (no recuerda su nombre ni segundo apellido). Debió, conforme recuerda, tomar declaraciones a los mencionados oficiales y careos con otros testigos, relacionadas esas diligencias con las acciones que condujeron a la desaparición de los nombrados hermanos. Después de efectuadas dichas diligencias se reunió con ambos exoficiales anteriormente nombrados y con los abogados señores Harry Grünewaldt, Rodolfo Arriagada y otro abogado de apellido Rossi, encargado de la defensa del coronel ® Schernberger. Además, estaba presente en dicha reunión un Oficial de Carabineros cuyo nombre desconoce, estaba a cargo del traslado y custodia del general Godoy. En el curso de esa reunión se produjo un diálogo entre el coronel ® Schernberger y quien suscribe el presente informe en el cual dicho coronel en retiro expresó: “Yo asumo la responsabilidad por los hechos relacionados con los hermanos Barría Bassay. La responsabilidad del señor Godoy subsistió hasta la detención de esos hermanos en Río Negro. Respecto a todo lo que ocurrió después a los hermanos Barría Bassay, nada tuvo que ver Godoy con ello”. Acto continuo añadió el coronel ® Schernberger: “Esos hermanos fueron trasladados a alguna parte y en dicho traslado no intervino Godoy, quien los habría entregado al fiscal a cargo”. Por último, el nombrado Coronel agregó que él (Schernberger) era a la fecha el Oficial más antiguo y que en esa calidad cumplía funciones como

gobernador y policiales. El general Godoy quien era, según recuerda, Teniente a la época de los hechos, estuvo de acuerdo en dicha reunión con todo lo señalado por Schernberger. No puede aseverar que las palabras utilizadas hayan sido exactamente aquellas que señala, pero las ideas fundamentales corresponden a las que ha señalado. Desea agregar que lamentablemente no dejó constancia en el expediente de las referidas expresiones prestadas por el coronel Schernberger, debido a que ya se habían realizado las diligencias que habría decretado para la referida ocasión de las que estimaba suficientes para decretar la libertad incondicional del general Godoy Barrientos.

3. Luis Clemente Chodín Céspedes. En declaración judicial de fs.1529 (Tomo IV). Funda que no recuerda exactamente la fecha debido al tiempo transcurrido, pero fue le parece en el mes de octubre del año 1973, que encontrándose en ese entonces trabajando en un aserradero de propiedad de Julio Escobar, ubicado en el Fundo Los Corrales, comuna de Purranque, sector Riachuelo, un día en que iba hacia su trabajo a pie, se encontró con unos carabineros que llevaban en calidad de detenidos a unos hermanos de apellidos Barría Bassay. Recuerda que entre los policías andaba un Teniente al que conocía de vista y sabe que su apellido es Godoy, pero ignora donde estará actualmente. En ningún momento vio de parte de Carabineros hacia los detenidos actitudes abusivas y tampoco vio que alguien haya agredido en algún momento a los detenidos. Supo de la desaparición de esas personas cuando los familiares los comenzaron a buscar, pero por comentarios de terceras personas. Él trabajó en el sector de Riachuelo hasta más o menos el año 1976, para luego irse a la ciudad de Osorno, y que es donde actualmente se encuentra viviendo.

4. Oscar Hernán Vargas Cárdenas. Depuso de fs. 615 a fs. 616 (Tomo II), fs. 634 a fs. 635 (Tomo II) y de fs. 1.442 (Tomo IV). Sin perjuicio de lo precedente, destacar dichos de fs. 634 a fs. 635 (Tomo II). Narra que para el mes de septiembre de 1973 trabajaba como obrero en el fundo "Los Parques". Ostenta que el padre de los hermanos Barría Bassay, trabajaba en el fundo como tractorista. Sus hijos llegaron unos cinco días antes de que fueran detenidos. Explica que el día de la detención de los hermanos Barría, se encontraba almorzando en su casa, con su esposa Uberlinda Del Carmen Quintrel, cuando de pronto siente unos disparos que provenían del sector del aserradero. Puntualiza que a esa hora desconocía la

presencia de Carabineros de Chile al interior del fundo. Luego de los disparos se dirigió al sector del aserradero. Camino para allá, se encuentra con un grupo de Carabineros que traían a los hermanos, lo cuales venían en mal estado, golpeados y sangrando. Lo llamó uno de los Carabineros y le dijo que le iba a cortar la cabeza con un machete y le pegó un culatazo. Luego de eso se los llevaron, desconoce con qué destino. Fundamenta que no pudo identificar a ningún carabinero.

5. Armando Pezo Medina, quien depone a de fs. 638 a fs. 640 (Tomo II) y a fs. 1496 (Tomo IV). En lo pertinente de sus dichos de fs. 638 a fs. 640 (Tomo II), aduce que vivía al interior del fundo, junto a su esposa Haydee Fernández Barra, y sus hijos menores de edad en esa época (3 niños). El caso es que el entre los días 5 o 15 del mes de octubre de 1973, llegó al fundo una patrulla de alrededor de 15 Carabineros a cargo de un capitán de apellido Godoy de la Comisaría de Río Negro juntaron a todos los trabajadores, alrededor de 25 personas y los dejaron en el suelo con las manos en la cabeza. En el intertanto él se encontraba trabajando en el monte e iba bajando con dos carros de madera. Al acercarse a alrededor de 70 metros de distancia, dispararon al aire y le ordenaron acercarse a ellos, con las manos en la cabeza, lo cual hizo. Uno de los carabineros dijo: “uno de ustedes se va a levantar” y lo nombró a él, cuando se paró, iba llegando un tractor cuyo chofer era don Alejo Barría y su hijo Guido Barría. Los hicieron bajar, los carabineros le hicieron sacarse la ropa a Guido, mientras lo golpeaban con los fusiles. Mientras tanto se dirigía a su casa que estaba al interior del fundo en compañía del carabinero de apellido Ovando, al cual conocía de niño y el capitán Godoy, ellos sabían que los hermanos Barría vivían al lado de su casa y comían ahí también. Llegaron a su casa y le pidieron un revolver de su propiedad. Le sacaron las balas y se lo llevó a Godoy. Además revisaron la pieza donde dormían los hermanos Barría. Aclara que esa fue la segunda ocasión en que fueron carabineros a su casa, ya que previamente habían revisado la casa en presencia de su esposa, ese día. Anexa que Alejo Barría tomaba pensión en su casa, junto con Guido y Héctor. Al percatarse de la presencia de Carabineros, al interior del fundo, su esposa señaló que Héctor le dijo que los iban a buscar presos, por lo que en una primera instancia huyó hacia el monte y luego se entregó a la patrulla. Esa fue la última vez que los vio con vida.

6. Pedro Segundo Soto Godoy. Depone de fs. 1109 (Tomo III) con copia a fs. 1594 (Tomo IV), fs. 1142 (Tomo III) copia a fs. 1593 (Tomo IV), fs. 1156 (tomo III), fs. 1449 (Tomo IV), fs. 1559 a fs. 1560 (Tomo IV), fs. 1566 a fs. 1568 (Tomo IV), fs. 1584 a fs. 1585 (Tomo IV), fs. 1622 (Tomo IV) y de fs. 1680 (tomo IV). En lo pertinente de sus dichos precedentemente referidos acota que en el mes de octubre de 1973 integró una patrulla de carabineros al mando del teniente Godoy, en la que estuvo formado por los carabineros, Alberto Oyarzún, Sergio Aguilar, Rene Alvarado, José Rómulo Catalán Oyarzún, quienes detuvieron en Riachuelo a los hermanos Barría Bassay, miembros del partido comunista y conocido activistas políticos. Precisa que llegaron al sector como a las 14:00 horas, en un campo donde funcionaba un banco aserradero. Agrega que en el lugar, el Mayor ordena detener a "Tito" Barría, cosa que así sucede e inmediatamente es subido a uno de los vehículos. Luego de esta primera detención, el Mayor ordena la búsqueda de su hermano Guido, por lo cual se realiza una búsqueda, que arroja resultados positivos al cabo de media hora. Añade que Guido es subido al vehículo junto a su hermano Tito. En el vehículo donde estaban los detenidos se sube el Mayor junto al Teniente Godoy, iniciando viaje en dirección a la Segunda Comisaría de Río Negro. Comenta que, por su parte, junto a los demás Carabineros abordaron el otro vehículo, también para dirigirse a la unidad. Divulga que transitaban por caminos diferentes, por lo cual ellos llegaron a la Comisaría como a las 18:00 horas, ocasión en la cual sintió la voz de los hermanos Barría Bassay, que estaban detenidos en los calabozos. Al día siguiente, a las 8:30 horas, al ingresar a su servicio de turno, se percató que en la unidad no estaban detenidos los hermanos Barría Bassay, por lo cual preguntó por el Mayor Schernberger, pero el funcionario que estaba de guardia le informo que había salido temprano en un vehículo, junto al Teniente Godoy, el Cabo Teylorl y el Carabinero Oyarzún, presumiendo que este grupo de funcionarios salió con los hermanos con destino desconocido.

7. Robert Santiago Teylorl Escobar declara de fs.973 a fs. 975 (Tomo III), fs. 919 a fs. 922 (Tomo III), fs. 1.573 (tomo IV), fs. 1.586 (tomo IV), fs. 1.589 (tomo IV), fs. 1.590 (tomo IV), fs. 1.595 (tomo IV), fs. 1.604 (tomo IV), fs. 1.620 (tomo IV), fs. 1.623 (tomo IV), fs. 1.633 (tomo IV) y de fs. 1.670 (tomo IV). En lo pertinente de sus dichos, respecto a la declaración de fs. 461, aclarar que siempre ha hablado

de un solo hermano, del otro no tiene la menor idea que paso con él. En la detención participaron el Mayor Hans Schernberger, el Teniente José Godoy, el Suboficial Catalán, que era el chofer, el Suboficial Alvarado, el Cabo Pedro Soto y los Carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún. A su consulta, Quilaqueo estaba arriba de la camioneta cuando tiraron a Guido Barría Basay al rio. Respecto de la declaración de fs. 551 a fs. 553, deja en claro que cree que al otro hermano lo tiraron al rio al igual que su hermano Guido, pero ignora que paso con él realmente. A su consulta, Guido Barría Basay fue el que los acompañó a la Cordillera, Héctor se quedó en la Comisaría. Guido iba con una capucha, no vio su rostro. El acuartelamiento grado uno significaba que debía estar en el cuartel, pero a veces uno hablaba con el jefe para ir a la casa porque había niños pequeños, siempre debía pedir permiso a pesar del acuartelamiento. Después que tomaron detenidos a los hermanos Barría Basay se fue a la casa. Habla que respecto de Hans Schernberger este funcionario era de la Segunda Comisaría, al igual que José Godoy, el Suboficial Catalán y Alvarado, el Cabo Pedro Soto era chofer de la Segunda Comisaría, al igual que Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún. Respecto de lo mismo, el Tribunal le pregunta respecto a Pablo Araya, Osvaldo Quilaqueo, Alfonso Vargas Gallardo, Rómulo Catalán, a quienes sindicaba como aprehensores de los hermanos Barría. El Tribunal le lee lo declarado a fojas 551, en lo pertinente, a fin de que señale ¿Quién conducía esos vehículos.? Responde que de la Comisaría de Río Negro a Riachuelo eran Rómulo, Catalán, Alarcón o Oyarzún. Oyarzún andaba. Estaban a cargo de las interrogaciones los Jefes, es decir, los que ha nombrados. No recuerda que hubiera detenidos pertenecientes a otras unidades. A su consulta, sobre si se aplicaron tormentos a los detenidos, lo único que recuerda es el calabazo, es decir, que estén desnudos en los calabozos. El Tribunal le lee la siguiente declaración prestada por Luis Alberto Oyarzún Arriagada, que rola a fs. 457 de causa rol 2182-98, que se tuvo a la vista. Musita que don Luis Alberto Oyarzún mintió, porque él nunca fue careado con su persona. A su consulta, no se le aplicaba golpes de culata. Describe que Luis Alberto Oyarzún era prepotente. Recalca que la dotación de la Comisaría de Río Negro no era tan grande, debían quedar dos personas. No vio a ninguno al interior de la Comisaría, Guido Barría Basay estaba en la camioneta tapado con sacos, amarrado de manos, tapado por completo, boca abajo. En esa época solo estaban

detenidos los Hermanos Barría Basay. Funda que Guido Barría Basay cuando iba a la Cordillera con ellos, iba al anca del Caballo y no iba caminando, el señalaba lo que sabía y Pedro Soto como conocía la zona, él era el Vaqueano, dirigía a la patrulla. Respecto a lo acontecido con Guido Barría Basay, se lo comentó a su esposa. Hace presente que se retiró antes de tiempo porque estaba saturado. A su consulta, los que pueden dar cuenta a la Fiscalía Militar sobre lo pasado con los hermanos Barría Basay, son los altos mandos. Cuenta que fueron los familiares a la Comisaría a preguntar por los hermanos Barría Basay. Reconoce haber participado en la detención de los hermanos Barría. En segundo lugar, los hermanos Barrías fueron llevados a la Comisaría esposados, a lo que declara que uno sí. Deben haber quedado en calabozos diferentes los hermanos Barría. En cuarto lugar, usted declara que se fue a su casa después de la detención de los Hermanos Barría Basay, a lo que declara que sí. Depone que volvió a la Comisaría al otro día de ocurrida la detención de los Hermanos Barría Basay. Dice que el mayor le ordenó ir a la camioneta donde estaba Guido Barría. Declara que Quilaqueo el que estaba custodiando a Guido. Reconoce que fueron al fundo la campana y parece que llegaron al Río Negro. Especula Quilaqueo bajo de la camioneta a Guido. Anexa que el mayor dio la orden de tirar a Guido al río, inclusive andaba con un cuchillo, además al regresar al lugar el mayor dijo que nadie hablara. En esos días los hermanos Barria eran los únicos detenidos en la Comisaría, con posterioridad llegaron más detenidos. No recuerda que haya habido participación de civiles o militares en la detención de los hermanos Barría. Ignora el motivo de la detención, quien dio la orden de detener a los Hermanos Barría Basay, no lo sabe los escribientes recibían las ordenes, recuerda al escribiente de apellido Pacheco, la información se le pasaba al Jefatura. No sabe lo acontecido con Héctor Barría Basay. Destaca que en el mes de octubre de 1973, estando de servicio en la Comisaría de Carabineros de Río Negro, donde servía, recibió una orden del mayor Han Schernberger, jefe de la unidad, de acompañarlo a una diligencia que se realizaría fuera de la unidad. Le ordenó subirse a la camioneta IKA Renault, lugar en que se encontraba en la parte trasera, con su vista vendada y las manos amarradas a la espalda los hermanos Barria Bassay, se dirigieron hasta el fundo la campana, distante a unos 14 o 15 kilómetros desde la Comisaría, en ese lugar se internaron por un camino particular, y cuando

llegaron a la ribera del río Negro, el mayor ordenó detener la marcha y bajar a los detenidos del vehículo. Luego, los hizo pararse a un lado del cauce del agua y pretendió darle a cada uno un corte con un cuchillo a lo que le dijo que no los lesionara. Acto seguido, el mismo Hans Schernberger los empujó maniatados como estaban, a las aguas del río Negro, que eran caudalosas por efecto de los deshielos de primavera. Preguntado por el tribunal, para que diga si a los detenidos se les disparó, se les hicieron cortes con armas blancas o bien se les amarró algún elemento de peso a sus cuerpos, antes de lanzarlos al agua, el deponente responde: no, no les disparó, ni se les hicieron cortes, ni se amarró objeto alguno a los cuerpos de los Barría Bassay antes de que el mayor Hans Schernberger los lanzara a las aguas. Narra que se encontraban presentes el mayor Hans Schernberger, el teniente José Godoy, el suboficial Alvarado, el cabo Pedro Soto, que era el brazo derecho de los oficiales, y los carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún, quienes también habían participado en la detención de los hermanos Barría Bassay. Dice que está en condiciones de guiar al tribunal hasta el lugar donde fueron arrojados al río, Guido y Héctor Barría. Empero anexa de fs. 1586 (Tomo IV), desde ese lugar los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Río Negro, ambos hermanos, Guido y Héctor, fueron ubicados en calabozos separados. La Comisaría tenía tres calabozos. Al día siguiente llegó alrededor del mediodía, y recibió la orden de integrar la patrulla que se trasladaría hacia el sector cordillerano de Huellethue porque según lo que escuchó al mayor Schernberger, éste dijo que irían a ese lugar en busca de un extremista al parecer o posiblemente cubano, esta información se la habría proporcionado Guido Barría Bassay. Por esta razón Guido Barria participó de esta diligencia. Desde la Comisaría de Río Negro se trasladaron en vehículos de la unidad policial al lugar en que se realizaría el patrullaje. El procedimiento se inició en el fundo de propiedad del señor Martínez, y en ese lugar ya se encontraba el camión con los caballos, medio de transporte que utilizarían para realizar la búsqueda del extremista pues tenían que internarse en la cordillera, donde no era posible acceder con vehículos, ya que son senderos o huellas muy angostas, sólo puede pasar un caballo o un ser humano, se recorrió todo el sector cordillerano que ha mencionado, pero la búsqueda resultó infructuosa, ya que no encontraron a ninguna persona, en ese lugar existen viviendas, más bien eran unas construcciones tipo rucas, que son ocupadas por

las mismas personas que trabajaban en las maderas en el sector, en todo caso había rastro de que dichas rucas habían sido ocupadas recientemente. A esta diligencia fue llevado Guido Barría Bassay, en calidad de detenido, quien en todo momento tuvo que desplazarse a pie durante todo el trayecto al interior de la cordillera, nunca montó un caballo. Al regresar a la Comisaría del patrullaje, Guido permaneció en la camioneta conducida por el mayor Schernberger, tapado con sacos y maniatado de pies y manos a la espalda. Estando en la Comisaría de Río Negro el mayor le ordena acompañarlo en el vehículo, junto a Pedro Soto y se trasladaron hacia el fundo la campana distante a unos 15 kilómetros de la comisaría. Recalca que el detenido Guido iba siempre maniatado de pies y manos. Tirado en la carrocería. El mayor detuvo la camioneta en la ribera del río Esmeralda, sector Chahuilco y ordenó bajar al detenido. Ahí lo trasladaron hacia la orilla, de pies y siempre maniatado. Acto seguido el mayor Schernberger lo empuja al cauce del río, que en este momento iba con un fuerte caudal. Recuerda que Guido gritaba cuando el caudal se lo llevaba río abajo para luego desaparecer. Adopta que no se le disparó a la víctima. En otra de sus declaraciones refiere que seguramente la eliminación de Héctor Barría Bassay pudo haberla hecho en compañía de Pedro Soto, a cualquier hora del día ya que el capitán vivía en la misma unidad o comisaría. Agrega que el camión en que transportaron los caballos para el operativo Huelleshue eran de propiedad de don Fernando Aguirre según le comentó el carabinero Alberto Oyarzún Arriagada a quien se lo preguntó por cuanto fue él quien lo condujo. En lo pertinente a fs. 1633 a fs. 1635 (Tomo IV), es falso lo que dice el mayor respecto de haber entregado a los hermanos Barría al Fiscal Militar, en cuanto a qué pasó con el otro hermano, presume que el día anterior lo mataron, primero porque al otro no lo volvió a ver en la Comisaría, segundo porque se dio cuenta que cuando entraron al fundo la campana el mayor que manejaba conocía perfectamente el lugar.

8. Inés Patricia Navarro Martínez. Declaraciones De fs. 538 (Tomo II), fs. 632 a fs. 633 (Tomo II) y de fs.1547 (Tomo IV). En lo pertinente propone que en el año 1973, el día de la detención de Guido y Héctor, ella tenía 13 años, al pasar por las afueras del retén de carabineros de Riachuelo, en compañía de su hermana menor Ema Navarro, vieron un camión estacionado en las afueras del recinto policial. Este camión era un camión particular, con barandas de madera. En su interior en

la parte de la carga estaba lleno de personas dentro de las cuales pudo identificar a Guido y Héctor. Sólo los vieron, no conversaron, ya que como eran pequeñas se asustaron al ver esta imagen y se fueron corriendo a contarle lo que estaba pasando a su mamá. Anexa que cree era la camioneta de Raúl Guzmán y desde la carrocería de este vehículo los Carabineros bajaron a unas personas detenidas, pudiendo reconocer a Guido y al Tito Barria Bassay, los que venían amarrados de manos a la espalda, con alambre, ambos con ropa, los que ingresaron al Retén.

9. Eduvino Federico Schell Wetzel. Depone de fs. 1.490 (Tomo IV), fs. 1491 (Tomo IV) y de fs. 1.524 (Tomo IV). En lo pertinente destacar declaración judicial rolante de fs. 1524 a fs. 1525 (Tomo IV). Basa que es cónyuge de Lastenia Casas, estuvo trabajando algo de dos a tres años como administrador del fundo de don Julio Escobar, ubicado en el sector Riachuelo, para el año 1973. Había un aserradero en el predio y en él, una persona de apellido Barría trabajando como tractorista, tenía dos hijos este hombre, a quienes sólo conoció de vista, ignora sus nombres, pero esos jóvenes no trabajaron en el aserradero. En el año 1973, en el mes y fecha no recuerda, se encontraba en su domicilio almorzando cuando llegaron dos carabineros a su casa, querían hablar con él, le preguntaron si era el administrador del fundo, les contestó en forma afirmativa. Acto seguido le preguntaron si en el fundo trabajaban unos hermanos Barría. Respondió que el padre de ellos trabajaba en el aserradero. Así se dirigieron a dicho lugar, donde tomaron detenido a uno de los jóvenes y después se fueron a buscar al otro que parece andaba en un tractor. Es todo lo que vio. A su casa solo llegaron dos carabineros uniformados, ignora sus nombres. No sabe si andarían más carabineros ni en qué vehículos, ya que se quedó en su casa y no vio nada más. Días más tarde, el maestro Barría pasó a su casa a avisar que iba a ir a Valdivia a ver a sus hijos que estaban detenidos, para llevarles frazadas, nunca más volvió a saber nada sobre esos jóvenes, esto porque no recuerda si Barría se retiró del fundo. Él se fue a trabajar a otra parte.

10. Alfonso Huenchan Melillanca. Depone de fs. 1438 a fs. 1439 (Tomo IV), fs. 1493 (Tomo IV) y de fs. 1.527 (tomo IV). En lo pertinente destacar dichos del testigo de fs.1527 (tomo IV). Cuenta que conoció de vista a dos hijos de Alejandrino Barría, cuando estuvo trabajando en un aserradero que funcionaba en los riscos, de propiedad de don Julio Escobar. Esgrime que esta persona tenía arrendado un

bosque a don Eduardo Geisse y esos jóvenes estuvieron solamente unos días en el aserradero. Evidencia que, en el mes de octubre de 1973, la fecha exacta no la recuerda debido al tiempo transcurrido, pudo haber sido más o menos las 15:00 horas, llegó un grupo de Carabineros a quienes no conoce, a buscar detenidos a los hermanos Barría Bassay. Explaya que eran alrededor de 20 carabineros los que andaban a pie. Presume que tienen que haber dejado su vehículo en el camino, ya que el aserradero se encontraba como a dos kilómetros del camino. Narra que no vio que Carabineros haya golpeado o insultado a los hermanos Barría Bassay, solamente los tomaron detenidos y se los llevaron fuera del aserradero. Agrega que no ha vuelto a ver más a esos jóvenes.

11. Juan Carlos Soto Ampuero. Depone de fs. 611 a fs. 612 (Tomo II), fs. 636 a fs. 637 (Tomo II), fs. 1.463 (Tomo IV) y de fs. 1.495 (Tomo IV). Que en lo pertinente a fs. 611 a 612 (Tomo II) habla que vio cuando fueron los Carabineros, eran más o menos 8, pero los dos que conocía ya los indicó, pero no vio el momento mismo de la detención, porque los tiraron al suelo. Supo que los detuvieron por comentarios posteriores de los trabajadores y familiares. Desarrolla que le pegaron dos culatazos, a saber uno en el estómago y otro en la cabeza, un golpe cada uno de los dos Carabineros, de ellos, Alfonso Vargas está vivo, vive en Purranque. Desarrolla que los vehículos no los vio, porque ellos iban subiendo a pie para el aserradero. Descarga que no supo nunca más nada respecto de ellos, los conoció bien poco, al papá si lo conocía porque era tractorista. Destaca que los Carabineros no le dijeron por qué motivo los querían detener, es más lo amenazaron. Detalla que nunca ha denunciado nada, no ha reclamado nada, porque no tiene como verificar qué es lo que le han hecho, a él lo pillaron solo, incluso lo amenazaron con que lo iban a matar. Nada de eso ha reclamado, hasta ahora porque sabe que no hay peligro. Distingue que en ese tiempo estaba casado, le contó a su mujer que lo habían maltratado, pero no le dejaron marca en ninguna parte del cuerpo. Glosa que si ubicaba a don Germán Pasenau y respecto a los cuerpos de los Barría nunca supo nada de eso. Ensaya que iba almorzar cuando se encontró a los Carabineros, le preguntaron donde vivían los Barría y le dijeron que lo iban a matar (al deponente). Esgrime que no está dispuesto a denunciar y no tiene como comprobar los hechos.

12. Ricardo Alejandro Barría Ralil. Depuso de fs. 33 a fs.35 (Tomo I) y de fs. 264 a fs. 266 (Tomo I). En lo pertinente declara que es hijo de Guido Ricardo y sobrino de Héctor Alejandro, ambos de apellidos Barría Bassay, quiénes fueron detenidos el 16 de octubre de 1973 por personal de Carabineros de Río Negro, específicamente por el Capitán Hans Schernberger, el Teniente Hernán Godoy, los Cabos Pedro Soto, Robert Teylorl y Carabineros Alberto Oyarzún, Quintiliano Rogel y otros de apellido Catalán, Alvarado y dos más cuyos apellidos no recuerda actualmente. Todos estos datos los supo por su madre de crianza, que en realidad es su abuela de nombre Helvecia Bassay (fallecida), quién le narró desde su infancia cómo su padre a mediodía fue detenido por este grupo de Carabineros que llegó al aserradero donde trabajaba su padre y su tío Héctor, ubicado en el sector Los Riscos de la Comuna de Purránque. Ellos eran dirigentes del partido socialista, motivo por el cual deben haber sido detenidos. Desde la fecha de su detención nunca más supieron de su paradero, sin embargo, en la causa seguida en la ciudad de Santiago por estos mismos hechos hay declaraciones de Carabineros que confirman que su padre y su tío fueron asesinados. No obstante lo anterior, nunca dijeron en qué lugar fueron enterrados o qué pasó con sus cuerpos.

13. Inés Del Carmen Barría Bassay. Depone de fs. 39 (Tomo I), fs. 259 a fs. 261 (Tomo I), 559 a fs. 560 (Tomo II), fs. 701 (Tomo II) copia de fs. 778 (Tomo II), fs. 1.425 a 1.427 (Tomo IV), copia de fs. 1.544 a 1.546 (Tomo IV), fs. 1428 (Tomo IV), fs. 1.429 a 1.430 (Tomo IV), 1.431 a 1.433 (Tomo IV) y de fs. 1630 (Tomo V). En pertinente narra que es hermana de Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barria Bassay, quienes fueron detenidos el día 16 de octubre de 1973, en el aserradero Los Riscos, sector Rio Blanco, Riachuelo. Las detenciones de ambos fueron efectuadas por personal de Carabineros de Rio Negro y Riachuelo, entre los cuales se encontraba el entonces Teniente de la Comisaría de Rio Negro, Hernán Godoy Barrientos, era el jefe del grupo a cargo de la detención; también lo acompañaba; el Carabinero Luis Alberto Oyarzún Arriagada. Aproxima que no fue testigo de la detención de sus hermanos, pero si lo fue su padre don Pedro Barria Navarro, el vio junto a una veintena de personas cuando los Carabineros llegaron al aserradero perteneciente a Julio Escobar y se llevaron detenidos a sus hermanos, en dicha diligencia a nadie más detuvieron. Aquilata que su madre

Elvecia Bassay Alvear fue hasta Carabineros del Retén de Riachuelo, donde le negaron el hecho de haber sido detenidos sus hermanos. Tanto en las unidades de Carabineros de Riachuelo como de Río Negro, siempre se le negado a su madre la detención de Guido y de Héctor. Luego su madre peregrinó por la cárcel de Osorno y Comisarías de la misma ciudad, siempre con el mismo resultado negativo. Actualmente sus hermanos figuran en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como detenidos desaparecidos. Los hechos que rodearon la muerte de sus hermanos fueron investigados en el IV Juzgado Militar de Valdivia, proceso N°852/80, causa que terminó por sobreseimiento definitivo y también en el Juzgado de Letras de Río Negro, proceso N°24.365 M, la que también termino por sobreseimiento definitivo. Arguye que por dichos de un testigo que le pidió mantener reserva de su nombre, éste le afirmó que cuando él fue a sepultar a una mujer al Cementerio Indígena La Capilla del sector de Riachuelo, al cavar una fosa encontraron en su interior un cadáver envuelto en bolsas plásticas negras, sin ningún tipo de identificación en el lugar que indicara que existía un cuerpo sepultado en dicho sitio. Un conocido suyo llamado Alfredo Toledo, quien vive en Riachuelo, le comentó a un muy amigo de su familia llamado Ignacio Martínez Gómez, quien vive actualmente en Osorno y antes en Riachuelo, que habla escuchado en un asado decir al Carabinero Alberto Oyarzún, que a uno de los hermanos Barria Bassay lo habían sepultado en el Cementerio La Capilla de Riachuelo, que éste había sido muy valiente, pues cuando estaba cavando su propia tumba no había dejado de cantar el himno de su partido político.

14. Pedro Alejandrino Barría Navarro. Depone de fs. 1459 (Tomo IV), fs. 1477 (Tomo IV), fs. 1.484 a fs. 1485 (Tomo IV), fs. 1486 (Tomo IV), fs. 1487 (Tomo IV), fs. 1488 (Tomo IV), a fs. 1489 (Tomo IV), fs. 1491 a fs. 1492 (Tomo IV), y fs. 1504 (tomo IV). Respecto a lo cual se reiteran las siguiente, declaración judicial de fs. 1459(Tomo IV). Utiliza que el día 16 de octubre de 1973 estaban trabajando en el fundo El Bosque de don Julio Escobar, cuando llegó una patrulla de Carabineros al mando del Teniente Godoy, reconociendo a los Carabineros Pedro Soto, René Alvarado y un tal Catalán, quienes procedieron a detener en forma violenta a sus dos hijos, Guido y Héctor y después del golpearlos con la carabina los dejaron en slip y los metieron a unas camionetas que manejaban los hermanos Guzmán para llevárseles del lugar. Ignora el lugar al cual los trasladaron e ignora el paradero

actual de sus hijos. Advierte que su señora fue la que los ha buscado y preguntado por ellos, como también la que presentó la querrela de fs. 36. Adosa que la foto de fs. 32 corresponden a sus dos hijos. Agrega que sus hijos eran de la juventud socialista, deportistas y tranquilos. Que luego en diligencia de careo con Pedro Segundo Soto Godoy, de fs. 1484 a fs. 1485 (Tomo IV), en lo pertinente identifica al Carabinero con quien se le carea, como uno de los funcionarios que detuvo a sus hijos, porque estuvo varios años en Riachuelo y actualmente en Rio Negro. Detalla que no puede decir que grado tenía pues andaban en traje de campaña, pero él lo conoció como Carabinero. Ensaya que el día de los hechos venía con su hijo Guido Ricardo en tractor y al aparecer en la cuesta vieron varios Carabineros, como ocho o diez y dos de los cuales en cuanto los vieron, empezaron a disparar. Explaya que les hicieron un alto, los detuvieron y llamaron a su hijo. el cual se bajó del tractor y el policía presente le empezó a pegar con la carabina, le hizo sacar su ropa, quedando en slip, le siguió pegando hasta que llegó el Teniente y Soto dijo, este es Guido Barría llevándolo hacia los vehículos. Expresa que a su hijo Héctor Alejandro lo tomaron en otro lado, él no presencio su detención ni sabe quiénes lo hicieron. Se mantiene en sus dichos. Aún en diligencia de careo con José Rómulo Catalán Oyarzún de fs. 1486 (Tomo IV), en lo pertinente cuenta que conoce a Catalán ahí presente el cual en 1973 era Carabinero, pero no sabe el grado, si Cabo 1° o 2°. Esa persona formaba parte del grupo de Carabineros que aprehendieron a su hijo Guido. Advierte que lo conocía porque era de Rio Negro y continuamente él lo veía y sabía quién era. Destaca que se conocían desde hace diez o doce años, no eran amigos, pero sabía su nombre. Asevera que no sabe cómo puede decir que no estuvo en la diligencia de la detención, pues es una persona conocida y hubo testigos que lo vieron.

15. Elvecia Bassay Alvear. Depuso de fs. 217 a fs. 220 (Tomo I), 1.453 a 1.454 (Tomo IV), 1471 (Tomo IV), fs. 1.505 (Tomo IV) fs. 1.528 (Tomo IV) y de fs. 1533 (Tomo IV). Asevera en lo pertinente que es casada con Pedro Alejandrino Barría Navarro, de dicho matrimonio nacieron ocho hijos, entre ellos Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barría Bassay, de 19 y 27 años, al mes de octubre de 1973 y que a la fecha tendrían en consecuencia 24 y 32 años respectivamente. El primero de ellos trabajaba como obrero en el aserradero de Julio Escobar, cuyas labores realizaba en el fundo de Eduardo Geisse, ubicado en los Riscos, Riachuelo. El

segundo se desempañaba en la escuela N°2 de Río Negro, pero el día de su desaparecimiento se hallaba en dicho fundo, en razón de que el Teniente de Carabineros de Río Negro, José Hernán Godoy Barrientos lo había notificado de que abandonase el pueblo y que si lo veía lo detendría, habiéndole ella misma aconsejado que se fuese al lado de su padre y hermano en las labores madereras de Escobar. Ambos hijos eran militantes del Partido Socialista de Río Negro y Héctor Alejandro era delegado de los trabajadores en el S. U. T. E (Sindicado Único de Trabajadores de la Educación). Atestigua que la desaparición de sus dos hijos se produjo en las siguientes circunstancias: el día 16 de octubre de 1973 se encontraban en las labores del mencionado aserradero cuando a eso de las 12 horas interrumpieron en el fundo un grupo de Carabineros de la Comisaría de Río Negro, comandados por el Teniente José Hernán Godoy Barrientos e integrada entre otros, por el Cabo Pedro Soto, por los Carabineros Alberto Oyarzún, Sergio Aguilar, René Alvarado y otros cuyos apellidos son Duhalde, Barrientos, Rogel, Catalán. Los Carabineros llegaron en una camioneta de propiedad de los hermanos René y Raúl Guzmán, comerciantes de Riachuelo, quienes se quedaron a la distancia. Al parecer estos funcionarios iban en busca exclusiva de sus hijos, ya que apenas llegaron los tomaron detenidos, maltrataron y torturaron, lanzándoles puntapiés, culatazos y golpes, entre insultos y groserías, echándolos y arrojándolos al vehículo. Esta detención y malos tratos los efectuaron en presencia de los trabajadores del aserradero, entre ellos, el propio padre de sus hijos, Armando Pezoa, Juan Ojeda, Armando Nilián, Alfonso Huenchuán, Alejandrino Barrientos, Oscar Vargas, Clemente Chodín, Hayde Hernández, María de Catalán, Mercedes de Schell y otros obreros de los cuales sabe solo sus apellidos; Oyarzún, Angulo, Soto, pero son fáciles de ubicar, porque son del lugar. Los detenidos fueron llevados a Riachuelo, en donde estuvieron hasta el día 17 de octubre, para ser llevados a la Comisaría de Río Negro. Atina que fue a verlos al Retén de Riachuelo y después a la Comisaría, pero en las dos partes se los negaron e incluso en el Retén la amenazaron con proceder en su contra si seguía molestando. Desde esa instancia de la detención nunca más se volvió a ver a sus hijos. Así han pasado todos estos años sin que pueda ubicar sus hijos. Como antecedente declara que a principio de año recibió un papel escrito al parecer por su hijo Guido, que decía en forma muy escueta “estamos vivos. Tito tiene visita, yo

no”; estaba escrito con lápiz pasta, letra de imprenta, se hacía parecer este papel como que venía de la cárcel de Puerto Natales, pero al hacer averiguaciones allí no estaban sus hijos; después se le dijo que estarían en Punta Arenas, en la cárcel, pero tampoco se les ubicó allí. Y ahora último se le quiere hacer ver que estaría en Santiago, noticias que lejos de traerle una esperanza solo aparecen como una nueva forma de tortura espiritual y de dolor. Destaca que su marido estuvo presente en la detención de sus hijos.

16. Luis Eliser Barría Bassay. Depuso de fs. 262 a fs. 263 (Tomo I) y de fs. 267 a fs. 272 (Tomo I). Desarrolla en lo pertinente que en los días posteriores al golpe militar del 11 de septiembre de 1973 se reúne un grupo de agricultores alemanes en la casa de la familia de German Pasenau en el Fundo Río Blanco, comuna de Río Negro. Esta reunión tiene como objetivo reunir fondos en dinero para mandar a matar a los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, más otros dirigentes de la comuna que no eran del agrado de estos alemanes. De esta reunión se toma el acuerdo de que la familia Pasenau queda a cargo de recepcionar el dinero acordado y además, hacer los contactos para entrevistarse con los Carabineros oficiales, encargados de la 2° Comisaría de la comuna de Río Negro. De tal forma que la segunda quincena de septiembre de 1973, la familia Pasenau se contacta con los hermanos Raúl y René Guzmán para comenzar su macabro acuerdo. ¿Por qué se contactan con los hermanos Guzmán? Muy sencillo, éstos dos hermanos Guzmán son muy amigos del Carabinero Alberto Oyarzún A., y éste a su vez tenía muy buena relación con el Teniente de Carabineros Hernán Godoy Barrientos, perteneciente a la 2° Comisaría de Río Negro. Esta buena relación era debido a que una de las hermanas de Oyarzún tenía algunas relaciones amorosas con Godoy Barrientos. Dicho esto, se forma el puente perfecto entre la familia Pasenau, los hermanos Raúl y René Guzmán, Alberto Oyarzún y Hernán Godoy Barrientos, junto al Capitán de Carabineros Hans Schernberger. Hace presente que todos estos oscuros personajes fueron pagados por la familia Hans Pasenau, por todas las acciones efectuadas para preparar el plan. Es así que el día 16 de octubre de 1973 el mando de Carabineros de la 2° Comisaría de Río Negro, apoyado por la logística y vehículos de los hermanos Guzmán hacen su funesto operativo, previamente acordado y van a detener a los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, que se encontraban junto a su padre y trabajadores en un

aserradero de don Julio Escobar Winklen, ubicado en el Fundo Los Riscos del sector de Río Blanco en la comuna de Río Negro. Fueron detenidos y amarrados con alambres de púas de ahí tirados en el piso de la carrocería de la camioneta de los hermanos Guzmán; tapados con unas carpas y pisoteados por contingente de Carabineros. De allí fueron llevados al Retén de Riachuelo y posteriormente a la 2° Comisaría de Río Negro. Todo este operativo estaba a cargo del Capitán Schernberger y el Teniente Godoy. Hace presente que Carabineros siempre negó la detención de los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, tanto a su madre y familiares que lo andaban buscando. Descarga que Carabineros de Chile de la 2° Comisaría de la comuna de Río Negro trasladó a los hermanos Barría Bassay a diferentes sectores dentro de la comuna, para justificar en alguna medida la detención, todo según ellos, en busca de armas, armas que nunca existieron. Tanto fue que, en uno de los tantos traslados a diferentes partes, fueron llevados a la estación de ferrocarriles de Chahuilco, comuna de Río Negro y se internaron en el Fundo La Campana, de propiedad de la familia Engel. Y en un cobarde acto, el Teniente Godoy Barrientos preguntó ¿quién quiere matar a este?, indicando a Héctor Barría Bassay. A lo que el uniformado Robert Teylorl se ofreció y procedió a darle muerte con su arma de servicio a la persona indicada. Al día siguiente se dirigieron a la casa de la familia Pasenau los uniformados, Capitán Hans Schernberger, el Teniente Hernán Godoy, uniformados o Carabineros Pedro Soto, Robert Teylorl, Alberto Oyarzún, hermanos Raúl y René Guzmán. El plan estaba prácticamente conversado, pero llevaron los cuerpos de Héctor Barría y otro cuerpo, presumiblemente de un señor Sandoval del puesto de Río Negro. En ese momento Guido Barría todavía estaba con vida, pero no por mucho tiempo, pues una vez que la familia Pasenau les concede el dinero acordado a todos estos asesinos. Estos se fueron directamente a completar su siniestro plan. Se van a un lugar desconocido dentro del sector y Carabineros ordena a Guido Barría hacer una excavación en la tierra. Posteriormente le ordenan colocar en dicha excavación el primer cadáver. Luego le ordenan a Guido hacer lo mismo con el segundo cuerpo. Y cuando estaba colocado este cuerpo, el Teniente Hernán Godoy acribilló a balazos por la espalda a Guido Barría Bassay, según él, como un acto de valor frente a estos siniestros personajes. A continuación taparon los

cuerpos, quedando sepultados estos tres cadáveres en una sola fosa, quedando el cuerpo de guido en la parte superior.

17. Hans Eduart Schernberger. Depone de fs. 941 a fs. 944 (Tomo III), fs. 1088 a fs.1092 (Tomo III), 1.103 a 1.106 (Tomo III), copia de fs. 1.575 a 1.578 (Tomo IV), de fs. 1.107 a fs. 1.108 (Tomo III), copia de fs. 1.579 a fs. 1.580 (Tomo IV), fs. 1109 (Tomo III), 1.110 a 1.111 (Tomo III), copia de fs. 1.595 a 1.596 (Tomo IV), fs. 1.112 (Tomo III), copia de fs. 1.480 (Tomo IV), fs. 1.117 a 1.119 (Tomo III), copia de fs. 1.667 a 1.669 (Tomo IV), y de fs. 1.677 a 1.679 (Tomo IV). En lo pertinente reiterar dichos del encausado de fs. fs. 1.113 a fs. 1116 (Tomo III), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.624 a fs. 1.627 (Tomo IV). Explaya que el día 11 de septiembre del año 1973 se desempeñaba como Capitán de la Comisaría de Río Negro. El día 16 de octubre de 1973 en su calidad de Gobernador recibió la orden del Intendente de la zona, Teniente Coronel del Ejército, Lizardo Abarca Maggi, en el sentido que procediera a detener a los hermanos Barría Bassay, respecto de los cuales se había dictado un bando militar. No recuerda el delito. La orden fue verbal, no recuerda una orden por escrito. Llamó telefónicamente al Teniente Godoy Barrientos, quien se desempeñaba como Capitán Subrogante de la Comisaría y a cargo de la parte operativa, le dio la orden de trasladarse al aserradero, donde se encontrarían escondidos los responsables y procediera con el operativo. Fue así que, el Teniente Godoy se trasladó junto a un contingente de Carabineros a dicho sector y detienen a estas personas, trasladándolas al Retén de Riachuelos. Se comunica por radio, manifestándole que las personas ya se encontraban detenidas y que serían trasladadas al Retén, lugar donde él los esperaba. Posteriormente, ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Río Negro. A las 13:00 horas del mismo día de la detención le informa de los hechos al Intendente. El detenido Guido Barría manifiesta que en un sector de la cordillera habría armas, municiones y unos Cubanos, recibiendo de su parte la orden de trasladarse al sector con el detenido. Es así que, al día siguiente, 17 de octubre de 1973 el Teniente Godoy Barrientos, el detenido Guido Barría, el encartado y otros Carabineros que no recuerda sus nombres, se trasladaron a un operativo a la cordillera. Mientras tanto el otro detenido, Héctor, quedó en la Comisaría a cargo del personal de guardia. Consiguieron caballos y autos, pero no encontraron nada. Regresaron con el detenido a la Comisaría de Río Negro alrededor de las 14:00

horas. Ese mismo día le informó al Intendente de los acontecimientos, quien le ordena que ambos detenidos deben ser entregados a un procurador o asesor legal del Ejército de nombre Follert, a quien se los entregó alrededor de las 18:00 horas. Con posterioridad dicha persona pasó a desempeñar el cargo de Fiscal Militar y pertenecía a un grupo conocido como cien águilas, que estaba integrado por ex oficiales de las Fuerzas Armadas. A este grupo se les entregó armas, uniformes y autorización de detener personas. Los detenidos solo permanecen la Comisaría dos días, a saber 16 y 17 de octubre de 1973. El día 18 de octubre de 1975 por enfermedad de su madre se trasladó a Santiago, donde permaneció hasta el seis o siete de noviembre de 1975, después se realizaron sus funerales. En el acto, acompaña certificado de nacimiento correspondiente a su persona y certificado de defunción de su madre, Berta Valdivia Guerra. Funda que cuando aún se encontraba a cargo de la Comisaría recibió una orden que fue impartida a nivel nacional, en el sentido que debían ser destruidos todos los libros de registros de detenidos. Pese de que no se encontraba vencido el plazo reglamentario, por lo tanto, no se encontraran registros sobre estas detenciones. En cuanto a lo que se le consulta y que dice relación si en la Comisaría de Río Negro se encontrarían enterrados los hermanos Barría Bassay, su respuesta es que no. Justifica que permaneció a cargo de la Comisaría hasta fines de 1975 y durante ese periodo puede dar fe que no se exhumó ni inhumó ningún cuerpo. Si recuerda que los calabozos fueron cambiados de lugar, se trasladaron a la parte trasera de la Comisaría, donde se construyó un lugar para el forraje de los animales. Cree que tal vez no se logró encontrar los cuerpos de estos detenidos, ya que, según rumores de pasillo, Héctor Barría había sido lanzado al río Pilmaiquén por los Militares. Incluso en ese sector existe un monolito en recuerdo de varios detenidos desaparecidos que fueron encontrados en los márgenes de ese río. Que las declaraciones de Robert Teylorl son permanentemente contradictorias, sin fundamento, sin pruebas que las ampare, ya que carece de ellas; no existen testigos presenciales que avalen sus dichos. Pero si en el contexto de su declaración así el Tribunal lo considera, habría que asumir que Guido Barría habría sido lanzado por Teylorl a lo menos en alguno de los lugares que ha señalado. Reitera que no tiene ninguna participación en la muerte de estas personas, jamás dio la orden a Teylorl ni a ningún otro subalterno para asesinar, exhumar o inhumar

a ninguna persona. Esto se hace extensivo a la participación que le pueda caber en la desaparición de estas personas al Teniente de esa época, Hernán Godoy Barrientos, ya que ya que él era el Oficial que tenía a cargo la Comisaría, quien era un Oficial serio, acucioso, que debía cumplir con todas las funciones propias del cargo de Comisario. El encausado se desempeñaba con dedicación exclusiva en los primeros meses posterior al 11 de septiembre como Gobernador del ex departamento de Río Negro de la actual provincia de Osorno. Y reglamentariamente la custodia de los detenidos corresponde al personal a cargo de la guardia. Invoca que estas personas, los hermanos Barría Bassay solo permanecieron en la Comisaría el día 16 de octubre de 1973, aproximadamente desde las 13:00 horas hasta el día 17 de octubre del mismo año, hasta las 17:00 horas, en que fueron entregados al Fiscal Militar, como ya ha señalado. En cuanto a la participación del actual General, don Hernán Godoy, como consta en el proceso, sobreseído por la I. Corte Marcial y sentencia interlocutoria del Juzgado del Crimen de Río Negro, participó en su calidad de jefe de la patrulla que detuvo a estas personas, y participación en la rebusca de armamento, munición y algunos presuntos Cubanos. Él al hacer estas gestiones cumplía órdenes personas del encausado, las que a su vez eran las que había recibido del Intendente de la Provincia. En consecuencia, dentro del contexto del cumplimiento de estas órdenes, él no tiene responsabilidad directa, ya que era el único Oficial en la Comisaría que podía realizar esta parte operativa. Él tampoco participó en la entrega que se le hizo al Fiscal Follert, ya que en el furgón policial que fueron trasladados hasta el ingreso de Río Negro, donde el encausado lo esperaba con el vehículo de la Gobernación, cuando se produjo el intercambio de estos detenidos de Carabineros a la Fiscalía en presencia del practicante de la Comisaría, quien verificó el buen estado de salud de los detenidos. De ello quedó constancia en el libro de atenciones del practicante que lamentablemente por las razones anteriormente dichas, fue destruido. Interpreta que el Teniente de esa época Hernán Godoy vivía en la Comisaría junto a unos diez funcionarios solteros, ya que por disposición reglamentaria el personal soltero vivía dentro de la Comisaría. El encartado también vivía en el terreno de la Comisaría, pero dentro de una casa anexa.

B. Documentos.

1. De fs. 8 a fs. 10 (Tomo I), fotocopias de páginas pertinentes del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo 1, acompañado en la querella de Mahuad Segundo Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior de fs. 15 y siguientes, el cual señala que: El 16 de octubre de 1973 una patrulla de Carabineros de Río Negro detuvo en su lugar de trabajo a los hermanos: Guido Ricardo Barría Bassay, quien tenía 19 años, era obrero agrícola y militante socialista. Héctor Alejandro Barría Bassay, quien tenía 27 años, era auxiliar de la Escuela N°2 de Río Negro, delegado al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y militante socialista. El día indicado, una patrulla de Carabineros de Río Negro, compuesta por aproximadamente diez efectivos, llegó al aserradero donde trabajaban las víctimas y los detuvo ante varios testigos, llevándoselos en una camioneta. Desde ese momento no se vuelve a tener noticia alguna sobre el paradero y la suerte final de los detenidos. Es convicción de la Comisión que la desaparición de los hermanos Barría es de responsabilidad de agentes del Estado que incurrieron en violación a los derechos humanos. Son circunstancias de convicción las siguientes: que la detención se encuentre acreditada por testigos, que en un proceso judicial un funcionario de Carabineros reconoció la detención señalada, que fueron trasladados a la Unidad de Carabineros de Río Negro, que tras sus desapariciones no haya habido más noticias de los afectados y que ante los requerimientos de la Comisión a la autoridad policial no haya habido información oportuna y precisa.

2. Copia de sentencia definitiva dictada por don Alejandro Solís Muñoz, Ministro de Fuero, en causa rol 2182-98 "Episodio Río Negro" de 03 de mayo de 2004, rolante a fs. 45 y siguientes (Tomo I), en virtud de la cual se declara en lo pertinente que: "Que con el mérito de estos antecedentes, apreciados según las normas respectivas, constitutivos de presunciones judiciales que reúnen todos los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra legalmente acreditado en el proceso que el día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 12:00 horas, una unidad operativa de Carabineros a cargo del Teniente José Hernán Godoy Barrientos, bajo el mando del Mayor Hans Schernberger Valdivia, Comisario de la Comisaría de Carabineros de Río Negro y Gobernador del Departamento del mismo nombre, con participación del Sargento Quintiliano Rogel Alvarado, del sargento Rómulo Catalán Oyarzún, del cabo primero Robert

Santiago Teylorl Escobar y del cabo primero Pedro Segundo Araya Soto Godoy, detuvieron sin portar orden judicial alguna, desde el lugar de su trabajo en el aserradero del fundo “El Risco”, ubicado en Riachuelo de la comuna de Rio Negro, a los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo, Barría Bassay, personas que fueron conducidas desde ese recinto maderero hacia la Comisaria de Carabineros de Riachuelo y luego la de Rio Negro, donde fueron torturados e interrogados sobre armas que presumía escondían y que no se encontraron, para finalmente ser llevado Guido Ricardo Barria, por Schernberger Valdivia y Teylorl Escobar, hacia un sector del fundo La Campana, distante a unos quince kilómetros de la referida Comisaría, por haberse incinerado antes de tiempo los registros de ingreso y egreso de los detenidos, perdiéndose todo rastro de ambos hasta la fecha, sin que los privados de libertad hayan tomado contacto con sus familiares, realizando gestiones administrativas ante organismos del estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que consten, tampoco sus defunciones. Que estos hechos son constitutivos de sendos delitos de secuestro calificado, previstos en el artículo 141 del Código Penal, según el tenor de la norma antes de la modificación introducida por la ley 19.029, en virtud del principio de la no retroactividad de la ley penal y, por ende, sancionados con las penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados.”

3. Documentos remitidos por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a fs. 166 y siguientes (Tomo I), que se desglosa de la siguiente forma:

a. A fs. 168 (Tomo I), acta de nacimiento Guido Ricardo Barría Bassay, detallada precedentemente.

b. A fs. 168 bis (Tomo I), certificado de nacimiento de Guido Ricardo Barría Bassay, detallado precedentemente.

c. A fs. 169 (Tomo I), Carta enviada al General Director de Carabineros de Chile por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 02 de octubre de 1990, detallada precedentemente.

d. A fs. 171 y siguientes (Tomo I), Documentos del Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, “Detenidos desaparecidos”, que se desglosan de la siguiente forma:

i. A fs. 175 y siguientes (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 224 y siguientes (Tomo I), ORD. N°11478/16825 de la Jefatura Nacional de Extranjería y

Policía Internacional a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de fecha 11 de diciembre de 1990, en virtud del cual informa los movimientos migratorios de las personas consultadas, aduciendo que el resto de las personas consultadas no registran anotaciones de viajes (no registrando a las víctimas de autos).

ii. A fs. 205 y siguientes (Tomo I), ficha W-485, que indica que Guido Ricardo Barría Bassay, tenía 19 años de edad, era casado y tenía tres hijos, el menor de ellos, póstumo. Era empleado de correos y trabajaba también en el campo. Militaba en el Partido Socialista. Fue detenido con su hermano el día 16 de octubre de 1973 desde su lugar de trabajo, por Carabineros de Río Negro. Desde el momento de su detención, Guido Barría y su hermano se encuentran desaparecidos. Aproximadamente a las 12:00 horas del día 16/10/73 cuando los obreros del aserradero existentes en el fundo de Eduardo Gueisse se preparaban para almorzar, entre ellos los hermanos Barría Bassay y su padre, vieron llegar a una patrulla de Carabineros, compuesta por aproximadamente 10 efectivos, los que llegaron en una camioneta de propiedad de los hermanos René y Raúl Guzmán, comerciante de la región, quienes se mantuvieron a cierta distancia de los hechos. La patrulla de Carabineros detuvo inmediatamente a los hermanos Barría Bassay y solamente a ellos. Al resto de los obreros los obligaron a tenderse boca abajo, mientras golpeaban y maltrataban de hecho y palabra a los detenidos. Luego procedieron a lanzarlos violentamente dentro de la camioneta y los llevaron personalmente al Retén de Riachuelo, donde habrían estado hasta el 17/10/73, para luego ser trasladados a la Comisaría de Río Negro. En ambos lugares se les negó a los familiares la detención. De todos estos hechos, detención y maltrato hay testigos, pues se efectuaron en presencia de los trabajadores del aserradero, entre ellos, en lo pertinente, el propio padre de los detenidos.

4. Fotocopia de Hoja de vida de las siguientes personas:

a. A fs. 429 y siguientes (Tomo I), José Hernán Godoy Barrientos, que en lo pertinente señala lo siguiente: **1)** A fs. 438 (Tomo I), se señala que con fecha 3-III-972 asciende a Teniente Grado 3°, con fecha 2-II-972, según boletín oficial 2332, permaneciendo en la Prefectura de Osorno, pasando de la 1era., a la 2da., Comisaría de Río Negro. **2)** A fs. 439 (Tomo I), se señala que con fecha 16-II-974 *en conformidad al Radio N°657 Digcar. P. I. del 27-II-974, se traslada con derechos*

reglamentarios, desde la 2da. Comisaría Río Negro a la Tenencia Purranque como Jefe”. Presentándose en su nueva unidad el 2-III-974.

b. A fs. 456 y siguientes (Tomo I), Hans Eduart Schernberger Valdivia, que en lo pertinente señala lo siguiente: **1)** A fs. 468 (Tomo I), se señala que con fecha 26-I-973 por resolución exenta N°9 de 24-I-973 es trasladado a la 2da., Comisaría de la Prefectura de Osorno, como Comisario, a contar del 16-I-973, radiograma Kardex P.1. N°292 B70. 2384-52196. Presentando a dicha unidad con fecha 10-III-973, tal como consta a fs. 469 (Tomo I). **2)** A fs. 469 (Tomo I), con fecha 22-I-1974 se le designó en la Fiscalía Militar de Carabineros de Osorno, en reemplazo del titular abogado asesor Fredy Rosas Arriagada, según Decreto 16 de 12-II-974.

5. A fs. 902 y siguientes (Tomo III), relación del personal de Carabineros de Chile, que se desglosa de la siguiente forma:

a. A fs. 902 y siguiente (Tomo III), contiene la dotación de la Segunda Comisaría “Río Negro” entre los meses de marzo a diciembre de 1973, entre los que se encuentran: **a)** En el numeral 2, el Capitán Hans Eduart Schernberger Valdivia. **b)** En el numeral 3, el Teniente (O) José Hernán Godoy Barrientos.

b. A fs. 908 (Tomo III), contiene dotación del Retén “Maipue” entre los meses de marzo a diciembre de 1973, entre los que se encuentran en el numeral 4, el Carabinero Luis Alberto Oyarzún Arriagada.

6. A fs. 1.469 (Tomo IV), ORD. N°2011/182/15 de fecha 22 de junio de 1979, remitido por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile al Primer Juzgado de Letras de Osorno, en virtud del cual justifica que: En atención a su oficio s/n de fecha 29 de mayo ppdo., mediante el cual se ordena informar si se registran egresos del país y si han sido requeridos para impedir la salida del país, en lo pertinente de Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barría Bassay. Dicho informe concluye que consultados los archivos de la sección control internacional de Frontera a contar del día 1° de enero de 1978 a la fecha, ninguna de las personas mencionadas registra anotaciones de viajes. Asimismo, consultado los archivos del Departamento de Informática Policial de la Institución, ninguna de las personas señaladas registra impedimentos de salida del país.

10°) Que de los propios dichos del acusado Oyarzún Arriagada se puede desprender que el día 16 de octubre de 1973 vio a Guido Barria Bassay detenido

al interior de un calabozo del retén, quién le aseguró haber sido golpeado. Continua, le informaron que había un operativo al interior del sector Millantue, era un patrullaje montado. Este patrullaje se inició alrededor de las 5 de la mañana del día 17 de octubre, participando alrededor de 20 carabineros a caballo, los cuales habían sido llevados al campo de un señor Martinez, en el sector de Millantue, por lo cual se desplazaron en vehículos al lugar y de ahí a la cordillera a caballo, al sector que había señalado Guido, puesto que allí se presumía que había gente de la Unidad Popular oculta. Cabe destacar que el encausado no niega haber participado del operativo hacia la cordillera.

11°) Que como se aprecia los hechos de la detención, apremios y secuestro de los hermanos Barria Bassay son semejantes a los que ha determinado don Alejandro Solís Muñoz, Ministro de Fiero, en sentencia de causa rol 2182-98 “Episodio Río Negro” de 03 de mayo de 2004. Toda vez que la absolución dictada en esa causa es por aplicación de la institución de la prescripción, como consta a fs. 141 y siguientes (Tomo I). Ello es sin perjuicio de este nuevo proceso que debe ponderar en conformidad a la ley, los nuevos elementos probatorios para de esa forma establecer los hechos del caso.

12°) Que del conjunto de elementos probatorios antes aquilatados y relacionados generales y específicos testigos directos, indirectos y documentos antes señalados, como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 1950 a fs. 1983 (Tomo V)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallado y relacionado, llegar a la convicción:

1. Primero: que han existido los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado en las personas de Héctor Alejandro Barria Bassay y Guido Ricardo Barria Bassay, previstos y sancionados en los artículos 148, 150 N°1 y 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícitos en su carácter de lesa humanidad.

2. Segundo: que en estos ilícitos le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **Luis Alberto Oyarzún Arriagada**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

13°) Declaración indagatoria de **HANS EDUART SCHERNBERGER VALDIVIA** (38 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 941 a

fs. 944 (Tomo III), fs. 1088 a fs.1092 (Tomo III), 1.103 a 1.106 (Tomo III), copia de fs. 1.575 a 1.578 (Tomo IV), de fs. 1.107 a fs. 1.108 (Tomo III), copia de fs. 1.579 a fs. 1.580 (Tomo IV), fs. 1109 (Tomo III), 1.110 a 1.111 (Tomo III), copia de fs. 1.595 a 1.596 (Tomo IV), fs. 1.112 (Tomo III), copia de fs. 1.480 (Tomo IV), fs. 1.117 a 1.119 (Tomo III), copia de fs. 1.667 a 1.669 (Tomo IV), y de fs. 1.677 a 1.679 (Tomo IV).

En **declaración extrajudicial** de fecha 20 de septiembre de 2018, rolante de **fs. 941 a fs. 944 (Tomo III)**. Explica que en el mes de marzo de 1973 se hizo cargo de la 2ª Comisaría de Río Negro, de la provincia de Osorno, con jurisdicción en las comunas de Río Negro y Purránque, en esa época era Capitán de Carabineros. Anexa, a raíz de los sucesos de septiembre de ese año asume el gobierno militar, el Comandante del Regimiento de Osorno, de apellido Abarca, asume como Intendente militar de la provincia de Osorno. En ese contexto le ordenan que asuma con dedicación exclusiva la Gobernación de Río Negro en el contexto de la antigua división administrativa del país, dejando la parte operativa a cargo de un Teniente de apellido Godoy. El encausado debía viajar a Valdivia, Osorno y Santiago, con el objeto de recibir instrucciones para la instalación del nuevo gobierno y en lo que a él compete a la jurisdicción que le correspondió. En fecha que no recuerda, el Comandante Abarca, Intendente y superior jerárquico, le ordena detener a petición del Fiscal Militar de apellido Follert, por estar imputado por infracción a la ley de armas e intento de violación a un familiar de él, en una toma de fundo que ellos habrían participado. Le indica que según información que obra en su poder, proporcionada por un agricultor de apellido Geisser, estas personas se encontraban escondidas en el sector de Los Riscos. Atestigua que ordenó al Teniente Godoy su detención. Ello se realizó y los detenidos fueron trasladados al sector de Riachuelo, fue informado de ello, allí los conoció por única y primera vez, ordenando seguir el protocolo policial, trasladarlos a la Comisaría de Río Negro, registrarlos en libros y dar cuenta a la autoridad que ordenó su detención. Mientras el encartado siguió con sus actividades administrativas. Después fue informado que los detenidos habían sido entregados al Fiscal Follert, quien incluso tenía un fundo en el sector de Río Negro. De estas personas nunca más se supo. Hubo investigaciones judiciales en los años 1979 y 1981, sin resultados positivos. Hace presente que los libros de los registros de la ocurrencia

de estos hechos, no obstante, de tener un plazo reglamentario, por instrucciones del alto mando institucional fueron incinerados antes de tiempo, además de ello mucho de los participantes directos de estos hechos, como el Comandante del Regimiento, el Fiscal Follert, Carabineros, el practicante Araya, Quilaqueo, fallecieron. Atina que, en el año 1998 se interpuso una querella por secuestro calificado, causa rol 2182-98, ello fue investigado en primera instancia por el Ministro, señor Guzman, el que pasado un tiempo declinó su competencia y pasó lo antecedentes a la Justicia Militar, ello fue apelado y la causa volvió al Ministro Solís, quien dictó sentencia condenatoria. La segunda sala de la Corte Suprema con fecha 27 de diciembre del año 2007 en rol 392.505, invalidó dicha sentencia y absolvió a los acusados. Como una forma de cooperar al señor Ministro hace entrega de dos legajos, uno enumerado del 1 al 8, con sentencia de invalidez y 1 al 18, con sentencia de reemplazo. Blasona que se está en presencia de cosa juzgada y sentencia ejecutoriada. Barbulla que la investigación de homicidio calificado se cruza en algunos aspectos ya sancionados por la Excelentísima Corte Suprema, por lo que no cabría insistir doblemente en ellos, ya que los hechos fueron investigados los años 1979 y 1981, no hubo resultados y en la causa extinguió la responsabilidad penal. En relación a los hechos que afecta a los hermanos Barría, basa que por informaciones de prensa hace años atrás, se informaba que familiares de los señores Barría Bassay habían exhumado restos humanos que aseguraban que eran de sus parientes, a raíz de ellos habrían interpuesto las querellas correspondientes, debido a la certeza que tenía que las osamentas encontradas eran de sus familiares. Tiene entendido que se iniciaron acciones judiciales de investigaciones y exámenes a los restos óseos, los que habría determinado después de un análisis en Estados Unidos que estas osamentas correspondían al siglo 19. En estas circunstancias, de ser cierta la información no se habría acreditado el cuerpo del delito, en este caso el cadáver para la querella que se interpuso, por lo que no sabe cómo podría colaborar a la investigación. Colige que de ser falso esto hecho y el Tribunal tiene acreditado el homicidio, cosa que desconoce, comunica que en forma de colaboración a la investigación no ha tenido participación como auto material, intelectual, cómplice o encubridor, en ninguna situación que haya afectado a los hermanos Barría Bassay. Solicita al Tribunal incorporar en la investigación un certificado de salud,

que da cuenta de varias enfermedades que padece en particular, la artrosis de ambas caderas.

En **declaración judicial** de fecha 11 de abril de 2019, **rolante de fs. 1.088 a fs. 1.092 (Tomo III)**. Ratifica las declaraciones prestadas en causa rol 2182-98 episodio Río Negro, por Héctor y Guido Barría Bassay, que se tuvo a la vista y que rolan de fs. 506 a fs. 509, fs. 517 a fs. 518, fs. 564, fs. 565 a fs. 566, fs. 829 vta., fs. 1.193 a fs. 1.196, fs. 1.675 a fs. 1.677 de dicho proceso. Además, la que rola de fs. 941 y siguientes de la causa rol 1-2016 de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Respecto a Sandoval Vásquez, comenta que él fue detenido por Carabineros y entregado a la Fiscalía e incluso esto salió en la prensa y después nunca más se supo de este caballero. La persona fue detenida por Carabineros, no recordando de qué dotación eran, pero lo cierto es que después fue entregado a la Fiscalía Militar. Cuando se detuvo a los hermanos Barría Bassay, el señor Follert era abogado, tenía un fundo grande en Purranque y hubo dos Carabineros que fueron inquilinos de él. Aunque no recuerda quienes eran estos Carabineros, pero pertenecían a la dotación de la 2° Comisaría de Río Negro. Habla al Tribunal que hay un lapso de tiempo que no estuvo en la jurisdicción, porque su madre estaba enferma y el encausado viajó a Santiago. A la consulta del Tribunal sobre quien le requería la información sobre los Barría Bassay, conjetura que no estaba muy al tanto de la parte policial, porque eso lo lleva la Comisaría. Ahora, el protocolo es que primero deberían haberlo pasado al hospital para ver las lesiones y luego fue entregado al Fiscal Militar. Cimentando que cuando requirió información le dijeron que los protocolos se habían cumplido. Sobre aquella parte de fs. 517, efectivamente vio a los detenidos, pero no recuerda que le haya entregado los detenidos a Follert. Estos efectivamente eran los hermanos Barría Bassay y en esa ocasión el encausado estaba con el Carabinero Quilaqueo, el practicante, entre otros que no recuerda. El Tribunal le consulta ¿por qué no dejó constancia en los registros que corresponden, según indican los protocolos de Carabineros.? A lo que responde que en esa época todo se anotaba en libros, pero también había un reglamento que indicaba la duración de los registros. Lamentablemente cuando declaró ante el Ministro Guzmán, le indicó que como el año 1973 - 1974, llegó una orden a nivel nacional, como mensaje por teléfono, donde se ordenaba que todos los libros, no obstante no estar dentro de la vigencia de ser destruidos, debían ser

destruidos. Entonces, todos los libros de la época fueron destruidos para que después no quedara constancia y que cuando se investigaran todas las cosas irregulares de la época no se pudiera saber. Quién dio la orden y por qué, no lo sabe. Agrega que cuando declaró ante el Ministro Guzmán en la diligencia de careo con Robert Teylorl, éste último dijo que su abogado lo había instruido de declarar sobre los hechos con Guido Barría, sólo para que hubiera una sentencia por homicidio y no por secuestro. Hace presente que la Comisaría de Río Negro tenía pocos recursos. Después del 11 de septiembre se ordenó requisar vehículos para hacer labores propias. Recuerda que en la Comisaría había unos furgones verdes que eran del SAG, se requisaron algunos vehículos. Había una IKA Renault. Decanta que como gobernador tenía un conductor de apellido Alvarado y se movilizaban en un Ford Bronco. Para el uso policial en la Comisaría había un vehículo amarillo. Además, de manera particular, tenía un Fiat 600. En resumen, hubo como 4 o 5 vehículos decomisados. Una de las camionetas que se usaron para detener a los hermanos Barría era de los hermanos Guzmán. Cree que en el sector de Riachuelo, un sector muy conflictivo, había un grupo de los Cien Águilas y un señor Belens y ellos eran muy organizados, era gente vinculada al Ejército. Muchos de los detenidos desaparecidos en la zona de Río Negro que fue lanzada al río Pilmaiquén o los Lagos. Se dice que las personas luego de ser detenidas fueron trasladadas en aviones piloteadas por estos integrantes de los Cien Águilas. Revela que en el Regimiento, sea en almuerzos o actividades sociales se comentaban estos hechos y presume que ellos tuvieron que ver con los hermanos Barría Bassay. El Tribunal le pregunta por qué en su declaración de 07 de febrero de 1980 no le informó al Juzgado de la época sobre los hechos mencionados en sus declaraciones el año 2002 y 2003, es decir, sobre los hermanos Barría Bassay y la camioneta facilitada por los hermanos Guzmán, a lo que responde que no lo recuerda, es decir, le estaban preguntando por la detención de los hermanos Barría Bassay y no participó en eso. El Tribunal le consulta por qué los detenidos Barría Bassay fueron entregados en otros, en un sector que no corresponde a la Comisaría de Río Negro, sino en un paso nivel de Río Negro, que está en el centro de la ciudad, según señala en sus declaraciones, respecto de lo cual delibera que es una pregunta que no podría responder. Alvarado, Araya, Quilaqueo, Aníñir fueron quienes entregaron a los detenidos. Insiste que no supo nada de los

detenidos, no los entregó, sólo dispuso su entrega según instrucciones. Dice que el lugar donde se entregaron los detenidos a Follert fue dentro de la ciudad, pero no en la Comisaría. No sabe por qué fue en ese lugar. El tribunal le consulta nuevamente sobre la entrega de los detenidos a una patrulla militar, respecto de lo cual el encartado responde que vio a los detenidos en el Retén de Riachuelo y le parece que en la camioneta del señor Guzmán se trasladaron a los detenidos. La verdad no se fijó muy bien en lo que declaró en esa oportunidad, es decir, en la declaración de fs. 1.193 y siguientes de la causa 2182-98 que se le ha leído. Insiste que no entregó a los detenidos a Follert. Lo que quiso decir en esa oportunidad es que supo con posterioridad, cuando preguntó por el procedimiento, que esas personas habían sido entregadas por el practicante y otros Carabineros a una patrulla militar, pero no ha participado en ello. Respecto al documento de fs. 1.504, que se le ha leído y exhibido, difunde que la firma corresponde a la suya. Divulga que las órdenes judiciales las diligencia el personal de Carabineros de la unidad. Desde el punto de vista reglamentario quien se responsabiliza de las órdenes judiciales es la persona que la realiza, a él solo le corresponde dar el visto bueno desde el punto de vista reglamentario. No puede averiguarlo que el funcionario ha hecho, solo firma. Desarrolla que efectivamente después del año 1973 se declaró un estado de sitio y un acuartelamiento, es decir, que los funcionarios deben quedarse en el Cuartel y sólo deben salir para cosas puntuales. En el departamento de Río Negro, donde había una Tenencia y varios Retenes, cada Retén quedó funcionando como correspondía, no hubo un repliegue de funcionarios a las unidades superiores. Ellos cumplieron su acuartelamiento en la Tenencia. Recuerda que las familias iban a las unidades a dejarles comida o ropa. No recuerda cuanto duró el acuartelamiento, pero en grado 1 duró más de un mes, no recordando exactamente cuánto tiempo. En esas condiciones todos debían estar permanentemente en la unidad que corresponda. Cree que hubo detenidos después del 11 de septiembre de 1973 en la Comisaría de Río Negro, porque los bandos así los disponían. Respecto a los detenidos, cuando hay en la unidad son de responsabilidad de quien está en la guardia. Cuando hay detenidos en un calabozo se debe disponer un funcionario de Carabineros para que cuide el calabozo. La Llave del calabozo está a disposición del Suboficial de guardia. Según su recuerdo, después del 11 de septiembre de 1973 no hubo restricciones

para que los funcionarios fueran al sector de los calabozos. Respecto al caso de Héctor Ulloa, desconoce todo antecedente, especialmente sobre supuestos apremios ilegítimos mientras estuvo detenido. Detalla que en esa época estaba en comisión de servicios y quien quedaba al mando era el Teniente y el superior era el Prefecto. El encartado se desentendió de toda la parte operativa después del 11 de septiembre de 1973. El Tribunal le consulta por qué se tuvo que constituir en Riachuelo si lo habían dispuesto en funciones que no eran operativas, a lo que contesta que, como la orden venía del Intendente y estaba involucrado el Fiscal, debía cumplir la orden personalmente, informándole lo que se hizo.

En **declaración judicial** de fecha 02 de mayo de 2002, rolante de **fs. 1.103 a fs. 1.106 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra de **fs. 1.575 a 1.578 (Tomo IV)**. Glosa que no tuvo ninguna participación en los hechos investigados, por cuanto en la fecha que se produjo el pronunciamiento militar, esto es, el 11 de septiembre de 1973 fue designado en el Departamento de Río Negro, provincia de Osorno como Gobernador. Se dedicaba exclusivamente a la parte administrativa y en la parte operativa estaba a cargo el oficial más antiguo, que esa fecha era el Teniente Hernán Godoy Henríquez. Ensaya que estuvo desempeñándose como Gobernador Departamental específicamente en el ex –departamento de Río Negro en la Provincia de Osorno desde el mes de septiembre de 1973 hasta el mes de diciembre de 1975, fecha en que fue trasladado como alumno a la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros en la ciudad de Santiago. La zona del sector de la Comisaría era una zona netamente agrícola. A la época de los hechos estos fundos eran víctimas a menudo de asaltos, robos, abigeatos y tomas de los predios agrícolas liderados por grupos pertenecientes a partidos políticos de izquierda, tales como Mapu, Socialistas, Comunistas, etc. A su vez como contraparte, los agricultores se organizaron y procedían a la retoma de los predios agrícolas e impedían en forma organizada que se produjeran este tipo de situaciones, es decir, hicieron una labor represiva, que se inició el año 1970 hasta septiembre de 1973. Además, dentro del sector de su Comisaría, estaba la localidad de “Riachuelo”, donde existía un Retén y algunas personas que eran sindicadas como los principales activistas de la zona son entre ellos los señores Patau, Boncan, Barría Bassay y otros que no recuerda sus nombres. Dentro de la localidad de Riachuelo había un fundo agrícola de propiedad de un señor de apellido Follert, quien era

abogado y Fiscal Militar del Ejército y estaba a cargo de la Fiscalía Militar de esa zona, la que funcionaba al parecer en el Regimiento de Ejército de nombre “Ingenieros Arauco”, jamás tuvo la oportunidad de concurrir a la Fiscalía. Anexa que al Regimiento fue varias veces, pero jamás a la Fiscalía. Reitera sus funciones descritas precedentemente. También recuerda en esa fecha a otros oficiales, tales como Contreras Henríquez y Saavedra, pero ellos no tienen vinculación con los hechos, por cuanto Contreras era jefe de la Tenencia de Purranque y Saavedra llegó al año siguiente a Río Negro, ya que Godoy fue trasladado a Purranque. Respecto del día en que fueron detenidos los hermanos Barría Bassay, el encausado se encontraba en la ciudad de Osorno para solicitar autorización al Intendente para viajar a Santiago, por cuanto su madre se encontraba gravemente enferma y hospitalizada en el Hospital de Carabineros y luego de ser autorizado regresó a medio día aproximadamente a Río Negro, directamente a la Gobernación que era su lugar de trabajo. Además, recibió un llamado telefónico de la Juez de Río Negro, no recuerda con exactitud si fue el mismo día o al día siguiente, pero sí que el Juez le consultó si Carabineros había detenido a los hermanos Barría Bassay. El deponente no tenía la información a mano, pero en breve tiempo consultó a la Comisaría y se le informó que no se encontraban detenidas las personas por las cuales consultaba, entregándole posteriormente dicha información a la señora Juez doña Nieves Madrid, en forma telefónica. No le consta que la detención de los hermanos Barría Bassay haya sido efectuada por Carabineros, además no existía constancia de dicha detención en los registros de la Comisaría. Solo recibió el llamado telefónico de la Juez preguntando por los hermanos Barría Bassay, no hubo reclamo alguno por parte de familiares de los hermanos señalados. Recalca que no hubo reclamo oficial ante la Comisaría, ni tampoco supo que se haya realizado denuncia ante el Tribunal, por lo menos hasta enero de 1976, fecha en que fue trasladado a Santiago. A continuación, pasa a dar cuenta de un hecho que para él fue trágico y lo relacionó a una venganza de parte de familiares de los hermanos Barría, ya que su casa que estaba ubicada en el sector de La Florida fue víctima de un atentado terrorista e incendiada y este hecho se produjo encontrándose solamente bajo el cuidado de una persona, la casa fue quemada con productos químicos. Volviendo a lo anterior, después del 11 de septiembre de 1973 se dictaron por parte de la autoridad Militar una serie de

bandos donde se disponía que determinadas personas se presentaran a la autoridad militar, facultándose a la fuerza pública para que procedieran a su detención y dentro de estos bandos se consignaron los nombres de Patao, Barrías Bassay y Boncan. Tiene entendido que algunos de ellos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía Militar. Alberto Oyarzún, Carabinero de la Comisaría y chofer se consiguió un vehículo particular para proceder a la detención de algunas personas, pero ignora si estas detenciones incluyen a los hermanos Barría Bassay, puesto que estos se habrían escondido por la orden pendiente que había en su contra. Los Barría Bassay nunca fueron detenidos, por lo que presume se habrían escondido, ya que tenían una orden pendiente de la Fiscalía Militar. Después del año 1984, encontrándose retirado de la institución regresó a la zona sur, específicamente a Crucero Purranque donde se dedicó a desarrollar actividades de agricultura, también hizo averiguaciones tendientes a saber que había ocurrido con los hermanos Barría y si ellos habían tenido participación en el incendio de su propiedad de Santiago, nada tenía relación con el desaparecimiento de los Barría. El encausado se consideraba afectado y como había antecedentes de que los Barría habrían incendiado un bus de propiedad del Carabinero Oyarzún siempre tuvo la idea de saber si habían tenido participación, en ningún caso se trataba de una persecución personal contra ellos, toda vez que el Carabinero Oyarzún había sido acosado permanentemente por la familia de los Barría Bassay, ya que él vivía en Osorno. También entre sus indagaciones obtuvo información por medio del señor Eduardo Geise, quien tenía un fundo en su casa patronal frente a un aserradero, que habría sido él quien alertó de la presencia de los señores Barría Bassay a un señor de apellido Berens, miembro de los “Cien Águilas”, que era un oficial de reserva del Ejército, agricultor, domiciliado en Riachuelo, a quien le contó que los hermanos Barría estaban escondidos frente a su casa en el aserradero y este señor Berens habría sido quien por sus contactos con el Ejército y además, por ser casi vecino del señor Follert lo habría alertado, para que en su calidad de Fiscal tomara las medidas del caso. Además, como la orden que existía en contra de los Barría era muy pública, el Fiscal tomó conocimiento de la información de Berens. Luego supo en forma extrajudicial que los Barría habían sido detenidos por Carabineros y la patrulla habría regresado en su totalidad a Rio Negro y los detenidos Barría Bassay habían quedado en custodia de dos Carabineros, quienes

tenían la misión de entregarlos al Fiscal Follert, quien con una patrulla militar los retiraría. En cuanto a la identidad de los dos Carabineros que custodiaban a los Barría no le consta, pero podrían haber sido uno de apellido Godoy Soto y otro de apellido Mariqueo o Catrileo, no recuerda con exactitud. Esgrime que no ha tenido participación en la detención, desaparecimiento o muerte de los hermanos Barría Bassay, por cuanto el día en que estuvo en conocimiento de ellos, fue tan solo por el llamado telefónico que le hizo la señora Juez del Juzgado del Crimen de Río Negro o de lo contrario no se habría enterado de la presunta detención de los Barría. Atestigua que jamás dio la orden de asesinar a los hermanos Barría Bassay con un revólver calibre 38, marca Colt, no tenía relación con los detenidos, es decir, su función como lo dijo anteriormente era netamente administrativa. Dice que no es efectivo que haya ordenado a los detenidos pararse al lado de un cauce de agua e intentar darle un corte con cuchillo, para luego empujarlos amarrados, por cuanto no participó en la detención de los Barría Bassay. Ni pudo haber ordenado que se le lanzara al cauce del Río Negro amarrados, ya que como dijo anteriormente, nunca participó en la detención de ellos. En cuanto a las órdenes impartidas por el Estado Mayor de la Defensa Nacional a partir del año 1973 en adelante, en términos generales son las siguientes: “eliminar, reducir cualquier rebrote o manifestación de grupos pertenecientes al partido comunista y personas consideradas de alto riesgo nacional, requeridas en los bandos pertenecientes de la autoridad militar”. Durante su permanencia como Gobernador Departamental desde septiembre del año 1973 hasta diciembre de 1975 asume la responsabilidad por haber ordenado la detención del señor Sandoval Vásquez, como autor de la sustracción de exclusivos de la dirección de Vialidad de Departamento de Río Negro, donde él trabajaba y que fueron sustraídos con el propósito de atentar contra bienes de utilidad pública, puentes, torres de alta tensión y algunos connotados vecinos del sector, delito flagrante, ya que el autor confesó su participación, fueron recuperados los explosivos y en un procedimiento policial totalmente ajustado a Derecho, en estas condiciones fue entregado a la Fiscalía Militar de la provincia de Osorno, donde fue sometido a proceso por un lapso no inferior a un año, esta fue la única orden de detención que efectuó en su carácter de autoridad administrativa

En **declaración judicial** de fecha 06 de mayo de 2002, **rolante de fs. 1.107 a fs. 1.108 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra de **fs. 1.579 a fs. 1.580 (Tomo IV)**. Ratifica su declaración anterior, agregando en lo pertinente que en su calidad de Gobernador del Departamento de Río Negro, recibió una orden de la autoridad Militar de zona que a su vez era el Intendente de la zona de nombre Teniente Coronel de Ejército, don Lizardo Abarca Maggi, en el sentido que se procediera a detener a los hermanos Barría Bassay, contra los cuales existía un bando de detención. Estas personas a raíz del bando se encontraban prófugos y escondidos en un aserradero. En cuanto recibió la orden aproximadamente a las 10:30 horas de la mañana llamó al Teniente Ramón o Hernán Godoy, que era el Comisario Subrogante y encargado de la parte operativa, para que así le diera cumplimiento a la orden y que él se iba a constituir con posterioridad, por cuanto tenía instrucciones del Intendente. Las instrucciones que se le ordenaron fueran secretas, ya que estaban en tiempo de guerra y le eran aplicables las normas del Código de Justicia Militar, por lo que debía obedecer y tenía que mantener el más absoluto secreto. Para darle cumplimiento a dicha orden en compañía del practicante de la Comisaría Pablo Araya, del Carabinero Quilaqueo se dirigieron al sector de Riachuelo y en dicho lugar se encontraba otro funcionario de Carabinero que no recuerda su nombre, quien se integró a su patrulla, con éstos cuatro funcionarios a su cargo recibió a dos detenidos, quienes le fueron entregados por Carabineros en la calle, los detenidos se encontraban en buenas condiciones y en ese mismo lugar fueron examinados por el practicante. Los detenidos, que eran hombres, se encontraban en buenas condiciones, pero no puede decir que se trataba de los hermanos Barría Bassay, ya que no los conoció. Sólo sabía de ellos porque eran buscados, ya que la autoridad administrativa a lo largo de todo el país dictó diferentes bandos en la zona en los que daba cuenta que los hermanos Barría Bassay eran buscados por haber cometido diferentes delitos como toma de fundos, secuestro de agricultores alemanes y sus familias, violaciones de tres menores, abigeatos y otros. Volviendo a la detención, puede decir que los sujetos detenidos fueron trasladados en un vehículo que no recuerda si se trataba de vehículo de la gobernación o particular y en el trayecto hacia Río Negro lo detuvo la patrulla militar que iba a cargo del Capitán Abogado y Fiscal Militar, don Roberto Follert, a quien le hizo entrega de los detenidos, quienes se

encontraban con vida y en buen estado de salud. La entrega se realizó en un camino rural y no se dejó constancia de ello, sólo en el libro del practicante que quedaba en la Comisaría. Suma que quedó establecido que sus Carabineros y él no han dado muerte a nadie, tampoco han dado orden ni han participado como autores, cómplice ni encubridores en ningún delito. Además, sus Carabineros y él solo dieron cumplimiento a la orden impartida por la autoridad competente, de esta forma actuaron de una manera correcta.

En **diligencia de careo con Pedro Segundo Soto Godoy**, de fecha 08 de mayo de 2002, rolante a **fs. 1.109 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra a **fs. 1.594 (Tomo IV)**. Espeta que dio la orden para la detención de los hermanos Barría Basay, en cumplimiento de la orden emanada del Intendente provincial y autoridad militar Lizardo Abarca Magi. No recuerda haber participado en la detención, esa parte no la tiene clara, pero estuvo en el lugar y le consta que fueron detenidos los dos hermanos Barría Basay, quienes fueron trasladados a la Comisaría. Posteriormente entregó a los hermanos Barría Basay al Fiscal Militar de apellido Follert, a los dos o tres días después de haberse producido la detención. Asimismo, participó en la expedición al sector de la precordillera donde presumiblemente había armas y gente, pero jamás fue a ningún sector donde hubiera un río a dar orden que diga relación con empujar a alguien, de nombre Guido Barría Bassay, a ningún río.

En **diligencia de careo con Robert Santiago Teylorl Escobar**, de fecha 08 de mayo de 2002, **rolante de fs. 1.110 a 1.111 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra **de fs. 1.595 a 1.596 (Tomo IV)**. Ratifica sus declaraciones anteriores. Escruta que no es efectivo lo que declara el señor Teylorl, por cuanto no ha ordenado ese tipo de acción como sería el homicidio que cometió el subalterno. No recuerda haber concurrido al lugar señalado por el señor Teylorl con un detenido, ya que en esa fecha pasó por momentos muy malos, porque su madre agonizaba. Además, a su cargo tenía muchas funciones y por esa razón no tiene claridad de los hechos en los que se le inculpa. En los días que se produjeron los hechos que el Tribunal investiga viajó a Santiago en varias oportunidades, recuerda que fue entre el 16 de octubre y 4 de noviembre del año 1973. Toda la parte operativa la manejaba el Comisario Subrogante, don José Hernán Godoy Barrientos. Estimula que no participó en la detención de los Barría Basay, ya que

llegó con posterioridad a la detención. La orden de la detención se la dio el Intendente Militar provincial de Osorno en esa fecha, Lizardo Abarca Amaya, Coronel de Ejército. Estas personas estaban siendo buscadas por las autoridades administrativas y tuvo que dar cumplimiento a dicha orden, por lo cual tuvo que ordenar al señor Godoy, encargado de la parte operativa. Sabe que llegó al lugar. No desconoce que haya dado la orden de la detención que le fue compeliada por el Intendente de la zona como lo señaló precedentemente. Evidencia que no recuerda haber ido en esa excursión, se remite a lo expresado anteriormente, ya que ha transcurrido largo tiempo. Expresa que no es efectivo lo que dice el señor Teylorl y se mantiene en sus dichos anteriores. No fue ni condujo a nadie al sector del fundo La Campana y tampoco dio la orden de empujar a ninguna persona al río, como lo señala el Sargento Primero.

En **declaración judicial** de fecha 07 de febrero de 1980, **rolante de fs. 1.112 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra a **fs. 1.480 (Tomo IV)**. Explicita que en la Comisaría de Rio Negro había dotación de más o menos veinte funcionarios y en Riachuelo una dotación de aproximadamente seis. Exclama que no recuerda haber participado en la detención de los hermanos Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barría Bassay y puede asegurar que como la dotación de Carabineros de todo el departamento era muy exigua en relación a la jurisdicción, era patrullada también por (Carabineros) militares que tenían facultades para actuar y de lo cual ellos no eran informados. Insiste que en su jurisdicción no hubo detenidos políticos y los que hubo fueron por delitos comunes. Explana que no es efectivo que los hermanos Guzmán hayan facilitado en alguna oportunidad vehículos a Carabineros, pues tenían tres vehículos, dos furgones más o menos, porque dado el tiempo transcurrido no lo recuerda bien; una camioneta verde del SAG y también un jeep de la Gobernación.

En **declaración judicial** de fecha 07 de junio de 2003, rolante de **fs. 1.113 a fs. 1.116 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra de **fs. 1.624 a fs. 1.627 (Tomo IV)**. Ratifica sus declaraciones que rolan a fs. 506 y siguientes y ampliación de fojas 517. Destaca que su intención es la de cooperar con la justicia para que se establezca la verdad de los hechos. Explana que el día 11 de septiembre del año 1973 se desempeñaba como Capitán de la Comisaría de Rio Negro. El día 16 de octubre de 1973 en su calidad de Gobernador recibió la orden del Intendente de la

zona, Teniente Coronel del Ejército, Lizardo Abarca Maggi, en el sentido que procediera a detener a los hermanos Barría Bassay, respecto de los cuales se había dictado un bando militar. No recuerda el delito. La orden fue verbal, no recuerda una orden por escrito. Llamó telefónicamente al Teniente Godoy Barrientos, quien se desempeñaba como Capitán Subrogante de la Comisaría y a cargo de la parte operativa, le dio la orden de trasladarse al aserradero, donde se encontrarían escondidos los responsables y procediera con el operativo. Fue así que, el Teniente Godoy se trasladó junto a un contingente de Carabineros a dicho sector y detienen a estas personas, trasladándolas al Retén de Riachuelo. Se comunica por radio, manifestándole que las personas ya se encontraban detenidas y que serían trasladadas al Retén, lugar donde él los esperaba. Posteriormente, ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Río Negro. A las 13:00 horas del mismo día de la detención le informa de los hechos al Intendente. El detenido Guido Barría manifiesta que en un sector de la cordillera habría armas, municiones y unos Cubanos, recibiendo de su parte la orden de trasladarse al sector con el detenido. Es así que, al día siguiente, 17 de octubre de 1973 el Teniente Godoy Barrientos, el detenido Guido Barría, el encartado y otros Carabineros que no recuerda sus nombres, se trasladaron a un operativo a la cordillera. Mientras tanto el otro detenido, Héctor, quedó en la Comisaría a cargo del personal de guardia. Consiguieron caballos y autos, pero no encontraron nada. Regresaron con el detenido a la Comisaría de Río Negro alrededor de las 14:00 horas. Ese mismo día le informó al Intendente de los acontecimientos, quien le ordena que ambos detenidos deben ser entregados a un procurador o asesor legal del Ejército de nombre Follert, a quien se los entregó alrededor de las 18:00 horas. Con posterioridad dicha persona pasó a desempeñar el cargo de Fiscal Militar y pertenecía a un grupo conocido como cien águilas, que estaba integrado por ex oficiales de las Fuerzas Armadas. A este grupo se les entregó armas, uniformes y autorización de detener personas. Los detenidos solo permanecen la Comisaría dos días, a saber 16 y 17 de octubre de 1973. El día 18 de octubre de 1975 por enfermedad de su madre se trasladó a Santiago, donde permaneció hasta el seis o siete de noviembre de 1975, después se realizaron sus funerales. En el acto, acompaña certificado de nacimiento correspondiente a su persona y certificado de defunción de su madre, Berta Valdivia Guerra. Funda que cuando aún se

encontraba a cargo de la Comisaría recibió una orden que fue impartida a nivel nacional, en el sentido que debían ser destruidos todos los libros de registros de detenidos. Pese de que no se encontraba vencido el plazo reglamentario, por lo tanto, no se encontraran registros sobre estas detenciones. En cuanto a lo que se le consulta y que dice relación si en la Comisaría de Río Negro se encontrarían enterrados los hermanos Barría Bassay, su respuesta es que no. Justifica que permaneció a cargo de la Comisaría hasta fines de 1975 y durante ese periodo puede dar fe que no se exhumó ni inhumó ningún cuerpo. Si recuerda que los calabozos fueron cambiados de lugar, se trasladaron a la parte trasera de la Comisaría, donde se construyó un lugar para el forraje de los animales. Cree que tal vez no se logró encontrar los cuerpos de estos detenidos, ya que, según rumores de pasillo, Héctor Barría había sido lanzado al río Pilmaiquén por los Militares. Incluso en ese sector existe un monolito en recuerdo de varios detenidos desaparecidos que fueron encontrados en los márgenes de ese río. Que las declaraciones de Robert Teylorl son permanentemente contradictorias, sin fundamento, sin pruebas que las ampare, ya que carece de ellas; no existen testigos presenciales que avalen sus dichos. Pero si en el contexto de su declaración así el Tribunal lo considera, habría que asumir que Guido Barría habría sido lanzado por Teylorl a lo menos en alguno de los lugares que ha señalado. Reitera que no tiene ninguna participación en la muerte de estas personas, jamás dio la orden a Teylorl ni a ningún otro subalterno para asesinar, exhumar o inhumar a ninguna persona. Esto se hace extensivo a la participación que le pueda caber en la desaparición de estas personas al Teniente de esa época, Hernán Godoy Barrientos, ya que ya que él era el Oficial que tenía a cargo la Comisaría, quien era un Oficial serio, acucioso, que debía cumplir con todas las funciones propias del cargo de Comisario. El encausado se desempeñaba con dedicación exclusiva en los primeros meses posterior al 11 de septiembre como Gobernador del ex departamento de Río Negro de la actual provincia de Osorno. Y reglamentariamente la custodia de los detenidos corresponde al personal a cargo de la guardia. Invoca que estas personas, los hermanos Barría Bassay solo permanecieron en la Comisaría el día 16 de octubre de 1973, aproximadamente desde las 13:00 horas hasta el día 17 de octubre del mismo año, hasta las 17:00 horas, en que fueron entregados al Fiscal Militar, como ya ha señalado. En cuanto

a la participación del actual General, don Hernán Godoy, como consta en el proceso, sobreseído por la I. Corte Marcial y sentencia interlocutoria del Juzgado del Crimen de Río Negro, participó en su calidad de jefe de la patrulla que detuvo a estas personas, y participación en la rebusca de armamento, munición y algunos presuntos Cubanos. Él al hacer estas gestiones cumplía órdenes personas del encausado, las que a su vez eran las que había recibido del Intendente de la Provincia. En consecuencia, dentro del contexto del cumplimiento de estas órdenes, él no tiene responsabilidad directa, ya que era el único Oficial en la Comisaría que podía realizar esta parte operativa. Él tampoco participó en la entrega que se le hizo al Fiscal Follert, ya que en el furgón policial que fueron trasladados hasta el ingreso de Río Negro, donde el encausado lo esperaba con el vehículo de la Gobernación, cuando se produjo el intercambio de estos detenidos de Carabineros a la Fiscalía en presencia del practicante de la Comisaría, quien verificó el buen estado de salud de los detenidos. De ello quedó constancia en el libro de atenciones del practicante que lamentablemente por las razones anteriormente dichas, fue destruido. Interpreta que el Teniente de esa época Hernán Godoy vivía en la Comisaría junto a unos diez funcionarios solteros, ya que por disposición reglamentaria el personal soltero vivía dentro de la Comisaría. El encartado también vivía en el terreno de la Comisaría, pero dentro de una casa anexa.

En **declaración judicial** de fecha 06 de octubre de 2003, rolante de **fs. 1.117 a fs. 1.119 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra de **fs. 1.667 a 1.669 (Tomo IV)**. Efectivamente refrendó la orden de citación que rola a fojas 1.504 a la Fiscalía Militar de Carabineros de Osorno y en que se dice que “los hermanos Guido Ricardo y Héctor Barría Bassay encuéntrase prófugos desde el día 11 de septiembre del año en curso, ignorando su paradero, presumiéndose se hayan dirigido a la ciudad de Santiago”. En este punto aclara que como se realiza el trámite, respecto a citación y órdenes de investigar, éstas llegan a la Comisaría y se anotan en un libro de registros de órdenes. Su cumplimiento se le encomienda al Retén que corresponda para que la informe, en este caso se trató del Retén de Riachuelo, cuyo jefe era el Sargento Sergio Aguilar. Si por ejemplo hay un error en la información que proporciona el funcionario no es de su responsabilidad el hecho, por lo tanto, no le consta que estas personas se encuentran prófugas desde

determinada fecha. En cuanto a la devolución de una orden de investigar dirigida a la misma Fiscalía, fotocopiada a fojas 1.508 de 24 de noviembre de 1973, en que se hace presente al Tribunal “que los hermanos Guido Ricardo y Héctor Barría Bassay, estos se encuentran prófugos desde el mes de agosto del año en curso, ignorándose su actual paraderos, ya que se encuentran procesados por la Fiscalía, por agresión a Carabineros de Servicio, homicidio frustrado, hurto de dinero en el correo y telégrafo de Río Negro, lesiones graves en agresión y leves respectivamente”, si el Sargento Aguilar está diciendo eso debe ser así. En cuanto a lo que se le consulta y que dice relación con haber participado en un Consejo de Guerra en la ciudad de Osorno, es efectivo, este Consejo fue convocado por el Intendente de la época, al cual se le ordenaba asistir mediante decreto, el cual fue presidido por la Magistrado Berta Rodríguez. Este proceso fue seguido en contra de Hilario Barría Alvear entre otros. De los antecedentes aparece que fueron detenidos por personal del Ejército, no tuvo intervención en ellos Carabineros. Musita que su intervención en el Consejo de Guerra consistió en participar en algunas sesiones. En cuanto a cómo explica que en el expediente que se le exhibe con fecha 06 de marzo de 1974 se declararon rebeldes Guido Ricardo y Héctor Barría Bassay “hasta que se presenten o sean habidos”, en circunstancias que en sus declaraciones anteriores, especialmente la de fojas 1.356 da cuenta que con personal de su Comisaría fueron detenidos los hermanos Barría y puestos a disposición del abogado del Regimiento Arauco, señor Follert con fecha 17 de octubre de 1973, esta contradicción no se la explica, pero la ratifica, ya que todos los detenidos en el sector de su Comisaría fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar correspondiente. En cuanto a por qué en los informes a la Fiscalía Militar de noviembre de 1973 se dice que se encuentran prófugos los hermanos Barría a fojas 1.504 desde el 11 de septiembre de 1973 y a fojas 1.508 desde agosto de 1973, en circunstancias que personal de su Comisaría los había detenido el 16 de octubre del mismo año, se lo explica por la gran cantidad de detenidos que había en la Comisaría y por las múltiples funciones que desempeñaba. Por lo demás, reitera la falta de credibilidad de los dichos de Teylorl, quien lo inculpa. Recuerda que en varias oportunidades lo trató de eliminar de la institución por su pésima conducta personal y profesional y refuente ebriedad,

recibiendo reclamos de su cónyuge, a quien golpeaba frecuentemente con violencia.

En **declaración judicial** de fecha 11 de agosto de 2003, **rolante a fs.1.636 a fs. 1.640 (Tomo IV)**. Narra que en las diligencias de careo efectuadas por el Ministro, señor Guzmán en el mes de mayo de 2002 efectivamente se le consultó en relación a la responsabilidad del General Godoy Barrientos y del resto del personal que habían concurrido en esa oportunidad a la diligencia de la detención de los hermanos Barría Bassay. Esta pregunta fue hecha según lo entendió, en el contexto de que estas personas hubieran actuado sin ninguna orden o exigencia, algo parecido a una asociación ilícita. Le expreso al señor Ministro que nadie del personal de Carabineros e incluso él, tenían responsabilidad, pues todos cumplían una orden sustentada en el principio de obediencia debida militar, que los obligaba a lograr el propósito de lo mandado e informar su resultado. Esta orden en esos momentos le había sido dada al acusado personalmente en la oficina de la Gobernación en forma telefónica, para que personal de Carabineros la cumpliera. Ostenta que su superior jerárquico Militar y administrativo era el Teniente Coronel de Ejército, don Lizardo Abarca Maggi, el encartado era Gobernador y el Teniente Godoy Comisario Subrogante, separados físicamente, ya que sus oficinas se encontraban bastante distantes, razón por la cual el encausado le transmitió que cumpliera esta orden que les estaba siendo dada por la autoridad competente, en el sentido de detener a los hermanos Barría Bassay, encargados en un bando militar y que se encontraban refugiados en un lugar cercano a Riachuelo en la precordillera de la costa. Hablaron del 16 de octubre, a pocos días del 11 de septiembre de 1973. El acusado era el Capitán y Godoy Teniente, es decir, ambos eran Oficiales subalternos a nivel operativo, compelidos a cumplir cualquier orden que se les diera, sin tener posibilidad de representarla, sobre todo que se les aplicaban las disposiciones del Código de Justicia Militar en tiempos de guerra. Esta detención se hizo y se cumplió, como así también el resto de las diligencias que ya constan en el proceso. Puntualiza que llegó al lugar (Retén de Riachuelo) cuando las personas habían sido detenidas por el Teniente Godoy y personal de su mando, por lo que dispone el traslado de estos detenidos al lugar legal y reglamentario que correspondía, es decir, la Comisaría de Río Negro e informa del cumplimiento de la orden al Intendente. El resto ya consta en el proceso, como fue

que el día 17 de octubre se hizo una rebusca de armas y como ese día cerca de las 16:00 horas, ambos detenidos fueron entregados previa certificación del practicante de la Comisaría, Pablo Araya, en buenas condiciones al abogado Follert. Esta persona a la fecha era abogado del Regimiento Arauco y procurador y con posterioridad en el año 1974, a raíz de una disposición de la junta de Gobierno fue investido con el grado de Capitán de Justicia del Ejército, desempeñando sus funciones en la ya mencionada provincia. Todos estos hechos como correspondía fueron registrados en los libros que reglamentariamente corresponden, pero lamentablemente no fue posible ni lo será, obtener copias de estos, ya que el mando de la época ordenó a nivel nacional e institucional su destrucción en forma prematura. No obstante, ello se siguió en la búsqueda de antecedentes y así llegó al libro “Consejo de Guerra”, documento N°1 del Comité Pro Paz de Osorno, que se adjuntó al proceso, los hechos allí narrados son coincidentes con su declaración, ya que más o menos textualmente dice lo siguiente: “Los hermanos Barría Bassay fueron detenidos por Carabineros de Río Negro, llevados y vistos en Valdivia y después trasladados al Regimiento Arauco de Osorno”, incluso señala los roles 1666-73 y 1668-73 contra Héctor y Guido Barría. Este es un organismo competente a la fecha, vinculados a materias de Derechos Humanos y tiene colaboración con la Vicaría de la Solidaridad, la cual desde su punto vista tiene particular relevancia en los hechos investigados, ya que aquí se comprueba que él y su personal mantuvieron en su poder a estas personas. Los hermanos Barría permanecieron en la Comisaría de Río Negro los días 16 desde las 12:00 horas hasta el 17 de octubre a las 16:00 horas aproximadamente, en las cuales permanecen a cargo del personal de guardia de la Comisaría, estos instantes por razones circunstanciales, ya que el acusado se desempeñaba como Gobernador del departamento, por lo que estaba a cargo el Comisario Subrogante de la época, don Hernán Godoy Barrientos, quien necesariamente por ser soltero vivía en la Comisaría y tenía a su cargo la parte administrativa de ella, debió estar enterado de la presencia de ambos detenidos en los calabozos. Precisa que tal como señala el Ministro Guzmán en auto de procesamiento se han dictado dos sentencias definitivas, una por la Corte Marcial y otra por el Juzgado de Río Negro, es decir, acorde a su constitución son cosa juzgada y ninguna autoridad a ningún título, según lo señala su norma de mayor

rango jurídico como es la Constitución Política del Estado, puede abocarse a causas las fenecidas. No es responsabilidad de los Tribunales que las dictaron, ni de las personas que están perjudicadas que la doctrina de esa época fuera tan diferentes a la actual, los principios de certeza aplicados en su época como cosa juzgada, ley de amnistía, prescripción de la acción penal, son base de su Derecho normativo. Por último, su versión coincidente con el Comité ProPaz, es una declaración más que valedera, lo que amerita que en su oportunidad procesal las considere. Reitera que jamás ha ordenado o participado en exhumaciones, inhumaciones o muerte de alguna persona, nunca ha ordenado disparar, lanzar a un río o torturar a persona alguna. No obstante ello y como señalara en su declaración del 07 de julio, acogiendo el llamado de las autoridades del país y muy en particular las familia de los hermanos Barria, reitera la información de oídas de pasillos del casino, en el sentido de que estas personas habrían sido lanzadas al Río Pilmaiquén por una patrulla Militar en su traslado de Valdivia a Osorno, ello es posible por ser ese río límite de las provincias y es coincidente con el Comité Pro Paz cuando señala que desde Valdivia fueron trasladados los hermanos Barria Basay a Osorno. La declaración del Cabo Teylorl, en el sentido de que el encartado hubiera participado en un hecho delictuoso carece de absoluta veracidad, ya que éste en un principio señala un lugar diferente y pone como escenario un arma de fuego, luego ante el Ministro señor Guzmán desdice de esta declaración y señala que el lugar no ese sino un río y se auto inculpa diciendo que él personalmente por orden del acusado habría lanzado a Guido Barría Bassay a un río, luego se desdice de todo lo anterior y por último inculpa al encartado de no ser el autor intelectual de los hechos, sino el autor material, que pasa con el otro detenido que quedó en la Comisaría, Héctor. Cree que estas declaraciones son productos de un mitómano compulsivo, cree que su actitud obedece a que durante su mando fue necesario tomar diversas medidas disciplinarias en su contra, por su inadecuado comportamiento profesional en su vida privada. Proclama que las declaraciones de Teylorl son falsas, él sigue reconociendo su autoría y como único testigo pone a un Carabinero de apellido Quilaqueo, quien ya sabe que falleció y en forma subjetiva habla de varios viajes que habría realizado el encausado al lugar donde lanzó a Guido y habla incluso de que el acusado haría ido previamente con Héctor Barría, acompañando a Pedro Soto, por ser este conocedor del lugar. Al respecto

el encartado propone que ello es inverosímil, por cuanto estas personas fueron detenidas el 16 como ya ha señalado y entregados el día 17 de octubre. En lo que señala, a que Soto es su compadre, prefiere que en la diligencia de careo efectuada con Teylorl y Soto ante el Ministro, señor Guzmán, Soto se manifiesta bastante contrariado en contra del Ministro y le señala que él está siendo obligado por parte de él a declarar en contra del acusado. También, en esa oportunidad quedó establecido que Pedro Soto Godoy era un ebrio consuetudinario, a quien el encartado recuperó, razón por la cual el año 1975, antes de ser trasladado a Santiago él le pidió que fuera padrino de confirmación de una de sus hijas. Recalca que a todos los procesados en esta causa jamás los volvió a ver ni a tomar contacto con ellos. Con excepción de dos o tres oportunidades, mientras estuvo en servicio activo hasta 1986 con el actual General Hernán Godoy Barrientos. También es efectivo que en esa oportunidad en la diligencia de careo ante tanta mentira dicha por Teylorl, el encausado en presencia del Ministro Guzmán le dijo a Teylorl que por qué miente y no dice la verdad en el proceso, incluso el señor Guzmán le pregunta si es creyente y Teylorl responde que sí, manteniendo sus dichos de haber sido él el autor de los hechos, de ser así tendría que Teylorl de iniciativa propia después que los hermanos Barría Basay fueron entregados a la patrulla militar, haberse integrado a esta y haber actuado de la forma que lo señala, situación que es absolutamente inexacta, ya que no tiene conocimiento de que ninguno de su personal haya participado en los hechos donde él lanza a una persona un río, salvo que lo haya hecho con componentes de la patrulla Militar, resultándole más fácil inculpar de los hechos a otros, sin ningún tipo de prueba y en forma absolutamente contradictoria, que solo entorpece el proceso.

En **declaración judicial** de fecha 01 de marzo de 2004, **rolante a fs. 1.677 a 1.679 (Tomo IV)**. En relación a la pregunta N°1 de la minuta relata que el día 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba como Capitán Comisario de la Segunda Comisaría de Río Negro en la provincia de Osorno, el segundo al mando era el Teniente, don José Hernán Godoy Barrientos. A raíz de la asunción de mando del país por parte de la junta militar de Gobierno, se le ordenó asumir el cargo de Gobernador del departamento del mismo nombre, quedando la Comisaría desde el punto de vista operativo, a cargo del Subcomisario Godoy, ya que en su nuevo cargo debía permanentemente asistir a reuniones de coordinación e

implementación de las nuevas políticas de Gobierno recientemente establecido, ellas se realizaban en Santiago, Valdivia y otros lugares, sin perjuicio de las labores propias del departamento, físicamente su trabajo lo desarrollaba en otro edificio. Desde el punto de vista administrativo no hubo una entrega oficial del cargo de Comisario, sino que el Teniente asumió de hecho las funciones que le eran propias, en su carácter de Subcomisario, ya que el reglamento en algunas ocasiones lo autoriza para subrogar cuando el Comisario se ausenta por motivos varios, lo que se encuentra establecido en la reglamentación específica en el Reglamento III, título quinto, artículo 88, en los casos de ausencia transitoria. Con respecto a la segunda pregunta de la minuta, ratifica sus declaraciones antes expuestas ante el señor Juez Guzmán y actual Ministro Instructor, que se relacionan con los hechos, no teniendo nada más que agregar. En lo que respecta al Mayor Follert, soflama que él no era titular de la Fiscalía de Osorno, pero era asesor y abogado procurador del Regimiento de Ingenieros Arauco, nombrado con posterioridad al igual que se hizo en el resto de las Fuerzas Armadas, con el grado de "Capitán de Justicia" del citado Regimiento. Además, él pertenecía al grupo "Cien Águilas" de la citada unidad Militar, personas que vestían uniforme y patrullaban la provincia, especialmente en zonas rurales, en zonas militares y en algunas oportunidades procedían a detener a personas que eran sindicados por ellos como no afectos al sistema político de la época. Preguntando el abogado Tomás Zamora, para que diga el acusado si en la entrega que hizo de los detenidos al abogado Follert, representante del Ejército, participó el entonces Teniente Godoy Barrientos, contesta que las personas objeto de este proceso, Héctor y Guido Barría Bassay se encontraban detenidas en el Cuartel de la Comisaría desde el día 16 de octubre desde las 14:00 horas aproximadamente y el 17, después de haber efectuado algunas diligencias con ellos, por instrucciones de su superior jerárquico, el Teniente Coronel de Ejército, don Lizandro Abarca Maggi, fueron entregados por el prácticamente de la Comisaría, don Pablo Araya, el cual tenía como misión verificar el buen estado de salud de los detenidos, el Carabinero Quilaqueo y otros funcionarios que no recuerda, descartando en esta oportunidad que hubiera estaba presente el Teniente Godoy. Con respecto a la pregunta N°3 de la Minuta, puede decir que ratifica las declaraciones del sumario, donde está detallado las circunstancias y cómo se originó la orden emanada del

Teniente Coronel de Ejército, don Lizandro Abarca, su superior jerárquico en tiempo de guerra, que disponía la detención de estas personas, las cuales se encontraban en cargadas en un bando militar. Sugiere que consta en el proceso, en oficio N°1 del Comité Pro Paz de Osorno, antecesora de la Vicaría de la Solidaridad de Osorno, de este informe que se incorpora al proceso, procesos militares en los cuales consta que estas personas fueron condenadas en ausencia, ello avala su declaración y certifica que la actuación de todo el personal de Carabineros que actuó en estos hechos fue en cumplimiento de una orden emitida por su superior jerárquico antes mencionado, las cuales estaban compelidos a cumplir por ser el encartado y el Teniente Godoy, Oficiales subalternos y el resto del personal Cabos y Carabineros sometidos en el caso de incumplimientos de deberes militares, a un proceso militar. Desde su perspectiva, recibió la orden y la transmitió al Teniente Godoy para su cumplimiento. Todos entendían y así lo entendieron hasta el día de hoy, que su actitud fue absolutamente lícita. Se realizó de día con vehículos policiales, en presencia de testigos y los detenidos llevados al lugar que legalmente corresponde, que fue un breve paso por el Retén Riachuelo, cercano al lugar de la detención y se le dio traslado a la Comisaría de Río Negro, y posteriormente su entrega al abogado Follert, ya mencionado. Con respecto a la pregunta N°4 señalada en la minuta. Suma que ya está dicho en la respuesta anterior, la que ratifica, lo ocurrido con los detenidos haciéndose presente que dado el largo tiempo transcurridos los hechos, más de treinta años, no obstante, que en la Comisaría se llevó a cabo el proceso reglamentario de ingreso a los libros correspondientes, es imposible después de treinta y un años poder obtener estos, por lo que la reglamentación institucional dispone su destrucción pasada algunos años.

14º) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **Hans Eduart Schernberger Valdivia**, quien fue sometido a proceso a fs. 1707 a fs.1724 (Tomo V) con fecha 04 de abril de 2023. Resolución confirmada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, según consta a fs. 1807 a fs. 1808 (Tomo V). Acusado según el auto acusatorio de fs. 1950 a fs. 1983 (Tomo V) con fecha 31 de agosto de 2023, como **autor** de los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado en las personas de Guido Ricardo Barria

Bassay y Héctor Alejandro Barría Bassay, perpetrados en la comuna de Riachuelo, a contar del 16 de octubre de 1973.

Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante, lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y lo que se ha aquilatado respecto del acusado anterior, puntualizando lo siguiente:

A. Declaraciones.

1. Juan Guzmán Tapia, quien declaró de fs. 1631 (Tomo IV) con copia a fs. 1682 a fs. 1683 (Tomo IV) y de fs. 1681 (Tomo IV). En declaración mediante informe, de fecha 28 de julio de 2003, de fs. 1631 a fs. 1632 (Tomo IV) con copia fs. 1682 a fs. 1683 (Tomo IV). Basa que en cumplimiento a lo solicitado mediante oficio N° 839-S 2003, declara por informe y bajo juramento como a continuación expone: dentro del primer semestre del año pasado, cuando en su calidad de Ministro de Fiero aún instruía la causa relacionada con el secuestro de los hermanos Barría Bassay, dispuso una orden de detención contra el general de Carabineros José Hernán Godoy Barrientos, quien fue conducido hasta la Auditoría General de Carabineros, ubicada en avenida Bulnes de la capital, junto con el coronel ® Schernberger (no recuerda su nombre ni segundo apellido). Debió, conforme recuerda, tomar declaraciones a los mencionados oficiales y careos con otros testigos, relacionadas esas diligencias con las acciones que condujeron a la desaparición de los nombrados hermanos. Después de efectuadas dichas diligencias se reunió con ambos exoficiales anteriormente nombrados y con los abogados señores Harry Grünewaldt, Rodolfo Arriagada y otro abogado de apellido Rossi, encargado de la defensa del coronel ® Schernberger. Además, estaba presente en dicha reunión un Oficial de Carabineros cuyo nombre desconoce, estaba a cargo del traslado y custodia del general Godoy. En el curso de esa reunión se produjo un diálogo entre el coronel ® Schernberger y quién suscribe el presente informe en el cual dicho coronel en retiro expresó: “Yo asumo la responsabilidad por los hechos relacionados con los hermanos Barría Bassay. La responsabilidad del señor Godoy subsistió hasta la detención de esos

hermanos en Río Negro. Respecto a todo lo que ocurrió después a los hermanos Barría Bassay, nada tuvo que ver Godoy con ello”. Acto continuo añadió el coronel ® Schernberger: “Esos hermanos fueron trasladados a alguna parte y en dicho traslado no intervino Godoy, quien los habría entregado al fiscal a cargo”. Por último, el nombrado Coronel agregó que él (Schernberger) era a la fecha el Oficial más antiguo y que en esa calidad cumplía funciones como gobernador y policiales. El general Godoy quien era, según recuerda, Teniente a la época de los hechos, estuvo de acuerdo en dicha reunión con todo lo señalado por Schernberger. No puede aseverar que las palabras utilizadas hayan sido exactamente aquellas que señala, pero las ideas fundamentales corresponden a las que ha señalado. Desea agregar que lamentablemente no dejó constancia en el expediente de las referidas expresiones prestadas por el coronel Schernberger, debido a que ya se habían realizado las diligencias que habría decretado para la referida ocasión de las que estimaba suficientes para decretar la libertad incondicional del general Godoy Barrientos.

2. Pedro Segundo Soto Godoy. Depone de fs. 1109 (Tomo III) con copia a fs. 1594 (Tomo IV), fs. 1142 (Tomo III) copia a fs. 1593 (Tomo IV), fs. 1156 (tomo III), fs. 1449 (Tomo IV), fs. 1559 a fs. 1560 (Tomo IV), fs. 1566 a fs. 1568 (Tomo IV), fs. 1584 a fs. 1585 (Tomo IV), fs. 1622 (Tomo IV) y de fs. 1156 (tomo III), copia a fs. 1593 (Tomo IV), blasona que a dicho operativo concurrió el Teniente don José Godoy Barrientos juntamente con el Comisario Schernberger, el practicante Pablo Araya, el Cabo Primero Robert Teylorl y otros funcionarios que no recuerda. A cargo del operativo estaba el Comisario Schernberger. Precisa que puede recordar lo recién señalado sin lugar a duda ya que ese operativo se realizó por orden del Comisario para buscar armamento y fue en la oportunidad en que el deponente trasladó al anca de su caballo al detenido Guido Barría Basay y de regreso a los camiones en la misma forma. Acota que en todos los operativos que realizaba el Comisario Schernberger siempre lo acompañaba el Teniente Godoy Barrientos. Así el operativo que se realizó en la cordillera con la presencia del detenido Guido Barría estuvo presente el Teniente Godoy Barrientos. Posteriormente reiterar en lo pertinente lo narrado a fs. 1559 a fs. 1560 (Tomo IV), que en el mes de octubre del año 1973, fue designado por el Mayor Hans Schernberger Valdivia, para realizar un patrullaje en rio Blanco, sector del retén

Riachuelo. Relata que este servicio iba a cargo del Mayor e integrado por el Teniente José Godoy Barrientos, los Sargentos José Rómulo Catalán Oyarzún, René Alvarado Ampuero y Sergio Aguilar Miranda, el cabo Robert Teylorl Escobar y los Carabineros Raúl Alarcón Asenjo y Alberto Oyarzún Arriagada. Acota que los conductores de los vehículos eran Oyarzún y Alarcón, sin poder precisar quien conducía cada vehículo. Aduce que llegaron al sector como a las 14:00 horas, en un campo donde funcionaba un banco aserradero. Agrega que en el lugar, el Mayor ordena detener a "Tito" Barría, cosa que así sucede e inmediatamente es subido a uno de los vehículos. Luego de esta primera detención, el Mayor ordena la búsqueda de su hermano Guido, por lo cual se realiza una búsqueda, que arroja resultados positivos al cabo de media hora. Añade que Guido es subido al vehículo junto a su hermano Tito. En el vehículo donde estaban los detenidos se sube el Mayor junto al Teniente Godoy, iniciando viaje en dirección a la Segunda Comisaría de Río Negro. Comenta que, por su parte, junto a los demás Carabineros abordaron el otro vehículo, también para dirigirse a la unidad. Divulga que transitaban por caminos diferentes, por lo cual ellos llegaron a la Comisaría como a las 18:00 horas, ocasión en la cual sintió la voz de los hermanos Barría Bassay, que estaban detenidos en los calabozos. Destaca que, debido a la hora, procedió a hacer entrega de su turno, para luego retirarse a su domicilio particular. Al día siguiente, a las 8:30 horas, al ingresar a su servicio de turno, se percató que en la unidad no estaban detenidos los hermanos Barría Bassay, por lo cual preguntó por el Mayor Schernberger, pero el funcionario que estaba de guardia le informó que había salido temprano en un vehículo, junto al Teniente Godoy, el Cabo Teylorl y el Carabinero Oyarzún, presumiendo que este grupo de funcionarios salió con los hermanos con destino desconocido.

3. Robert Santiago Teylorl Escobar declara de fs.973 a fs. 975 (Tomo III), fs. 919 a fs. 922 (Tomo III), fs. 1.573 (tomo IV), fs. 1.586 (tomo IV), fs. 1.589 (tomo IV), fs. 1.590 (tomo IV), fs. 1.595 (tomo IV), fs. 1.604 (tomo IV), fs. 1.620 (tomo IV), fs. 1.623 (tomo IV), fs. 1.633 (tomo IV) y de fs. 1.670 (tomo IV). Que en lo pertinente se destacan sus dichos de fs. 919 a fs. 922 (Tomo III), blasona que en la detención participaron el Mayor Hans Schernberger, el Teniente José Godoy, el Suboficial Catalán, que era el chofer, el Suboficial Alvarado, el Cabo Pedro Soto y los Carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún. A Guido iba con una capucha, no vio

su rostro. Blasona que tiene sus dudas, entre Soto y Quilaqueo, cree que era Quilaqueo quien estaba arriba de la camioneta custodiando el cuerpo de Guido, el día que llevaban a Guido a la Cordillera. Soto era alto y maceteado. Quilaqueo tenía su físico, pero era más pequeño. El Tribunal le pregunta cuál era la situación de acuartelamiento que regía en esa época, es decir, si las unidades inferiores tuvieron que "recogerse" a las superiores. Declara que lo único que sabe es que se eliminaron algunos Retenes y otros se recogieron a otras bases. El acuartelamiento grado uno significaba que debía estar en el cuartel, pero a veces uno hablaba con el jefe para ir a la casa porque había niños pequeños, siempre debía pedir permiso a pesar del acuartelamiento. Después que tomaron detenidos a los hermanos Barría Basay se fue a la casa. El Tribunal le consulta en forma detallada a qué unidades pertenecían los funcionarios Hans Schernberger, el teniente José Godoy, el suboficial Catalán, el suboficial Alvarado, el cabo Pedro Soto, los carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún, todos mencionados a fs. 461. Habla que respecto de Hans Schernberger este funcionario era de la Segunda Comisaría, al igual que José Godoy, el Suboficial Catalán y Alvarado, el Cabo Pedro Soto era chofer de la Segunda Comisaría, al igual que Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún. Respecto de lo mismo, el Tribunal le pregunta respecto a Pablo Araya, Osvaldo Quilaqueo, Alfonso Vargas Gallardo, Rómulo Catalán, a quienes indica como aprehensores de los hermanos Barría. Descarga que Pablo Araya era practicante de la Segunda Comisaría, respecto de Osvaldo Quilaqueo, Alfonso Vargas Gallardo, Rómulo Catalán, todos eran funcionarios de la Segunda Comisaría. El Tribunal le lee lo declarado a fojas 551, en lo pertinente, a fin de que señale ¿Quién conducía esos vehículos.? Responde que de la Comisaría de Rio Negro a Riachuelo eran Rómulo, Catalán, Alarcón o Oyarzún. Oyarzún andaba. El Tribunal le lee lo declarado a fojas 552 en lo pertinente, a fin de que indique color de la camioneta, marca y si es que era de propiedad de la institución de carabineros o fue facilitada por civiles. La camioneta era ika renal, de color crema, estas camionetas fueron requisadas a CORA e INDAP, en si a instituciones. El Tribunal le pregunta donde estaba ubicado el Fundo la Campana mencionado a fs. 552. Invoca que está ubicado al norte de la Comisaría, queda como a unos 20 kilómetros aproximadamente. No vio a ninguno al interior de la Comisaría, Guido Barría Basay estaba en la camioneta tapado con sacos, amarrado de manos,

tapado por completo, boca abajo. En esa época solo estaban detenidos los Hermanos Barría Basay. Funda que Guido Barría Basay cuando iba a la Cordillera con ellos, iba al anca del Caballo y no iba caminando, el señalaba lo que sabía y Pedro Soto como conocía la zona, él era el Vaqueano, dirigía a la patrulla. No recuerda que los hermanos Barría Basay hayan sido golpeados, arrastrados o torturados una vez que fueron detenidos. El registro de su detención debe haber quedado en el libro de guardia. No se conversó en la Comisaría respecto de lo acontecido con los hermanos Barría Basay. Posteriormente reitera a fs.1573 (Tomo IV), efectivamente en el mes de octubre de 1973, estando de servicio en la Comisaría de Carabineros de Río Negro, donde servía, recibió una orden del mayor Han Schernberger, jefe de la unidad, de acompañarlo a una diligencia que se realizaría fuera de la unidad. Le ordenó subirse a la camioneta IKA Renault, lugar en que se encontraba en la parte trasera, con su vista vendada y las manos amarradas a la espalda los hermanos Barria Bassay, se dirigieron hasta el fundo la campana, distante a unos 14 o 15 kilómetros desde la Comisaría, en ese lugar se internaron por un camino particular, y cuando llegaron a la ribera del río Negro, el mayor ordenó detener la marcha y bajar a los detenidos del vehículo. Luego, los hizo pararse a un lado del cauce del agua y pretendió darle a cada uno un corte con un cuchillo a lo que le dijo que no los lesionara. Acto seguido, el mismo Han Schernberger los empujó maniatados como estaban, a las aguas del río Negro, que eran caudalosas por efecto de los deshielos de primavera. Narra que se encontraban presentes el mayor Hans Schernberger, el teniente José Godoy, el suboficial Alvarado, el cabo Pedro Soto, que era el brazo derecho de los oficiales, y los carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún, quienes también habían participado en la detención de los hermanos Barría Bassay. Dice que está en condiciones de guiar al tribunal hasta el lugar donde fueron arrojados al río, Guido y Héctor Barría. Anexa a fs. 1586 (Tomo IV) que los detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Río Negro, ambos hermanos, Guido y Héctor, ubicados en calabozos separados. La Comisaría tenía tres calabozos. En lo pertinente cuenta que a la diligencia fue llevado Guido Barría Bassay, en calidad de detenido, quien en todo momento tuvo que desplazarse a pie durante todo el trayecto al interior de la cordillera, nunca montó un caballo. Ignora la identidad del propietario del camión utilizado, empero los caballos algunos eran de propiedad del retén de Riachuelo,

otros de particulares, incluso participó un caballo de carrera cuyo dueño era uno de los hermanos Guzman. Piensa que Héctor quedo en la Comisaría, ignorando que sucedió con él ni la forma en que murió. Especula que a lo mejor fue lanzado al río el día anterior. Al regresar a la Comisaría del patrullaje, Guido permaneció en la camioneta conducida por el mayor Schernberger, tapado con sacos y maniatado de pies y manos a la espalda. Estando en la Comisaría de Río Negro el mayor le ordena acompañarlo en el vehículo, junto a Pedro Soto y se trasladaron hacia el fundo la campana distante a unos 15 kilómetros de la comisaría. Recalca que el detenido Guido iba siempre maniatado de pies y manos. Tirado en la carrocería. El mayor detuvo la camioneta en la ribera del río Esmeralda, sector Chahuilco y ordenó bajar al detenido. Ahí lo trasladaron hacia la orilla, de pies y siempre maniatado. Acto seguido el mayor Schernberger lo empuja al cauce del río, que en este momento iba con un fuerte caudal. Recuerda que Guido gritaba cuando el caudal se lo llevaba río abajo para luego desaparecer. Proclamar que el testigo individualizado precedente, se mantiene en sus dichos en diligencia de careo con el encausado a fs. 1595 (Tomo IV), en el sentido que una vez que fueron detenidos por orden del comisario de esa fecha don Hans Schernberger, fueron trasladados a la Segunda Comisaría de Río Negro, y al día siguiente por orden del comisario recibió la orden de que lo acompañará en la camioneta IK Renault de color beige, conducida por Schernberger, en la parte posterior iba Guido quien se encontraba amarrado con alambre de fardo y vendado en sus ojos, su cuerpo estaba tapado con sacos. Espeta que el comisario puso en marcha el vehículo y se dirigieron hasta el fundo la campana a unos 15 kilómetros aproximadamente de la Comisaría. Una vez llegado al lugar el comisario le ordenó que bajara al detenido de la camioneta, él obedeció y lo dejó de pie junto al borde de la rivera del río, enseguida el comisario ordenó que empujara a Guido y él obedeció. Explica que el detenido estaba frente a ellos entonces él cumplió la orden y lo empujó, Guido estaba aún con vida, ya que se escuchaban los gritos en los momentos que su cuerpo era llevado por las aguas. En la detención de los hermanos Barría Bassay también participó el comisario y los otros funcionarios que señaló en su declaración anterior. Delibera que los dos hermanos fueron detenidos el mismo día en el aserradero de propiedad del señor Pasenau, en el sector de Riachuelo. El capitán Schernberger fue quien dio la orden de la detención de los hermanos Barría a

todos los funcionarios que componían el grupo y fue personalmente con ellos a dicha detención. Con respecto a la excursión en vehículos motorizados y luego desde el predio del señor Martínez en la precordillera para ir al lugar indicado con Guido Barría Bassay donde se pensaba que había armas y personas, concurrió el capitán Schernberger en calidad de comisario, también fue el Teniente Godoy, además él era comisario subrogante. Tras haber regresado de la excursión siempre con el detenido Guido Barría en la parte posterior de la camioneta, amarrado, con sus ojos vendados y tapado con sacos, él no se bajó del vehículo, fue el señor comisario Schernberger quien bajó unos minutos y luego salieron los dos con destino a la campana, donde recibió la orden de su jefe quien le dijo que lo empujara, tuvo que obedecer o de lo contrario lo sancionarían, Más aún en ese tiempo no podían oponerse a la orden de un superior. En la camioneta también viajaba otro funcionario, no recuerda bien que funcionario.

4. Ricardo Alejandro Barría Ralil. Depuso de fs. 33 a fs.35 (Tomo I) y de fs. 264 a fs. 266 (Tomo I). En lo pertinente declara que es hijo de Guido Ricardo y sobrino de Héctor Alejandro, ambos de apellidos Barría Bassay, quiénes fueron detenidos el 16 de octubre de 1973 por personal de Carabineros de Río Negro, específicamente por el Capitán Hans Schernberger, el Teniente Hernán Godoy, los Cabos Pedro Soto, Robert Teylorl y Carabineros Alberto Oyarzún, Quintiliano Rogel y otros de apellido Catalán, Alvarado y dos más cuyos apellidos no recuerda actualmente. Todos estos datos los supo por su madre de crianza, que en realidad es su abuela de nombre Helvecia Bassay (fallecida), quién le narró desde su infancia cómo su padre a mediodía fue detenido por este grupo de Carabineros que llegó al aserradero donde trabajaba su padre y su tío Héctor, ubicado en el sector Los Riscos de la Comuna de Purranque. Ellos eran dirigentes del partido socialista, motivo por el cual deben haber sido detenidos. Desde la fecha de su detención nunca más supieron de su paradero, sin embargo, en la causa seguida en la ciudad de Santiago por estos mismos hechos hay declaraciones de Carabineros que confirman que su padre y su tío fueron asesinados. No obstante lo anterior, nunca dijeron en qué lugar fueron enterrados o qué pasó con sus cuerpos.

5. Inés Del Carmen Barría Bassay. Depone de fs. 39 (Tomo I), fs. 259 a fs. 261 (Tomo I), 559 a fs. 560 (Tomo II), fs. 701 (Tomo II) copia de fs. 778 (Tomo II), fs.

1.425 a 1.427 (Tomo IV), copia de fs. 1.544 a 1.546 (Tomo IV), fs. 1428 (Tomo IV), fs. 1.429 a 1.430 (Tomo IV), 1.431 a 1.433 (Tomo IV) y de fs. 1630 (Tomo V). En pertinente narra que es hermana de Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barria Bassay, quienes fueron detenidos el día 16 de octubre de 1973, en el aserradero Los Riscos, sector Rio Blanco, Riachuelo. Las detenciones de ambos fueron efectuadas por personal de Carabineros de Rio Negro y Riachuelo, entre los cuales se encontraba el entonces Teniente de la Comisaría de Rio Negro, Hernán Godoy Barrientos, era el jefe del grupo a cargo de la detención; también lo acompañaba; el Carabinero Luis Alberto Oyarzún Arriagada. Aproxima que no fue testigo de la detención de sus hermanos, pero si lo fue su padre don Pedro Barria Navarro, el vio junto a una veintena de personas cuando los Carabineros llegaron al aserradero perteneciente a Julio Escobar y se llevaron detenidos a sus hermanos, en dicha diligencia a nadie más detuvieron. Aquilata que su madre Elvecia Bassay Alvear fue hasta Carabineros del Retén de Riachuelo, donde le negaron el hecho de haber sido detenidos sus hermanos. Tanto en las unidades de Carabineros de Riachuelo como de Rio Negro, siempre se le negado a su madre la detención de Guido y de Héctor. Luego su madre peregrinó por la cárcel de Osorno y Comisaría de la misma ciudad, siempre con el mismo resultado negativo. Actualmente sus hermanos figuran en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como detenidos desaparecidos. Los hechos que rodearon la muerte de sus hermanos fueron investigados en el IV Juzgado Militar de Valdivia, proceso N°852/80, causa que terminó por sobreseimiento definitivo y también en el Juzgado de Letras de Rio Negro, proceso N°24.365 M, la que también termino por sobreseimiento definitivo. Arguye que por dichos de un testigo que le pidió mantener reserva de su nombre, éste le afirmó que cuando él fue a sepultar a una mujer al Cementerio Indígena La Capilla del sector de Riachuelo, al cavar una fosa encontraron en su interior un cadáver envuelto en bolsas plásticas negras, sin ningún tipo de identificación en el lugar que indicara que existía un cuerpo sepultado en dicho sitio. Un conocido suyo llamado Alfredo Toledo, quien vive en Riachuelo, le comentó a un muy amigo de su familia llamado Ignacio Martínez Gómez, quien vive actualmente en Osorno y antes en Riachuelo, que habla escuchado en un asado decir al Carabinero Alberto Oyarzún, que a uno de los hermanos Barria Bassay lo habían sepultado en el Cementerio La Capilla de

Riachuelo, que éste había sido muy valiente, pues cuando estaba cavando su propia tumba no había dejado de cantar el himno de su partido político.

6. Pedro Alejandrino Barría Navarro. Depone de fs. 1459 (Tomo IV), fs. 1477 (Tomo IV), fs. 1.484 a fs. 1485 (Tomo IV), fs. 1486 (Tomo IV), fs. 1487 (Tomo IV), fs. 1488 (Tomo IV), a fs. 1489 (Tomo IV), fs. 1491 a fs. 1492 (Tomo IV), y fs. 1504 (tomo IV). Respecto a lo cual se reitera sus dichos de fs. 1477 (Tomo IV). Apunta que el día 16 de octubre de 1973 se encontraba trabajando con sus hijos Guido Ricardo en el fundo Los Riscos de propiedad de un señor Escobar, cuando llegó una patrulla de Carabineros comandada por el Teniente Godoy y los Carabineros que señaló en la declaración de fs. 56. Posterior a la detención, los trasladan caminando hacia unas camionetas que manejaban los hermanos Guzmán cuyo nombre son René y Raúl, agricultores domiciliados en Riachuelo. Asegura que, dentro del grupo de Carabineros, vio como Pedro Soto botó al suelo a su hijo Guido Ricardo lo hizo desnudar y le pegó. Comenta que el domicilio de ellos fue varias veces allanado por militares, Carabineros e Investigaciones y dieron vueltas todas las cosas buscando armas. Dice que los Carabineros intervinieron en la detención.

7. Elvecia Bassay Alvear. Depuso de fs. 217 a fs. 220 (Tomo I), 1.453 a 1.454 (Tomo IV), 1471 (Tomo IV), fs. 1.505 (Tomo IV) fs. 1.528 (Tomo IV) y de fs. 1533 (Tomo IV). Asevera en lo pertinente que es casada con Pedro Alejandrino Barría Navarro, de dicho matrimonio nacieron ocho hijos, entre ellos Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barría Bassay, de 19 y 27 años, al mes de octubre de 1973 y que a la fecha tendrían en consecuencia 24 y 32 años respectivamente. El primero de ellos trabajaba como obrero en el aserradero de Julio Escobar, cuyas labores realizaba en el fundo de Eduardo Geisse, ubicado en los Riscos, Riachuelo. El segundo se desempeñaba en la escuela N°2 de Río Negro, pero el día de su desaparecimiento se hallaba en dicho fundo, en razón de que el Teniente de Carabineros de Río Negro, José Hernán Godoy Barrientos lo había notificado de que abandonase el pueblo y que si lo veía lo detendría, habiéndole ella misma aconsejado que se fuese al lado de su padre y hermano en las labores madereras de Escobar. Ambos hijos eran militantes del Partido Socialista de Río Negro y Héctor Alejandro era delegado de los trabajadores en el S. U. T. E (Sindicado Único de Trabajadores de la Educación). Atestigua que la desaparición de sus dos hijos se produjo en las siguientes circunstancias: el día 16 de octubre de 1973 se

encontraban en las labores del mencionado aserradero cuando a eso de las 12 horas interrumpieron en el fundo un grupo de Carabineros de la Comisaría de Río Negro, comandados por el Teniente José Hernán Godoy Barrientos e integrada entre otros, por el Cabo Pedro Soto, por los Carabineros Alberto Oyarzún, Sergio Aguilar, René Alvarado y otros cuyos apellidos son Duhalde, Barrientos, Rogel, Catalán. Los Carabineros llegaron en una camioneta de propiedad de los hermanos René y Raúl Guzmán, comerciantes de Riachuelo, quienes se quedaron a la distancia. Al parecer estos funcionarios iban en busca exclusiva de sus hijos, ya que apenas llegaron los tomaron detenidos, maltrataron y torturaron, lanzándoles puntapiés, culatazos y golpes, entre insultos y groserías, echándolos y arrojándolos al vehículo. Esta detención y malos tratos los efectuaron en presencia de los trabajadores del aserradero, entre ellos, el propio padre de sus hijos, Armando Pezoa, Juan Ojeda, Armando Nilián, Alfonso Huenchuán, Alejandrino Barrientos, Oscar Vargas, Clemente Chodín, Hayde Hernández, María de Catalán, Mercedes de Schell y otros obreros de los cuales sabe solo sus apellidos; Oyarzún, Angulo, Soto, pero son fáciles de ubicar, porque son del lugar. Los detenidos fueron llevados a Riachuelo, en donde estuvieron hasta el día 17 de octubre, para ser llevados a la Comisaría de Río Negro. Atina que fue a verlos al Retén de Riachuelo y después a la Comisaría, pero en las dos partes se los negaron e incluso en el Retén la amenazaron con proceder en su contra si seguía molestando. Desde esa instancia de la detención nunca más se volvió a ver a sus hijos. Así han pasado todos estos años sin que pueda ubicar sus hijos. Como antecedente declara que a principio de año recibió un papel escrito al parecer por su hijo Guido, que decía en forma muy escueta “estamos vivos. Tito tiene visita, yo no”; estaba escrito con lápiz pasta, letra de imprenta, se hacía parecer este papel como que venía de la cárcel de Puerto Natales, pero al hacer averiguaciones allí no estaban sus hijos; después se le dijo que estarían en Punta Arenas, en la cárcel, pero tampoco se les ubicó allí. Y ahora último se le quiere hacer ver que estaría en Santiago, noticias que lejos de traerle una esperanza solo aparecen como una nueva forma de tortura espiritual y de dolor. Destaca que su marido estuvo presente en la detención de sus hijos.

8. Luis Eliser Barría Bassay. Depuso de fs. 262 a fs. 263 (Tomo I) y de fs. 267 a fs. 272 (Tomo I). Desarrolla en lo pertinente que en los días posteriores al golpe

militar del 11 de septiembre de 1973 se reúne un grupo de agricultores alemanes en la casa de la familia de German Pasenau en el Fundo Río Blanco, comuna de Río Negro. Esta reunión tiene como objetivo reunir fondos en dinero para mandar a matar a los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, más otros dirigentes de la comuna que no eran del agrado de estos alemanes. De esta reunión se toma el acuerdo de que la familia Pasenau queda a cargo de recepcionar el dinero acordado y además, hacer los contactos para entrevistarse con los Carabineros oficiales, encargados de la 2° Comisaría de la comuna de Río Negro. De tal forma que la segunda quincena de septiembre de 1973, la familia Pasenau se contacta con los hermanos Raúl y René Guzmán para comenzar su macabro acuerdo. ¿Por qué se contactan con los hermanos Guzmán? Muy sencillo, éstos dos hermanos Guzmán son muy amigos del Carabinero Alberto Oyarzún A., y éste a su vez tenía muy buena relación con el Teniente de Carabineros Hernán Godoy Barrientos, perteneciente a la 2° Comisaría de Río Negro. Esta buena relación era debido a que una de las hermanas de Oyarzún tenía algunas relaciones amorosas con Godoy Barrientos. Dicho esto, se forma el puente perfecto entre la familia Pasenau, los hermanos Raúl y René Guzmán, Alberto Oyarzún y Hernán Godoy Barrientos, junto al Capitán de Carabineros Hans Schernberger. Hace presente que todos estos oscuros personajes fueron pagados por la familia Hans Pasenau, por todas las acciones efectuadas para preparar el plan. Es así que el día 16 de octubre de 1973 el mando de Carabineros de la 2° Comisaría de Río Negro, apoyado por la logística y vehículos de los hermanos Guzmán hacen su funesto operativo, previamente acordado y van a detener a los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, que se encontraban junto a su padre y trabajadores en un aserradero de don Julio Escobar Winklen, ubicado en el Fundo Los Riscos del sector de Río Blanco en la comuna de Río Negro. Fueron detenidos y amarrados con alambres de púas de ahí tirados en el piso de la carrocería de la camioneta de los hermanos Guzmán; tapados con unas carpas y pisoteados por contingente de Carabineros. De allí fueron llevados al Retén de Riachuelo y posteriormente a la 2° Comisaría de Río Negro. Todo este operativo estaba a cargo del Capitán Schernberger y el Teniente Godoy. Hace presente que Carabineros siempre negó la detención de los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, tanto a su madre y familiares que lo andaban buscando. Descarga que Carabineros de Chile de la 2°

Comisararía de la comuna de Rio Negro trasladó a los hermanos Barría Bassay a diferentes sectores dentro de la comuna, para justificar en alguna medida la detención, todo según ellos, en busca de armas, armas que nunca existieron. Tanto fue que, en uno de los tantos traslados a diferentes partes, fueron llevados a la estación de ferrocarriles de Chahuilco, comuna de Rio Negro y se internaron en el Fundo La Campana, de propiedad de la familia Engel. Y en un cobarde acto, el Teniente Godoy Barrientos preguntó ¿quién quiere matar a este?, indicando a Héctor Barría Bassay. A lo que el uniformado Robert Teylorl se ofreció y procedió a darle muerte con su arma de servicio a la persona indicada. Al día siguiente se dirigieron a la casa de la familia Pasenau los uniformados, Capitán Hans Schernberger, el Teniente Hernán Godoy, uniformados o Carabineros Pedro Soto, Robert Teylorl, Alberto Oyarzún, hermanos Raúl y René Guzmán. El plan estaba prácticamente conversado, pero llevaron los cuerpos de Héctor Barría y otro cuerpo, presumiblemente de un señor Sandoval del puesto de Rio Negro. En ese momento Guido Barría todavía estaba con vida, pero no por mucho tiempo, pues una vez que la familia Pasenau les concede el dinero acordado a todos estos asesinos. Estos se fueron directamente a completar su siniestro plan. Se van a un lugar desconocido dentro del sector y Carabineros ordena a Guido Barría hacer una excavación en la tierra. Posteriormente le ordenan colocar en dicha excavación el primer cadáver. Luego le ordenan a Guido hacer lo mismo con el segundo cuerpo. Y cuando estaba colocado este cuerpo, el Teniente Hernán Godoy acribilló a balazos por la espalda a Guido Barría Bassay, según él, como un acto de valor frente a estos siniestros personajes. A continuación taparon los cuerpos, quedando sepultados estos tres cadáveres en una sola fosa, quedando el cuerpo de guido en la parte superior.

9. Luis Alberto Oyarzún Arriagada. Depone de fs. 938 a fs. 940 (Tomo III), de fs. 1.041 (Tomo III) copia a fs. 1520 (Tomo IV), de fs. 1.042 a fs. 1.043 (Tomo III) copia a fs. 1550 a fs. 1551 (Tomo IV), de fs. 1.044 a fs. 1.046 (Tomo III) copia a fs. 1569 a fs. 1571 (tomo IV), de fs. 1.047 a fs. 1.048 (Tomo III) copia a fs. 1582 a fs. 1583 (Tomo IV), de fs. 1.049 a fs. 1.050 (Tomo III) copia a fs. 1684 a fs. 1685 (Tomo IV), fs. 1.052 a fs. 1.055 (Tomo III); de fs. 1446 (tomo IV), fs. 1.487 (tomo IV), fs. 1.561 (tomo IV) y fs. 1.599 (tomo IV). Que en lo pertinente de los dichos del encausado conviene puntualizar lo rolante de fs. 1044 a fs. 1045 (Tomo III), copia a fs. 1569 a fs.

1571 (Tomo IV), narra que cuando se presentó a la unidad en horas de la tarde, fue informado por el oficial de guardia que estaba detenido en el calabozo Guido Barría, a quién él conocía desde que ambos eran niños, pues sus padres habían trabajado juntos, de hecho con ambos hermanos cuando niño jugaban a la pelota. Él se dio una vuelta por el calabozo que estaba en el subterráneo, en forma totalmente escondido, para que nadie lo viera, pudiendo ver a Guido quien le dijo que lo habían golpeado muy duramente, le aconsejó que dijera toda la verdad respecto de lo que le preguntaran, ante lo cual éste le dijo que ya había contado todo lo que sabía. Le preguntó dónde estaba Héctor Alejandro, a quién apodaban Tito, diciendo que no sabía dónde se encontraba en esos momentos. Como Guido Barría, dijo que en la zona precordillerana de Millantue, se encontraban ocultas armas, se preparó una especie de operativo, yéndose a la zona, ocupándose vehículos y caballos de otros retenes y el camión de don Fernando Aguirre; un vecino de la zona. Al llegar al lugar donde Guido dijo que se encontraban armas, solo vieron una especie de refugio cubierto de ramas con restos de comida, no se encontró ningún tipo de armas y tampoco se detuvo a nadie en ese operativo. La vuelta desde la cordillera fue en los mismos vehículos, a saber un Jeep Bronco de la Gobernación, un furgón marca Chevrolet de color verde del SAG, el Jeep tipo camioneta de color amarillo que según recuerda era un Ika Renault, que tiene sólo dos asientos y la parte posterior es para carga, vehículo de propiedad de la CORA o del INDAP, los que estaban a disposición de la Comisaría de Río Negro. Ignora en que vehículo trasladaron a Guido desde la zona en el camino de vuelta. Si escuchó, pero a él no le consta, que a Guido lo trajeron en el mismo vehículo marca Ika Renault, en que viajaron Mayor Hans Schernberger, comisario de Río Negro y el Cabo Robert Teylorl Escobar de la misma unidad, también escuché que a Guido lo traían amarrado con alambre de púas y en la parte posterior del jeep que era conducido por Schernberger. Él viajó más tarde en el camión donde fueron subidos los caballos, llegando más tarde que los demás a la unidad. Él preguntó por Guido, y le dijeron que no se encontraba detenido en la unidad, no hizo más preguntas respecto de donde él se encontraba. Espeta que no vio detenido en la Comisaría de Río Negro, a Héctor Alejandro Barría Bassay. No participó ni siquiera como chofer, en las detenciones de los hermanos de Héctor Alejandro y Guido Héctor Barría Bassay. Adopta que lo escuchó respecto a la detención, fue que se

produjo en la camioneta Chevrolet de los hermanos Raúl y René Guzmán del Río que ese tiempo no recuerda si era verde o roja, y que uno de ellos, Raúl Guzmán fue el chofer del vehículo cuando se les detuvo. Los Carabineros que participaron fueron el teniente José Hernán Godoy Barrientos, el cabo Pedro Soto Godoy, los cabos Quintiliano, Rogel Alvarado y Barrientos Arriagada. Cuenta que al interior de la Comisaría de Carabineros de Río Negro a los detenidos cuando se les interrogaba, se les golpeaba con las culatas de los fusiles, con el "tonto de goma" y con golpes de pies y puño en diferentes partes del cuerpo, también se les sumergía en un tambor con agua y por último, se les ataba en una escala que era colocada en un ángulo de 45 grados, al detenido se le amarraba con los pies hacia arriba y se le echaba agua en su boca. Estos tormentos eran aplicados por el teniente José Godoy Barrientos, el cabo Pedro Soto Godoy y por el cabo Robert Teylorl Escobar, a él le consta pues personalmente cuando los detenidos se les torturaba. No vio que los detenidos tuvieran su vista vendada. Posteriormente y en lo pertinente reiterar dichos de fs. 1049 a fs. 1050 (Tomo II), copia a fs. 1684 a fs. 1685 (Tomo IV), dice que el 16 de octubre de 1973 se encontraba trabajando en la Comisaría de Río Negro, con el grado de carabinero. Recuerda haber efectuado un patrullaje a la cordillera de la costa, específicamente en el sector Huelhellhue, con Guido Barría Bassay, este último en calidad de detenido por la Segunda Comisaría de Río Negro. Anexa que al llegar en la noche del día 16 de octubre de 1973, después de haber permanecido franco, se enteró por el funcionario de guardia, no recuerda identidad, de que los hermanos Guido y Héctor Barria Bassay habían sido detenidos. A los cual consultó donde se encontraban, manifestándole el mismo funcionario de guardia que Guido se encontraba en los calabozos. Así él en forma oculta lo constató en el calabozo y conversó con él en la rejilla de la puesta de su celda que se encontraba en el subterráneo de la Comisaría, dicha conversación fue breve, solo le preguntó cómo se encontraba, manifestándole que se encontraba bien y que confesaría todo lo que sabía para que no lo golpearan, luego se retiró del lugar porque la jefatura de la Comisaría, que se encontraba en esos momentos compuesta por el capitán Hans Schernberger Valdivia y el teniente José Hernán Godoy Barrientos, habían ordenado para el día siguiente el patrullaje al sector de la cordillera de la costa. Dicho operativo se llevó a cabo en forma temprana al día siguiente, donde participó como escolta, además de

alrededor de unos 25 carabineros montados de diversos retenes de la segunda Comisaría. Además, del jefe al mando, no recuerda si el teniente Godoy andaba. Se les informó que la finalidad de este patrullaje era encontrar armas y algunos personajes de los cuales ignora sus nombres a quienes se buscaba. Se concurrió al lugar con el detenido Guido Barría Bassay donde no se encontró nada, regresando al lugar de Millantue ubicado en la precordillera, desde donde habían salido montado. Una vez terminado el patrullaje, se le ordenó hacer andar un camión marca international, color rojo de propiedad del civil Fernando Aguirre. Esa persona igual habría facilitado 6 caballares y el chofer que llevo el camión no iría a buscarlo durante ese día, se presumía que el patrullaje podría durar más tiempo. Tras hacer andar el camión, trasladó los caballos hasta Ro Negro, lugar Chifín, y luego se devolvió a la Comisaría. Desde el lugar de Millantue, Carabineros a cargo del procedimiento relatado no llegaron a la segunda Comisaría de Río Negro con don Guido Barría Bassay, razón por la cual consultó a los colegas que andaban el procedimiento, sin darle ninguno una respuesta correcta, ya que todas eran evasivas a la situación. Quiere aclarar que varias de las respuestas evasivas y de desconocimiento de los hechos, fue producto de instrucciones hechas por el asesor jurídico de la prefectura don Fredy Rosas, quien los citaba a su oficina y les entregaba instrucciones de lo que debían declarar, debido a que aún eran parte de la institución y cualquier declaración mal hecha podía perjudicar su estabilidad funcionaria.

10. José Godoy Barrientos, en declaración judicial, rolante de fs. 1.134 a fs. 1.139 (Tomo III). En lo pertinente depone que respecto a la detención de los hermanos Barría Bassay, ella fue dispuesta por Schernberger. El acusado en ese momento estaba saliendo de la Comisaría de Río Negro hacia Hueyusca, pues esa unidad se levantó y sólo había tres funcionarios en ese lugar.

B. Documentos.

1. De fs. 8 a fs. 10 (Tomo I), fotocopias de páginas pertinentes del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo 1, acompañado en la querella de Mahuad Segundo Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior de fs. 15 y siguientes, el cual señala que: El 16 de octubre de 1973 una patrulla de Carabineros de Río Negro detuvo en su lugar de trabajo a los hermanos: Guido Ricardo Barría Bassay, quien tenía 19 años, era obrero agrícola y militante

socialista. Héctor Alejandro Barría Bassay, quien tenía 27 años, era auxiliar de la Escuela N°2 de Río Negro, delegado al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y militante socialista. El día indicado, una patrulla de Carabineros de Río Negro, compuesta por aproximadamente diez efectivos, llegó al aserradero donde trabajaban las víctimas y los detuvo ante varios testigos, llevándoselos en una camioneta. Desde ese momento no se vuelve a tener noticia alguna sobre el paradero y la suerte final de los detenidos. Es convicción de la Comisión que la desaparición de los hermanos Barría es de responsabilidad de agentes del Estado que incurrieron en violación a los derechos humanos. Son circunstancias de convicción las siguientes: que la detención se encuentre acreditada por testigos, que en un proceso judicial un funcionario de Carabineros reconoció la detención señalada, que fueron trasladados a la Unidad de Carabineros de Río Negro, que tras sus desapariciones no haya habido más noticias de los afectados y que ante los requerimientos de la Comisión a la autoridad policial no haya habido información oportuna y precisa.

2. Copia de sentencia definitiva dictada por don Alejandro Solís Muñoz, Ministro de Fuero, en causa rol 2182-98 “Episodio Río Negro” de 03 de mayo de 2004, rolante a fs. 45 y siguientes (Tomo I), en virtud de la cual se declara en lo pertinente que: “Que con el mérito de estos antecedentes, apreciados según las normas respectivas, constitutivos de presunciones judiciales que reúnen todos los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra legalmente acreditado en el proceso que el día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 12:00 horas, una unidad operativa de Carabineros a cargo del Teniente José Hernán Godoy Barrientos, bajo el mando del Mayor Hans Schernberger Valdivia, Comisario de la Comisaría de Carabineros de Río Negro y Gobernador del Departamento del mismo nombre, con participación del Sargento Quintiliano Rogel Alvarado, del sargento Rómulo Catalán Oyarzún, del cabo primero Robert Santiago Teylorl Escobar y del cabo primero Pedro Segundo Araya Soto Godoy, detuvieron sin portar orden judicial alguna, desde el lugar de su trabajo en el aserradero del fundo “El Risco”, ubicado en Riachuelo de la comuna de Río Negro, a los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo, Barría Bassay, personas que fueron conducidas desde ese recinto maderero hacia la Comisaria de Carabineros de Riachuelo y luego la de Río Negro, donde fueron torturados e interrogados

sobre armas que presumía escondían y que no se encontraron, para finalmente ser llevado Guido Ricardo Barria, por Schernberger Valdivia y Teylorl Escobar, hacia un sector del fundo La Campana, distante a unos quince kilómetros de la referida Comisaría, por haberse incinerado antes de tiempo los registros de ingreso y egreso de los detenidos, perdiéndose todo rastro de ambos hasta la fecha, sin que los privados de libertad hayan tomado contacto con sus familiares, realizando gestiones administrativas ante organismos del estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que consten, tampoco sus defunciones. Que estos hechos son constitutivos de sendos delitos de secuestro calificado, previstos en el artículo 141 del Código Penal, según el tenor de la norma antes de la modificación introducida por la ley 19.029, en virtud del principio de la no retroactividad de la ley penal y, por ende, sancionados con las penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados.”

3. Documentos remitidos por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a fs. 166 y siguientes (Tomo I), que se desglosa de la siguiente forma:

a. A fs. 168 (Tomo I), acta de nacimiento Guido Ricardo Barría Bassay, detallada precedentemente.

b. A fs. 168 bis (Tomo I), certificado de nacimiento de Guido Ricardo Barría Bassay, detallado precedentemente.

c. A fs. 169 (Tomo I), Carta enviada al General Director de Carabineros de Chile por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 02 de octubre de 1990, detallada precedentemente.

d. A fs. 171 y siguientes (Tomo I), Documentos del Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, “Detenidos desaparecidos”, que se desglosan de la siguiente forma:

i. A fs. 175 y siguientes (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 224 y siguientes (Tomo I), ORD. N°11478/16825 de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de fecha 11 de diciembre de 1990, en virtud del cual informa los movimientos migratorios de las personas consultadas, aduciendo que el resto de las personas consultadas no registran anotaciones de viajes (no registrando a las víctimas de autos).

ii. A fs. 205 y siguientes (Tomo I), ficha W-485, que indica que Guido Ricardo Barría Bassay, tenía 19 años de edad, era casado y tenía tres hijos, el menor de

ellos, póstumo. Era empleado de correos y trabajaba también en el campo. Militaba en el Partido Socialista. Fue detenido con su hermano el día 16 de octubre de 1973 desde su lugar de trabajo, por Carabineros de Río Negro. Desde el momento de su detención, Guido Barría y su hermano se encuentran desaparecidos. Aproximadamente a las 12:00 horas del día 16/10/73 cuando los obreros del aserradero existentes en el fundo de Eduardo Gueisse se preparaban para almorzar, entre ellos los hermanos Barría Bassay y su padre, vieron llegar a una patrulla de Carabineros, compuesta por aproximadamente 10 efectivos, los que llegaron en una camioneta de propiedad de los hermanos René y Raúl Guzmán, comerciante de la región, quienes se mantuvieron a cierta distancia de los hechos. La patrulla de Carabineros detuvo inmediatamente a los hermanos Barría Bassay y solamente a ellos. Al resto de los obreros los obligaron a tenderse boca abajo, mientras golpeaban y maltrataban de hecho y palabra a los detenidos. Luego procedieron a lanzarlos violentamente dentro de la camioneta y los llevaron personalmente al Retén de Riachuelo, donde habrían estado hasta el 17/10/73, para luego ser trasladados a la Comisaría de Río Negro. En ambos lugares se les negó a los familiares la detención. De todos estos hechos, detención y maltrato hay testigos, pues se efectuaron en presencia de los trabajadores del aserradero, entre ellos, en lo pertinente, el propio padre de los detenidos.

4. Fotocopia de Hoja de vida de las siguientes personas:

a. A fs. 429 y siguientes (Tomo I), José Hernán Godoy Barrientos, que en lo pertinente señala lo siguiente: **1)** A fs. 438 (Tomo I), se señala que con fecha 3-III-972 asciende a Teniente Grado 3°, con fecha 2-II-972, según boletín oficial 2332, permaneciendo en la Prefectura de Osorno, pasando de la 1era., a la 2da., Comisaría de Río Negro. **2)** A fs. 439 (Tomo I), se señala que con fecha 16-II-974 *en conformidad al Radio N°657 Digcar. P. I. del 27-II-974, se traslada con derechos reglamentarios, desde la 2da. Comisaría Río Negro a la Tenencia Purranque como Jefe". Presentándose en su nueva unidad el 2-III-974.*

b. A fs. 456 y siguientes (Tomo I), Hans Eduart Schernberger Valdivia, que en lo pertinente señala lo siguiente: **1)** A fs. 468 (Tomo I), se señala que con fecha 26-I-973 por resolución exenta N°9 de 24-I-973 es trasladado a la 2da., Comisaría de la Prefectura de Osorno, como Comisario, a contar del 16-I-973, radiograma Kardex P.1. N°292 B70. 2384-52196. Presentando a dicha unidad con fecha 10-

III-973, tal como consta a fs. 469 (Tomo I). 2) A fs. 469 (Tomo I), con fecha 22-I-1974 se le designó en la Fiscalía Militar de Carabineros de Osorno, en reemplazo del titular abogado asesor Fredy Rosas Arriagada, según Decreto 16 de 12-II-974.

5. A fs. 902 y siguientes (Tomo III), relación del personal de Carabineros de Chile, que se desglosa de la siguiente forma:

a. A fs. 902 y siguiente (Tomo III), contiene la dotación de la Segunda Comisaría “Río Negro” entre los meses de marzo a diciembre de 1973, entre los que se encuentran: **a)** En el numeral 2, el Capitán Hans Eduart Schernberger Valdivia. **b)** En el numeral 3, el Teniente (O) José Hernán Godoy Barrientos.

b. A fs. 908 (Tomo III), contiene dotación del Retén “Maipue” entre los meses de marzo a diciembre de 1973, entre los que se encuentran en el numeral 4, el Carabinero Luis Alberto Oyarzún Arriagada.

6. A fs. 1.469 (Tomo IV), ORD. N°2011/182/15 de fecha 22 de junio de 1979, remitido por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile al Primer Juzgado de Letras de Osorno, en virtud del cual justifica que: En atención a su oficio s/n de fecha 29 de mayo ppdo., mediante el cual se ordena informar si se registran egresos del país y si han sido requeridos para impedir la salida del país, en lo pertinente de Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barría Bassay. Dicho informe concluye que consultados los archivos de la sección control internacional de Frontera a contar del día 1° de enero de 1978 a la fecha, ninguna de las personas mencionadas registra anotaciones de viajes. Asimismo, consultado los archivos del Departamento de Informática Policial de la Institución, ninguna de las personas señaladas registra impedimentos de salida del país.

15°) Que de los propios dichos del acusado Schernberger Valdivia se puede desprender que reconoce haber dado la orden de la detención, a propósito de la instrucción que le dio el Intendente Militar provincial de Osorno en esa fecha, Lizardo Abarca Amaya, Coronel de Ejército. No desconoce que haya dado la orden de la detención que le fue compelida por el Intendente de la zona como lo señaló precedentemente.

16°) Que como se aprecia los hechos de la detención, apremios y secuestro de los hermanos Barria Bassay son semejantes a los que ha determinado don Alejandro Solís Muñoz, Ministro de Fiero, en sentencia de causa rol 2182-98

“Episodio Río Negro” de 03 de mayo de 2004. Toda vez que la absolución dictada en esa causa es por aplicación de la institución de la prescripción, como consta a fs. 141 y siguientes (Tomo I). Ello es sin perjuicio de este nuevo proceso que debe ponderar en conformidad a la ley, los nuevos elementos probatorios para de esa forma establecer los hechos del caso

17°) Que del conjunto de elementos probatorios antes aquilatados y relacionados generales y específicos testigos directos, indirectos y documentos antes señalados como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 1950 a fs. 1983 (Tomo V)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

1. Primero: que han existido los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado en las personas de Héctor Alejandro Barria Bassay y Guido Ricardo Barria Bassay, previstos y sancionados en los artículos 148, 150 N°1 y 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícitos en su carácter de lesa humanidad

2. Segundo: que en esos ilícitos le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **Hans Eduart Schernberger Valdivia**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

18°) Declaración indagatoria de **JOSÉ HERNAN GODOY BARRIENTOS** (25 años a la fecha de ocurrencia de los hechos). Depone de fs. 972 (Tomo III), fs. 1.134 a 1.139 (Tomo III), fs. 1.141 (Tomo III), fs. 1.142 (Tomo III), copia de 1.481 (Tomo IV), fs. 1.143 a 1.144 (Tomo III), copia de fs. 1.482 a 1.483 (Tomo IV), fs. 1.145 a 1.146 (Tomo III), copia de fs. 1.478 a 1.479 (Tomo IV), fs. 1.151 (Tomo III), copia a fs. 1.574 (Tomo IV), fs. 1.152 (Tomo III), copia a fs. 1.581 (Tomo IV), fs. 1.153 a 1.155 (Tomo III), copia de fs. 1.590 a 1.592 (Tomo IV), fs. 1.156 (Tomo III), copia fs. 1.593 (Tomo IV), fs. 1.157 a 1.165 (Tomo III), fs. 1.175 (Tomo III) y de fs. 1.460 (Tomo IV)

En **declaración extrajudicial** de fecha 04 de septiembre de 2018, rolante a **fs. 972 (Tomo III)**. Sustenta que estos mismos hechos están investigados en proceso o causa de por medio (causa 2182-98), por lo cual se remite a sus dichos prestados en esa causa. Destaca que en dicho proceso fue sobreseído por fallo

de la Corte Suprema de fecha 27 de diciembre de 2007 y en su caso particular por 5 votos a 0.

En **declaración judicial** de fecha 28 de mayo de 2019, rolante de **fs. 1.134 a fs. 1.139 (Tomo III)**. Ratifica las declaraciones que rolan de fs. 972 de la causa rol 1-2016 de la Corte de Apelaciones de Valdivia a fs. 792, 828 a 828 vta., 830, 830 vta., 990 a 991 vta., 462, 528, 560 a 562, 563, 1.109 a 1.117, 1.118, 1.304 a 1.311 y la de fs. 1.313 de la causa rol 2182-98 del ingreso de la Corte de Apelaciones de Santiago, que se tiene a la vista en el proceso y que le han sido leídas. Asimismo, reconoce como suyas todas las firmas estampadas en ellas. Urde que no tiene ninguna responsabilidad en la muerte de los hermanos Barría Bassay. Además, acompaña un breve resumen de tres hojas, que se ha permitido hacer muy respetuosamente sobre los hechos que se investigan. Asimismo, una copia del fallo de la Excma. Corte Suprema de fecha 27 de diciembre de 2007. El Tribunal ordena agregarlos al proceso. Durante mucho tiempo ha pensado que la detención y muerte de los hermanos Barría Bassay tiene que ver con rencillas o venganzas de personas civiles que eran de Riachuelo. No podría sindicar a alguien en específico, pero siempre ha pensado que esto fue así y por esa razón los hermanos Barría Bassay fueron detenidos. Estos civiles que menciona eran los "momios" o gente de poder en ese lugar, es decir, en Riachuelo. Estas son sólo conjeturas suyas, pues Riachuelo era un pueblo chico. En el expediente anterior fueron citadas algunas de esas personas, al parecer están todos fallecidos. Respecto a Robert Teylorl, utiliza que era una persona de buen estado físico en esa época. Cree que este hombre fue víctima de las circunstancias y de las personas en esa época. Descarga que Teylorl siempre ha mantenido su versión. Según lo que ha leído todo esto fue en el lapso de 24 horas, es decir, la detención y procedimiento de los hermanos Barría Bassay. Sobre Soto tiene la peor opinión, no concordaba con su forma de ser ni la disciplina institucional. Respecto a la detención de los hermanos Barría Bassay, ella fue dispuesta por Schernberger. El acusado en ese momento estaba saliendo de la Comisaría de Río Negro hacia Hueyusca, pues esa unidad se levantó y sólo había tres funcionarios en ese lugar. No es efectivo que Schernberger hizo una reunión antes del procedimiento. Recuerda que no salió desde Río Negro, sino que llegó después a Los Riscos, por otro sector. Ese día un grupo quedó en el camino y otro a la entrada del fundo. Al

llegar al lugar, se une al grupo que estaba en el camino. Schernberger estaba en la entrada principal con personal policial, con los vehículos con los que había viajado desde Río Negro y un vehículo de un civil, que después se enteró era del señor Guzmán. Proclama que la forma de convocarlo al lugar fue de manera radial. Los vehículos eran furgones policiales y también los agregados desde la CORA y del SAG. Aduce que hubo más de un civil en ese grupo, es decir, en la entrada principal con Schernberger. Cree que uno de ellos era el dueño del fundo y otros que no recuerda. En ese momento Soto estaba con Schernberger y eran quienes detenían a los civiles que llevaron desde ese lugar. No vio de inmediato a Schernberger. Pero en ese operativo estaban los jefes del Retén de Crucero, Subpersonal de Purranque, no estaba el Teniente de Purranque, y de Corte Alto, entre ellos Giwins. En total eran unos 7 u 8, es decir, los que llegaron al lugar y eran externos a la base. Incluso este último le dijo “mire mi teniente ahí anda el Soto a patada limpia con los detenidos”. En ese momento vio a Soto que venía como desaforado con los detenidos, gritando “este es Guido, este es Héctor”. Advierte que en ningún momento tiene contacto con Schernberger, sólo lo vio cuándo se subió al vehículo en que andaba. Como no había ninguna instrucción, entonces lo llamó por radio, pero no le respondió, así que dio la orden que cada uno volviera a sus destacamentos. Dice que no pasó por Riachuelo ni por Río Negro, pues iba a Hueyusca a hacer otro procedimiento administrativo, que era ver el asunto de las armas. El encartado al parecer también iba con el armero. No recuerda en qué vehículo andaba en ese momento, pero estaba con un chofer. Adopta que en la unidad había como 6 o 7 choferes, siendo los únicos designados para conducir, tal como en esta época. Es decir, no podía cualquier funcionario tomar un vehículo policial y conducirlo. El Tribunal le pregunta cuándo se entera del destino de los hermanos Barría Bassay, a lo que contesta que después de esta detención de los hermanos Barría nunca se conversó qué pasó con ellos. En el año siguiente o en ese lapso de tiempo no se supo nada de los hermanos. Lo único que supo de ellos, es que el Fiscal Militar los había enviado a la carretera Austral con el cuerpo miliar del trabajo y que desde ahí los hermanos se fueron a Argentina, eso se rumoreó como un mes o dos meses después. Todo esto lo comentaron subalternos, de los cuales no recuerda nombres, eran conversaciones al voleo. Recuerda que tiempo después estando en Pajaritos, año 1976 aproximadamente, un funcionario de Río

Negro lo pasó a ver y le dijo que andaban preguntando por los hermanos Barría y que la familia había puesto una denuncia porque estaban perdidos o desaparecidos. En ese momento le comentó a este funcionario que sabía la versión que se había ido a Argentina, según lo que se rumoreaba en esa época. Después de eso, estando en Parral, fue citado por la Ministra González, quien lo interrogó y luego hizo careos. Y recién cuando tuvo acceso al expediente de la Corte de Apelaciones de Santiago, supo la versión de Schernberger, en el sentido de haberse entregado a la Fiscalía Militar estos hermanos. Es decir, recién cuando la investigación la hace el Ministro Guzmán es que se supo la verdad, que quien tomó el procedimiento fue Schernberger. Funda que posterior al operativo de detención de los hermanos Barría no conversó con el Comisario Schernberger, no le dio ninguna versión, ni le pidió nada en relación a su silencio o algo similar. Respecto a las personas que participaron en la detención de los hermanos Barría Bassay, nombra que fueron Schernberger, Teylorl, Soto, Oyarzún (supuestamente), Alvarado, Araya y debe haber uno o dos más que la verdad no sabe quiénes son. Al único civil que supo anduvo, pero esto por la lectura del expediente, es el señor Guzmán, papá del actual secretario del Senado. Sobre el horario de la detención, indica que fue a las 10:00 u 11 :00 horas aproximadamente. Afirma que recién al día siguiente en la tarde volvió a ver al Comisario Schernberger. Había contacto diario, al final del día o en la mañana, según lo que hubiera. Agrega que volvió a ver a los participantes de la detención recién dos o tres días después, porque había sistema de turnos. Cree que la supuesta ida a la cordillera fue el mismo día y no después. Esto porque llegaron tarde, entraron tarde a la Comisaría, esto según el resto del personal, porque no los vio. Alega que efectivamente hubo situación de acuartelamiento. En la unidad no había capacidad para que todos pernoctaran allí, por lo que sólo los solteros permanecían permanentemente en el Cuartel, los casados hacían guardias de 24 horas y podían dormir en su casa y si había algo especial, eran citados. Anexa que los Retenes estaban acuartelados, porque no tenían personal suficiente, entre ellos Crucero y Corte Alto. Huilma y Hueyusca fueron levantados y el personal fue destinado, a saber parte del personal de Huilma a Riachuelo y el resto a la base; y el de Hueyusca a Crucero, según lo que recuerda. Respecto a Purranque, tiene entendido que no les agregaron personal porque al lado tenían Corte Alto, como a

3 kilómetros. Sobre la versión que da Teylorl, respecto a haber tirado al río a uno de los hermanos Barría, anima que se enteró por la lectura del expediente. No podría dar explicaciones sobre por qué Teylorl entrega esta versión al Tribunal. Añade que en cuanto a la supuesta entrega de personas detenidas en un camino y no en una unidad Militar o de Carabineros, no le cuadra el procedimiento, es anómalo, según su experiencia como Carabinero. Delibera que nunca se entregaron los detenidos a personal Militar, es decir, nunca fueron a la unidad de Carabineros a buscar detenidos, al menos en Río Negro. Lo que sí pasó es que hubo apoyo de Carabineros a Militares, porque los Carabineros conocían el sector. En esas ocasiones los Militares iban a detener personas. Las coordinaciones para que funcionarios de Carabineros prestaran apoyo a Militares para la detención de personas, debieron hacerse con el Comisario, porque el acusado no era el interlocutor válido para hacerlo.

En **declaración judicial** de fecha 29 de junio de 1979, **rolante a fs. 1.141 (Tomo III)**. Dado el tiempo transcurrido a la fecha no recuerda exactamente el nombre de las personas que fueron detenidas durante los sucesos ocurridos en el mes de septiembre de 1973 y concretamente respecto de las personas que el Tribunal le da a conocer, no recuerda haber participado en la detención de dichas personas.

En **diligencia de careo con Pedro Segundo Soto Godoy**, de fecha 14 de febrero de 1980, **rolante de fs. 1.142 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra a **fs. 1.481 (Tomo IV)**. Ratifica su declaración prestada a fs. 98, agregando que con el Cabo 1° Soto, nunca salió a patrullaje. Normalmente los funcionarios casados que tenían familia en el pueblo, cual es el caso del Cabo Soto, se quedaban en la Comisaría para defender a sus familiares si algo ocurría. Apoya que en numerables oportunidades salió con el Cabo Soto al sector San Pedro, Huelhellhue, los Pablito, porque era conocedor del lugar, a procedimientos de tipos judiciales normales, vale decir, antes del 11 de septiembre.

En **diligencia de careo con Pedro Alejandrino Barría Navarro**, de fecha 14 de febrero de 1980, **rolante de fs. 1.143 a 1.144 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra de **fs. 1.482 a 1.483 (Tomo IV)**. Aproxima que no conoce al declarante y no es efectivo lo que declara. El lugar que señala como fundo de don Julio Escobar no lo conoce. El lugar Los Riscos que conoce está a 20 kilómetros de

Riachuelo y corresponde a la Tenencia de Purranque, sector al cual no fue a trabajar, pues había otro Teniente. Ratifica sus declaraciones anteriores. Agregando que en esa época no usaba bigotes y su rostro cambia totalmente sin ellos. Repite que es totalmente falso lo que dice la persona allí presente y puede añadir que realmente el cabecilla de los activistas en Riachuelo era de apellido Barría o Bassay y después del año 1973, más o menos el año 1974 o 1975 supo que el activista era el padre de unos hermanos que estaban desaparecidos de apellido Barría. Ratifica lo expuesto.

En **declaración judicial** de fecha 31 de enero de 1980, rolante de **fs. 1.145 a 1.146 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra de **fs. 1.478 a 1.479 (Tomo IV)**. Arguye que desde el año 1972 al año 1974 se desempeñó como Teniente de la 2° Comisaría de Carabineros de Río Negro. El jefe máximo de la Comisaría era el Mayor Hans Schernberger. Con respecto a la dotación existente en la 2° Comisaría de Río Negro, eran como doce funcionarios, de los cuales recuerda al Cabo Pedro Soto, Sergio Aguilar, Alvarado, uno de apellido Barrientos y otro de apellido Catalán y a los otros no los recuerda. Con respecto a las camionetas que tenían para sus diligencias, una era de color verde del SAG, que estuvo en sus poderes como un año y después se les facilitó un furgón policial. No recuerda haber utilizado camionetas particulares para diligencias policiales. Atina que a los hermanos Guzmán de Riachuelo que se les nombra no los recuerda. Puede asegurar que en la localidad de Riachuelo no intervino en ningún procedimiento de detención de activistas políticos. No es efectivo que si en alguna oportunidad intervino en detención de algún activista político se lo haya entregado a los militares, porque los militares hacían sus rondas preventivas por su cuenta y no les comunicaban a ellos. Tampoco personal que haya andado al mando suyo haya entregado detenidos a militares, por cuanto las órdenes que tenían era entregarlos a la Fiscalía Militar de Osorno. En varias oportunidades la tropa salía a hacer algunas diligencias policiales al mando de un Cabo o Sargento e ignora si en alguna oportunidad ellos hayan hecho entrega de detenidos a los militares. Blasona que a los hermanos Barría Bassay no los ha detenido y que recuerde en Riachuelo, no practicó ninguna detención de activistas.

En **declaración judicial** de fecha 27 de julio de 1994, rolante de **fs. 1.147 a fs. 1.150 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra de **fs. 1.536 a fs. 1.538 (Tomo**

IV). Barbulla que al 11 de septiembre de 1973 se desempeñaba en la Comisaría de Carabineros de Río Negro con el grado de Teniente. La unidad se encontraba a cargo del Mayor o Capitán Hans Schernberger, mientras que el encartado era el segundo oficial allí. El día 11 de septiembre permanecieron acuartelados y en los días posteriores se realizaron procedimientos de toda índole, esto es, algunos rutinarios con delincuentes comunes y otros referidos a sindicadas o referidas personas citadas u ordenas detener por la autoridad administrativa de la época. Recuerda haber detenido por ejemplo a un señor de a CORA, cuyo nombre no guarda. Basa que en 1976 o 1978 una Ministra en Visita lo interrogó sobre la detención de personas en Río Negro y no sabe si ya pudo haber declarado respecto al contenido de lo que ahora se le interroga. Colige que el Fundo El Risco no lo recuerda y si conoce la localidad de Riachuelo y algunas personas o familias de apellido Geisse. No recuerda si entre ellos está don Eduardo Geisse. Riachuelo policialmente despende o integra la jurisdicción de la Comisaría de Río Negro y tiene un Retén, pero no recuerda a cargo de quien se encontraba en octubre de 1973. Comunica que a Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay no los recuerda por su nombre, tampoco a su madre. No rememora si habrá detenido a alguien o no en Riachuelo, salvo que el Tribunal le exhiba un parte o algo así como otro antecedente que le pueda ilustrar. No le resultan suficientes referencias para recordar algo específico el nombre de los hermanos Barría Bassay, la fecha 16 de octubre de 1973, el Fundo El Risco, el nombre de su dueño, la dirección de un destacamento policial supuestamente a su cargo y el nombre de los hermanos René y Raúl Guzmán. Si ubicaba a un señor Guzmán, de algo más de 30 años y ojos claros, integrante de una familia de Riachuelo. No recuerda su nombre. A él Guzmán no le prestó en todo caso ninguna camioneta. La unidad tenía vehículo. Comenta que no ha amenazado a estas personas, pues no los conoce. No ha amenazado a nadie de liquidarlo, menos en Riachuelo que no era su lugar de trabajo y concurría solo por fiscalización. Recuerda que en la Comisaría de Río Negro trabajaba y allí conoció al Cabo Pedro Soto, Alberto Guzmán, Sergio Aguilar. En cuanto a Alvarado, no está seguro si es el mismo que se nombra y que no habría trabajado con el acusado directamente. En cuanto a Barrientos, Duhalde o Rogel no recuerda y sí, había en esa época un Cabo o Sargento Catalán. De los testigos supuestos del operativo que se menciona ninguno le es conocido. A la

Comisaría regularmente llegaban y llegan detenidos, todos los días y si llegaron en tránsito de un Retén, como se consigna en el interrogatorio, él no tuvo que haberlos recibido ni despachado, pues eso compete a la guardia y él no hacía guardia en esa unidad. Sobre el hecho central que se le interroga, a saber, la detención de los hermanos Barría, con las circunstancias que se expresan, consistentes en día, hora, lugar, uso de camioneta, etc., no lo recuerda detalladamente. Tampoco recuerda en general, las detenciones en que pudo haber participado y por cualquier delito en la época del 70 o del 80, porque técnicamente y por razones de salud mental, un procedimiento dura 24 o más horas, pero solo hasta que el delincuente es detenido, es puesto a disposición del Tribunal y posteriormente se olvida; si no acumularía una carga tensional recordando cada persona y circunstancias. Conjetura que durante esa época no integró ningún grupo especial y solo realizó las labores ordinarias que se le encomendaban. Ni en esa época ni posteriormente perteneció a algún organismo de investigación o represión política. En esa época ellos siguieron trabajando normalmente y bajo procedimientos regulares. Todo detenido fue ingresado en los libros y permitidas las visitas de familiares y puestos a disposición del Tribunal o de la autoridad que correspondía. Por lo tanto, si hay personas que manifiestan la detención de algún individuo en dicha época y estos eran conducidos a la unidad, ello se ajusta a lo que indicó anteriormente, en el sentido que fueron enviados al Tribunal o autoridad competente. Pero no se recuerda en particular de esas personas ni de otras, sobre todo en lo relacionado al día, hora y lugar en que se detuvieron y si él andaba a cargo de aprehensores o fueron llevados a la unidad. Tampoco supo de algún otro colega que haya estado involucrado en estos hechos.

En **declaración judicial** de fecha 18 de abril de 2002, rolante a **fs. 1.151 (Tomo III)**, copia de lo cual se encuentra a **fs. 1.574 (Tomo IV)**. Ratifica sus anteriores declaraciones prestadas a fs. 104 en el Juzgado de Letras de Parral, fs. 139 ante el Juzgado de Osorno y la de fs. 293, ante el señor juez del Juzgado de Letras de Río Negro, que se le han leído. Igualmente reconoce como suyas las firmas estampadas al final de dichos documentos. Preguntado por el Tribunal para que diga, si participó en la detención de los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay, responde que no, no recuerda tal tipo de detención. Preguntado por el Tribunal para que diga si tuvo conocimiento, ya fuera que le

consta personalmente o de oídas de la detención de estas personas, responde que no, hasta que fue citado a declarar por estos hechos. Preguntado por el Tribunal para que diga si tiene conocimiento de quienes habrían participado en la muerte y posterior inhumación de los cuerpos de las personas antes mencionadas, cimiento que no, no tiene ningún conocimiento. Preguntado por el Tribunal para que diga si personalmente o algún efectivo de la Comisaría de Río Negro le aplicaba tormentos a los detenidos, cuenta que nadie de los efectivos de la Comisaría de Río Negro, aplicó ningún tipo de tormentos o golpes a los detenidos, mientras el encartado sirvió en esa unidad, y/o en su presencia

En **declaración judicial** de fecha 07 de mayo de 2002, **rolante a fs. 1.152 (Tomo III)**. Ratifica su declaración prestada en Purranque Osorno con fecha 18 de abril de 2002 y reconoce su firma como aquella al pie de dicha declaración escrita con lápiz de tinta negra. Agrega que su labor era netamente operativa y por tal razón concurrió a todos los procedimientos del sector, ya sea a cargo de los mismos o en apoyo a otras unidades o jefes. Por lo tanto, es muy fácil que las personas siempre contaran con la idea de que estaría presente o llegaría. Referente al caso que se investiga, reitera que no tiene un recuerdo exacto del día, hora y lugar en que se dice éstos ocurrieron, pero sí en forma categórica vuelve a reiterar que ni él ni personal bajo su mando detuvo a estas personas y/o las condujo a algún lugar específico, menos aún que requiriera, al menos el encausado el apoyo de civiles. Deduce que no ha estado ni como testigo ni menos como colaborador, en el sentido que estas personas hayan sido llevadas a algún lugar y posteriormente ultimadas. Preguntado por el Tribunal si le correspondió en ocasiones realizar operativos conjuntamente con el entonces Capitán o Mayor Schernberger responde que en alguna oportunidad, cuando el Capitán o Mayor Schernberger lo dispuso, seguramente sí, pero sus resultados siempre en el marco legal, al menos hasta donde el encartado supo, más nunca participó con él ni fue testigo de algún ilícito.

En **diligencia de careo con Robert Santiago Teylorl Escobar**, de fecha 08 de mayo de 2002, **rolante de fs. 1.153 a 1.155 (Tomo III)**, copia de la cual se encuentra rolante de **fs. 1.590 a 1.592 (Tomo IV)**. Ratifica su declaración anterior de 7 de mayo de 2002, y la declaración que dio en la ciudad de Osorno de fecha 18 de abril de 2002. Asevera que si participó en la detención de dos personas en

un aserradero con o sin la concurrencia del entonces Capitán Schernberger y diversos otros Suboficiales de Carabineros y Oficiales en octubre de 1973, presume que también debió haber participado gran parte de la unidad, vale decir jefes de Reten, personal de la base y el deponente que era parte de la misma. Lo que no tiene claro son los recuerdos exactos del día hora, lugar etc. Y que haya sido él personalmente quien, haya efectuado la detención física y legal de estas personas, es decir, desde el lugar en que se encontraba trasladarlo algún Cuartel, ingresarlas al libro de guardia y posteriormente al calabozo si correspondía. Tampoco tiene antecedentes claros del porque se iban a detener. Preguntado por el Tribunal si concurrió con el Capitán Schernberger, un practicante de nombre Araya y Suboficiales de Carabineros hasta un lugar en la precordillera, donde una persona (Guido Barría Basay) tendría que indicar donde habrían armas y personas y que en dicha excursión se anduvo en vehículos motorizados hasta un predio (de un señor Martínez), luego se cabalgó hacia la cordillera para descubrir el señalado lugar, a lo que responde que no lo recuerda, añadiendo que tanto solo a cargo de personal, como otras veces acompañando al señor Comisario cuando él lo dispuso, le correspondió ingresar hacia el sector cordillerano ya sea en patrullaje preventivo en entrevistas con otras instituciones tales como Ejército y Fuerza Aérea y en más de una oportunidad le correspondió acompañar personal de Ejército hacia el sector del litoral, frente a Río Negro, donde se decía habían sido desembarcadas armas provenientes del extranjero. Reitera no tiene un recuerdo completo de qué personas (personal subalterno) y/o civiles pudieran haber compuesto estas patrullas. Además, que lo escuchado recientemente es totalmente nuevo en los antecedentes y detalles, puesto que como no recordaba a estas personas cuando fue citado la primera vez a declarar ante la Ministro, Señora Juana González, se encontraba en Parral y ante la gravedad de la situación preguntó a terceras personas, específicamente qué había ocurrido, siendo informado, reitera por terceras personas, que no recuerda de quien se trataba que los hermanos Barría habían sido detenidos por un contingente de Carabineros numerosos, al mando del Capitán Schernberger, que presuntamente el encausado habría estado en el lugar, pero que quien había efectuado el procedimiento completo era el Capitán ya nombrado con otros funcionarios que no puede identificar. Que al parecer el motivo de la detención era una orden de la Fiscalía

Militar o la Comandancia de Guarnición y que desde el lugar de su captura habían sido conducidos a Riachuelo o Río Negro y entregados a personal de Ejército y que era la última noticia que se tuvo de ellos.

En **diligencia de careo entre José Hernán Godoy Barrientos y Pedro Segundo Soto Godoy**, de fecha 08 de mayo de 2002, **rolante de fs. 1.156 (Tomo III)**, copia de la cual se encuentra **rolante a fs. 1.593 (Tomo IV)**. Ratifica su declaración anterior de 7 de mayo último y la declaración que dio ante el Tribunal en la ciudad de Osorno de fecha 18 de abril último. Preguntado por el Tribunal concretamente si participó o recuerda haber participado en el operativo que se realizó específicamente en el sector cordillerano de nombre Huelleshue, operativo en que se habría trasladado al detenido Guido Barría Bassay, contesta que como ha dicho anteriormente, no tiene recuerdo de dicho operativo. Se mantiene en lo mismo, no recuerda haber participado en dicho operativo, tampoco vio al detenido que fuera trasladado al anca del caballo del señor Soto. Delibera que no es efectivo lo que dice el señor Soto Godoy, ya que tenía múltiples obligaciones y si bien es cierto acompañó en varias oportunidades al señor Comisario no fue siempre y otras veces le correspondió realizar diligencias solo y a su vez, él también efectuó diferentes procedimientos solo a cargo de personal subalterno.

En **declaración extrajudicial** de fecha 17 de junio de 2003, **rolante de fs. 1.157 a fs. 1.165 (Tomo III)**. Dice que, en reiteradas ocasiones, ante diferentes Magistrados ha sido interrogado, careado y detenidos en torno a los hechos acaecidos en Riachuelo el 16 de octubre de 1973. En tales oportunidades de forma inquisitiva se le ha planteado de conocer a los hermanos Barría B., lo que no es cierto; de recibir órdenes de alguna autoridad militar para detenerlos, lo que es falso; de ser quien dispuso y dirigió directamente la detención, lo que no se ajusta a la verdad; que en tiempo inmediato a la detención con personal y vehículos a su largo los trasladó a Riachuelo o Río Negro, lo que es absolutamente falso. Asimismo, que posteriormente al día siguiente, con determinados miembros de Carabineros de la 2° Comisaría de Río Negro se habrían realizado diligencias policiales con dichos detenidos en busca de armas, hecho que le resulta contradictorio como todo lo anterior. Al igual o en los mismos términos que lo anterior, denunciante y/o presuntos testigos han sido generosos en sus acusaciones y relatos infundados que, bajo el pretexto o justificación de la presunta

o posible pérdida de sus seres queridos o amigos, para los no parientes, sin preocuparse realmente de averiguar la verdad o sencillamente no reconocer su error, cuando los hechos se fueron aclarando, han denostado su nombre, honra y familia. Primero en el informe Retting, luego en querellas y finalmente en determinados medios de comunicación social, algunos de mediana seriedad ética y otros del tipo sensacionalistas, que en nombre de la denominada libertad de prensa publican y afirman cualquier mentira. Difunde que, durante casi 30 años sin pretender ser melodramático, ha debido soportar estas inquisiciones, que tal como lo han propuesto los inquisidores han logrado sus resultados: a) Toda la cantidad de procesos incoados por la misma causa. b) Privaciones de libertad a consecuencia de ello. c) Termino de su carrera profesional o más bien, un exonerado político. d) Amargas consecuencias familiares, innecesarias de detallar. Divulga que el año 2002 ante el Ministro de Fuego, don Juan Guzmán Tapia, creyó terminada la situación que injustamente le afectada. Dice esto porque dicha autoridad judicial se constituyó en su domicilio de Purranque, a objeto de interrogarlo y previo a deposición escrita le expresó: “ ¡General!, el motivo de su visita es el caso de los hermanos Barría. Tengo todos los antecedentes anteriores y quiero aclarar algo. Tengo la declaración de un testigo que me parece de confianza, que señala que el día de la detención, en la mañana, no usted, sino que el Comisario de la unidad, Capitán señor Hans Schernberger, quien citó a una determinada cantidad de personal de la unidad y otros lugares, entre ellos usted y comunicó que se concurriría al sector de Riachuelo para detener a los hermanos Barría sobre los que se mantenía una orden de detención de la autoridad militar. Que al lugar concurrió al mando del señor Capitán Schernberger una gran cantidad de Carabineros, que se logró la detención de los hermanos Barría, sin mayor oposición e incidentes. Que desde dicho lugar de detención son conducidos hacia Riachuelo o Río Negro por personal a cargo directo del señor Capitán y usted, no continúa en el procedimiento”. Desarrolla que el señor Ministro Guzmán seguramente al ver su rostro le dio tiempo para respirar con calma y no era menos, por primera vez casi en 30 años un señor Juez le decía algo distinto a la acusación inicial. Luego el Ministro agregó: “este testigo en forma no muy bien clarificada, dice que se hizo una diligencia en busca de armas, al cual concurrieron varios Carabineros y usted, agregando luego cual sería el destino final de estas personas

en otra diligencia; pero en ella usted, no está incluido”. Le hizo una pregunta ¿usted, qué me dice? Y la respuesta del deponente, fue el señor Ministro indudablemente sabe más que él. Aclara que los textos no corresponden a una grabación, sino que a un resumen verbal de la conversación. Continuando con su deposición, el señor Ministro Guzmán le tomó una declaración, desconociendo lo ocurrido en el intertanto, solo que un par de semanas después emitió una orden de detención en su contra, fue conducido a su presencia, donde le tomó una declaración y le remitió en calidad de detenido a una dependencia de Carabineros, para al día siguiente efectuar 7 u 8 diligencias. Al día siguiente, sin que se efectuara diligencia alguna, su abogado lo condujo a presencia del señor Ministro, porque había sido puesto en libertad. Al entrar al despacho donde estaba el Ministro Guzmán, estaban el secretario, el abogado del Coronel, Señor Schernberger, el abogado del deponente y el propio Coronel (r), quien con emoción en sus ojos lo saludó con abrazo y le expresó en voz alta: “este viejo asumió”. Luego dirigiéndose al señor Ministro Guzmán le dijo: “Señor Ministro que expliqué que no era necesario citar al General, ya le dije que el solo cumplió una orden de concurrir al lugar; pero era yo quien recibió y tenía la orden de la autoridad militar para detener a los hermanos, quienes me acompañaron donde los conduje y en qué lugar los entregué al Fiscal Militar”. Detalla que nadie pronunció palabras después de escucharlos y luego se firmó las órdenes o resoluciones de libertad, saliendo de la oficina con su abogado. Distingue que no tiene rencores para nadie, tampoco acusaciones, pero estima de especial importancia, en beneficio de la investigación o proceso y el propio, considerar lo siguiente: Es un hecho que el día de la detención, el Señor Comisario, don Hans Schernberger tenía una orden de la autoridad militar para detener a los hermanos Barría, por tal razón dispuso la concentración de personal para el servicio policial a realizar, específicamente la detención policial de dos personas, no hubo o no escuchó otra alternativa de procedimiento. Al lugar fueron citados alrededor de 15 funcionarios, tanto de la base de la unidad, que no tenían muchos; como de los Retenes más cercanos, junto a ellos y en forma lógica el acusado, que en días anteriores, el 16 de octubre propiamente tal y los siguientes, cumplía la tarea de fiscalizar los Cuarteles, vigilar los servicios policiales. Por lo tanto, concurrir al lugar donde se detuvo a los hermanos Barría, que ocasional y transitorio tampoco tenía la orden de ser quien

físicamente y directamente los detuviera, tampoco el personal a cargo o acompañantes, que no eran más de 2, porque se debía continuar con la misión inicial de fiscalizar los servicios policiales. Glosa que siempre ha afirmado en forma categórica que no conoció y no tiene recuerdo alguno de los hermanos Barría, ello porque el lugar donde se encontraban era un fundo grande y el personal que lo dispersó y el acusado no estaba con el grupo que detuvo a estos hermanos. De manera tal, que en forma más o menos rápida no puede individualizar exactamente quienes, 3 o 4 funcionarios de entre varios campesinos que había en el lugar, detienen a uno de los dos, los suben a uno de los vehículos, de los 4 o 5 más, que habían concurrido al lugar y se alejan en dirección a Riachuelo Rio Negro, con ellos se va el Sr. Comisario. Al queda solo el encartado y acompañante, más 1 o 2 funcionarios de Retenes, no recuerda exactamente cuales, retoma su servicio policial inicial en el sentido contrario al que fueron conducidos los detenidos, a los cuales nunca más vio o recuerda alguna diligencia. Hace presente que ha realizado el máximo esfuerzo psíquico mental por ubicarse en el tiempo pasado sin resultados positivos y le queda la sensación que quienes afirman esto último están confundidos. Reitera que el único presunto contacto con los referidos hermanos fue escuchar que serían detenidos y al cumplir la orden del Sr. Comisario de constituirse en el lugar de la aprehensión, por no conocerlos ni saber el posible destino final de dichas personas, no le dio más importancia al procedimiento policial, que en sus inicios fue uno más de los miles que le ha correspondido participar. Que con el transcurso del tiempo, por los hechos acaecidos con posterioridad tomaron la importancia judicial conocida, alrededor del año 1980. Atentando el tiempo transcurrido, con la posibilidad de retener en la memoria detalles exactos de horas, nombres de personas, participantes, lugares, horarios de servicio, etc., sobre esto último ensaya que en la fecha de los hechos, realizaba a lo menos servicios diarios, en algunas ocasiones 3 y como acompañantes tenía 1 o 2 funcionarios, los cuales eran designados del rol de servicios de turnos de población, de tal manera que los acompañantes de la mañana no eran los mismos de la tarde e igualmente diferentes de la noche, algo similar ocurría con los móviles. Consecuentemente con todo lo largamente explicado, reitera que la única participación que le cupo en los hechos del 16 de octubre de 1973 fue cumplir una orden del servicio de concurrir junto a un numero

de aproximadamente 15 Carabineros al mando del Sr. Comisario de la unidad, don Hans Schernberger para cumplirse sus instrucciones, una orden de la autoridad militar de la época y jefe de la zona en Estado de Emergencia, de detener legal y físicamente a los hermanos Barría B., y en ningún momento el encausado recibió otra información y orden que se trataría de un secuestro y menos aún otra acción de mayor gravedad. De igual manera deja claramente establecido que aun cuando estuviere presente en el momento inicial de la detención, no fue quien participó física y directamente de la misma, percatándose solamente que después de ser identificados por quienes lo conocían, fueron subidos a un vehículo, no pudiendo precisar con exactitud si policial o particular, siendo trasladados al sector de Riachuelo, Rio Negro u otro lugar. Esgrime que no participó tampoco de este traslado, asimismo afirma categóricamente que no recuerda haberlas visto nunca más o tener una referencia de ellos hasta la fecha en que fue citado a una declaración judicial. Espeta que a fines del 73, principios del 74 fue trasladado a Purranque. Escruta que es el anhelo de muchos verdad y justicia, a su vez el difícil trabajo que en la materia debe realizar la magistratura, en forma respetuosa expone que también quisiera la verdad, porque mucho se ha mentido en su contra, le han acusado a consecuencia de ello males irreparables y desconoce las torcidas intenciones propuestas en lo mismo. Narra que ha puesto su máximo esfuerzo en tratar de cooperar al esclarecimiento de los hechos, aportando todo aquello que le sea posible y en el límite de la verdad, que solicita respetuosamente la acepte en post de la justicia que le corresponde administrar.

En **declaración judicial** de fecha 25 de julio de 2003, **rolante a fs. 1.175 (Tomo III)**. Ratifica íntegramente y en todas sus partes el escrito que con fecha 23 de julio ha presentado en esta causa, en el cual analiza las declaraciones de las únicas personas que aportan antecedentes respecto de los hechos investigados, estos son: el Coronel Schernberger, Soto Godoy, Teylorl y Oyarzún, en especial son las contradicciones de sus dichos las que analiza, quienes van cambiando en varias ocasiones la versión de los hechos. En cambio, en lo que a él respecta, anima que no fue más que un procedimiento policial, que se efectuó en los Riscos y que no tuvo participación directa y/o física en la detención de los hermanos Barría. Los que fueron trasladados desde el lugar de la detención, a un lugar desconocido para el acusado, por los funcionarios que participaron en el

procedimiento, mientras el encausado se quedó en el lugar de la detención. Cree que se quedó recopilando personal para juntarlos en los retenes y al regresar a la Comisaría de Río Negro no los vio, pero añade que escuchó que después de su detención fueron entregados la Fiscalía Militar. Este procedimiento se trataba de detener a personas que podían tener armas, lo que significó que se juntara un gran destacamento de personal policial. Además, como ha hecho notar anteriormente, la persona que lo inculpa directamente, Pedro Segundo Soto, en el caso que se realizó ante la Ministra, Señora Juana González, el 14 de febrero de 1980, cuya fotocopia se le exhibe, se desdice de sus afirmaciones anteriores. Apunta que no puede asegurarlo, pero ve muy mala atención para con él, en primer lugar, de parte del Cabo Soto, ya que lo acusa sin motivo, en ese entonces el encartado era muy joven, recién designado Teniente, por lo tanto solo se le puede acusar de haber concurrido a un procedimiento policial al lugar de la detención, pero desconoce qué sucedió con los detenidos posteriormente.

En **declaración judicial** de fecha 29 de junio de 1979, **rolante a fs. 1.460 (Tomo IV)**. Apoya que, dado el tiempo transcurrido a la fecha, no recuerda exactamente el nombre de las personas que fueron detenidas durante los sucesos ocurridos en el mes de septiembre de 1973 y concretamente respecto de las personas que el Tribunal le da a conocer, puede manifestar que no se recuerda haber participado en la detención de dichas personas.

19º) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **José Hernán Godoy Barrientos**, quien fue sometido a proceso de fs. 1707 a fs.1724 (Tomo V) con fecha 04 de abril de 2023. Acusado según el auto acusatorio de fs. 1950 a fs. 1983 (Tomo V) con fecha 31 de agosto de 2023, como **autor** de los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado en las personas de Guido Ricardo Barria Bassay y Héctor Alejandro Barria Bassay, perpetrados en la comuna de Riachuelo, a contar del 16 de octubre de 1973.

Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante, lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados, sin perjuicio de lo aquilatado respecto de los acusados anteriores, puntualizando lo siguiente:

A. Declaraciones.

1. Luis Clemente Chodín Céspedes. En declaración judicial de fs.1529 (Tomo IV). Funda que no recuerda exactamente la fecha debido al tiempo transcurrido, pero le parece en el mes de octubre del año 1973, que encontrándose en ese entonces trabajando en un aserradero de propiedad de Julio Escobar, ubicado en el Fundo Los Corrales, comuna de Purránque, sector Riachuelo, un día en que iba hacia su trabajo a pie, se encontró con unos carabineros que llevaban en calidad de detenidos a unos hermanos de apellidos Barría Bassay; recuerda que entre los policías andaba un Teniente al que conocía de vista y sabe que su apellido es Godoy, pero ignora donde estará actualmente. En ningún momento vio de parte de Carabineros hacia los detenidos actitudes abusivas y tampoco vio que alguien haya agredido en algún momento a los detenidos. Supo de la desaparición de esas personas cuando los familiares los comenzaron a buscar, pero por comentarios de terceras personas. Él trabajó en el sector de Riachuelo hasta más o menos el año 1976, para luego irse a la ciudad de Osorno, y que es donde actualmente se encuentra viviendo.

2. Armando Pezo Medina, quien depone a de fs. 638 a fs. 640 (Tomo II) y a fs. 1496 (Tomo IV). En lo pertinente de sus dichos de fs. 638 a fs. 640 (Tomo II), aduce que vivía al interior del fundo, junto a su esposa Haydee Fernández Barra, y sus hijos menores de edad en esa época (3 niños). El caso es que el entre los días 5 o 15 del mes de octubre de 1973, llegó al fundo una patrulla de alrededor de 15 Carabineros a cargo de un capitán de apellido Godoy de la Comisaría de Río Negro juntaron a todos los trabajadores, alrededor de 25 personas y los dejaron en el suelo con las manos en la cabeza. En el intertanto él se encontraba trabajando en el monte e iba bajando con dos carros de madera. Al acercarse a alrededor de 70 metros de distancia, dispararon al aire y le ordenaron acercarse a ellos, con las manos en la cabeza, lo cual hizo. Uno de los carabineros dijo: “uno de ustedes se va a levantar” y lo nombró a él, cuando se paró, iba llegando un tractor cuyo chofer era don Alejo Barría y su hijo Guido Barría. Los hicieron bajar, los carabineros le hicieron sacarse la ropa a Guido, mientras lo golpeaban con los fusiles. Mientras

tanto se dirigía a su casa que estaba al interior del fundo en compañía del carabinero de apellido Ovando, al cual conocía de niño y el capitán Godoy, ellos sabían que los hermanos Barría vivían al lado de su casa y comían ahí también. Llegaron a su casa y le pidieron un revolver de su propiedad. Le sacaron las balas y se lo llevó a Godoy. Además revisaron la pieza donde dormían los hermanos Barría. Aclara que esa fue la segunda ocasión en que fueron carabineros a su casa, ya que previamente habían revisado la casa en presencia de su esposa, ese día. Anexa que Alejo Barría tomaba pensión en su casa, junto con Guido y Héctor. Al percatarse de la presencia de Carabineros, al interior del fundo, su esposa señaló que Héctor le dijo que los iban a buscar presos, por lo que en una primera instancia huyó hacia el monte y luego se entregó a la patrulla. Esa fue la última vez que los vio con vida.

3. Pedro Segundo Soto Godoy. Depone de fs. 1109 (Tomo III) con copia a fs. 1594 (Tomo IV), fs. 1142 (Tomo III) copia a fs. 1593 (Tomo IV), fs. 1156 (tomo III), fs. 1449 (Tomo IV), fs. 1559 a fs. 1560 (Tomo IV), fs. 1566 a fs. 1568 (Tomo IV), fs. 1584 a fs. 1585 (Tomo IV), fs. 1622 (Tomo IV) y de fs. 1680 (tomo IV). Que de lo pertinente de su declaración de fs. 1449 (Tomo IV), acota que en el mes de octubre de 1973 integró una patrulla de carabineros al mando del teniente Godoy, en la que integraba también, los carabineros, Alberto Oyarzún, Sergio Aguilar, Rene Alvarado, José Rómulo Catalán Oyarzún, quienes detuvieron en Riachuelo a los hermanos Barría Bassay, miembros del partido comunista y conocido activistas políticos. Aduce que una vez detenido los hermanos Barría, lo que fue como a las once de la mañana, aunque no recuerda bien., lo entregaron a una patrulla militar, pero como él se fue a la cordillera en otro patrullaje con militares, no puede precisar si los hermanos Barría fueron entregados en Riachuelo o Rio Negro. Agrega que supo, pero no le consta que los hermanos Barría fueron trasladados al estadio Español y nada sabe sobre el destino de estas personas. Finalmente añade que en patrullaje a la cordillera estuvo más o menos ocho días. Asimismo y en términos similares depuso en diligencia de careo con José Hernán Godoy Barrientos de fs. 1156 (tomo III), copia a fs. 1593 (Tomo IV). Blasona que a dicho operativo concurrió el Teniente don José Godoy Barrientos juntamente con el Comisario Schernberger, el practicante Pablo Araya, el Cabo Primero Robert Teylorl y otros funcionarios que no recuerda. A cargo del operativo estaba el Comisario Schernberger. Precisa que

puede recordar lo recién señalado sin lugar a duda ya que ese operativo se realizó por orden del Comisario para buscar armamento y fue en la oportunidad en que el deponente trasladó al anca de su caballo al detenido Guido Barría Bassay y de regreso a los camiones en la misma forma. Acota que en todos los operativos que realizaba el Comisario Schernberger siempre lo acompañaba el Teniente Godoy Barrientos. Así el operativo que se realizó en la cordillera con la presencia del detenido Guido Barría estuvo presente el Teniente Godoy Barrientos. En su declaración de fs. 1559 a fs. 1560 (Tomo IV). Agrega en lo pertinente que en el lugar, el Mayor ordena detener a "Tito" Barría, cosa que así sucede e inmediatamente es subido a uno de los vehículos. Luego de esta primera detención, el Mayor ordena la búsqueda de su hermano Guido, por lo cual se realiza una búsqueda, que arroja resultados positivos al cabo de media hora. Añade que Guido es subido al vehículo junto a su hermano Tito. En el vehículo donde estaban los detenidos se sube el Mayor junto al Teniente Godoy, iniciando viaje en dirección a la Segunda Comisaría de Río Negro. Comenta que, por su parte, junto a los demás Carabineros abordaron el otro vehículo, también para dirigirse a la unidad. Divulga que transitaban por caminos diferentes, por lo cual ellos llegaron a la Comisaría como a las 18:00 horas, ocasión en la cual sintió la voz de los hermanos Barría Bassay, que estaban detenidos en los calabozos. Destaca que, debido a la hora, procedió a hacer entrega de su turno, para luego retirarse a su domicilio particular. Al día siguiente, a las 8:30 horas, al ingresar a su servicio de turno, se percató que en la unidad no estaban detenidos los hermanos Barría Bassay, por lo cual preguntó por el Mayor Schernberger, pero el funcionario que estaba de guardia le informó que había salido temprano en un vehículo, junto al Teniente Godoy, el Cabo Teylorl y el Carabinero Oyarzún, presumiendo que este grupo de funcionarios salió con los hermanos con destino desconocido. Precisa que del Cabo Teylorl puede señalar que tenía un carácter muy duro y era una persona de total confianza de los jefes, al igual que el conductor Oyarzún. Precisa que el Mayor Hans Schernberger tenía un buen trato con los funcionarios, al igual que el Teniente Godoy.

4. Robert Santiago Teylorl Escobar declara de fs.973 a fs. 975 (Tomo III), fs. 919 a fs. 922 (Tomo III), fs. 1.573 (tomo IV), fs. 1.586 (tomo IV), fs. 1.589 (tomo IV), fs. 1.590 (tomo IV), fs. 1.595 (tomo IV), fs. 1.604 (tomo IV), fs. 1.620 (tomo IV), fs.

1.623 (tomo IV), fs. 1.633 (tomo IV) y de fs. 1.670 (tomo IV). En lo pertinente de su declaración de fs. 919 a fs. 922 (Tomo III). En la detención participaron el Mayor Hans Schernberger, el Teniente José Godoy, el Suboficial Catalán, que era el chofer, el Suboficial Alvarado, el Cabo Pedro Soto y los Carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún. Cree que el Teniente debe haber sabido lo acontecido. Cuando uno se refiere al cuartelero, el cuartelero cuando le toca el turno debe revisar todo, por lo tanto no cree que el hermano Héctor Barría Basay haya sido sepultado en el patio de la Comisaría. A su consulta, Guido Barría Basay fue el que los acompañó a la Cordillera, Héctor se quedó en la Comisaría. Guido iba con una capucha, no vio su rostro. El Tribunal le consulta en forma detallada a qué unidades pertenecían los funcionarios Hans Schernberger, el teniente José Godoy, el suboficial Catalán, el suboficial Alvarado, el cabo Pedro Soto, los carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún, todos mencionados a fs. 461. Habla que respecto de Hans Schernberger este funcionario era de la Segunda Comisaría, al igual que José Godoy, el Suboficial Catalán y Alvarado, el Cabo Pedro Soto era chofer de la Segunda Comisaría, al igual que Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún. Reconoce que en la unidad de Carabineros de Río Negro, hubo detenidos por motivos políticos, estaban a cargo de su custodia, el funcionario que estaba de guardia no sabe quién estaba a cargo de sus detenciones. A veces, por ejemplo, uno se desempeñaba por turnos, dependía la rotativa. A su consulta, a él no le correspondía la función de ingresarlos en los libros de guardia, los que se encargaban de aquello eran los oficiales. Estaban a cargo de las interrogaciones los Jefes, es decir, los que ha nombrados. No recuerda que hubiera detenidos pertenecientes a otras unidades. A su consulta, sobre si se aplicaron tormentos a los detenidos, lo único que recuerda es el calabazo, es decir, que estén desnudos en los calabozos. En cuanto a Guido Barría Basay estaba en la camioneta tapado con sacos, amarrado de manos, tapado por completo, boca abajo. En esa época solo estaban detenidos los Hermanos Barría Basay. Funda que Guido Barría Basay cuando iba a la Cordillera con ellos, iba al anca del Caballo y no iba caminando, el señalaba lo que sabía y Pedro Soto como conocía la zona, él era el Vaqueano, dirigía a la patrulla. No recuerda que los hermanos Barría Basay hayan sido golpeados, arrastrados o torturados una vez que fueron detenidos. Reconoce haber participado en la detención de los hermanos Barría. En segundo lugar, los

hermanos Barrías fueron llevados a la Comisaría esposados, a lo que declara que uno sí. Deben haber quedado en calabozos diferentes los hermanos Barría. En cuarto lugar, usted declara que se fue a su casa después de la detención de los Hermanos Barría Basay, a lo que declara que sí. Depone que volvió a la Comisaría al otro día de ocurrida la detención de los Hermanos Barría Basay. Dice que el mayor le ordenó ir a la camioneta donde estaba Guido Barría. Reconoce que fueron al fundo la campana y parece que llegaron al río Negro. En lo pertinente de su declaración rolante de fs. 1573 (Tomo IV). Preguntado por el tribunal, para que diga si a los detenidos se les disparó, se les hicieron cortes con armas blancas o bien se les amarró algún elemento de peso a sus cuerpos, antes de lanzarlos al agua, el deponente responde: no, no les disparó, ni se les hicieron cortes, ni se amarró objeto alguno a los cuerpos de los Barría Bassay antes de que el mayor Hans Schernberger los lanzara a las aguas. Narra que se encontraban presentes el mayor Hans Schernberger, el teniente José Godoy, el suboficial Alvarado, el cabo Pedro Soto, que era el brazo derecho de los oficiales, y los carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún, quienes también habían participado en la detención de los hermanos Barría Bassay. Dice que está en condiciones de guiar al tribunal hasta el lugar donde fueron arrojados al río, Guido y Héctor Barría. En declaración judicial rolante a fs. 1586 (Tomo IV), en lo pertinente y reiterando sus dichos precedentes narra quienes participaron en el procedimiento cordillerano, nombra al mayor Schernberger y el teniente José Godoy. A esta diligencia fue llevado Guido Barría Bassay, en calidad de detenido, quien en todo momento tuvo que desplazarse a pie durante todo el trayecto al interior de la cordillera, nunca montó un caballo. Ignora la identidad del propietario del camión utilizado, empero los caballos algunos eran de propiedad del retén de Riachuelo, otros de particulares, incluso participó un caballo de carrera cuyo dueño era uno de los hermanos Guzman. Piensa que Héctor quedó en la Comisaría, ignorando que sucedió con él ni la forma en que murió. Especula que a lo mejor fue lanzado al río el día anterior. Al regresar a la Comisaría del patrullaje, Guido permaneció en la camioneta conducida por el mayor Schernberger, tapado con sacos y maniatado de pies y manos a la espalda. Estando en la Comisaría de Río Negro el mayor le ordena acompañarlo en el vehículo, junto a Pedro Soto y se trasladaron hacia el fundo la campana distante a unos 15 kilómetros de la comisaría. Recalca que el detenido

Guido iba siempre maniatado de pies y manos. Tirado en la carrocería. El mayor detuvo la camioneta en la ribera del río Esmeralda, sector Chahuilco y ordenó bajar al detenido. Ahí lo trasladaron hacia la orilla, de pies y siempre maniatado. Acto seguido el mayor Schernberger lo empuja al cauce del río, que en este momento iba con un fuerte caudal. Recuerda que Guido gritaba cuando el caudal se lo llevaba río abajo para luego desaparecer. Adopta que no se le disparó a la víctima. Descarga que Pedro Soto antes de ser carabinero fue obrero del fundo la campana, de propiedad de Fernando Eggers. Soto conocía el fundo como la palma de su mano. Además es compadre del mayor Schernberger. Hace entrega al Tribunal de una fotocopia del reglamento N° 11 de disciplina inserto en el Código de Justicia Militar y Reglamento sobre ética profesional que dicen relación con las órdenes superiores que lo obligaron a participar en los hechos que se investigan sin tener la opción de discutir las ordenes más que cumplirlas. Así en diligencia de careo judicial con la persona de José Hernán Godoy Barrientos, rolante a fs. 1590 (Tomo IV), ratifica sus declaraciones precedentes. Cuenta que el teniente Godoy Barrientos estuvo presente en la detención de los hermanos Barría Bassay, pero no participó en el procedimiento de ese día, esto es, en cuanto a los traslados de los detenidos hasta la Comisaría y/o su entrega a terceras personas. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría por el capitán en esa fecha señor Schernberger. El teniente Godoy los acompañó al siguiente día en la excursión al sector precordillerano, al mando del comisario señor Schernberger, también los acompañó Pedro Soto, el practicante Pablo Araya y otros funcionarios que señaló en su declaración anterior.

5. Ricardo Alejandro Barría Ralil. Depuso de fs. 33 a fs.35 (Tomo I) y de fs. 264 a fs. 266 (Tomo I). En lo pertinente declara que es hijo de Guido Ricardo y sobrino de Héctor Alejandro, ambos de apellidos Barría Bassay, quienes fueron detenidos el 16 de octubre de 1973 por personal de Carabineros de Río Negro, específicamente por el Capitán Hans Schernberger, el Teniente Hernán Godoy, los Cabos Pedro Soto, Robert Teylorl y Carabineros Alberto Oyarzún, Quintiliano Rogel y otros de apellido Catalán, Alvarado y dos más cuyos apellidos no recuerda actualmente. Todos estos datos los supo por su madre de crianza, que en realidad es su abuela de nombre Helvecia Bassay (fallecida), quién le narró desde su infancia cómo su padre a mediodía fue detenido por este grupo de Carabineros

que llegó al aserradero donde trabajaba su padre y su tío Héctor, ubicado en el sector Los Riscos de la Comuna de Purranque. Ellos eran dirigentes del partido socialista, motivo por el cual deben haber sido detenidos. Desde la fecha de su detención nunca más supieron de su paradero, sin embargo, en la causa seguida en la ciudad de Santiago por estos mismos hechos hay declaraciones de Carabineros que confirman que su padre y su tío fueron asesinados. No obstante lo anterior, nunca dijeron en qué lugar fueron enterrados o qué pasó con sus cuerpos.

6. Inés Del Carmen Barría Bassay. Depone de fs. 39 (Tomo I), fs. 259 a fs. 261 (Tomo I), 559 a fs. 560 (Tomo II), fs. 701 (Tomo II) copia de fs. 778 (Tomo II), fs. 1.425 a 1.427 (Tomo IV), copia de fs. 1.544 a 1.546 (Tomo IV), fs. 1428 (Tomo IV), fs. 1.429 a 1.430 (Tomo IV), 1.431 a 1.433 (Tomo IV) y de fs. 1630 (Tomo V). En pertinente narra que es hermana de Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barria Bassay, quienes fueron detenidos el día 16 de octubre de 1973, en el aserradero Los Riscos, sector Rio Blanco, Riachuelo. Las detenciones de ambos fueron efectuadas por personal de Carabineros de Rio Negro y Riachuelo, entre los cuales se encontraba el entonces Teniente de la Comisaría de Rio Negro, Hernán Godoy Barrientos, era el jefe del grupo a cargo de la detención; también lo acompañaba; el Carabinero Luis Alberto Oyarzún Arriagada. Aproxima que no fue testigo de la detención de sus hermanos, pero si lo fue su padre don Pedro Barria Navarro, el vio junto a una veintena de personas cuando los Carabineros llegaron al aserradero perteneciente a Julio Escobar y se llevaron detenidos a sus hermanos, en dicha diligencia a nadie más detuvieron. Aquilata que su madre Elvecia Bassay Alvear fue hasta Carabineros del Retén de Riachuelo, donde le negaron el hecho de haber sido detenidos sus hermanos. Tanto en las unidades de Carabineros de Riachuelo como de Rio Negro, siempre se le negado a su madre la detención de Guido y de Héctor. Luego su madre peregrinó por la cárcel de Osorno y Comisarías de la misma ciudad, siempre con el mismo resultado negativo. Actualmente sus hermanos figuran en el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como detenidos desaparecidos. Los hechos que rodearon la muerte de sus hermanos fueron investigados en el IV Juzgado Militar de Valdivia, proceso N°852/80, causa que terminó por sobreseimiento definitivo y también en el Juzgado de Letras de Rio Negro, proceso N°24.365 M, la que

también termino por sobreseimiento definitivo. Arguye que por dichos de un testigo que le pidió mantener reserva de su nombre, éste le afirmó que cuando él fue a sepultar a una mujer al Cementerio Indígena La Capilla del sector de Riachuelo, al cavar una fosa encontraron en su interior un cadáver envuelto en bolsas plásticas negras, sin ningún tipo de identificación en el lugar que indicara que existía un cuerpo sepultado en dicho sitio. Un conocido suyo llamado Alfredo Toledo, quien vive en Riachuelo, le comentó a un muy amigo de su familia llamado Ignacio Martínez Gómez, quien vive actualmente en Osorno y antes en Riachuelo, que habla escuchado en un asado decir al Carabinero Alberto Oyarzún, que a uno de los hermanos Barria Bassay lo habían sepultado en el Cementerio La Capilla de Riachuelo, que éste había sido muy valiente, pues cuando estaba cavando su propia tumba no había dejado de cantar el himno de su partido político.

7. Pedro Alejandrino Barría Navarro. Depone de fs. 1459 (Tomo IV), fs. 1477 (Tomo IV), fs. 1.484 a fs. 1485 (Tomo IV), fs. 1486 (Tomo IV), fs. 1487 (Tomo IV), fs. 1488 (Tomo IV), a fs. 1489 (Tomo IV), fs. 1491 a fs. 1492 (Tomo IV), y fs. 1504 (tomo IV). Respecto a lo cual se reitera dichos de fs. 1477 (Tomo IV). Apunta que el día 16 de octubre de 1973 se encontraba trabajando con sus hijos Guido Ricardo en el fundo Los Riscos de propiedad de un señor Escobar, cuando llegó una patrulla de Carabineros comandada por el Teniente Godoy y los Carabineros que señaló en la declaración de fs. 56. Posterior a la detención, los trasladan caminando hacia unas camionetas que manejaban los hermanos Guzmán cuyo nombre son René y Raúl, agricultores domiciliados en Riachuelo. Asegura que, dentro del grupo de Carabineros, vio como Pedro Soto botó al suelo a su hijo Guido Ricardo lo hizo desnudar y le pegó. Comenta que el domicilio de ellos fue varias veces allanado por militares, Carabineros e Investigaciones y dieron vueltas todas las cosas buscando armas. Dice que los Carabineros intervinieron en la detención.

8. Elvecia Bassay Alvear. Depuso de fs. 217 a fs. 220 (Tomo I), 1.453 a 1.454 (Tomo IV), 1471 (Tomo IV), fs. 1.505 (Tomo IV) fs. 1.528 (Tomo IV) y de fs. 1533 (Tomo IV). Asevera en lo pertinente que es casada con Pedro Alejandrino Barría Navarro, de dicho matrimonio nacieron ocho hijos, entre ellos Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barría Bassay, de 19 y 27 años, al mes de octubre de 1973 y que a la fecha tendrían en consecuencia 24 y 32 años respectivamente. El primero de ellos trabajaba como obrero en el aserradero de Julio Escobar, cuyas labores

realizaba en el fundo de Eduardo Geisse, ubicado en los Riscos, Riachuelo. El segundo se desempeñaba en la escuela N°2 de Río Negro, pero el día de su desaparecimiento se hallaba en dicho fundo, en razón de que el Teniente de Carabineros de Río Negro, José Hernán Godoy Barrientos lo había notificado de que abandonase el pueblo y que si lo veía lo detendría, habiéndole ella misma aconsejado que se fuese al lado de su padre y hermano en las labores madereras de Escobar. Ambos hijos eran militantes del Partido Socialista de Río Negro y Héctor Alejandro era delegado de los trabajadores en el S. U. T. E (Sindicado Único de Trabajadores de la Educación). Atestigua que la desaparición de sus dos hijos se produjo en las siguientes circunstancias: el día 16 de octubre de 1973 se encontraban en las labores del mencionado aserradero cuando a eso de las 12 horas interrumpieron en el fundo un grupo de Carabineros de la Comisaría de Río Negro, comandados por el Teniente José Hernán Godoy Barrientos e integrada entre otros, por el Cabo Pedro Soto, por los Carabineros Alberto Oyarzún, Sergio Aguilar, René Alvarado y otros cuyos apellidos son Duhalde, Barrientos, Rogel, Catalán. Los Carabineros llegaron en una camioneta de propiedad de los hermanos René y Raúl Guzmán, comerciantes de Riachuelo, quienes se quedaron a la distancia. Al parecer estos funcionarios iban en busca exclusiva de sus hijos, ya que apenas llegaron los tomaron detenidos, maltrataron y torturaron, lanzándoles puntapiés, culatazos y golpes, entre insultos y groserías, echándolos y arrojándolos al vehículo. Esta detención y malos tratos las efectuaron en presencia de los trabajadores del aserradero, entre ellos, el propio padre de sus hijos, Armando Pezoa, Juan Ojeda, Armando Nilián, Alfonso Huenchuán, Alejandrino Barrientos, Oscar Vargas, Clemente Chodín, Hayde Hernández, María de Catalán, Mercedes de Schell y otros obreros de los cuales sabe solo sus apellidos; Oyarzún, Angulo, Soto, pero son fáciles de ubicar, porque son del lugar. Los detenidos fueron llevados a Riachuelo, en donde estuvieron hasta el día 17 de octubre, para ser llevados a la Comisaría de Río Negro. Atina que fue a verlos al Retén de Riachuelo y después a la Comisaría, pero en las dos partes se los negaron e incluso en el Retén la amenazaron con proceder en su contra si seguía molestando. Desde esa instancia de la detención nunca más se volvió a ver a sus hijos. Así han pasado todos estos años sin que pueda ubicar sus hijos. Como antecedente declara que a principio de año recibió un papel escrito al parecer por

su hijo Guido, que decía en forma muy escueta “estamos vivos. Tito tiene visita, yo no”; estaba escrito con lápiz pasta, letra de imprenta, se hacía parecer este papel como que venía de la cárcel de Puerto Natales, pero al hacer averiguaciones allí no estaban sus hijos; después se le dijo que estarían en Punta Arenas, en la cárcel, pero tampoco se les ubicó allí. Y ahora último se le quiere hacer ver que estaría en Santiago, noticias que lejos de traerle una esperanza solo aparecen como una nueva forma de tortura espiritual y de dolor. Destaca que su marido estuvo presente en la detención de sus hijos.

9. Luis Eliser Barría Bassay. Depuso de fs. 262 a fs. 263 (Tomo I) y de fs. 267 a fs. 272 (Tomo I). Desarrolla en lo pertinente que en los días posteriores al golpe militar del 11 de septiembre de 1973 se reúne un grupo de agricultores alemanes en la casa de la familia de German Pasenau en el Fundo Río Blanco, comuna de Río Negro. Esta reunión tiene como objetivo reunir fondos en dinero para mandar a matar a los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, más otros dirigentes de la comuna que no eran del agrado de estos alemanes. De esta reunión se toma el acuerdo de que la familia Pasenau queda a cargo de recepcionar el dinero acordado y además, hacer los contactos para entrevistarse con los Carabineros oficiales, encargados de la 2° Comisaría de la comuna de Río Negro. De tal forma que la segunda quincena de septiembre de 1973, la familia Pasenau se contacta con los hermanos Raúl y René Guzmán para comenzar su macabro acuerdo. ¿Por qué se contactan con los hermanos Guzmán? Muy sencillo, éstos dos hermanos Guzmán son muy amigos del Carabinero Alberto Oyarzún A., y éste a su vez tenía muy buena relación con el Teniente de Carabineros Hernán Godoy Barrientos, perteneciente a la 2° Comisaría de Río Negro. Esta buena relación era debido a que una de las hermanas de Oyarzún tenía algunas relaciones amorosas con Godoy Barrientos. Dicho esto, se forma el puente perfecto entre la familia Pasenau, los hermanos Raúl y René Guzmán, Alberto Oyarzún y Hernán Godoy Barrientos, junto al Capitán de Carabineros Hans Schernberger. Hace presente que todos estos oscuros personajes fueron pagados por la familia Hans Pasenau, por todas las acciones efectuadas para preparar el plan. Es así que el día 16 de octubre de 1973 el mando de Carabineros de la 2° Comisaría de Río Negro, apoyado por la logística y vehículos de los hermanos Guzmán hacen su funesto operativo, previamente acordado y van a detener a los hermanos Guido y Héctor

Barría Bassay, que se encontraban junto a su padre y trabajadores en un aserradero de don Julio Escobar Winklen, ubicado en el Fundo Los Riscos del sector de Río Blanco en la comuna de Río Negro. Fueron detenidos y amarrados con alambres de púas de ahí tirados en el piso de la carrocera de la camioneta de los hermanos Guzmán; tapados con unas carpas y pisoteados por contingente de Carabineros. De allí fueron llevados al Retén de Riachuelo y posteriormente a la 2° Comisaría de Río Negro. Todo este operativo estaba a cargo del Capitán Schernberger y el Teniente Godoy. Hace presente que Carabineros siempre negó la detención de los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, tanto a su madre y familiares que lo andaban buscando. Descarga que Carabineros de Chile de la 2° Comisaría de la comuna de Río Negro trasladó a los hermanos Barría Bassay a diferentes sectores dentro de la comuna, para justificar en alguna medida la detención, todo según ellos, en busca de armas, armas que nunca existieron. Tanto fue que, en uno de los tantos traslados a diferentes partes, fueron llevados a la estación de ferrocarriles de Chahuilco, comuna de Río Negro y se internaron en el Fundo La Campana, de propiedad de la familia Engel. Y en un cobarde acto, el Teniente Godoy Barrientos preguntó ¿quién quiere matar a este?, indicando a Héctor Barría Bassay. A lo que el uniformado Robert Teylorl se ofreció y procedió a darle muerte con su arma de servicio a la persona indicada. Al día siguiente se dirigieron a la casa de la familia Pasenau los uniformados, Capitán Hans Schernberger, el Teniente Hernán Godoy, uniformados o Carabineros Pedro Soto, Robert Teylorl, Alberto Oyarzún, hermanos Raúl y René Guzmán. El plan estaba prácticamente conversado, pero llevaron los cuerpos de Héctor Barría y otro cuerpo, presumiblemente de un señor Sandoval del pueblo de Río Negro. En ese momento Guido Barría todavía estaba con vida, pero no por mucho tiempo, pues una vez que la familia Pasenau les concede el dinero acordado a todos estos asesinos. Estos se fueron directamente a completar su siniestro plan. Se van a un lugar desconocido dentro del sector y Carabineros ordena a Guido Barría hacer una excavación en la tierra. Posteriormente le ordenan colocar en dicha excavación el primer cadáver. Luego le ordenan a Guido hacer lo mismo con el segundo cuerpo. Y cuando estaba colocado este cuerpo, el Teniente Hernán Godoy acribilló a balazos por la espalda a Guido Barría Bassay, según él, como un acto de valor frente a estos siniestros personajes. A continuación taparon los

cuerpos, quedando sepultados estos tres cadáveres en una sola fosa, quedando el cuerpo de guido en la parte superior.

10. Hans Eduart Schernberger Valdivia. Depone de fs. 941 a fs. 944 (Tomo III), fs. 1088 a fs.1092 (Tomo III), 1.103 a 1.106 (Tomo III), copia de fs. 1.575 a 1.578 (Tomo IV), de fs. 1.107 a fs. 1.108 (Tomo III), copia de fs. 1.579 a fs. 1.580 (Tomo IV), fs. 1109 (Tomo III), 1.110 a 1.111 (Tomo III), copia de fs. 1.595 a 1.596 (Tomo IV), fs. 1.112 (Tomo III), copia de fs. 1.480 (Tomo IV), fs. 1.117 a 1.119 (Tomo III), copia de fs. 1.667 a 1.669 (Tomo IV), y de fs. 1.677 a 1.679 (Tomo IV). En lo pertinente reiterar dichos del encausado de fs. 1.113 a fs. 1116 (Tomo III), copia de lo cual se encuentra de fs. 1.624 a fs. 1.627 (Tomo IV). Explaya que el día 11 de septiembre del año 1973 se desempeñaba como Capitán de la Comisaría de Río Negro. El día 16 de octubre de 1973 en su calidad de Gobernador recibió la orden del Intendente de la zona, Teniente Coronel del Ejército, Lizardo Abarca Maggi, en el sentido que procediera a detener a los hermanos Barría Bassay, respecto de los cuales se había dictado un bando militar. No recuerda el delito. La orden fue verbal, no recuerda una orden por escrito. Llamó telefónicamente al Teniente Godoy Barrientos, quien se desempeñaba como Capitán Subrogante de la Comisaría y a cargo de la parte operativa, le dio la orden de trasladarse al aserradero, donde se encontrarían escondidos los responsables y procediera con el operativo. Fue así que, el Teniente Godoy se trasladó junto a un contingente de Carabineros a dicho sector y detienen a estas personas, trasladándolas al Retén de Riachuelo. Se comunica por radio, manifestándole que las personas ya se encontraban detenidas y que serían trasladadas al Retén, lugar donde él los esperaba. Posteriormente, ambos detenidos fueron trasladados a la Comisaría de Río Negro. A las 13:00 horas del mismo día de la detención le informa de los hechos al Intendente. El detenido Guido Barría manifiesta que en un sector de la cordillera habría armas, municiones y unos Cubanos, recibiendo de su parte la orden de trasladarse al sector con el detenido. Es así que, al día siguiente, 17 de octubre de 1973 el Teniente Godoy Barrientos, el detenido Guido Barría, el encartado y otros Carabineros que no recuerda sus nombres, se trasladaron a un operativo a la cordillera. Mientras tanto el otro detenido, Héctor, quedó en la Comisaría a cargo del personal de guardia. Consiguieron caballos y autos, pero no encontraron nada. Regresaron con el detenido a la Comisaría de Río Negro alrededor de las 14:00

horas. Ese mismo día le informó al Intendente de los acontecimientos, quien le ordena que ambos detenidos deben ser entregados a un procurador o asesor legal del Ejército de nombre Follert, a quien se los entregó alrededor de las 18:00 horas. Con posterioridad dicha persona pasó a desempeñar el cargo de Fiscal Militar y pertenecía a un grupo conocido como cien águilas, que estaba integrado por ex oficiales de las Fuerzas Armadas. A este grupo se les entregó armas, uniformes y autorización de detener personas. Los detenidos solo permanecen la Comisaría dos días, a saber 16 y 17 de octubre de 1973. El día 18 de octubre de 1975 por enfermedad de su madre se trasladó a Santiago, donde permaneció hasta el seis o siete de noviembre de 1975, después se realizaron sus funerales. En el acto, acompaña certificado de nacimiento correspondiente a su persona y certificado de defunción de su madre, Berta Valdivia Guerra. Funda que cuando aún se encontraba a cargo de la Comisaría recibió una orden que fue impartida a nivel nacional, en el sentido que debían ser destruidos todos los libros de registros de detenidos. Pese de que no se encontraba vencido el plazo reglamentario, por lo tanto, no se encontraran registros sobre estas detenciones. En cuanto a lo que se le consulta y que dice relación si en la Comisaría de Río Negro se encontrarían enterrados los hermanos Barría Bassay, su respuesta es que no. Justifica que permaneció a cargo de la Comisaría hasta fines de 1975 y durante ese periodo puede dar fe que no se exhumó ni inhumó ningún cuerpo. Si recuerda que los calabozos fueron cambiados de lugar, se trasladaron a la parte trasera de la Comisaría, donde se construyó un lugar para el forraje de los animales. Cree que tal vez no se logró encontrar los cuerpos de estos detenidos, ya que, según rumores de pasillo, Héctor Barría había sido lanzado al río Pilmaiquén por los Militares. Incluso en ese sector existe un monolito en recuerdo de varios detenidos desaparecidos que fueron encontrados en los márgenes de ese río. Que las declaraciones de Robert Teylorl son permanentemente contradictorias, sin fundamento, sin pruebas que las ampare, ya que carece de ellas; no existen testigos presenciales que avalen sus dichos. Pero si en el contexto de su declaración así el Tribunal lo considera, habría que asumir que Guido Barría habría sido lanzado por Teylorl a lo menos en alguno de los lugares que ha señalado. Reitera que no tiene ninguna participación en la muerte de estas personas, jamás dio la orden a Teylorl ni a ningún otro subalterno para asesinar, exhumar o inhumar

a ninguna persona. Esto se hace extensivo a la participación que le pueda caber en la desaparición de estas personas al Teniente de esa época, Hernán Godoy Barrientos, ya que ya que él era el Oficial que tenía a cargo la Comisaría, quien era un Oficial serio, acucioso, que debía cumplir con todas las funciones propias del cargo de Comisario. El encausado se desempeñaba con dedicación exclusiva en los primeros meses posterior al 11 de septiembre como Gobernador del ex departamento de Río Negro de la actual provincia de Osorno. Y reglamentariamente la custodia de los detenidos corresponde al personal a cargo de la guardia. Invoca que estas personas, los hermanos Barría Bassay solo permanecieron en la Comisaría el día 16 de octubre de 1973, aproximadamente desde las 13:00 horas hasta el día 17 de octubre del mismo año, hasta las 17:00 horas, en que fueron entregados al Fiscal Militar, como ya ha señalado. En cuanto a la participación del actual General, don Hernán Godoy, como consta en el proceso, sobreseído por la I. Corte Marcial y sentencia interlocutoria del Juzgado del Crimen de Río Negro, participó en su calidad de jefe de la patrulla que detuvo a estas personas, y participación en la rebusca de armamento, munición y algunos presuntos Cubanos. Él al hacer estas gestiones cumplía órdenes personas del encausado, las que a su vez eran las que había recibido del Intendente de la Provincia. En consecuencia, dentro del contexto del cumplimiento de estas órdenes, él no tiene responsabilidad directa, ya que era el único Oficial en la Comisaría que podía realizar esta parte operativa. Él tampoco participó en la entrega que se le hizo al Fiscal Follert, ya que en el furgón policial que fueron trasladados hasta el ingreso de Río Negro, donde el encausado lo esperaba con el vehículo de la Gobernación, cuando se produjo el intercambio de estos detenidos de Carabineros a la Fiscalía en presencia del practicante de la Comisaría, quien verificó el buen estado de salud de los detenidos. De ello quedó constancia en el libro de atenciones del practicante que lamentablemente por las razones anteriormente dichas, fue destruido. Interpreta que el Teniente de esa época Hernán Godoy vivía en la Comisaría junto a unos diez funcionarios solteros, ya que por disposición reglamentaria el personal soltero vivía dentro de la Comisaría. El encartado también vivía en el terreno de la Comisaría, pero dentro de una casa anexa.

11. Luis Alberto Oyarzún Arriagada. Depone de fs. 938 a fs. 940 (Tomo III), de fs. 1.041 (Tomo III) copia a fs. 1520 (Tomo IV), de fs. 1.042 a fs. 1.043 (Tomo III) copia a fs. 1550 a fs. 1551 (Tomo IV), de fs. 1.044 a fs. 1.046 (Tomo III) copia a fs. 1569 a fs. 1571 (tomo IV), de fs. 1.047 a fs. 1.048 (Tomo III) copia a fs. 1582 a fs. 1583 (Tomo IV), de fs. 1.049 a fs. 1.050 (Tomo III) copia a fs. 1684 a fs. 1685 (Tomo IV), fs. 1.052 a fs. 1.055 (Tomo III); de fs. 1446 (tomo IV), fs. 1.487 (tomo IV), fs. 1.561 (tomo IV) y fs. 1.599 (tomo IV). Que en lo pertinente de los dichos del encausado conviene puntualizar lo rolante de fs. 1044 a fs. 1045 (Tomo III), copia a fs. 1569 a fs. 1571 (Tomo IV), narra que cuando se presentó a la unidad en horas de la tarde, fue informado por el oficial de guardia que estaba detenido en el calabozo Guido Barría, a quién él conocía desde que ambos eran niños, pues sus padres habían trabajado juntos, de hecho con ambos hermanos cuando niño jugaban a la pelota. Él se dio una vuelta por el calabozo que estaba en el subterráneo, en forma totalmente escondido, para que nadie lo viera, pudiendo ver a Guido quien le dijo que lo habían golpeado muy duramente, le aconsejó que dijera toda la verdad respecto de lo que le preguntaran, ante lo cual éste le dijo que ya había contado todo lo que sabía. Le preguntó dónde estaba Héctor Alejandro, a quién apodaban Tito, diciendo que no sabía dónde se encontraba en esos momentos. Como Guido Barría, dijo que en la zona precordillerana de Millantue, se encontraban ocultas armas, se preparó una especie de operativo, yéndose a la zona, ocupándose vehículos y caballos de otros retenes y el camión de don Fernando Aguirre; un vecino de la zona. Al llegar al lugar donde Guido dijo que se encontraban armas, solo vieron una especie de refugio cubierto de ramas con restos de comida, no se encontró ningún tipo de armas y tampoco se detuvo a nadie en ese operativo. La vuelta desde la cordillera fue en los mismos vehículos, a saber un Jeep Bronco de la Gobernación, un furgón marca Chevrolet de color verde del SAG, el Jeep tipo camioneta de color amarillo que según recuerda era un Ika Renault, que tiene sólo dos asientos y la parte posterior es para carga, vehículo de propiedad de la CORA o del INDAP, los que estaban a disposición de la Comisaría de Río Negro. Ignora en que vehículo trasladaron a Guido desde la zona en el camino de vuelta. Si escuchó, pero a él no le consta, que a Guido lo trajeron en el mismo vehículo marca Ika Renault, en que viajaron Mayor Hans Schernberger, comisario de Río Negro y el Cabo Robert Teylorl Escobar de la misma unidad, también escuché que

a Guido lo traían amarrado con alambre de púas y en la parte posterior del jeep que era conducido por Schernberger. Él viajó más tarde en el camión donde fueron subidos los caballos, llegando más tarde que los demás a la unidad. Él preguntó por Guido, y le dijeron que no se encontraba detenido en la unidad, no hizo más preguntas respecto de donde él se encontraba. Espeta que no vio detenido en la Comisaría de Río Negro, a Héctor Alejandro Barría Bassay. No participó ni siquiera como chofer, en las detenciones de los hermanos de Héctor Alejandro y Guido Héctor Barría Bassay. Adopta que lo escuchó respecto a la detención, fue que se produjo en la camioneta Chevrolet de los hermanos Raúl y René Guzmán del Río que ese tiempo no recuerda si era verde o roja, y que uno de ellos, Raúl Guzmán fue el chofer del vehículo cuando se les detuvo. Los Carabineros que participaron fueron el teniente José Hernán Godoy Barrientos, el cabro Pedro Soto Godoy, los cabos Quintiliano, Rogel Alvarado y Barrientos Arriagada. Cuenta que al interior de la Comisaría de Carabineros de Río Negro a los detenidos cuando se les interrogaba, se les golpeaba con las culatas de los fusiles, con el "tonto de goma" y con golpes de pies y puño en diferentes partes del cuerpo, también se les sumergía en un tambor con agua y por último, se les ataba en una escala que era colocada en un ángulo de 45 grados, al detenido se le amarraba con los pies hacia arriba y se le echaba agua en su boca. Estos tormentos eran aplicados por el teniente José Godoy Barrientos, el cabo Pedro Soto Godoy y por el cabo Robert Teylorl Escobar, a él le consta pues personalmente cuando los detenidos se les torturaba. No vio que los detenidos tuvieran su vista vendada. Posteriormente y en lo pertinente reiterar dichos de fs. 1049 a fs. 1050 (Tomo II), copia a fs. 1684 a fs. 1685 (Tomo IV), dice que el 16 de octubre de 1973 se encontraba trabajando en la Comisaría de Río Negro, con el grado de carabinero. Recuerda haber efectuado un patrullaje a la cordillera de la costa, específicamente en el sector Huelhellhue, con Guido Barría Bassay, este último en calidad de detenido por la Segunda Comisaría de Río Negro. Anexa que al llegar en la noche del día 16 de octubre de 1973, después de haber permanecido franco, se enteró por el funcionario de guardia, no recuerda identidad, de que los hermanos Guido y Héctor Barria Bassay habían sido detenidos. A los cual consultó donde se encontraban, manifestándole el mismo funcionario de guardia que Guido se encontraba en los calabozos. Así él en forma oculta lo constató en el calabozo y conversó con él en la rejilla de la

puesta de su celda que se encontraba en el subterráneo de la Comisaría, dicha conversación fue breve, solo le preguntó cómo se encontraba, manifestándole que se encontraba bien y que confesaría todo lo que sabía para que no lo golpearan, luego se retiró del lugar porque la jefatura de la Comisaría, que se encontraba en esos momentos compuesta por el capitán Hans Schernberger Valdivia y el teniente José Herman Godoy Barrientos, habían ordenado para el día siguiente el patrullaje al sector de la cordillera de la costa. Dicho operativo se llevó a cabo en forma temprana al día siguiente, donde participó como escolta, además de alrededor de unos 25 carabineros montados de diversos retenes de la segunda Comisaría. Además, del jefe al mando, no recuerda si el teniente Godoy andaba. Se les informó que la finalidad de este patrullaje era encontrar armas y algunos personajes de los cuales ignora sus nombres a quienes se buscaba. Se concurrió al lugar con el detenido Guido Barría Bassay donde no se encontró nada, regresando al lugar de Millantue ubicado en la precordillera, desde donde habían salido montado. Una vez terminado el patrullaje, se le ordenó hacer andar un camión marca international, color rojo de propiedad del civil Fernando Aguirre. Esa persona igual habría facilitado 6 caballares y el chofer que llevo el camión no iría a buscarlo durante ese día, se presumía que el patrullaje podría durar más tiempo. Tras hacer andar el camión, trasladó los caballos hasta Ro Negro, lugar Chifín, y luego se devolvió a la Comisaría. Desde el lugar de Millantue, Carabineros a cargo del procedimiento relatado no llegaron a la segunda Comisaría de Rio Negro con don Guido Barría Bassay, razón por la cual consultó a los colegas que andaban el procedimiento, sin darle ninguno una respuesta correcta, ya que todas eran evasivas a la situación. Quiere aclarar que varias de las respuestas evasivas y de desconocimiento de los hechos, fue producto de instrucciones hechas por el asesor jurídico de la prefectura don Fredy Rosas, quien los citaba a su oficina y les entregaba instrucciones de lo que debían declarar, debido a que aún eran parte de la institución y cualquier declaración mal hecha podía perjudicar su estabilidad funcionaria.

B. Documentos.

1. De fs. 8 a fs. 10 (Tomo I), fotocopias de páginas pertinentes del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Volumen I, Tomo 1, acompañado en la querella de Mahuad Segundo Aleuy Peña y Lillo, Subsecretario del Interior

de fs. 15 y siguientes, el cual señala que: El 16 de octubre de 1973 una patrulla de Carabineros de Río Negro detuvo en su lugar de trabajo a los hermanos: Guido Ricardo Barría Bassay, quien tenía 19 años, era obrero agrícola y militante socialista. Héctor Alejandro Barría Bassay, quien tenía 27 años, era auxiliar de la Escuela N°2 de Río Negro, delegado al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y militante socialista. El día indicado, una patrulla de Carabineros de Río Negro, compuesta por aproximadamente diez efectivos, llegó al aserradero donde trabajaban las víctimas y los detuvo ante varios testigos, llevándoselos en una camioneta. Desde ese momento no se vuelve a tener noticia alguna sobre el paradero y la suerte final de los detenidos. Es convicción de la Comisión que la desaparición de los hermanos Barría es de responsabilidad de agentes del Estado que incurrieron en violación a los derechos humanos. Son circunstancias de convicción las siguientes: que la detención se encuentre acreditada por testigos, que en un proceso judicial un funcionario de Carabineros reconoció la detención señalada, que fueron trasladados a la Unidad de Carabineros de Río Negro, que tras sus desapariciones no haya habido más noticias de los afectados y que ante los requerimientos de la Comisión a la autoridad policial no haya habido información oportuna y precisa.

2. Copia de sentencia definitiva dictada por don Alejandro Solís Muñoz, Ministro de Fuero, en causa rol 2182-98 “Episodio Río Negro” de 03 de mayo de 2004, rolante a fs. 45 y siguientes (Tomo I), en virtud de la cual se declara en lo pertinente que: “Que con el mérito de estos antecedentes, apreciados según las normas respectivas, constitutivos de presunciones judiciales que reúnen todos los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, se encuentra legalmente acreditado en el proceso que el día 16 de octubre de 1973, alrededor de las 12:00 horas, una unidad operativa de Carabineros a cargo del Teniente José Hernán Godoy Barrientos, bajo el mando del Mayor Hans Schernberger Valdivia, Comisario de la Comisaría de Carabineros de Río Negro y Gobernador del Departamento del mismo nombre, con participación del Sargento Quintiliano Rogel Alvarado, del sargento Rómulo Catalán Oyarzún, del cabo primero Robert Santiago Teylorl Escobar y del cabo primero Pedro Segundo Araya Soto Godoy, detuvieron sin portar orden judicial alguna, desde el lugar de su trabajo en el aserradero del fundo “El Risco”, ubicado en Riachuelo de la comuna de Río Negro,

a los hermanos Héctor Alejandro y Guido Ricardo, Barría Bassay, personas que fueron conducidas desde ese recinto maderero hacia la Comisaria de Carabineros de Riachuelo y luego la de Rio Negro, donde fueron torturados e interrogados sobre armas que presumía escondían y que no se encontraron, para finalmente ser llevado Guido Ricardo Barria, por Schernberger Valdivia y Teylorl Escobar, hacia un sector del fundo La Campana, distante a unos quince kilómetros de la referida Comisaría, por haberse incinerado antes de tiempo los registros de ingreso y egreso de los detenidos, perdiéndose todo rastro de ambos hasta la fecha, sin que los privados de libertad hayan tomado contacto con sus familiares, realizando gestiones administrativas ante organismos del estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que consten, tampoco sus defunciones. Que estos hechos son constitutivos de sendos delitos de secuestro calificado, previstos en el artículo 141 del Código Penal, según el tenor de la norma antes de la modificación introducida por la ley 19.029, en virtud del principio de la no retroactividad de la ley penal y, por ende, sancionados con las penas de presidio mayor en cualquiera de sus grados.”

3. Documentos remitidos por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos a fs. 166 y siguientes (Tomo I), que se desglosa de la siguiente forma:

a. A fs. 168 (Tomo I), acta de nacimiento Guido Ricardo Barría Bassay, detallada precedentemente.

b. A fs. 168 bis (Tomo I), certificado de nacimiento de Guido Ricardo Barría Bassay, detallado precedentemente.

c. A fs. 169 (Tomo I), Carta enviada al General Director de Carabineros de Chile por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de fecha 02 de octubre de 1990, detallada precedentemente.

d. A fs. 171 y siguientes (Tomo I), Documentos del Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad, “Detenidos desaparecidos”, que se desglosan de la siguiente forma:

i. A fs. 175 y siguientes (Tomo I), copia de lo cual se encuentra a fs. 224 y siguientes (Tomo I), ORD. N°11478/16825 de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, de fecha 11 de diciembre de 1990, en virtud del cual informa los movimientos migratorios

de las personas consultadas, aduciendo que el resto de las personas consultadas no registran anotaciones de viajes (no registrando a las víctimas de autos).

ii. A fs. 205 y siguientes (Tomo I), ficha W-485, que indica que Guido Ricardo Barría Bassay, tenía 19 años de edad, era casado y tenía tres hijos, el menor de ellos, póstumo. Era empleado de correos y trabajaba también en el campo. Militaba en el Partido Socialista. Fue detenido con su hermano el día 16 de octubre de 1973 desde su lugar de trabajo, por Carabineros de Río Negro. Desde el momento de su detención, Guido Barría y su hermano se encuentran desaparecidos. Aproximadamente a las 12:00 horas del día 16/10/73 cuando los obreros del aserradero existentes en el fundo de Eduardo Geisse se preparaban para almorzar, entre ellos los hermanos Barría Bassay y su padre, vieron llegar a una patrulla de Carabineros, compuesta por aproximadamente 10 efectivos, los que llegaron en una camioneta de propiedad de los hermanos René y Raúl Guzmán, comerciante de la región, quienes se mantuvieron a cierta distancia de los hechos. La patrulla de Carabineros detuvo inmediatamente a los hermanos Barría Bassay y solamente a ellos. Al resto de los obreros los obligaron a tenderse boca abajo, mientras golpeaban y maltrataban de hecho y palabra a los detenidos. Luego procedieron a lanzarlos violentamente dentro de la camioneta y los llevaron personalmente al Retén de Riachuelo, donde habrían estado hasta el 17/10/73, para luego ser trasladados a la Comisaría de Río Negro. En ambos lugares se les negó a los familiares la detención. De todos estos hechos, detención y maltrato hay testigos, pues se efectuaron en presencia de los trabajadores del aserradero, entre ellos, en lo pertinente, el propio padre de los detenidos.

4. Fotocopia de Hoja de vida de las siguientes personas:

a. A fs. 429 y siguientes (Tomo I), José Hernán Godoy Barrientos, que en lo pertinente señala lo siguiente: **1)** A fs. 438 (Tomo I), se señala que con fecha 3-III-972 asciende a Teniente Grado 3°, con fecha 2-II-972, según boletín oficial 2332, permaneciendo en la Prefectura de Osorno, pasando de la 1era., a la 2da., Comisaría de Río Negro. **2)** A fs. 439 (Tomo I), se señala que con fecha 16-II-974 *en conformidad al Radio N°657 Digcar. P. I. del 27-II-974, se traslada con derechos reglamentarios, desde la 2da. Comisaría Río Negro a la Tenencia Purranque como Jefe". Presentándose en su nueva unidad el 2-III-974.*

b. A fs. 456 y siguientes (Tomo I), Hans Eduart Schernberger Valdivia, que en lo pertinente señala lo siguiente: **1)** A fs. 468 (Tomo I), se señala que con fecha 26-I-973 por resolución exenta N°9 de 24-I-973 es trasladado a la 2da., Comisaría de la Prefectura de Osorno, como Comisario, a contar del 16-I-973, radiograma Kardex P.1. N°292 B70. 2384-52196. Presentando a dicha unidad con fecha 10-III-973, tal como consta a fs. 469 (Tomo I). **2)** A fs. 469 (Tomo I), con fecha 22-I-1974 se le designó en la Fiscalía Militar de Carabineros de Osorno, en reemplazo del titular abogado asesor Fredy Rosas Arriagada, según Decreto 16 de 12-II-974.

5. A fs. 902 y siguientes (Tomo III), relación del personal de Carabineros de Chile, que se desglosa de la siguiente forma:

a. A fs. 902 y siguiente (Tomo III), contiene la dotación de la Segunda Comisaría “Río Negro” entre los meses de marzo a diciembre de 1973, entre los que se encuentran: **a)** En el numeral 2, el Capitán Hans Eduart Schernberger Valdivia. **b)** En el numeral 3, el Teniente (O) José Hernán Godoy Barrientos.

b. A fs. 908 (Tomo III), contiene dotación del Retén “Maipue” entre los meses de marzo a diciembre de 1973, entre los que se encuentran en el numeral 4, el Carabinero Luis Alberto Oyarzún Arriagada.

6. A fs. 1.469 (Tomo IV), ORD. N°2011/182/15 de fecha 22 de junio de 1979, remitido por el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile al Primer Juzgado de Letras de Osorno, en virtud del cual justifica que: En atención a su oficio s/n de fecha 29 de mayo ppdo., mediante el cual se ordena informar si se registran egresos del país y si han sido requeridos para impedir la salida del país, en lo pertinente de Guido Ricardo y Héctor Alejandro Barría Bassay. Dicho informe concluye que consultados los archivos de la sección control internacional de Frontera a contar del día 1° de enero de 1978 a la fecha, ninguna de las personas mencionadas registra anotaciones de viajes. Asimismo, consultado los archivos del Departamento de Informática Policial de la Institución, ninguna de las personas señaladas registra impedimentos de salida del país.

20°) Que como se aprecia los hechos de la detención, apremios y secuestro de los hermanos Barría Bassay son semejantes a los que ha determinado don Alejandro Solís Muñoz, Ministro de Fiero, en sentencia de causa rol 2182-98 “Episodio Río Negro” de 03 de mayo de 2004. Toda vez que la absolución dictada

en esa causa es por aplicación de la institución de la prescripción, como consta a fs. 141 y siguientes (Tomo I). Ello es sin perjuicio de este nuevo proceso que debe ponderar en conformidad a la ley y los nuevos elementos probatorios, para de esa forma establecer los hechos del caso.

21°) Que del conjunto de elementos probatorios antes aquilatados y relacionados generales y específicos testigos directos, indirectos y documentos antes señalados como además se indica en el auto acusatorio **fs. 1950 a fs. 1983 (Tomo V)**, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción:

1. Primero: que han existido los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado en las personas de Héctor Alejandro Barria Bassay y Guido Ricardo Barria Bassay, previstos y sancionados en los artículos 148, 150 N°1 y 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícitos en su carácter de lesa humanidad

2. Segundo: que en esos ilícitos le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **José Hernán Godoy Barrientos**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y la defensa.

En cuanto a las defensas.

22°) El Abogado Maximiliano Murath Mansilla en representación de **Luis Alberto Oyarzún Arriagada** de fs. 2404 a fs. 2479(Tomo VII) en lo principal: solicita inhabilidad por aplicación del artículo 19 número 3 de la Constitución Política y solicita inhabilidad del juez por control de convencionalidad; al primer otrosí: solicita suspensión del procedimiento; segundo otrosí: solicita la nulidad de las declaraciones del proceso que indica, al tercer otrosí: en subsidio, opone excepciones de previo y especial pronunciamiento; cuarto otrosí: contestación acusación fiscal y particulares y adhesiones de los querellantes particulares; quinto otrosí: lista de testigos de conducta; sexto otrosí: lista de testigos de descargo y séptimo otrosí: medios de prueba.

A. Que respecto a las peticiones realizadas por la defensa en lo principal, al primer y segundo otrosí de su presentación tramitadas en cuaderno separado, se resolvió a fs. 2540 (Tomo VII) del 13 de marzo de 2024, hacer efectivo el apercibimiento y en consecuencia tenerlas por no presentada, atendido a que no

se dio cumplimiento a lo decretado por el Tribunal de fs. 2485 (Tomo VII). Respecto de esa resolución quedó ejecutoriada, toda vez que la defensa no interpuso ningún medio de impugnación en contra de ella.

B. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. Que en relación a las excepciones de previo y especial pronunciamiento alegadas por la defensa, a saber, prescripción de la acción penal y amnistía fueron falladas y rechazadas por el Tribunal, según consta a fs. 2762 a fs. 2765 (Tomo VIII) del 11 de junio de 2024.

C. Solicitud de absolución. En subsidio de lo precedente la defensa solicita la absolución de su representado por los siguientes argumentos:

I. Sobre la falta de participación de su representado en la detención de las víctimas y en el primer hecho de la causa o imputación. Comienza refiriéndose al numeral 33° de la acusación fiscal. De lo cual reflexiona que se acusa injustamente a su representado de ser uno de los miembros de la patrulla que detuvo a las víctimas, por cuanto no participó en la detención y así se desprende de las múltiples declaraciones judiciales que rolan en autos. Sus alegaciones son confirmadas por dichos de fs. 1487, fs. 786 y de fs. 883 de rol 2182-98, en el mismo sentido de fs. 1600 en causa rol 24.365-M. Arguye eso refuta los dichos de la familia Barria que habría escuchado antes del careo de Barría Navarro con su representado, que al parecer estaba en el grupo de aprehensores, puesto que quien les habría dado la información se retractó posteriormente en el careo con su representado. Suma que en relación al grupo aprehensor de acuerdo a fs. 1586 y de fs. 506 de causa rol 2182-98, siendo reiterado en las fojas indicadas. Que haciendo cargo la defensa de los dichos de Pedro Soto Godoy, espeta que analizada sus declaraciones concluye que son hechas de manera contradictoria, lo que da cuenta de su falta de credibilidad o verdad, sin perjuicio de su problema de alcohol. Suma que el grado de su representado a la época era de carabinero raso, ultimo en el escalafón de rango y mando. Así no existe testigo válido, conteste, incontrovertido, ni documento, inspección personal del Tribunal o informe de peritos que den cuenta que el encausado haya participado en los hechos. Por tanto, solo quedan las presunciones judiciales, respecto a las cuales tampoco se dan por configurados los elementos necesarios.

II. Sobre la falta de participación de su representado en los presuntos apremios ilegítimos a las víctimas y en el segundo hecho de la causa o imputación. Comienza refiriéndose al numeral 33° de la acusación fiscal. Hace presente la defensa que el acusador comete un error al acusar injustamente al encausado por dicho delito, toda vez que sus declaraciones judiciales que rolan en la causa no han sido desvirtuadas por los medios de prueba legal. Delibera la defensa que su representado es el único funcionario policial que depuso haber visto en la unidad policial a Guido Barría a fs. 159 y lo que la víctima le relató en dicha oportunidad, situación que pudo haber omitido, pero confiado de su inocencia, dijo lo que sabía sin temores. Suma que el grado de su representado a la época era de carabinero raso, ultimo en el escalafón de rango y mando. Así no existe testigo valido, conteste, incontrovertido, ni documento, inspección personal del Tribunal o informe de peritos que den cuenta que el encausado haya participado en los hechos, conforme a las normas legales pertinentes. Por tanto, solo quedan las presunciones judiciales, respecto a las cuales tampoco se dan por configurados los elementos necesarios, precisando que el haber reconocido que vio a una de las víctimas en la unidad policial y el hecho de haber escuchado que la habrían golpeado, no es suficiente para dar por configurada una presunción judicial en su contra sobre ese delito.

III. Sobre la falta de participación de su representado en la muerte o desaparición de las víctimas y en el tercer hecho de la causa o imputación. Comienza refiriéndose al numeral 33° de la acusación fiscal, específicamente las letras b) y c). Que del mérito del expediente y declaraciones, que no han sido desvirtuadas, la única conducta que desplegó su representado en el operativo de búsqueda de armas, es haber sido el chofer del camión que trasladaba caballos, en atención a su rango de carabinero raso, para luego volver a la unidad con dicho camión. Así que existe prueba completa y suficiente que permite al tribunal fijar como hecho real y probado que quienes participaron en la muerte o desaparición de una de las víctimas son los funcionarios Teylorl, Pedro Soto y el Capitán Schernberger. Como antecedente exculpatorio cita la declaración de fs. 1564. Que respecto a la víctima Héctor Barría no fijan lo sucedido con ella. Así no existe testigo valido, conteste, incontrovertido, ni documento, inspección personal del Tribunal o informe de peritos que den cuenta que el encausado haya participado

en los hechos. Por tanto, solo quedan las presunciones judiciales, respecto a las cuales tampoco se dan por configurados los elementos necesarios.

IV. Efecto positivo de la cosa juzgada. Reflexiona la defensa en relación a los efectos de la cosa juzgada, desarrollando que el efecto positivo de esta implica y comprende, la eficacia vinculante que puede llegar a poseer todo pronunciamiento judicial firme, sobre los juicios futuros relacionados con el mismo, como sería este caso, por ser exactamente los mismos hechos investigados en causa rol 2182-98, episodio “Rio Negro”, pero respecto a otras personas. En el presente caso no se pretende impedir la investigación de la presunta responsabilidad de su representado en los hechos, sino que respetar aquellos que fueron fijados como ciertos, mediante una sentencia firme y ejecutoriada, a fin de no producir dos sentencias contradictorias. Cita al respecto el considerando 2° de la sentencia de la causa rol 2182-98, episodio “Rio Negro”, ratificada por la sentencia de 2° instancia de la Corte de Apelaciones y validada por la Excelentísima Corte Suprema. Quedando establecido quienes detuvieron a las víctimas y quienes llevaron a una de las víctimas al sector donde es lanzado al río.

V. Inexigibilidad de una responsabilidad objetiva en materia penal. Reitera que su representado solo condujo el camión de los caballos en el operativo de búsqueda de armas. Se refiere a Claus Roxin, precisando que la Constitución Política de la Republica prohíbe presumir de derecho la responsabilidad penal.

VI. Ponderación de la prueba y estándar de convicción. Sostiene la defensa que analizada los elementos de cargo de los acusadores no es posible por ninguno de ellos ni junto a otros tener indicios que haya una presunta participación penal del encausado. Urde que la acusación comete una infracción de ley, al atribuirle responsabilidad de autor de los delitos, pues se basa en hechos que no están probados, por ser controvertidos por múltiples elementos probatorios, vulnerando normas del Código de Procedimiento Penal. No siendo posible desarrollar ni construir presunciones judiciales de un sistema deductivo. Cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales imponen el precedente judicial que la falta de prueba plena de responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la

tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria determine su culpabilidad que quede firme. Blasona la defensa que es injusto aplicar las normas del derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para justificar el juzgamiento de delitos como imprescriptibles y no amnistiables, pero no aplicar esas normas cuando se trata de un estándar probatorio.

VII. Sobre la inconstitucionalidad de las presunciones judiciales.

Fundamenta que los artículos 488 y 457 ambos del Código de Procedimiento Penal, son inconstitucionales y vulneran las garantías mínimas del imputado. Así el primer conflicto constitucional se produce porque se vulnera el principio del debido proceso, en relación al principio de imparcialidad. Hace una breve reseña del antiguo sistema penal, precisando que en el segundo rol (plenario) el juez tiene la acotada función de valorar la prueba, pero no parece lógico que el juez produzca la prueba más ilógica aún que el mismo juez que construyó una presunción judicial para establecer la culpabilidad del inculcado, deba valorarla, para en definitiva condenarlo. Cita doctrina en relación a las presunciones judiciales que no deben ser entendidas como medios de prueba, sino como un razonamiento judicial. Cita normas del Código Procesal Penal. Las presunciones judiciales transgreden el principio de contradicción, puesto que las presunciones judiciales son construidas en la sentencia, donde ya no se puede ejercer un contradictorio sobre ellas, pues puede tomar en consideración lo que ocurra en el plenario, momento posterior a la contestación de la acusación. Por lo expuesto, es preciso que el Tribunal aborde un control convencional en el marco de sus mecanismos de control constitucional. Cita doctrina referente al derecho penal del enemigo, concluyendo que no es permitido por las normas internacionales y en especial por normas que versan sobre derechos humanos, no pudiendo el fin justificar los medios.

D. En subsidio, solicita recalificación a encubridor. En la eventualidad de establecer algún tipo de responsabilidad penal, a lo sumo encubridor.

E. En subsidio, solicita recalificación del delito de secuestro calificado a secuestro simple. Conjuntamente con la recalificación de encubridor y subsidiariamente con la defensa principal, solicita se recalifique a secuestro simple. Por cuanto lo único que a su representado se le pudiera reprochar es haber visto a una de las víctimas, sea en el calabozo, operativo de búsqueda de armas,

empero no se le puede reprochar las conductas que produjeron la calificante respecto al delito de secuestro.

F. En subsidio, solicita aplicación de las siguientes atenuantes conjuntamente. Solicita la defensa que se le reconozca la aplicación de la atenuante de irreprochable conducta, además se le reconozca la media prescripción por haber transcurrido más de la mitad del tiempo de prescripción. Que los tratados internacionales por Chile, como los ratificados, no prohíben la aplicación de circunstancias atenuantes por delitos de lesa humanidad. Además, solicita se acoja la atenuante contemplada en el N°9 del artículo 11 del Código Penal, especialmente tomando en consideración la declaración de fs. 1569, lo que da cuenta de la importante colaboración, sobre todo para fijar el presunto delito de apremios ilegítimos. Además, dice la defensa procede la concesión de las atenuantes del cumplimiento de ordenes miliares en razón a lo expuesto en los artículos 211 en relación con el artículo 214 del Código de Justicia Militar, por cuanto su representado era un carabinero raso en aquella época.

G. En subsidio, solicita el rechazo de las siguientes agravantes solicitadas por los querellantes. A criterio de la defensa no es posible acogerlas por cuanto el N°8 del artículo 12, por cuanto el carácter de público que tienen forma parte de la calificación del delito de secuestro agravado o calificado como delitos de lesa humanidad, en tanto en su comisión han actuado agentes del Estado. Por tanto no puede ser parte del hecho punible y de la circunstancia agravante. En cuanto al reconocimiento de las agravantes de los N°1 y 11 del artículo 12 del cuerpo normativo indicado, dichas agravantes son absorbidas por la calificante, de lo contrario se infringe el non bis in ídem.

H. Solicita en subsidio, el cumplimiento domiciliario de la pena. Que su representado tiene 73 años de edad, padece enfermedades que limitan su estado de salud y condición en su domicilio, con mayor razón se limitaría dentro de un centro de cumplimiento de condena. Por ello, atendido su nula peligrosidad el Estado de Chile tiene la obligación de protegerlo, así una de las medidas pudiera ser conmutar su pena desde prisión efectiva a arresto domiciliario total mediante la concesión de un indulto particular, fallar al contrario vulneraría lo dispuesto la Convención Interamericana sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Destaca que el condenarlo a una pena efectiva en su condición

constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Que diversas fuentes de derecho internacional dan una protección especial al adulto mayor, las cuales cita a modo ejemplificador.

23°) El Abogado Hernán Benavides Navarro en representación de **Hans Eduart Schernberger Valdivia** en su presentación de fs. 2632 y siguientes (Tomo VIII), en lo principal interpone excepciones de previo y especial pronunciamiento; al primer otrosí: en subsidio, contesta acusación fiscal solicitando decretar la absolución de su representado; al segundo otrosí contesta acusaciones particulares; al tercer otrosí medios de prueba; al cuarto otrosí: beneficios de la ley 18.216; al quinto otrosí: media prescripción.

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento, la defensa alega la excepción de cosa juzgada, amnistía y prescripción de la acción penal, solicitando se acogieran a tramitación y sobresea total y definitivamente a su representado. El Tribunal a fs. 2762 a fs. 2765 con fecha 11 de junio de 2023 rechaza las alegaciones.

B. Solicitud de absolución. Como primera alegación la defensa reitera las excepciones de previo y especial pronunciamiento como excepciones de fondo, esto es amnistía, cosa juzgada y prescripción de la acción penal. En subsidio, contesta acusación fiscal basándose en los siguientes argumentos:

I. En cuanto a los hechos. Hace un resumen en lo pertinente de los hechos del auto acusatorio. Espeta la defensa que considerar que el delito de secuestro se está cometiendo hasta el día de hoy, es una ficción legal que amerita un análisis, pues la legalidad debe adecuarse a los hechos reales y al tiempo transcurrido. Proclama que los hechos de la acusación fiscal fueron considerados en mayo de 2002, cuando su representado fue sometido a proceso. Respecto al cual fue sobreseído total y definitivamente por el Juez Militar Rolando Figueroa, confirmada por la Corte Marcial, sin perjuicio que en los mismos términos fue la causa rol 24.365 del Juzgado de Río Negro. Destaca que el Juez no debe imponer criterios personales que vulneren la Constitución. Anexa que el auto de procesamiento del 4 de abril de 2023 coincide con la descripción de los hechos de la causa rol 2182-98 “Río Negro” de la Corte de Apelaciones de Temuco.

II. Falta de prueba del delito de secuestro. Hablar de secuestro a criterio de la defensa no responde a la verdad, es cierto que está probado que fueron

detenidos el día mencionado por los encausados, sin embargo, tomando en consideración las declaraciones indicadas espeta que jamás han reconocido que los tienen secuestrados ni han dado indicio de ello. Recalca que su representado participó de la detención, dando cumplimiento a una orden legítima obligada teniendo en cuenta los tiempos que se vivían. Continúa con el artículo 10 N°10 del Código Penal, de lo cual reflexiona que la única participación del encausado fue el hecho de haber cumplido con órdenes superiores, debe tenerse en consideración el contexto histórico, a pocos días del inicio del gobierno militar, donde había nula oportunidad que un subalterno pudiera optar entre sus convicciones íntimas y el cumplimiento de una orden. Cita la opinión de la jurista Clara Szczaranski publicado en la Tercera, pagina 11 de reportajes el 05 de octubre de 2013, respecto a la obediencia forzada.

III. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Esgrime que se le reconozcan las atenuantes contempladas en el N° 1 y 6 del artículo 11 del Código Penal, artículo 211 en relación con el artículo 214 del Código de Justicia Militar, conforme a lo establecido en el artículo 68 del mismo cuerpo normativo. Blasona la defensa que no se le condene al pago de multas y costas en el evento de ser condenado. La defensa en conformidad a lo prescrito en el artículo 103 del Código Penal pide aplicar la media prescripción, debido al tiempo transcurrido.

IV. Contestación a las adhesiones a las acusaciones particulares. Dando por reproducido lo precedente. Utiliza que no tiene cabida en el caso de autos el N°8 del artículo 12 del Código Penal. En relación a la aseveración que es un delito de lesa humanidad, se refiere a la ley 20.357 y Estatuto de Roma, los cuales no tienen aplicación retroactiva. De la agravante 12°1 del Código Penal, dice que tampoco podría acogerse ya que está contemplado en el tipo penal por el cual se le acusa. Por último, del N°11 del artículo 12 del código punitivo no cabe aplicarla esta agravante porque como funcionarios de Carabineros actuando en cumplimiento de órdenes superiores debían portar sus armas de servicios.

C. Beneficios de la ley 18.216. Solicita la defensa, en caso de que sea condenado su representado se le conceda alguno de los beneficios de la mencionada ley, en especial remisión condicional de la pena y libertad vigilada.

D. Cumplimiento de la condena en el domicilio. La defensa pide se considere aplicar la Convención Interamericana sobre la protección de los

Derechos Humanos de las Personas Mayores, vigente en Chile desde octubre de 2017, el cual establece el cumplimiento de la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema.

24°) El Abogado Tomas Zamora Maluenda en representación de **José Hernán Godoy Barrientos** de fs. 2342 a fs. 2400 (Tomo VII) en lo principal de su escrito opone excepción de previo y especial pronunciamiento; al otrosí subsidio, contesta acusación.

A. Las excepciones de previo y especial pronunciamiento. La defensa opone excepción de cosa juzgada. Esta fue fallada por el Tribunal a fs. 2762 a fs. 2765 (Tomo VII), de fecha 11 de junio de 2023.

B. Solicitud de absolución.

I. Aspectos de contexto de la acusación o del instrumento acusatorio principal. La defensa hace presente que el auto acusatorio es un documento prolífico en advertencias de condena y aplicación de estatutos internacionales y en ejemplos jurisprudenciales, sin aplicación al caso concreto. Blasona que dicha acusación intenta atribuir a los anteriores sentenciadores un propósito de espurio de sustraer a los acusados de su responsabilidad penal. Esgrime que se escapa de las reglas contempladas en el artículo 424 del Código de Procedimiento Penal. Hace alusión en lo pertinente al mensaje del Código de Procedimiento Penal. Específicamente la defensa reflexiona de las presunciones judiciales y como el considerando N°12 del auto acusatorio señala expresamente que el Tribunal no aplicará el Código Procesal Penal ni Código de Procedimiento Penal chileno, infringiendo el artículo 456 bis del mismo cuerpo. Continúa con los considerandos del auto acusatorio, reiterando que asila sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Concluye que las apreciaciones teóricas que conforman la acusación que conforman a su turno, convicción particular de juez instructor en nada aportan a la ecuanimidad del ente acusador y sentenciador que considera el sistema inquisitivo del código procedimental. Cita a Enrique Bacigalupo.

II. Contestación de la acusación propiamente tal. De manera anterior a cualquier alegación, como excepción de fondo reitera la cosa juzgada. Que su representado fue acusado de tres delitos, siendo el más grave el contemplado en el artículo 141 del Código Penal, esto es secuestro calificado. Cita además artículos 148 y 150 N°1 del código precedente. A criterio de la defensa no es

detención ilegal o secuestro, o es secuestro agravado, donde él se incluye el apremio o es secuestro simple más la figura de apremio, se comete una impropiedad acusando por tres delitos incompatibles, con todo el encausado no es responsable de ninguno de los tres delitos. Soslaya la defensa que la detención fue ordenada por el Comisario de la época, a la cual fue citado su representado por vía radial, pero al llegar al lugar dichas personas ya se encontraban privadas de libertad, desconociendo cualquier otro antecedente.

C. Excepciones de fondo. Fundamenta la defensa que su representado fue absuelto por sentencia firme y ejecutoriada expedida por la Excelentísima Corte Suprema. Explica doctrina. Recalca que los hechos investigados en causa rol 2182-98 son los mismos que acá se investigan y las identidades de los aprehensores que fueron señalados por los querellantes son los mismos que actualmente, son acusados. Cita en lo pertinente sentencia de la Excelentísima Corte Suprema rol 3925-05.

D. Participación lícita y legítima de José Hernán Godoy Barrientos. Adopta que el encausado no cometió ni un acto ilícito. Efectúa un somero relato de los hechos, conforme a las declaraciones de su representado, de lo cual desprende que no participó en manera alguna de la detención. En ese contexto los únicos que podrían saber lo que ocurrió son el comisario y su patrulla de confianza, debiendo ser absuelto por falta de participación.

E. Peticiones subsidiarias, en subsidio de lo precedente:

I. Eximentes de responsabilidad penal. En subsidio de lo precedente, invoca la causal contemplada en el artículo 10 N°10 del Código Penal. Enumera los requisitos para que se configure. A juicio de la defensa concurren en la especie los requisitos. Conforme a lo expuesto, la acción típica imputada a su representado no es constitutiva de delito por carecer de antijuricidad, ya que él actuó con la conciencia clara de que estaba realizando un acto lícito, más aún al llegar al lugar las personas habían sido previamente detenidas.

II. Elementos de convicción invocados por el Tribunal. Que el auto acusatorio en lo pertinente no exhibe algo diferente a lo ya investigado y fallado en la causa rol 2182-98, respecto a su representado, inclusive existen autores confesos que las dos personas fueron víctimas del delito de homicidio, sin que su representado tenga participación ni conocimiento de ello. Pide la defensa tener en

consideración la declaración - vía informe- del ministro de fuero de ese entonces, Juan Guzmán Tapia, la cual reproduce en lo pertinente. Desarrolla que su representado supo que fueron detenidos por orden de la fiscalía militar, según su jefe directo Capitán Schernberger Valdivia, jamás estuvieron en la Comisaría Rio Negro. Consta que es probable que el supuesto patrullaje a buscar armas no haya sucedido y fue investigado por aquellos que tienen o tuvieron responsabilidad directa de las muertes. Atina que hay una impropiedad su defendido llegó después que esos hermanos fueron detenidos, por lo que tampoco pudo ver que estos fueron golpeados. Otra impropiedad del Tribunal es que no está acreditado, salvo la falsa declaración de fs. 1569 que los hermanos Barria fueron trasladados a la Comisaría de Rio Negro y que al día siguiente un grupo de Carabineros fueron de patrullaje con Guido Barria, en búsqueda de armas. Donde quedo Héctor que supuestamente estaba junto a su hermano en la Comisaría de rio Negro, por qué no lo llevaron a ese patrullaje. Utiliza que su representado no supo del procedimiento. Cita doctrina. Recalca que su defendido jamás tuvo información del destino de las personas, considerar que fue trasladado a Purranque al mes y medio de la detención, no pudo sospechar nada irregular. En efecto arguye la defensa que no puede señalarse con certidumbre que su representado haya sido el aprehensor de los hermanos de Barría Bassay. Anexa que entre acción y resultado tiene que tener una relación, sin perjuicio de que haya una fundamentación lógica y coherente.

F. Acusación del programa y adhesión del querellante particular.

Contesta la defensa, que desde la óptica dogmática, ambos querellantes se equivocan en intentar que a las penas de los delitos contenidos en la acusación, sean re- calificados, mediante sendas agravantes. Concluye que no existe el delito de secuestro calificado, nadie tiene por cincuenta años privado de libertad a dos personas. Existen motivos plausibles en el expediente, en causa rol 2182-98 y en este que es casi una repetición, suficiente merito para calificar el delito de homicidio calificado, debiendo acreditar la conducta típica y su partícipe. Suma que es incompatible la detención ilegal con el secuestro. Y en relación a los apremios ilegítimos están incorporados en el tipo penal de secuestro calificado

G. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Que en subsidio de lo precedente, alega las atenuantes, como muy calificadas,

contempladas en los N°1, 10 y 6 del artículo 11 del Código Penal, por configurarse los presupuestos requeridos para esas atenuantes.

H. Beneficios de la ley 18.216. Que la defensa solicita se le otorgue beneficios que contemple dicha ley. Y se le exima del pago de multas y costas.

Análisis de las defensas específicas.

25°) Consideraciones previas al análisis de las defensas específicas:

Que previo al análisis de las defensas específicas es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallaran:

A. Resumen ejecutivo del auto acusatorio.

B. Estado de derecho.

C. Obligación de investigar.

D. Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por tribunales alemanes.

E. Convenios de Ginebra.

26°) Resumen ejecutivo del auto acusatorio. Que para un adecuado análisis de las defensas específicas se hace necesario hacer un resumen del auto acusatorio de fs.1950 a fs. 1983 (Tomo V) en la parte pertinente de la descripción de los hechos.

a. Que en cuanto a los hechos establecidos en el auto acusatorio citado, es posible desprender lo siguiente:

b. Que en la letra A) se desprende que los hermanos Barria Bassay fueron detenidos por funcionarios de Carabineros el 16 de octubre de 1973, en el fundo los Riscos. Que la patrulla de Carabineros estaba compuesta por lo menos por 10 funcionarios, entre ellos los acusados Schernberger Valdivia, Oyarzún Arriagada, Godoy Barrientos, también se encontraban Teylorl Escobar y Soto Godoy. La aprehensión fue realizada en presencia de otros trabajadores del fundo y el padre de los hermanos Barria Bassay, Pedro Alejandrino Barria Navarro. Dichas personas observaron que los hermanos al momento de la detención fueron golpeados y obligados a desnudarse, quedando en ropa interior.

c. Que en la letra B) luego de ser aprehendidos los hermanos Barria Bassay fueron trasladados hasta dependencias de la Comisaria de Rio Negro e ingresados a calabazos diferentes. En esa unidad fueron duramente golpeados

por funcionarios. Al día siguiente, Guido Barria fue trasladado a un operativo en el sector Huelleshue, ya que según Schernberger Valdivia, se estaba en búsqueda de armamento y un extremista. En este operativo participación Schernberger Valdivia, Oyarzun Arriagada, Godoy Barrientos, Soto Godoy, Teylorl Escobar, entre otros.

d. Que en la letra C) se refiere a la búsqueda del operativo, el cual resultó infructuosa retornando a la Comisaria de Rio Negro, según dichos del carabinero Teylorl Escobar mantenidos en el tiempo, observó que Guido Barría se mantenía en la carrocería de una camioneta, tapado con sacos y maniatado de pies y manos. El Capitán Schernberger le ordenó acompañarlo en el vehículo junto a Soto Godoy, dirigiéndose al fundo la Campana. En ese lugar por instrucción del capitán aludido, Teylorl empujó a las aguas a Guido Barría.

e. Que en cuanto a la letra D) se da cuenta de las diferentes actuaciones que hizo la madre de los hermanos Barria Bassay, doña Elvecia Bassay para encontrar a sus hijos. Se pudo determinar además que en el año 1978 los hermanos Barría Bassay fueron procesados en la causa rol 1666-73, y declarados rebeldes el 08 de noviembre de 1973, por no ser habidos

f. Que en cuanto a la letra E), da cuenta que ningún funcionario de las fuerzas armadas, en especial el mando de Carabineros de la época ha entregado antecedentes respecto a lo sucedido con Guido y Héctor Barría Bassay.

27°) Estado De Derecho:

a. **Estado Autoritario:** “Un Estado autoritario, es aquel donde el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella.”

(**Roberto Ruiz Díaz Labrano:** “El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia”, p.3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc.) (...) “La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para

hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario”. (**Oscar Vilhena Vieira** (2007): “La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho”. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. **p.33**). (...) “En esa línea el concepto de **Estado de Derecho es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno”. (**Dante Jaime Haro Reyes**: “Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia”. www.juridicas.unam.mx. **p. 123**). (...) “Puede sostenerse entonces, que su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política”. (**Pablo Marshall Barberán** (2010): “El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política”. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, **pp. 185-204**).

b. Origen: “El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos.” (**Luis Villar Borda** (2007): “Estado de Derecho y Estado Social de Derecho”. Revista de Derecho del Estado N° 20, **p. 74**). (...) “En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento”. (**Haro, p. 118**).

c. Fundamento: “El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón.

Así, su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo: en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder”. (**Marshall, pp. 187-188**).

d. Concepto: “El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre.” (**Haro, p. 124**). (...) “Del mismo modo, como expresa **Guastini** en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (**Haro, p.123**). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos”. (**Haro, p. 126**).

e. Elementos: **Marshall** siguiendo **Böckenförde**, expresa que las características originales del Estado de Derecho son las siguientes: “**a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de

funciones” (**Marshall, p.191**). En esa línea **Benda** considera que el Estado de Derecho involucra: “**a**) seguridad jurídica y justicia; **b**) que la Constitución sea la norma suprema; **c**) la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d**) vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e**) división de poderes; **f**) protección de los derechos fundamentales; **g**) tutela judicial; **h**) protección de la confianza jurídica.” (**Marshall, p.191**). Sobre lo anterior **Villar Borda (pp. 74-81)** realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá **Böckenförde**. En realidad, en Estado de Derecho hay una acumulación de ideas de muchas fuentes y distintas épocas, así: “**a**) sometimiento del poder al derecho; **b**) el gobierno de la razón; **c**) El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d**) La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional”.

f. Chile y el Estado de Derecho: Que Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** “La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y**

protección de la confianza y Principio de proporcionalidad. Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática”. (**Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle** (2006): “La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano”. Ediciones LOM. **pp. 114- 130**). Además de la lectura de la **Constitución de 1925** esta consagra, además, el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo. Así es verificable en sus **artículos 1 al 4** que consagra el gobierno republicano y democrático **(1)** la soberanía reside en la nación **(2)**. Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por las leyes **(4)**. Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Que por su lado la **Constitución de 1980** (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su **artículo 4** que Chile es una República democrática. En su **artículo 5** que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall (pp.199-202)** expresa que (...) “los **artículos 5 a 7 de la Carta Fundamental** se desprenden algunos **principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política**: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. **(i)** El enunciado del **artículo 5 inciso 2º** como consagración del principio de distribución. La afirmación de que el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (**art. 6 inc. 1º**), legalidad en sentido amplio (**arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º**), garantía del orden institucional (**art. 6 inc. 1º**), fuerza normativa de la Constitución (**art. 6 inc. 2º**); responsabilidad (**art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º**), distribución de competencias- separación de poderes- (**art. 7 inc. 1º y 2º**), legalidad en sentido estricto (**art. 7º inc. 1º**). Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de

Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar.” (**Marshall, pp. 191-192**). (...) “En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera uno de los pilares principales de un régimen democrático. Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso”. (**Vilhena, p.30**). Luego se dan todos los elementos del **Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad** para formularle al acusado el reproche penal que se ha señalado. Ello sin perjuicio del análisis de las defensas.

Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad, hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el **11 de septiembre de 1973**, tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un **quiebre constitucional** significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. **Los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado** (como indica el mérito del proceso) de Héctor Alejandro Barria Bassay y Guido Ricardo Barria Bassay, fueron al margen de todo derecho. En consecuencia, tanto el mando superior como los subordinados respectivos se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarles un **reproche penal** como se ha hecho en esta sentencia. Ello sin perjuicio del estudio de las defensas.

28°) Obligación de investigar. Que cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

a. “Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en

Derechos Humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al **artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución** que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales.” (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

b. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

c. “Que esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no

del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana”. (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

d. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**-ya citada- en especial los **artículos 1.1 y 2**. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

e. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna opinión consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los Derechos Humanos (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

f. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

1. Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...) “el Estado está, por

otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención". Por su lado en el **177** acota que (...) "la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado".

2. Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo 225, añade que del (...) "artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos".

3. Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo 41 asevera que (...) "esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos

inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

4. Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su **párrafo 42** anexa que (...) “La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria” (...).

5. Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) “el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado”.

6. Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el **párrafo 115** explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos”.

7. Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expresa que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso”.

8. Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. Párrafo 159 acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación

efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana”.

9. Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención”.

10. Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) “está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar exoficio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva”.

11. Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus **párrafos 137, 233 y 299.** Afirma en el **137** (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso”. **233** (...) “Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados parte en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales

y protección judiciales”; **299** (...)“Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán”.

12. Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo 143 afianza que (...) “en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.

13. Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117** (...) “además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso

deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios”. **129** (...) “una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables”. **130** (...) “por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido”.

14. Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111** (...) “Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”. Párrafo **114** (...) “Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía”.

15. Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo 387. (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares”.

16. Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155** (...) La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irracionalidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”. **156** (...) “El eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta obligación de debida diligencia adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos”. **171** (...) “Este Tribunal considera que, para cumplir con la

obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.”

17. Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo 106 indica que (...) “Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio”.

18. Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo 131 manifiesta que (...) “El Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”.

19. Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) “Que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer

la verdad de los hechos”. **112** (...) “La obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional”. **115** (...) “Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas”.

20. Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo 142 narra que (...) “La obligación de investigar violaciones de Derechos Humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos”.

21. Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo 77 acota que (...) “en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades

encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes”.

22. Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo 283 añade “que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación *ex officio*, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso.

El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

23. Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su **párrafo** 298 apunta que (...) “La obligación general de garantizar los Derechos Humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condiciona condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado”.

24. Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. **Párrafo 135** apoya que (...) “este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con

la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación, así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación”.

25. Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) “en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación”.

26. Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) “la Corte considera

pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales”.

27. Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011.

Párrafo 194 asevera que (...) “la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”.

28. Sentencia caso Núñez Naranjo y otros versus Ecuador del 23 de mayo de 2023. Párrafo 81 asevera que, (...) “de forma reiterada en su jurisprudencia, la Corte ha establecido que la desaparición forzada es una violación compleja y múltiple, que pone a la víctima en un estado de completa indefensión y atenta contra diversos bienes jurídicos protegidos por la Convención Americana. En particular, esta conducta genera la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal, consagrados en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención, respectivamente Asimismo, la Corte ha señalado que, si un Estado práctica, tolera o permite un acto de desaparición forzada, incumple las obligaciones previstas en el artículo I a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que prohíbe tales conductas”. Continúa, el párrafo 83 musita que, asimismo, (...) “la Corte ha afirmado que la desaparición forzada es “un acto continuado o permanente, que permanece mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos, y mientras no se determine con certeza la identidad de los mismos”. Este acto se configura cuando se presentan en forma concurrente los siguientes elementos: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o de personas que actúen con autorización, apoyo o aquiescencia de estos; y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada”. Que el párrafo 106 asienta que, “Los Estados tienen el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar

seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, en su caso de imponerles las sanciones pertinentes, y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. En particular, cuando se trata de la investigación de violaciones en perjuicio de personas que se encontraban bajo custodia del Estado, las autoridades correspondientes tienen el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva, es decir, con la debida diligencia, sustanciada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad. Tales características del deber de investigar son aplicables, con mayor razón, en casos de posible desaparición forzada de una persona. Por último, el párrafo 107 refiere, (...)” frente a esta violación en particular, además del deber de investigar y sancionar a los responsables, la Corte ha subrayado la existencia de una obligación autónoma de buscar y localizar a las personas desaparecidas, derivada de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, del artículo X de la CIDFP y de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas. Este deber también ha sido desarrollado por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y por los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Estos últimos indican que las autoridades encargadas deben iniciar la búsqueda de oficio, incluso si no se ha presentado una denuncia o una solicitud formal y agregan que “[l]a búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente”, toda vez que “[e]l proceso de búsqueda integral de las personas desaparecidas debe iniciarse y llevarse a cabo con la misma efectividad que la investigación criminal.”

g. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la obligación de investigar en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los Derechos Humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en Eduardo Ferrer Mac-Gregor. (“Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos aplicable a la justicia penal”. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). El autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

1. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.

2. Que si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.

3. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.

4. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.

5. La Corte IDH ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

6. Para cumplir la **obligación de investigar** y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

7. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

8. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte IDH ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.

9. Esta obligación de debida diligencia adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.

10. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

11. La Corte IDH reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos

recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación

12. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

13. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

14. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación efectiva de Ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

h. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. **Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia.** En una primera lectura del resumen de las defensas que se ha hecho, estas no aluden de fondo a estos estándares.

29°) Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por los Tribunales Alemanes.

a. Que a manera contextual y de ilustración a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad, se harán los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisarías, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos, casas, subterráneos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) y **Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad, respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación, se realiza una síntesis de las reflexiones en lo pertinente de los artículos de **Gerhard Werle** y **Boris Burghardt** (Universidad Humboldt- Berlín, sobre el caso Demjanjuk); y de **Claus Roxin** sobre el caso Oskar Gröning. Estos casos además han sido llevados a formato audiovisual en diferentes documentales, tales como: “El nazi Iván el terrible” Netflix y “El contador de Auschwitz” de la plataforma Prime Video.

b. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el **caso Demjanjuk** en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). (**Gerhard Werle y Boris Burghardt** (Universidad Humboldt- Berlín. “Revista Penal México”. N°9

septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193). Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como cómplice de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el

tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzosos, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

c. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos– tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y –siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos– en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo

propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

d. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Go-merski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo –alemanes, ucranianos y judíos– tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado –la muerte de los judíos–, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht, incluso para Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que “todas las personas que trabajaban en el campo de

Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo”. De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

e. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, (...) todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que (...)se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado (...) ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas. La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones

contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

f. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo. La declaración principal podía resumirse diciendo que allí no había actividades neutrales. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

g. Que el segundo artículo versa sobre la sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz. Sentencia del BGH y comentario de Claus Roxin ("Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano". CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado Oskar Gröning en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

h. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en calidad de cómplice de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94 años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que, en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-WirtschaftsVerwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el

impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

i. Que el profesor Roxin expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del artículo 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

j. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que el acusado (Gröning) tuvo participación en esta facilitación de los hechos. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

k. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

l. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja

definitivamente en claro que los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

m. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20 de febrero de 1969**, a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió...”. En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

n. Que precisa Roxin que, no existen causales de exculpación. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]”. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedido por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría

merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

ñ. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

1. Que al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho. Se había quebrado el orden institucional pues los Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.

2. Es decir, se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abundan. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789; Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos N°2 y N°16 de la citada declaración del Hombre y del Ciudadano. “Artículo 2: La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. “Artículo 16: Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

3. Que en este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el Congreso; el Poder Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los Derechos Fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia, el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor. En segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las personas se debía tener una necesaria proporcionalidad y mayor

fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho. Lo anterior según publicación del sitio web <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bg&Art=en&Datum=2024&nr=138703&linked=pm&Blank=1> .

4. En este caso las personas de Héctor Alejandro y Guido Ricardo Barría Bassay, estaban en una alta indefensión, como puede observarse en las causas citadas por este Ministro, en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias antes detallada. Ello sin perjuicio del análisis de las defensas, como a continuación se hará.

30°) Convenios de Ginebra. Que a mayor abundamiento, cabe hacer presente que sobre los Convenios de Ginebra, la jurisprudencia ha sido uniforme. Así en causa rol 2182-98 del ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, caso Luis Almonacid Dúmenez de fecha 29 de octubre de 2013, en su considerando dieciocho, párrafo 6, señala que: (...) “los Convenios de Ginebra consagran el deber del Estado de persecución de los crímenes de guerra, sin poder “auto exonerarse” a su respecto. Tales convenios entraron en vigor en nuestro ordenamiento en las fechas en que fueron publicados en el Diario Oficial, esto es, entre los días 17 y 20 de abril de 1951. Los aludidos Convenios rigen también respecto de delitos cometidos en caso de conflictos armados sin carácter internacional, situación que, jurídicamente, existió en Chile a partir del 11 de septiembre 1973, como se ha afirmado por la doctrina; pero que también, aun cuando se estimare que dicha situación es una ficción, los aludidos convenios son aplicables en virtud de lo dispuesto en el artículo 3° común a todos ellos y ya citado, donde se plasma el principio de humanidad, así como por los principios que emanan de los Convenios de Ginebra son vinculantes por ser parte del derecho internacional consuetudinario, que pertenece a la categoría del *Ius Cogens*”. En efecto, el artículo 3°, común a los cuatro Convenios, prescribe: “en caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá la obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes: 1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquiera otra

causa serán en toda circunstancia tratadas con humanidad. Al efecto, están y quedan prohibidas en cualquier tiempo y lugar, respecto de las personas arriba mencionadas: a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, las torturas y suplicios". En consecuencia, las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad confirman el principio esencial en cuanto a que la imputabilidad, el juzgamiento y la condena por tales delitos son procedentes, cualquiera que sea la época en que se hubieren cometido". Se corrobora esta aseveración, por otra parte, en la sentencia de la Excma. Corte Suprema (Rol N°2664-04), en cuanto expresa en su considerando décimo séptimo: (...) "Que debe tenerse presente también la llamada Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de Guerra y de los crímenes de Lesa Humanidad de 1968 que surge en la actualidad con categoría de norma de los Cogens o Principios Generales de Derecho Internacional".

31°) Que haciéndonos cargo de la defensa de fs. 2404 a fs. 2479 (Tomo VII) del abogado Maximiliano Murath Mansilla, en representación del acusado **Luis Alberto Oyarzún Arriagada**. El Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de la declaración indagatoria del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba general y específica, en especial a lo que antes se detalló, y además lo ponderado con precisión en el título de consideraciones generales para las defensas. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. La defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento, a saber excepción de amnistía y prescripción de la acción penal, las que fueron falladas a fs. 2762 a fs. 2766 (Tomo VIII). Analizado la presentación en su totalidad y petición concreta la defensa reiteró las excepciones de prescripción y amnistía, como de fondo. Que sin perjuicio de lo anterior, el abogado Maximiliano Murath Mansilla, en el cuerpo de su escrito, insistió sobre la excepción de cosa juzgada.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos. La defensa no realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ni objetó ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo. Que la defensa alega como excepción de fondo la prescripción de la acción penal, amnistía y cosa juzgada. El tribunal haciéndose cargo reflexiona en el siguiente sentido:

a. Que en cuanto a la excepción de **prescripción de la acción penal**, el Tribunal reitera que del mérito de proceso el delito que se le imputa al acusado Oyarzún Arriagada, atentan contra los derechos humanos, entendiéndose por estos, aquellos que son inherentes a la persona humana y son anteriores al Estado. Este Tribunal ha establecido que corresponden a delitos de lesa humanidad y tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos sostiene en el párrafo 114) que: “La Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otra normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder prescripción de la acción penal”. No existiendo en conformidad a lo que dispone la propia defensa en su presentación, ningún otro elemento de prueba que ponderar respecto a esta excepción. En consecuencia, esta excepción de prescripción de la acción penal **se rechaza** y así se dirá en lo resolutivo del fallo.

b. Amnistía. Que el Tribunal reitera los fundamentos dados en resolución de fs. 2762 y siguientes (Tomo VIII), en cuanto ésta fue rechazada porque éste Tribunal ha establecido que corresponden a delitos de lesa humanidad y éste Ministro en todos sus fallos tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos, párrafo 114, sostiene que: “La Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía. En la misma línea la Corte Interamericana citada lo manifestó en la caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001, que en su párrafo 41 dispuso: —esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, y el

establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” **En consecuencia, esta excepción amnistía del artículo 433 N°6 del Código de Procedimiento Penal se rechaza y así se dirá en lo resolutive de este fallo.**

c. Cosa juzgada. Que sobre esta materia, el Tribunal no ha encontrado nuevos antecedentes. Por tanto, estará a lo razonado al resolver las excepciones de cosa juzgada alegadas por las defensas de José Godoy Barrientos y Schernberger Valdivia y estará a lo razonado a fs. 2762 y siguientes (Tomo VIII), de la causa de autos. Es dable puntualizar a la defensa lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 12 de marzo de 2024 conociendo el caso “Vega González y otros versus Chile”, en lo pertinente en su párrafo 253 sostiene que: “La Corte recuerda que la persecución de conductas ilícitas debe ser consecuente con el deber de garantía al que atiende, por lo cual es necesario que los Estados eviten medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. Por tanto, la regla de proporcionalidad exige que los Estados impongan penas que contribuyan a prevenir la impunidad, tomando en cuenta varios factores como las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado.” Así lo fundamental en esta materia es que a diferencia de lo que expone la defensa, es que acá permanentemente se ha intentado sustraer al acusado de la responsabilidad penal y además la posibilidad de los familiares de tener un debido proceso con todas las garantías, atendido que para la época de la dictadura militar, fueron no atendidas y si bien hubo un procedimiento obviamente no estaba la intención real de someterlo a la justicia. A diferencia de lo que expone la defensa, si se dan los elementos para estimar que en este caso hay cosa juzgada fraudulenta.

c.1 Que continuando con el razonamiento anterior y a mayor ahondamiento, es importante aquilatar que la Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH), ha manifestado en el fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 154, que “en lo que toca al

principio ne bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”. Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem. En el mismo sentido, respecto al ne bis in idem la Excm. Corte Suprema se ha pronunciado en rol 78951-2016 por el delito de homicidio de Enrique González Cerda, en sus considerandos séptimo a noveno. **En consecuencia, esta excepción de cosa juzgada se rechaza y así se dirá en lo resolutive del fallo.**

D. Contestación de la acusación fiscal, particulares y adhesión a la acusación fiscal. El tribunal estará a lo razonado precedentemente, puntualizando lo siguiente:

a. Que del escrito de la defensa de Luis Oyarzún Arriagada se desprenden a través de su desarrollo, como se expondrá en todos sus títulos, una reiteración respecto que el auto acusatorio fue mal construido, que no hay prueba suficiente para acusar a Oyarzún Arriagada y que varios funcionarios de Carabineros y trabajadores del fundo Los Riscos no divisaron en su momento a Oyarzún Arriagada.

b. Que sobre lo anterior, cabe afirmar que respecto que no hay ninguna prueba en el proceso que involucre a Oyarzún Arriagada basta solo afirmar (por ahora) ya que se desarrollará con posterioridad, que en esta causa se dictó auto

de procesamiento a fs. 1707 y siguientes (Tomo V). De dicha resolución la defensa no apeló, más aún si estimaba que no existía ningún elemento probatorio para acusar a su representado podría haber solicitado la revocación del auto de procesamiento. Pero sucede que desde el auto de procesamiento hasta el cierre del sumario no hubo por parte de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, ninguna revocación del auto de procesamiento respecto de Oyarzún Arriagada.

c. Que en relación a la objeción del auto acusatorio el tribunal estará al resumen ejecutivo de este. De una simple lectura aparece claro la descripción de los hechos y las imputaciones penales y su responsabilidad que se hace al acusado. Esto es indesmentible para cualquier litigante. Asimismo las diferentes observaciones que hace de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cita el auto acusatorio son simplemente eso, observaciones. Toda vez que en estricto rigor jurídico, atendido el fallo Almonacid Arrellano y otros versus Chile, del 26 de septiembre de 2006, los Tribunales de Justicia deben estar a esa jurisprudencia. Esto es lo que hace el auto de procesamiento, acusación fiscal y la ponderación de toda la prueba en este fallo. Esto es bien esencial, porque si no existiera el fallo citado y como se relata en los elementos probatorios, esta causa continuaría sobreseída por aplicación de la prescripción. En consecuencia no se entiende los reproches de la defensa a las citas que se hacen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Toda vez que los tribunales de Chile deben someterse a la Constitución Política de la República, en virtud del artículo 6 de la carta magna y artículo 5 inciso 2°, que es lo que ha realizado este Tribunal.

d. Que en cuanto a que una serie de compañeros de trabajo de Oyarzún Arriagada y lo mismo trabajadores del fundo Los Riscos, no lo identificaron. Esa afirmación de carácter general resulta errónea, (como se acreditará en los razonamientos posteriores). En efecto se debe con la mayor precisión verificar que es lo que dice cada testigo en el sentido que si niega o no los hechos, si sabía o no algo de los hermanos Barría Bassay, si concurrió efectivamente a la detención de los hermanos Barría Bassay el día de los hechos. En el caso de los trabajadores del Fundo Los Riscos, no tienen por qué identificarlos y porque saber el nombre de los carabineros (a lo imposible nadie está obligado).

e. Que ahora bien a diferencia de lo que expone la defensa se deben tener en consideración los razonamientos que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de causas investigadas. En cuanto a los tribunales, deben investigar la dinámica, prácticas y en ese sentido, como además se detalló y ponderó en los elementos probatorios a inicio de esta investigación, muchas personas involucradas negaron de inicio todos los hechos, en el caso de los Carabineros de menor rango, también algunos no quisieron aportar antecedentes, pero esto se produce por el temor reverencial hacia los superiores. En todo caso como ha quedado demostrado de los múltiples fallos que han dictado los Ministros en Visita Extraordinaria, confirmados por la Excma. Corte Suprema, durante muchas décadas se negó que hubieran sucedido los hechos, pactos de silencio y con el correr de los años, poco a poco se pudo ir dilucidando la verdad sobre los hechos ocurridos. Por ello estamos hoy 2024 y no en el año 1975 fallando esta causa.

f. Que respecto a la falta de participación de su representado. Si bien el padre de los hermanos Barria Bassay en sus declaraciones no menciona a Oyarzún Arriagada, de inicio no puede exigírsele a ese testigo que identifique a toda la patrulla de Carabineros que participó en la detención de sus hijos. Sin embargo, se hace presente a la defensa que el propio Raúl Estatiro Guzmán Del Río, en lo pertinente de sus dichos de fs. 1.548 a fs. 1.549 (Tomo IV): “El 16 de octubre en horas de la tarde fue a su casa el carabinero Alberto Oyarzún a pedirle la camioneta, que le entregó como había hecho las veces anteriores, sin que le dijeran para qué la iban a ocupar y él tampoco preguntó ya que no se podía hacer. Ese día había carabineros de Rio Negro en el retén de Riachuelo, porque rato antes había visto llegar a un furgón y más tarde supo que llegaron en un jeep de carabineros. A eso de las 22:00 horas, el carabinero Oyarzún le fue a entregar la camioneta, quedando estacionada en su casa, dio las gracias y se fue al retén. En ese momento estaba en el garaje de su casa la señora Helvecia Bassay, quien le pidió permiso para estar ahí, por cuanto quería saber que pasaba con sus hijos, porque Carabineros los había detenido y ella había visto a uno de ellos cuando lo bajaron del jeep y lo ingresaron al retén”. Continuando, “En todo caso tiene que haber andado el carabinero Alberto Oyarzún, ya que él manejaba su camioneta cada vez que la ocupaban.” Declaraciones concordantes con lo expuesto por

Salvador Heriberto Caro Pino de fs. 747 a fs. 747 bis (Tomo II), que en lo pertinente esgrime: “Haber sido golpeado por Oyarzún, Pailalef, su cuñado, Soto. Los golpes fueron patadas, churrazos por las orejas, como fue en ese tiempo. A su pregunta, conocía a los señores Guzmán. Tienen fundos allá. Otros han vendido. A su pregunta, él no vio a los Guzmán. Pero sus vehículos sí. Quien la conducía era Alberto Oyarzún. Era una Chevrolet de 2500 kilos. Él vio la de Raúl Guzmán, porque en esa lo detuvieron.” Es dable destacar a la defensa los dichos de Luis Eliser Barría Bassay que en lo pertinente de sus dichos de fs. 262 a fs. 263 (Tomo I) y de fs. 267 a fs. 272 (Tomo I) depuso: “Éstos dos hermanos Guzmán son muy amigos del Carabinero Alberto Oyarzún A., y éste a su vez tenía muy buena relación con el Teniente de Carabineros Hernán Godoy Barrientos, perteneciente a la 2° Comisaría de Río Negro. Esta buena relación era debido a que una de las hermanas de Oyarzún tenía algunas relaciones amorosas con Godoy Barrientos.”

g. Que ahora bien, como se ponderó en el análisis de la declaración indagatoria, respecto a lo que señala la defensa que el capitán Schernberger como Godoy Barrientos, Quintiliano Rogel, Rómulo Catalán no vieron a Luis Oyarzún Arriagada. Cabe hacer presente que en el caso de Godoy, este niega haber participado en la detención propiamente tal, lo mismo Quintiliano Rogel y Rómulo Catalán, es decir son testigos que desconocen los hechos. Similar al caso del capitán Schernberger quién en un principio desconoció los hechos, pero después reconoció haber participado. No obstante, en ningún momento este testigo ni los demás realizan una afirmación categórica, tal como: “no es efectivo que en la detención de los hermanos Barria Bassay ni en el operativo al sector de Huelleshue no hubiese participado Luis Oyarzún Arriagada”, eso no se evidencia en el mérito del proceso ni en la prueba material ponderada.

h. Que la defensa no presentó ninguna tacha respecto al testigo Pedro Soto Godoy, pudiendo haberlo hecho. En cuanto a su problema de alcohol, no existe ningún informe específico de que esta persona por el problema del alcohol tuviera problemas de memoria y menos para la época de los hechos. De todas las declaraciones de Pedro Soto, en especial las primeras declaraciones de fs. 1109 (Tomo III) con copia a fs. 1594 (Tomo IV), fs. 1142 (Tomo III) copia a fs. 1593 (Tomo IV), fs. 1156 (tomo III), fs. 1449 (Tomo IV), fs. 1559 a fs. 1560 (Tomo IV), fs. 1566 a fs. 1568 (Tomo IV), fs. 1584 a fs. 1585 (Tomo IV), fs. 1622 (Tomo IV),

nunca tuvo duda en la participación de los hechos de Oyarzún Arriagada. De la misma forma, analizada todas sus declaraciones, solo indica que no recuerda la participación de Oyarzún Arriagada en el operativo a Huelletlhue, pero en ninguna de ellas ha modificado sus dichos anteriores.

i. Que en cuanto a los dichos de los trabajadores del fundo de que no pueden ubicar a Oyarzún Arriagada. Se le da el mismo razonamiento anterior, no se le puede pedir a las personas que determinen con nombre y apellido a una patrulla de carabineros, si no han tenido la oportunidad de conocerlo previamente, a lo más identifican a un funcionario de Carabineros. En todo caso respecto de Soto Godoy, se recuerda a la defensa que hay varios testigos que lo identifican, lo cual ratifica que participó de la detención, inclusive el padre de los hermanos Barria Bassay, Pedro Alejandrino Barría Navarro de fs. 1477 (Tomo IV), en lo pertinente narra: “Dentro del grupo de Carabineros, vio como Pedro Soto botó al suelo a su hijo Guido Ricardo lo hizo desnudar y le pegó”, esto lo reitera en diligencia de careo con Soto Godoy de fs. 1484 a fs. 1485 (Tomo IV). En tanto Inés Del Carmen Barría Bassay depuso que: “Siendo golpeados en diferentes partes del cuerpo con las culatas de los fusiles que portaban, especialmente por dos funcionarios, Pedro Soto y Alberto Oyarzún. Posteriormente fueron subidos a la camioneta a punta de golpes y con las manos atadas a la espalda con alambres de púas, retirándose del lugar con rumbo desconocido.”. Sin perjuicio de los dichos de Juan Carlos Soto Ampuero de fs. 636 a 637 (Tomo II), el cual espeta que: “Para el mes de septiembre de 1973 se encontraba trabajando y viviendo en el Fundo “El Parque”, de propiedad de Julio Escobar Bieler. Un tiempo después del Golpe de Estado se encontraba trabajando en el aserradero del fundo, junto a Angulo y Chodin, entre otros. Eran alrededor de 10 personas, pero no recuerda sus nombres. Al medio día llegó una patrulla de Carabineros, entre los que reconoció a Alfonso Vargas y Pedro Soto, quienes eran del Retén de Crucero y Río Negro, respectivamente. Le preguntaron si conocía a los hermanos Barría Bassay, a lo cual dijo que vivían en una “monjita”, que era una especie de casa rodante, que les habían facilitado. Al decir esto lo golpearon con la culata del fusil. Luego de esto les ordenaron tirarse al piso, con las manos en la nuca.”

En consecuencia, los dichos de Pedro Soto tienen coherencia, por cuanto él estuvo en la detención y pudo observar quienes participaron.

j. Que los hermanos Barria Bassay con posterioridad a la detención fueron conducidos a la Comisaria de Rio Negro, donde además fueron golpeados y desnudados. Entonces no es efectivo, como dice la defensa, que no exista ningún testigo válido. En especial porque no hizo objeción de tacha de testigo y por el propio artículo 464 del Código de Procedimiento Penal que consigna: “Los jueces apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de testigos que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 459. Tales declaraciones pueden constituir presunciones judiciales. Igualmente las de testigos de oídas, sea que declaren haber oído al procesado, o a otra persona.”

k. Que para finalizar sobre este punto, están los dichos del carabinero Robert Teylorl quien menciona a los que participaron en los hechos. En sus declaraciones, entre ellas la de fecha 10 de octubre de 2018 rolante de fs. 919 a fs. 922 (Tomo III), soflama en lo pertinente que: “En la detención participaron el Mayor Hans Schernberger, el Teniente José Godoy, el Suboficial Catalán, que era el chofer, el Suboficial Alvarado, el Cabo Pedro Soto y los Carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún.” Testigo tampoco objetado por la defensa.

I. Que en relación a los diferentes medios de prueba legal. Se le hace presente a la defensa que el Código de Procedimiento Penal, establece los medios de prueba en el artículo 457, el cual refiere que: “Los medios por los cuales se acreditan los hechos en un juicio criminal, son: 1° Los testigos; 2° El informe de peritos; 3° La inspección personal del juez; 4° Los instrumentos públicos o privados; 5° La confesión; y 6° Las presunciones o indicios. Sobre cada uno de estos medios de prueba rigen las disposiciones dictadas a su respecto en la parte primera de este libro y en los párrafos siguientes”. Y dentro del estatuto de las nomas probatorias y apreciación no existe ninguna regla que indique cuales son los medios específicos y su quantum para probar un hecho; lo que indica el Código de Procedimiento Penal, es que el juez debe probar los hechos según los medios probatorios establecidos en el citado artículo y con eso llegar a la convicción. Todos los razonamientos que hace la defensa van en sentido contrario a lo que dice el código, esto es como si existieran para probar un hecho determinados medios o un numero de medios específicos. Nada de esto dice el Código de Procedimiento Penal. Del mismo modo, cabe hacer presente a la defensa que confunde los estándares probatorios, toda vez que el Código que rige este proceso es el Código

de Procedimiento Penal y en su artículo 456 bis establece que: “Nadie puede ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgue haya adquirido, por los medios de prueba legal, la convicción de que realmente se ha cometido un hecho punible y que en él ha correspondido al procesado una participación culpable y penada por la ley.” En cambio, el Código Procesal Penal actual, en el artículo 340 establece que: “Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley”. Lo que hace el Tribunal en este fallo es ceñirse al artículo 456 bis del Código aludido.

m. Que en cuanto a las presunciones judiciales. Que en cuanto al artículo 488 del Código Procedimiento Penal, y sin perjuicio de reiterar este Tribunal que se cumplen sus requisitos y a modo de ejemplo se tiene presente lo señalado por la Excelentísima Corte Suprema en su considerando 14: “Que, los hechos reseñados precedentemente, desprendidos de las piezas procesales que en cada caso se ha indicado, son reales, desde que ocurrieron en determinado lugar y tiempo y están probados, esto es, acreditados legalmente en los autos a través de los medios probatorios detallados en el motivo precedente. Son hechos reales y probados, ha explicado esta Corte Suprema, “Los indicios de cualquier género, el dicho de un testigo hábil o de varios inhábiles, la opinión de un perito singular, la declaración extrajudicial y otras semejantes, siempre que ellas formen parte del mérito de autos” (SCS, 14.12.1967, R., t. 65. Secc. 4ª, p. 71). En cuanto a que son múltiples esos hechos, tal requisito está al margen del cuestionamiento dado su pluralidad respecto de cada uno de los encartados”. (Rol N° 65.358-2021 de fecha 09 de julio de 2024).

n. Que en cuanto a la falta de participación en los apremios ilegítimos y en el segundo hecho de la imputación. Respecto a este punto desarrollado por la defensa el Tribunal estará a lo aquilatado de los medios de prueba ponderados anteriormente. En efecto se le recuerda a la defensa que respecto a la participación de Luis Oyarzún Arriagada, están los dichos de Raúl Estatiro Guzmán Del Río en lo pertinente de sus dichos de fs. 1.548 a fs. 1.549 (Tomo IV): “El 16 de octubre en horas de la tarde fue a su casa el carabinero Alberto Oyarzún

a pedirle la camioneta, que le entregó como había hecho las veces anteriores, sin que le dijeran para qué la iban a ocupar y él tampoco preguntó ya que no se podía hacer. Ese día había carabineros de Rio Negro en el retén de Riachuelo, porque rato antes había visto llegar a un furgón y más tarde supo que llegaron en un jeep de carabineros. A eso de las 22:00 horas, el carabinero Oyarzún le fue a entregar la camioneta, quedando estacionada en su casa, dio las gracias y se fue al retén. En ese momento estaba en el garaje de su casa la señora Helvecia Bassay, quien le pidió permiso para estar ahí, por cuanto quería saber que pasaba con sus hijos, porque Carabineros los había detenido y ella había visto a uno de ellos cuando lo bajaron del jeep y lo ingresaron al retén". Continuando, "En todo caso tiene que haber andado el carabinero Alberto Oyarzún, ya que él manejaba su camioneta cada vez que la ocupaban." Concordante con los dichos de Luis Eliser Barría Bassay que en lo pertinente de sus dichos de fs. 262 a fs. 263 (Tomo I) y de fs. 267 a fs. 272 (Tomo I) depuso: "Estos dos hermanos Guzmán son muy amigos del Carabinero Alberto Oyarzun A., y éste a su vez tenía muy buena relación con el Teniente de Carabineros Hernán Godoy Barrientos, perteneciente a la 2° Comisaría de Rio Negro. Esta buena relación era debido a que una de las hermanas de Oyarzún tenía algunas relaciones amorosas con Godoy Barrientos."

ñ. Que respecto al testigo Raúl Estatiro Guzmán Del Río, se le indica a la defensa que si bien depuso en junio de 1979 rolante de fs. 1457 (Tomo IV) y en marzo de 1980 de fs. 1493 (Tomo IV), que funcionarios utilizaron la camioneta en septiembre de 1973 y que era conducida por Alberto Oyarzún, no es menos cierto que en septiembre de 2018 de fs. 976 (Tomo III), afirma que les habrían regresado la camioneta a fines de octubre de 1973. Luego, a fs. 1548 (Tomo IV) narra el testigo el detalle de lo acontecido el 16 de octubre de 1973, esto es, cuando Oyarzún Arriagada le solicitó la camioneta regresándola en la noche el encausado.

o. Que del mismo modo, el testigo como ya se indicó Pedro Soto, según el escrito de la defensa no fue objeto de tachas y en este punto hay que hacer presente que en el momento que se le toma declaración a Pedro Soto, el acusado José Hernán Godoy Barrientos había alcanzado el grado de General, por ello Soto en sus primeras declaraciones, por la jerarquización de mando y el temor reverencial frente a un General no depuso en los mismos términos. Pero sí ya con más tranquilidad va a declarar lo que realmente él vio, que se ciñe al mérito del

proceso. De la misma forma el carabinero Rober Teylorl en sus declaraciones que se han mantenido en el tiempo, otro testigo no tachado, identifica a su representado en el día de la detención y en el posterior operativo a Huelleshue.

p. Que se suma a lo anterior que los detenidos fueron trasladados a la Comisaria de Río Negro, y desde ahí Guido Barría es llevado hacia el operativo, en el cual Oyarzún también participó, lo que es ratificado por Robert Teylorl y Pedro Soto, quienes también participaron de ello. A mayor ahondamiento, es preciso destacar que en el fundo los Riscos, los hermanos Barría ya habían sido objeto de apremios ilegítimos, según lo dicho, inclusive por Guido Barria Bassay en una conversación con Oyarzún Arriagada al interior de la Comisaria. Así las cosas, no resulta material ni jurídicamente posible que el encartado Oyarzún se distancie de los hechos, ya sea los apremios, humillación y denigración de colocar desnudos a los hermanos Barría Bassay, la detención ilegítima desde el Fundo Los Riscos y que continua en la Comisaria y de los apremios que fue objeto en dicho lugar y ulterior secuestro.

q. Que luego el encausado confirma lo anterior, al ir al operativo de Huelleshue, es decir todo el procedimiento contra los hermanos Barria Bassay estaba al margen del derecho y como los otros acusados, Luis Oyarzún Arriagada participa en esos hechos desde el inicio, y los va confirmando y ratificando en el tiempo, sin que exista algún elemento para que el Tribunal que lo exima de su responsabilidad.

r. Que de acuerdo al mérito del proceso también debieron ser procesados y acusados Robert Teylorl Escobar y Pedro Soto Godoy, pero sucede que según consta en los certificados de defunción, rolantes de fs. 1686 y fs. 1688 (Tomo IV), respectivamente, estos fallecieron previo al auto de procesamiento de la causa de autos. En definitiva la defensa insiste en los mismos argumentos, esto es, que no vieron a su representado en la detención ni los apremios. Las declaraciones que cita la defensa por ejemplo de Quintiliano Rogel y José Rómulo Catalán son personas que desconocen los hechos y que no tuvieron conocimiento de lo acontecido con los hermanos Barria Bassay. Lo mismo en el caso de José Godoy Barrientos, quien insiste, en largas declaraciones que no vio ni tuvo conocimiento de los hechos. En todo caso, a modo de referencia el Ministro sr. Alejandro Solís, en causa rol 2182-98 "Episodio Río Negro" de 03 de mayo de 2004, rolante a fs. 45 y siguientes (Tomo I), en el fallo de primera instancia condenó

a Hans Eduart Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos, Robert Santiago Teylorl Escobar, Quintiliano Rogel Alvarado, Pedro Segundo Soto Godoy y José Rómulo Catalán Oyarzún en su calidad de autores de los delitos de secuestro calificado cometidos en las personas de Héctor Alejandro Barría Basay y de Guido Barria Basay, a contar del 16 de octubre de 1973, a sufrir la pena de única de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa.

s. Que a diferencia de lo que expone la defensa hay que puntualizar que su defendido se ubica en el lugar de los hechos. El argumento de ser un carabinero raso no constituye ninguna atenuante o eximente de responsabilidad penal de acuerdo a nuestra legislación.

t. Que en cuanto a que no existe ninguna prueba que su representado hubiera participado en los apremios ilegítimos. Cabe hacer presente que tal como se describe en el auto acusatorio y según lo ponderado, Luis Oyarzun participó en la detención, era parte de la dotación de la Comisaria, sabía que estaban detenidos ilegalmente los hermanos Barría Bassay. Así resulta inverosímil que no supiera que eran objeto de apremios de ilegítimos. Es decir, tuvo un grado de compromiso en lo sucedido con los hermanos Barría Bassay, no siendo posible ubicarlo en el grado de encubridor ni cómplice, si no que él participa desde el inicio con la patrulla en todas las actuaciones posteriores. En conclusión, no resulta verosímil que no sepa que sucedió con los hermanos Barría Bassay.

u. **Que sobre la falta de participación de su representado en la muerte o desaparición de las víctimas y en el tercer hecho de la causa o imputación.** Sobre este punto el tribunal estará a lo razonado anteriormente. En especial que Luis Oyarzún Arriagada supo que estaba detenido en la Comisaria Guido Barria y que esta persona, horas después ya no se encuentra en ese lugar y no se sabe más de él. Resulta inverosímil, por la condición que se vivía en el país, por la detención que se practicó al margen de la ley, que el carabinero Luis Oyarzun trate de desmarcarse de cualquier responsabilidad en los hechos. Este acusado practicó una detención al margen de la ley y esa detención junto con los apremios ilegítimos y secuestro la ratificó en el tiempo. La defensa en todos sus puntos repite

los mismos argumentos, en síntesis que no hay medio probatorio legal que permita imputar responsabilidad a su representado. Pero lo cierto es que como se ha razonado, sí hay elementos probatorios que permiten en primer lugar acusarlo y luego imputarle la responsabilidad de autor.

v. Que en cuanto a la inexigibilidad de una responsabilidad objetiva en materia penal. En primer lugar el tribunal hará un análisis de la imputación objetiva, se le hace presente a la defensa que la Imputación Objetiva en el Derecho Penal puede resumirse en las obras de Günter Jakobs, Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, 1997; Eugenio Zaffaroni, Derecho Penal, Parte General. Segunda Edición Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2002 y Mario A. Houed, Revista de Ciencias Penales (s/f). Los razonamientos son los siguientes: a) En la teoría de la Imputación Objetiva, también puede hablarse de imputación personal, de imputación a personas en cuanto portadoras de un rol. Jakobs (1997,10.) b) Portador de rol, alude a la denominación rol a un sistema de posiciones definidas de modo normativo, ocupado por individuos intercambiables; se trata, por tanto, de una institución que se orienta con base en personas. Jakobs (1997,21-22). c) Ahora bien en la mayoría de los hechos dolosos el quebrantamiento del rol será tan drástico que las interpretaciones individual y objetiva coinciden. Así, por ejemplo, quien hunde un cuchillo de grandes dimensiones en el vientre de otro, realiza desde el punto de vista objetivo un comportamiento homicida y suele saber que lo hace; pero para la imputación objetiva del comportamiento sólo lo primero es de interés. Jakobs (1997, 23).

w. Que continuando lo precedente, d) Ahora bien, no hay duda de que disparar sobre un ser humano no está permitido, sin embargo, puede ser discutible cuáles han de ser las medidas de precaución a adoptar a la hora de circular marcha atrás con un automóvil. La verdad es que la relevancia práctica de la teoría de la imputación objetiva del comportamiento se manifiesta más bien (aunque no siempre) en el delito imprudente. e) Por consiguiente, desde el punto de vista del Derecho penal, no se plantea la cuestión acerca de si una acción se ha producido de manera objetivamente imputable, sino si un suceso, por ser objetivamente imputable, constituye una acción jurídica penalmente relevante. Jakobs (1997,24). f) Es decir, quien se mantiene dentro de los límites de su rol, no responde de un curso lesivo aun en el caso en que bien pudiese perfectamente evitarlo. Jakobs

(1997, 27). g) Jakobs, expresa que la idea del comportamiento social, como comportamiento vinculado a roles, queda unido a cuatro instituciones jurídico-penales: 1) riesgo permitido, 2) principio de confianza, 3) prohibición de regreso y 4) competencia de la víctima. Jakobs (1997, 37-38). Nosotros haremos solo una breve referencia al rol permitido.

x. Que en la misma línea argumentativa de lo anterior, la letra h) Riesgo permitido. El riesgo inherente a la configuración social ha de ser irremediabilmente tolerado, como riesgo permitido. Deja de estar permitido aquel comportamiento que el propio Derecho define como no permitido, prohibiéndolo ya por su peligrosidad concreta o abstracta, incluso bajo amenaza de pena o de multa administrativa. Lo permitido se rige, principalmente, por la configuración social generada a lo largo del tiempo, y no por un cálculo de costes y beneficios que se pueda aislar de lo anterior. El riesgo permitido excluye el tipo. Jakobs (1997, 44-68). I) Luego, el quebrantamiento de un rol común implica la infracción de aquellas normas que imponen a todos respeto frente a sus congéneres: no mates, no lesiones, no robos, etc.; el no respectivo resalta el lado negativo del rol. Jakobs (1997,73). j) Ahora bien, la conexión entre riesgo y resultado no ofrece especiales dificultades en la medida en que de los distintos riesgos sólo uno esté representado en el curso causal como condición: éste es el que sirve como explicación. Así sucede, por ejemplo, cuando una persona completamente sana es asesinada. Nadie habla aquí de una desgracia. Jakobs (1997,106). k) Como corolario, los daños que de modo planificable son evitables y que aparecen como consecuencia de un comportamiento no permitido son debidos a ese comportamiento no permitido y pueden, por tanto, ser explicados a través éste. Jakobs (1997,113). l) La primera crítica es dar si la teoría de la imputación objetiva que pretende dar una interpretación moderna al juicio de imputación propio del derecho penal, despojándolo de un contenido exclusivamente naturalístico ajeno a la ciencia jurídica, para en su lugar edificarlo sobre consideraciones de carácter social. Es decir, se pretende discernir cuándo la lesión a un bien jurídico debe ser considerada producto del actuar humano (es decir, la "obra" de determinado sujeto) y cuándo dicha afectación es tan solo consecuencia del azar o de la simple casualidad. Luego cuestionamiento que puede plantearse en tal sentido es si efectivamente logra o no su propósito, a tal grado que supere los obstáculos de

las concepciones que critica Houed. (S/f 33-34,). m). La pregunta, entonces no es una pregunta causal sino una cuestión de imputación. Para la Imputación Objetiva todo elemento de subjetividad dentro de la acción queda excluida (quedando el dolo y la culpa dentro de la culpabilidad, sea, la imputación subjetiva). Por lo tanto, si una lesión o cualquier resultado con importancia para el Derecho Penal es consecuencia de una actividad desarrollada dentro del riesgo permitido, la intención o negligencia del sujeto pierden toda importancia. Houed. (S/f 37-38). ñ) Para la fijación de un riesgo como desa-probado la Teoría de la Imputación Objetiva toma como parámetro el consenso social dentro de límites especiales y temporales, puesto que es el grupo social el que debe fijar cuáles riesgos son soportados y cuáles no. Houed. (S/f 38).

y. Que en síntesis, para una parte de la doctrina la Imputación Objetiva tiene únicamente dos elementos, a saber, la creación de riesgos jurídicamente desaprobados y la realización de dichos riesgos en el resultado penalmente relevante. Se afirma, que dentro del juicio de Imputación Objetiva lo determinante es establecer si quien tenía la obligación de comportarse de determinada manera lo hizo o no, y de no hacerlo, si esa conducta desviada, generadora de un riesgo jurídicamente desaprobado se puede considerar realizada en el resultado penalmente relevante. Houed. (S/f ,41-42).

z. Críticas a la imputación objetiva. En este aspecto podemos indicar lo siguiente: a) La creación de toda una estructura jurídico penal para arribar a aquellas conclusiones- lo que desde ya resulta complejo para los operadores del derecho. Además, el problema de la aplicación del riesgo desaprobado según el criterio de la Imputación Objetiva está en el cómo demostrar que una conducta está en lo correcto dentro del medio social. b) Los seguidores de la doctrina finalista, expresan la inclinación de la imputación objetiva hacia el causalismo, pues ubica los problemas del dolo y la culpa dentro del elemento culpabilidad. Luego no superaría la teoría que critica el causalismo. c) Por otro lado la estructura que plantea la Imputación Objetiva, a saber, imputación objetiva - culpabilidad subjetiva, no es del todo conveniente porque si la conducta siempre tiene una finalidad, al no tomar en consideración la finalidad no se está tomando en consideración la conducta, sino un proceso causal. Esta afirmación es sumamente grave porque contradice la esencia del Derecho: lo típico y antijurídico no serán

conductas sino procesos causales. d) En esa línea la aplicación de la teoría de la Imputación Objetiva podría implicar (de acuerdo con la interpretación extensiva la violación de uno de los principios básicos del Derecho Penal, ya que pueden resultar imputados sujetos que no fueron los autores del hecho delictivo.

aa. Que para un mejor entendimiento y a modo de ejemplificación, si X, menor de edad, con la autorización de su padre toma un auto y por su impericia atropella a un sujeto. Para la teoría de la imputación el padre de X es penalmente responsable porque al romper la exigencia de velar por el buen comportamiento de su hijo, en el sentido de no permitirle conducir sin el permiso adecuado, estaría creando un riesgo jurídicamente desaprobado. Tal riesgo se realiza en el resultado muerte del peatón, teniéndose así completa una Imputación Objetiva). e). Esta teoría puede ser valiosa en los límites imputativos en la tipicidad culposa omisiva, pero es posible afirmar que en general no es admisible en la tipicidad dolosa activa, al menos en la forma de autoría. Se muestra insostenible cuando al pretender extender el tipo doloso activo, encuentra solo la posición de garante, que emerge de supuesto rol de buen ciudadano. Incluso no obstante que Jakobs fija las reglas de imputación objetiva conforme a 4 instituciones- como ya se ha visto- (Riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso y competencia de la víctima), lo cierto que en todas ellas aparece la referencia común a los roles. Zaffaroni (2002,475). f) Asimismo la ciencia social nos indica que los roles jamás son fijos, que una misma persona desempeña múltiples roles y que tiene frecuentes conflictos con ellos. Así la fragmentación de la vida social, la interacción conforme a roles, la juridización de esas relaciones y a la posterior reducción de la base imputativa objetiva del injusto doloso a una infracción a los roles tendría efectos insospechados e intolerables en cuanto a la impunidad de funcionarios insertos en un aparato estatal, en cada uno sería impune, en la medida en que se limitaron a su propio rol. Zaffaroni (2002, 476). g) La existencia de una multiplicidad de criterios de imputación, la diversidad de sus contenidos, dependiendo del autor que los trata, y la gran cantidad de críticas esbozadas, nos revelan que la teoría de la Imputación Objetiva no es todavía pacíficamente aceptada (por lo menos aún) en el moderno tratamiento del Derecho Penal.

bb. Que en lo específico y adhiriendo a todas las críticas que ha hecho la doctrina cabe hacer presente lo siguiente: 1) El desarrollo de la teoría de la

Imputación Objetiva, la defensa no la realiza y si lo hace es de forma muy parcial no lográndose comprender lo que ha querido exponer. 2) La teoría indicada como ha dicho la doctrina es más bien aplicable para los delitos imprudentes, pero no los delitos dolosos. 3) En este caso estamos no solamente ante un tipo de delito doloso, sino ante un delito de lesa humanidad. Delito de lesa humanidad donde no es aplicable la imputación objetiva.

cc. Que así no es posible dar lugar a esta petición toda vez como se ha razonado existen variados elementos probatorios que permiten dar por acreditado el delito y la responsabilidad.

dd. Que en cuanto a la ponderación de la prueba y estándar de convicción. Se le reitera a la defensa lo antes ponderado y lo que ha señalado la Corte Suprema respecto a las presunciones.

ee. Que sobre la inconstitucionalidad de las presunciones judiciales. Sobre esta materia la defensa equivoca la sede procesal, si estima que algún artículo o norma es inconstitucional debe interponer las acciones respectivas en la sede procesal correspondiente. Que en la misma línea podemos mencionar todas las causas que tramita este Ministro instructor en las que se han presentado requerimientos de inaplicabilidad por los presuntos vicios alegados ante el Tribunal Constitucional y han sido rechazados: Rol 27.530-A Juzgado de Letras de Carahue requerimiento 5192-18- INA y 5438-18-INA; rol 63.534 Juzgado de Letras de Angol requerimientos 4807-18- INA, 5193-18-INA, 5439-18-INA; rol 57.067 Juzgado de Letras de Victoria requerimientos 5.195-18-INA y 5.440-18-INA; rol 53.680 ingreso del Tercer Juzgado del Crimen de Temuco requerimiento 8558-20-INA.

ff. Que incluso en la causa antes referida, rol 63.556, en recurso ante el Tribunal Constitucional Rol N° 5952-2018-INA, fue presentado por infracción de 38 preceptos legales, abarcando el artículo 45 N°2, del Código Orgánico de Tribunales vigente al 10 de diciembre de 1973, los artículos 113, inciso primero y 115 del Código de Procedimiento Civil, los artículos 78 inc. Primero, 205, 456 bis, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487 y 488 del Código de Procedimiento Penal, asimismo se solicitó la declaración de inaplicabilidad del artículo 1°, letras a) y b), de la Convención sobre

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; y del Artículo 7°, numerales 1 y 2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y como consta en la sentencia que rola a fs. 2.444 y siguientes (tomo VII) de la causa 63.555, se rechazó el requerimiento deducido por el Tribunal Constitucional. Así le hace presente a la defensa que múltiples acusados han solicitado pronunciamiento al Tribunal Constitucional y esté las ha rechazado. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha tenido la posibilidad de ponderar en conformidad al Código de Procedimiento Penal, en causa Almonacid y otros versus Chile donde luego que la Corte acogiera las peticiones de la familia contra el Estado de Chile. La Excma. Corte Suprema con el objeto de dar aplicación a lo preceptuado en el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en definitiva, proseguir con la investigación del sumario criminal seguido en el Primer Juzgado del Crimen de Rancagua, relativo al homicidio de Luis Almonacid Arellano, ordena el desarchivo de la causa para continuar con su tramitación, dejando sin efecto la resolución que sobreseyó total y definitivamente a los ex funcionarios de Carabineros involucrados, se reabre el sumario, culminando esta etapa procesal el día 18 de agosto de 2011, con la dictación de la sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria Sr. Carlos Manuel Moreno Vega por el delito de homicidio en la persona de Luis Almonacid Arellano. Luego la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua con fecha 14 de enero de 2013, confirma la sentencia de Primera instancia, razonando que tal como lo dispuso la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citada, el Decreto Ley sobre amnistía que se aplicó en un primer momento en la investigación por el homicidio del sr. Almonacid ha violado las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, delito que es además de lesa humanidad e impide aplicar en su favor las disposiciones de derecho interno relativas a la prescripción. Finalmente en el fallo de fecha 29 de julio de 2013 la Excelentísima Corte Suprema rechaza los recursos de casación en el fondo presentados, declarando que la sentencia no es nula. Como puede advertirse el Estado de Chile a través del Poder Judicial cumplió lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando sin efecto los sobreseimientos dictados por la justicia militar, dictando una nueva sentencia, aplicando las normas del Código de procedimiento Penal.

gg. Que en cuanto a la calificación penal de los hechos. Que del estudio y ponderación de los medios de prueba legal, es posible concluir en el caso de los encausados José Hernán Godoy Barrientos, Luis Oyarzún Arriagada y Hans Schernberger Valdivia, están acusados por los delitos de secuestro calificado, detención ilegal y apremios ilegítimos. En este aspecto, estudiado con mayor reflexión los antecedentes, es posible **realizar una recalificación de los delitos**. En efecto como lo estima la doctrina nacional, al respecto es pertinente citar a Sergio Politoff, Jean Pierre Matus y María Cecilia Ramírez, quienes, en Lecciones de Derecho Penal Chileno, parte especial, segunda edición editorial jurídica de Chile, página 201 y siguientes, respecto al secuestro, que el sujeto activo debe ser, por regla general, un particular. El funcionario público que incurriere en esta conducta cometería la detención ilegal del artículo 148 del Código Penal, pero siempre que actúe en ejercicio de su cargo. Si actúa como particular, esto es fuera de la esfera de sus atribuciones, el delito que comete es el de secuestro. Respecto a la detención ilegal refieren que el artículo 148 del Código Penal, respecto al funcionario público que ordena el arresto o detención de un particular fuera de los casos previstos por la ley. En principio el delito de secuestro tiene como sujeto activo a un particular quien sin derecho encierra o detiene a otro privándole de su libertad y por otro lado la detención ilegal constituye un tipo específico de privación de libertad porque es cometido por un funcionario público dentro de un marco respectivo o como indica la doctrina, dentro de la esfera o tutela del ordenamiento jurídico.

hh. Que ahora bien, en conformidad a las pruebas relacionadas y ponderadas por este tribunal, a los hechos establecidos en el auto acusatorio y en este fallo, lo cierto es que es efectivo que se produce una concurrencia aparente de leyes, pero en este caso, no es detención ilegal, sino que secuestro del artículo 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos. Ello por varias razones: a) se estaba en un quiebre institucional bajo una dictadura militar; b) del mismo modo, no existe ningún fundamento jurídico que permita justificar la actuación del operativo y la privación de libertad de las víctimas en esta causa, en consecuencia los acusados, no estaban actuando en un marco o en esfera de determinada competencia, estaba al margen de todo derecho; c) ¿Cuál es el fundamento a esa época, constitucional, legal o bien procesal penal y penal para privar de libertad de

las víctimas de autos?. En el proceso no existe ningún medio de prueba legal que permita darle legitimidad a esa actuación y las defensas tampoco lo aportan. Todas las actuaciones desde el inicio están al margen de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la ley procesal y penal, en ese sentido el tipo penal que debe ser aplicado es el de secuestro, el que en este caso subsume al delito de detención ilegal. En consecuencia, para los acusados, José Hernán Godoy Barrientos, Luis Oyarzún Arriagada y Hans Schernberger Valdivia se hará una recalificación del tipo penal y quedan como autores de los delitos de secuestro calificado y apremios ilegítimos (torturas), respecto de Héctor Alejandro y Guido Ricardo, ambos Barria Bassay, que se han detallado tanto en el establecimiento de los hechos, como en la determinación de la calificación de los delitos y la participación de estos acusados que se ha hecho precedentemente.

D. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. Se resolverá en los considerandos posteriores.

F. Prueba del plenario.

a. Que la defensa acompañó declaraciones juradas de Julio Cornelio Paredes de fs. 2052 (Tomo VI) y Manuel Germán Paredes Castro depuso de fs. 2053 (Tomo VI), quienes son coincidentes en deponer que conocen a Luis Alberto Oyarzún Arriagada desde 1987, lo describen como una persona responsable, trabajador y de sólidos principios morales, no siendo un peligro para la sociedad.

b. Que la defensa acompañó declaración jurada de Hugo Orlando Almonacid Arriagada a fs. 2165 (Tomo VI), en lo pertinente depone que conoce a Luis Alberto Arriagada Oyarzún, por cuanto fue su jefe por 24 años, destaca que no es un peligro para la sociedad.

c. Que la defensa acompañó declaraciones juradas de Claudio Hanns Heine Tapia rolante de fs. 2204 (Tomo VI) y de Rutz Elena Oliva Águila de fs. 2205 (Tomo VI), en lo pertinente dicen que conocen a Luis Alberto Arriagada Oyarzún desde el año 2003. Precisan que es un hombre educado, honesto y trabajador, demostrando que no constituye un peligro para la sociedad.

d. Que la defensa acompañó declaración jurada de Lusmarina del Carmen Valderas Mancilla de fs. 2673 (Tomo VIII), en lo pertinente aquilata que es hermana de un detenido desaparecido y conoce a Luis Alberto Arriagada Oyarzún desde el

año 1989, en lo pertinente lo describe como un hombre trabajador, responsable y cooperador con la sociedad. Siempre ha empatizado y apoyado en relación a la desaparición de su hermano.

e. Que la defensa acompañó declaración jurada de Tania Yerusha Núñez Osses, que en lo pertinente arguye que conoce a Luis Alberto Oyarzún Arriagada a quien describe como una persona trabajadora, de sólidos principios morales y excelente padre.

Que respecto a las declaraciones juradas como lo ha venido reiterando este Tribunal, las partes no pueden construir propia prueba, toda vez que dichas declaraciones no fueron tomadas en un tribunal, de manera espontánea y libre y han sido redactadas y creadas por la propia defensa. En todo caso sus dichos no se refieren a los hechos establecidos en este fallo, sino al comportamiento y conducta del acusado. Sin perjuicio de lo expuesto, el tribunal lo tiene presente en el análisis de las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

f. Que la defensa rindió prueba testimonial de Hugo Orlando Almonacid Pacheco de fs. 2882 a fs. 2883 (Tomo IX) que en lo pertinente depone que lo conoce por una empresa que formó, la cual le causo interés por lo que el encausado Oyarzún Arriagada hacía por la comunidad. En un aspecto familiar cuenta que es un buen papá y se ve buena persona. Luego de Marcelo Eduardo Hoffman Niklitschek de fs. 2884 a fs. 2885 (Tomo IX) declara que es Luis Alberto es un hombre dedicado a su familia y trabajo. De sus cualidades espeta que es un hombre amable, tiene tres hijos y un yerno, todos profesionales. Depuso Julio Cornelio Paredes Castro de fs. 2886 a fs. 2887 (Tomo IX), aquilata que es un hombre responsable, trabajador y buen vecino. Destaca que siempre esta presto a colaborar, sea en actividades de juntas de vecinos, funeral o velorio. Declara en términos similares Juan Carlos Eppe Kemp de fs. 2888 a fs. 2889 (Tomo IX) que en lo pertinente proclama que tenía una buena relación con los jóvenes que transportaba habitualmente a la escuela agrícola. Que Oly del Carmen Rosas Cea de fs. 2890 a fs. 2892 (Tomo IX) cuenta que el 17 de octubre de 1973, en horas de la tarde con su padre fue al taller del padre de Luis Alberto, en esas circunstancias se detiene un camión rojo afuera de dicho lugar, descendió de este Luis Alberto, a quien conocía, pero no se visitaban. Esa persona le contó que venía de la cordillera en busca de armas, al preguntarle que andaba trayendo al interior del camión,

espeta que caballos. La deponente junto a su familia son amantes de los animales, así que se subió al camión por el lado del chofer y pudo apreciar los caballos, específicamente seis. En el asiento del copiloto había otro carabinero. Funda que solo habían ido con esos cabros, a saber Guido y tito a la cordillera, a quienes la deponente conoce porque fueron compañeros de curso. Dice que a los hermanos ya los habían sacado de arriba, imagina andaban más carabineros en otros vehículos. Espeta que como Riachuelo era un pueblo pequeño todos sabían que los hermanos estaban detenidos y por esa razón ella les pregunto por ellos, no obstante no los vio detenidos.

F.1 Que como se desprende de los hechos de estos testigos los tres primeros se refieren a la conducta del encausado Oyarzún Arriagada y no al conocimiento de los hechos que se investigó en este proceso, por lo que no resulta plausible que puedan desvirtuar las pruebas ponderadas en este fallo. En relación a la testigo Oly Rosas Cea, confirma los hechos establecidos en este fallo, en el sentido que los hermanos Barría Bassay fueron detenidos y llevados a la Comisaria y luego transportados a un operativo hacia la cordillera (fundo Los Riscos), en que participó el acusado Oyarzún Arriagada. Es decir su testimonio en nada desvirtúa lo que ha venido razonando este Tribunal en este fallo.

G. Calificación final: Que del estudio y ponderación de los medios probatorios y del escrito de defensa, este Tribunal llega a la conclusión final que mantiene la calificación que se ha dado precedentemente en esta sentencia y además en el auto acusatorio, esto es autor en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, por los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos, antes relacionados y ponderados en esta causa.

32°) Que haciéndonos cargo de la defensa de fs. 2632 a fs. 2670 (Tomo VIII) del abogado Hernán Benavides Navarro, en representación del acusado **Hans Eduart Schernberger Valdivia**. El Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de la declaración indagatoria del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba general y específica, en especial a lo que antes se detalló, y además lo ponderado con precisión en el título de consideraciones generales para las defensas. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. La defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento, de cosa juzgada, amnistía y prescripción de la acción penal falladas de fs. 2762 a fs. 2765 (Tomo VIII). Analizado la presentación en su totalidad y petición concreta reitero las excepciones de previo y especial pronunciamiento como alegaciones de fondo.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos. La defensa no realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ni objeto ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo. La defensa alega como excepción de fondo la prescripción de la acción penal, amnistía y cosa juzgada. El tribunal haciéndose cargo reflexiona en el siguiente sentido:

a. Que en cuanto a la excepción de **prescripción de la acción penal**, el Tribunal reitera que del mérito de proceso el delito que se le imputa al acusado Schernberger Valdivia, atentan contra los derechos humanos, entendiéndose por estos, aquellos que son inherentes a la persona humana y son anteriores al Estado. Este Tribunal ha establecido que corresponden a delitos de lesa humanidad y tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, que entre sus considerandos sostiene en el párrafo 114) que: “La Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otra normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder prescripción de la acción penal”. No existiendo en conformidad a lo que dispone la propia defensa en su presentación, ningún otro elemento de prueba que ponderar respecto a esta excepción. En consecuencia, esta excepción de prescripción de la acción penal **se rechaza** y así se dirá en lo resolutivo del fallo.

b. Amnistía. El Tribunal reitera los fundamentos dados en resolución de fs. 2762 y siguientes (Tomo VIII), en cuanto ésta fue rechazada porque éste Tribunal ha establecido que corresponden a delitos de lesa humanidad y éste Ministro en todos sus fallos tiene como uno de sus fundamentos el fallo de la Corte Interamericana Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de

2006, que entre sus considerandos, párrafo 114, sostiene: “la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía. En la misma línea la Corte Interamericana citada lo manifestó en la caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001, que en su párrafo 41 dispuso: “esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” **En consecuencia, esta excepción amnistía del artículo 433 N°6 del Código de Procedimiento Penal se rechaza y así se dirá en lo resolutivo de este fallo.**

c. Cosa juzgada. Que como ya lo ha reflexionado el tribunal no aprecia nuevos antecedentes relevantes en esta materia por lo que se estará a lo razonado a fs. 2762 y siguientes (Tomo VIII), de la causa de autos. Es dable puntualizar a la defensa lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 12 de marzo de 2024 conociendo el caso “Vega González y otros versus Chile”, en lo pertinente en su párrafo 253 sostiene que: “La Corte recuerda que la persecución de conductas ilícitas debe ser consecuente con el deber de garantía al que atiende, por lo cual es necesario que los Estados eviten medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. Por tanto, la regla de proporcionalidad exige que los Estados impongan penas que contribuyan a prevenir la impunidad, tomando en cuenta varios factores como las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado. Así lo fundamental en esta materia es que a diferencia de lo que expone la defensa, es que acá permanentemente se ha intentado sustraer al acusado de la responsabilidad penal y además la posibilidad de los familiares de tener un debido proceso con todas las garantías, atendido que para la época de la dictadura militar, fueron no atendidas y si bien hubo un procedimiento obviamente no estaba la

intención real de someterlo a la justicia. A diferencia de lo que expone la defensa, si se dan los elementos para estimar que en este caso hay cosa juzgada fraudulenta.

c.1 Que continuando con el razonamiento anterior y a mayor ahondamiento, es importante aquilatar que la Corte Interamericana de derechos Humanos (Corte IDH), ha manifestado en el fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 154, que “en lo que toca al principio ne bis in idem, aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”. Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem. En el mismo sentido, respecto al ne bis in idem la Excm. Corte Suprema se ha pronunciado en rol 78951-2016 por el delito de homicidio de Enrique González Cerda, en sus considerandos séptimo a noveno. **En consecuencia, esta excepción de cosa juzgada se rechaza y así se dirá en lo resolutive del fallo.**

D. Contestación de la acusación fiscal, particular y adhesión. El tribunal estará a lo razonado precedentemente, puntualizando lo siguiente:

a. Reflexiones sobre el proceso. Que antes de entrar a ponderar el escrito de la defensa por el acusado Schernberger Valdivia, cabe hacer presente que esta persona fue sometido a proceso el 04 de abril de 2023 a fs. 1707 a fs. 1724(Tomo

V), confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de fs. 1807 (Tomo V). Desde esa fecha hasta el cierre del sumario de fs. 1946 (Tomo V) de 09 de agosto de 2023, la Ilma. Corte no efectuó ningún cambio en el auto de procesamiento ni revocación.

b. Que como se describe en la relación y ponderación de los elementos probatorios en esta causa existe un fallo en contra del acusado Schernberger Valdivia del 03 de mayo de 2004 acompañada a fs. 45 y siguientes (Tomo I) en virtud del cual el ministro de la época, don Alejandro Solís Muñoz, lo condenó a la pena única de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y las accesorias legales, por el delito de secuestro calificado. Interpuesto los recursos procesales de la época, la Excma. Corte Suprema con fecha 27 de diciembre de 2007, rolante a fs. 141 y siguientes (Tomo I), dictó sentencia de reemplazo, no porque no estuvieran acreditados los hechos, sino por aplicación de la institución de la prescripción. Institución de la prescripción que no puede aplicarse según lo que se ha razonado en los considerandos anteriores.

c. Que en cuanto a los hechos. La defensa critica la figura del secuestro calificado, sobre esta materia lo cierto es que en estricto rigor, de acuerdo a los medios probatorios se ha establecido que hasta el día de hoy, no se sabe el paradero de los hermanos Barría Bassay, así los hechos se encuadran en el delito de secuestro calificado. Que a propósito de lo expuesto, es dable destacar el boletín del Observatorio de la Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, versión junio 2023, “Principales hitos jurisprudenciales, judiciales y legislativos en causas de DDHH en Chile 1990-2023.” Que en lo pertinente destaca la sentencia de causa rol 37.860 de ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, dictada en primera instancia por el sr. Juez Cristian Alfaro el 20 de septiembre del año 1993. Su importancia radica que es el primer fallo nacional desde 1990 que descartó la prescripción y la amnistía por calificar al secuestro como un “delito permanente”, que, por tanto, en el caso de personas aún desaparecidas, sigue cometiéndose en la actualidad. En consecuencia, el delito cae parcialmente fuera de la cobertura temporal del D.L. de Amnistía de 1978 (que solamente cubre crímenes cometidos entre septiembre 1973 y abril 1978), y el plazo de prescripción aún no se iniciaba. La Corte de Apelaciones de Temuco ratificó el fallo el 28 de marzo de 1994; la Corte Suprema hizo lo mismo el 5 de diciembre de 1995, con

condenas a los responsables. También se confirmó y se cumplió la indemnización civil otorgada en el fallo de primera instancia, hecho casi inédito en aquella época. (En el caso de Juan Chequeuepán, se procesó bajo el tipo penal de 'sustracción de menor', por su edad al momento de iniciarse su desaparición forzada). Que a lo largo del tiempo múltiples causas han sido dictadas por el delito de secuestro calificado, confirmándose por la Excelentísima Corte Suprema, entre ellos, la causa rol 114.001 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 45.363 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, 45.359 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, 113.997 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, entre otras. En tanto la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco ha confirmado, a modo de ejemplo las siguientes sentencias dictadas por secuestro calificado, 45.354 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, 45.361 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, 45.365 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, entre otros.

En consecuencia, la discusión sobre la figura del secuestro calificado fue zanjada por la Excma. Corte Suprema hace 30 años.

d. Que en cuanto a la falta de prueba del delito de secuestro. A diferencia de lo que expone la defensa y del mérito del proceso, la acusación que se ha hecho en contra de este acusado no es por el delito de homicidio, es por el delito de secuestro calificado, así hasta el día de hoy no se sabe el paradero de los hermanos Barría Bassay. Este acusado, como amerita el mérito del proceso, participó en la detención y posterior trasladado a la Comisaria de Río Negro, siendo el encargado de la custodia y protección de los hermanos Barría Bassay, pero hasta el día de hoy no se sabe del paradero de ellos.

E. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. En los considerandos posteriores el Tribunal se hará cargo de lo solicitada en la presentación.

F. Prueba del plenario. Que no rindió prueba en esta etapa procesal. Sin embargo en su declaración de fs. 941 a fs. 944 (Tomo III), prestada en etapa de sumario, solicitó acompañar a la causa copia de la sentencia dictada en causa rol 3925-05 de la Excelentísima Corte Suprema, fallo que ya ha sido ponderado reiteradas veces en este fallo.

F.1 Que en relación al documento acompañado por el acusado, invoca la cosa juzgada, el Tribunal estará a lo latamente razonado sobre el principio non bis in idem y la cosa juzgada razonado en los motivos anteriores

G. Calificación final: Que del estudio y ponderación de los medios probatorios y del escrito de defensa, este Tribunal llega a la conclusión final que mantiene la calificación que se ha dado precedentemente en esta sentencia y además en el auto acusatorio, esto es autor en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, por los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos, antes relacionados y ponderados en esta causa.

33°) Que haciéndonos cargo de la defensa de fs. 2342 a fs.2400 (Tomo VII) del abogado Tomas Zamora Maluenda, en representación del acusado **José Hernán Godoy Barrientos**, el Tribunal estará a lo antes razonado, respecto a la ponderación de la declaración indagatoria del acusado y todos los fundamentos pertinentes que se han dado respecto a la relación y valoración de la prueba general y específica, en especial a lo que antes se detalló, y además lo ponderado con precisión en el título de consideraciones generales para las defensas. En relación a esta defensa se precisa lo siguiente:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. Que la defensa interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento, de cosa juzgada, que fueron falladas de fs. 2762 a fs. 2765 (Tomo VIII). Analizado la presentación en su totalidad y petición concreta reiteró la excepción de previo y especial pronunciamiento como alegación de fondo, a saber cosa juzgada.

B. Sobre tachas de testigos y objeciones de documentos. Que la defensa no realizó tachas a testigos en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, ni objeto ningún documento en particular.

C. Excepciones de fondo. Que la defensa alega como excepción de fondo la cosa juzgada. Que el tribunal no aprecia nuevos antecedentes relevantes en esta materia por lo que se estará a lo razonado a fs. de la causa de autos. Es dable puntualizar a la defensa lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 12 de marzo de 2024 conociendo el caso “Vega González y otros versus Chile”, en lo pertinente en su párrafo 253 sostiene que: “La Corte recuerda que la persecución de conductas ilícitas debe ser consecuente

con el deber de garantía al que atiende, por lo cual es necesario que los Estados eviten medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. Por tanto, la regla de proporcionalidad exige que los Estados impongan penas que contribuyan a prevenir la impunidad, tomando en cuenta varios factores como las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado. Así lo fundamental en esta materia es que a diferencia de lo que expone la defensa, es que acá permanentemente se ha intentado sustraer al acusado de la responsabilidad penal y además la posibilidad de los familiares de tener un debido proceso con todas las garantías, atendido que para la época de la dictadura militar, fueron no atendidas y si bien hubo un procedimiento obviamente no estaba la intención real de someterlo a la justicia. A diferencia de lo que expone la defensa, si se dan los elementos para estimar que en este caso hay cosa juzgada fraudulenta.

C.1 Que continuando con el razonamiento anterior y a mayor ahondamiento, es importante aquilatar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha manifestado en el fallo *Almonacid Arellano y otros versus Chile*, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 154, que “en lo que toca al principio *ne bis in idem*, aun cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”. Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del *ne bis in*

idem. En el mismo sentido, respecto al ne bis in ídem la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado en rol 78951-2016 por el delito de homicidio de Enrique González Cerda, en sus considerandos séptimo a noveno. **En consecuencia, esta excepción de cosa juzgada se rechaza y así se dirá en lo resolutivo del fallo.**

D. Contestación de la acusación fiscal, particular y adhesión. El tribunal estará a lo razonado precedentemente, puntualizando lo siguiente:

a. Que del escrito de la defensa se desprenden a través de su desarrollo, como se expondrá en todos sus títulos, hay una reiteración respecto que el auto acusatorio fue mal construido, que no hay prueba suficiente para acusar a José Hernán Godoy Barrientos, y que varios compañeros de trabajo y trabajadores del fundo Los Riscos no divisaron en su momento al encausado. Sobre lo anterior, cabe afirmar que respecto que no hay ninguna prueba en el proceso, que involucre a Godoy Barrientos basta solo afirmar (por ahora), ya que se desarrollará con posterioridad que en esta causa, se dictó auto de procesamiento a fs. 1707 y siguientes (Tomo V). De dicha resolución la defensa no apeló, más aún si estimaba que no existe ningún elemento probatorio para acusar a su representado podría haber solicitado la revocación del auto de procesamiento. Pero sucede que desde la dictación del auto de procesamiento hasta el cierre del sumario no hubo por parte de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, ninguna revocación del auto de procesamiento respecto de Godoy Barrientos.

b. Que en relación a la objeción del auto acusatorio el tribunal estará al resumen ejecutivo de este. De la simple lectura aparece claro la descripción de los hechos y las imputaciones penales y su responsabilidad que se hace al acusado. Esto es indesmentible para cualquier litigante. Asimismo las diferentes observaciones que hace de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que cita el auto acusatorio, son simplemente eso, observaciones.

c. Que en estricto rigor jurídico, atendido el fallo Almonacid Arrellano y otros versus Chile, del 26 de septiembre de 2006, los Tribunales de Justicia deben estar a esa jurisprudencia. Y es lo que hace tanto el auto de procesamiento, la acusación y la ponderación de toda la prueba en este fallo. Esto es bien esencial, porque si no existiera el fallo citado y como se relata en los elementos probatorios, esta

causa continuaría sobreseída por aplicación de la prescripción. En consecuencia no se entiende los reproches de la defensa a las citas que se hacen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Toda vez que los tribunales de Chile deben someterse a la Constitución Política de la República, en virtud del artículo 6 de la carta magna y artículo 5 inciso 2°, que es lo que ha realizado este Tribunal.

d. Que a diferencia de lo que expone la defensa se deben tener presente los razonamientos que ha dado la Corte Interamericana respecto de causas investigadas de esta naturaleza. En cuanto a los Tribunales, estos deben investigar la dinámica, prácticas y en ese sentido, como además se detalló y ponderó en los elementos probatorios, al inicio de esta investigación, muchas personas involucradas negaron de inicio todos los hechos, en el caso de los Carabineros de menor rango, también algunos no quisieron aportar antecedentes, pero esto se produce por un asunto de temor reverencial hacia los superiores. En todo caso como ha quedado demostrado de los múltiples fallos que han dictado los Ministros en Visita, confirmados por la Excma. Corte Suprema. Durante muchas décadas se negó que hubieran sucedido los hechos, hubo pactos de silencio y con el correr de los años, poco a poco pudo ir abriéndose la verdad sobre los hechos ocurridos. Por ello estamos hoy en el 2024 y no en el año 1975 fallando esta causa.

e. Que de la presentación de la defensa de José Hernán Godoy Barrientos al momento de hacerse cargo de la acusación, de fs. 2358 a fs. 2368 vta., realiza un análisis del contexto de la acusación, como tal entonces es una observación al contexto de la acusación. El contexto de la acusación que hace el tribunal no es nada original. En el fallo que vincula a Chile, esto es Almonacid Arellano y otros versus Chile, del 26 de septiembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza el mismo ejercicio. ¿Por qué hay que realizar un contexto? Porque los hechos ocurrieron hace más de cincuenta años y para ponderar adecuadamente los medios de prueba legal, hay que situarse de la mejor manera en la época de los hechos, no solamente eso, sino que hay que tener los referentes a nivel internacional sobre presuntas violaciones a los Derechos Humanos que han sucedido, no solo en Chile, sino también en otros países.

f. Que de la misma forma, tanto desde el auto procesamiento hasta el auto acusatorio, como corresponde además a los estándares sobre acusación penal se

exponga todos los elementos y razonamientos que tendrá el tribunal al momento de ponderar la prueba y llegar a la convicción sobre si hubo o no delito, si hubo o no participación de los presuntos responsables, en conformidad al artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal. Por lo que las apreciaciones que hace del auto acusatorio la defensa no están acordes con el mérito del proceso ni con los estándares internacionales, normativos e interpretativos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

g. Que solo a modo de ilustración se le indica a la defensa que este tribunal con los mismos argumentos del auto de procesamiento, auto acusatorio y fallos, ha dictado noventa y nueve sentencias penales de carácter condenatorias y en algunas mixtas (condenatorias y absolutorias). Ahora bien, de esas noventa y nueve actualmente, revisadas por los Tribunales Superiores de Justicia, 63 se encuentran firmes y ejecutoriadas.

h. Que en cuanto a la participación de José Hernán Godoy Barrientos en estos hechos, como ya se hizo con Schernberger cabe recordar el fallo del Ministro Solís, que dio por establecidos tales hechos y lo condenó a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio y las accesorias legales. La absolución de la Excma. Corte Suprema no es por revocación de los hechos o que no exista delito, sino por aplicación de prescripción, la que en estos casos como se ha dicho no puede ser aplicada. La defensa insiste que su representado no participó en manera alguna en los hechos. Sobre lo anterior cabe puntualizar, al contrario de lo que dice la defensa los siguientes elementos probatorios que permiten determinar que existió el delito y la participación de José Godoy Barrientos.

i. Que a modo de ejemplificación se le reitera a la defensa los dichos pertinentes de Luis Clemente Chodín Céspedes de fs.1529 (Tomo IV), funda en lo pertinente que: “No recuerda exactamente la fecha debido al tiempo transcurrido, pero fue le parece en el mes de octubre del año 1973, que encontrándose en ese entonces trabajando en un aserradero de propiedad de Julio Escobar, ubicado en el Fundo Los Corrales, comuna de Purránque, sector Riachuelo, un día en que iba hacia su trabajo a pie, se encontró con unos carabineros que llevaban en calidad de detenidos a unos hermanos de apellidos

Barría Bassay; recuerda que entre los policías andaba un Teniente al que conocía de vista y sabe que su apellido es Godoy, pero ignora donde estará actualmente.”.

j. Luego Armando Pezo Medina, quien depone en lo pertinente de sus dichos de fs. 638 a fs. 640 (Tomo II), “Aduce que vivía al interior del fundo, junto a su esposa Haydee Fernández Barra, y sus hijos menores de edad en esa época (3 niños). El caso es que el entre los días 5 o 15 del mes de octubre de 1973, llegó al fundo una patrulla de alrededor de 15 Carabineros a cargo de un capitán de apellido Godoy de la Comisaria de Río Negro juntaron a todos los trabajadores, alrededor de 25 personas y los dejaron en el suelo con las manos en la cabeza. En el intertanto él se encontraba trabajando en el monte e iba bajando con dos carros de madera. Al acercarse a alrededor de 70 metros de distancia, dispararon al aire y le ordenaron acercarse a ellos, con las manos en la cabeza, lo cual hizo. Uno de los carabineros dijo: “uno de ustedes se va a levantar” y lo nombró a él, cuando se paró, iba llegando un tractor cuyo chofer era don Alejo Barría y su hijo Guido Barría. Los hicieron bajar, los carabineros le hicieron sacarse la ropa a Guido, mientras lo golpeaban con los fusiles. Mientras tanto se dirigía a su casa que estaba al interior del fundo en compañía del carabinero de apellido Ovando, al cual conocía de niño y el capitán Godoy, ellos sabían que los hermanos Barría vivían al lado de su casa y comían ahí también. Llegaron a su casa y le pidieron un revolver de su propiedad. Le sacaron las balas y se lo llevó a Godoy.”

k. Que continuando con el punto anterior, Pedro Segundo Soto Godoy en diligencia de careo con José Hernán Godoy Barrientos de fs. 1156 (tomo III), copia a fs. 1593 (Tomo IV), blasona que: “A dicho operativo concurrió el Teniente don José Godoy Barrientos juntamente con el Comisario Schernberger, el practicante Pablo Araya, el Cabo Primero Robert Taylor y otros funcionarios que no recuerda. A cargo del operativo estaba el Comisario Schernberger. Precisa que puede recordar lo recién señalado sin lugar a duda ya que ese operativo se realizó por orden del Comisario para buscar armamento y fue en la oportunidad en que el deponente trasladó al anca de su caballo al detenido Guido Barría Basay y de regreso a los camiones en la misma forma. Acota que en todos los operativos que realizaba el Comisario Schernberger siempre lo acompañaba el Teniente Godoy Barrientos. Así el operativo que se realizó en la cordillera con la presencia del detenido Guido Barría estuvo presente el Teniente Godoy Barrientos.” En términos

similares respecto a la participación del encausado Godoy, declaró Robert Santiago Teylorl Escobar quién en lo pertinente de fs. 919 a fs. 922 (Tomo III) soslaya que: “En la detención participaron el Mayor Hans Schernberger, el Teniente José Godoy, el Suboficial Catalán, que era el chofer, el Suboficial Alvarado, el Cabo Pedro Soto y los Carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún. Cree que el Teniente debe haber sabido lo acontecido. A su consulta, Guido Barría Basay fue el que los acompañó a la Cordillera, Héctor se quedó en la Comisaria. Guido iba con una capucha, no vio su rostro. El Tribunal le consulta en forma detallada a qué unidades pertenecían los funcionarios Hans Schernberger, el teniente José Godoy, el suboficial Catalán, el suboficial Alvarado, el cabo Pedro Soto, los carabineros Raúl Alarcón y Alberto Oyarzún, todos mencionados a fs. 461. Habla que respecto de Hans Schernberger este funcionario era de la Segunda Comisaria, al igual que José Godoy. A su consulta, sobre si se aplicaron tormentos a los detenidos, lo único que recuerda es el calabazo, es decir, que estén desnudos en los calabozos. No vio a ninguno al interior de la Comisaria, Guido Barría Basay estaba en la camioneta tapado con sacos, amarrado de manos, tapado por completo, boca abajo. En esa época solo estaban detenidos los Hermanos Barría Basay. Funda que Guido Barría Basay cuando iba a la Cordillera con ellos, iba al anca del Caballo y no iba caminando, él señalaba lo que sabía y Pedro Soto como conocía la zona, él era el Vaqueano, dirigía a la patrulla. No recuerda que los hermanos Barría Basay hayan sido golpeados, arrastrados o torturados una vez que fueron detenidos. El registro de su detención debe haber quedado en el libro de guardia. A su consulta, los que pueden dar cuenta a la Fiscalía Militar sobre lo pasado con los hermanos Barría Basay, son los altos mandos. Cuenta que fueron los familiares a la Comisaria a preguntar por los hermanos Barría Basay. Reconoce haber participado en la detención de los hermanos Barría. En segundo lugar, los hermanos Barrías fueron llevados a la Comisaria esposados, a lo que declara que uno sí. Deben haber quedado en calabozos diferentes los hermanos Barría.”

I. Que inclusive el mismo padre de los hermanos Barria Bassay, don Pedro Alejandrino Barría Navarro depuso de fs. 1459 (Tomo IV) en lo pertinente que: “ El día 16 de octubre de 1973 estaban trabajando en el fundo El Bosque de don Julio Escobar, cuando llegó una patrulla de Carabineros al mando del Teniente Godoy, reconociendo a los Carabineros Pedro Soto, René Alvarado y un tal Catalán,

quienes procedieron a detener en forma violenta a sus dos hijos, Guido y Héctor y después del golpearlos con la carabina los dejaron en slip y los metieron a unas camionetas.”. A mayor ahondamiento están los dichos de Luis Eliser Barría Bassay que depuso de fs. 262 a fs. 263 (Tomo I) y de fs. 267 a fs. 272 (Tomo I) y en lo pertinente desarrolla que: “El día 16 de octubre de 1973 el mando de Carabineros de la 2° Comisaría de Río Negro, apoyado por la logística y vehículos de los hermanos Guzmán hacen su funesto operativo, previamente acordado y van a detener a los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, que se encontraban junto a su padre y trabajadores en un aserradero de don Julio Escobar Winklen, ubicado en el Fundo Los Riscos del sector de Río Blanco en la comuna de Río Negro. Fueron detenidos y amarrados con alambres de púas de ahí tirados en el piso de la carrocería de la camioneta de los hermanos Guzmán; tapados con unas carpas y pisoteados por contingente de Carabineros. De allí fueron llevados al Retén de Riachuelo y posteriormente a la 2° Comisaría de Río Negro. Todo este operativo estaba a cargo del Capitán Schernberger y el Teniente Godoy. Hace presente que Carabineros siempre negó la detención de los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay, tanto a su madre y familiares que lo andaban buscando.”

E. En cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y beneficios de la ley 18.216. En los considerandos posteriores el Tribunal se hará cargo de lo solicitado en la presentación.

F. Prueba del plenario. No rindió prueba en esta etapa procesal. Sin embargo en su declaración de fs. 1134 a fs. 1139 (Tomo III), prestada en etapa de sumario, solicitó acompañar a la causa:

a. Copia de la sentencia dictada en causa rol 3925-05 de la Excelentísima Corte Suprema.

b. Declaración de José Godoy Barrientos del 28 de mayo de 2019, que en lo pertinente se funda que no puede ser juzgado dos veces por una misma causa.

F.1 Que en relación a los documentos acompañados por el acusado Godoy Barrientos, que en definitiva invocan la cosa juzgada, el Tribunal estará a lo latamente razonado sobre el principio non bis in idem, según se dijo en los motivos anteriores.

G. Calificación final: Que del estudio y ponderación de los medios probatorios y del escrito de defensa, este Tribunal llega a la conclusión final que

mantiene la calificación que se ha dado precedentemente en esta sentencia y además en el auto acusatorio, esto es autor en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal, por los delitos de secuestro calificado y aplicación de tormentos, antes relacionados y ponderados en esta causa.

34°) Reflexiones sobre lesa humanidad. Que a mayor ahondamiento, sobre lo constituye delito de lesa humanidad y que se expresó en las consideraciones generales de este fallo, es también necesario hacer las siguientes reflexiones sobre el delito de lesa humanidad que complementan lo anteriormente dicho por este Tribunal.

35°) Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del

contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso *Prosecutor v. Dusko Tadic*, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

36°) Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excm. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se dicta el presente fallo, corresponden **a apremios ilegítimos y secuestro calificado**, son delitos de tal magnitud que deben ser **imprescriptibles**. Asimismo, dichos ilícitos es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad** y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

37°) Que a mayor ilustración, este Tribunal reiteradamente se ha pronunciado en las siguientes causas sobre el delito de lesa humanidad: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.359; 54.035; 63.535; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; 45.362; 114.007; 114.042; 113.996; 29.879; 45.365; 45.367; 44.305.

38°) Que cabe también hacer presente, que el mismo fallo *Almonacid Arellano y otros vs Chile* dictado por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

39°) Que sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya señalado, “Almonacid Arellano y otros versus Chile”, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso “Barrios Altos versus Perú” de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo “Almonacid Arellano y otros versus Chile” afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excma. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus

militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta „conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

40°) Que en el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“En relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en

una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas

y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

41°) En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

A. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además, es una verdadera exigencia social y civilizadora.

B. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.

C. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.

D. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.

E. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.

F. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.

G. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

42°) Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, párrafo 131, donde la Corte indica que: “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar

encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”.

43°) Que cabe puntualizar que en el caso de **“Hilario Barrios Varas” (causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema)**, en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y este Ministro Visitador corresponde sin duda a delitos de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

44°) Adhesión a la acusación fiscal. Que de fs. 2083 a fs. 2107 (Tomo VI) el abogado Vladimir Riesco Bahamondes en representación de **Inés del Carmen Barria Bassay, Zinia Amalia Barria Bassay, Ricardo Alejandro Barria Ralil, Cecilia Andrea Barria Ralil y Maria Cristina Barria Caro** en lo principal de su escrito se adhiere a la acusación fiscal, dictada en contra de Hans Eduard Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos y Luis Alberto Oyarzún Arriagada, por los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado en las personas de Héctor Alejandro Barria Bassay y Guido Ricardo Barria Bassay. Sin perjuicio de adherirse solicita se le reconozcan como circunstancias agravantes a los acusados, las contempladas en el artículo 12 N°1, 8 y 11 del Código Penal.

45°) Análisis de la adhesión a la acusación fiscal. Que haciéndonos cargo de la adhesión a la acusación fiscal, el Tribunal sobre esta materia nada tiene que reflexionar, toda vez que se ha adherido a todos los hechos y

disposiciones de derecho que plantea la acusación fiscal. Ahora bien, respecto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, con un mejor estudio de las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, no es posible tenerlas presente, toda vez que no procede alegar circunstancias agravantes de responsabilidad penal, cuando el querellante no ha deducido acusación particular, como si lo hicieron otros querellantes.

46°) Acusación particular. Que la abogada Catalina Ross Fredes en representación de la **Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos** de fs. 2011 a fs. 2015 (Tomo VI), formula acusación particular en contra de Hans Eduard Schernberger Valdivia, José Hernán Godoy Barrientos y Luis Alberto Oyarzún Arriagada, por los delitos de detención ilegal, apremios ilegítimos y secuestro calificado en las personas de Héctor Alejandro Barria Bassay y Guido Ricardo Barria Bassay, en carácter de lesa humanidad, condenándolos en definitiva, solicitando se les reconozca la circunstancia agravante contemplada en el N° 8 del artículo 12 del Código Penal.

47°) Análisis de la acusación particular. Que del análisis de la acusación particular de fs. 2011 y siguientes (Tomo IV), se observa que coincide en los hechos y calificación jurídica que ha hecho el Tribunal. La diferencia estriba en la petición de agravantes para los acusados, la que será analizada en los considerandos posteriores.

48°) Eximentes de responsabilidad penal.

A. Que el abogado Hernán Benavides Navarro en representación de **Hans Eduard Schernberger Valdivia** de fs. 2632 a fs. 2671 (Tomo VI), solicita se le reconozca la eximente de responsabilidad contemplada en el artículo **10 N°10 del Código Penal**.

B. Que el abogado Tomás Zamora Maluenda en representación de **José Hernán Godoy Barrientos** de fs. 2342 a fs. 2400 (Tomo VI), solicita se le reconozca la eximente de responsabilidad contemplada en el artículo **10 N° 10 del Código Penal**.

49°) Que haciéndose cargo el Tribunal reflexiona:

A. Que en relación a la eximente del artículo 10 N°10 del texto citado, a saber: “El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”. Según el estudio detallado y minucioso de los

hechos probados, es posible concluir que nadie obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho para cometer un delito de lesa humanidad.

B. Que como se ponderó y razonó latamente en la prueba expuesta precedentemente al acusado José Hernán Godoy Barrientos y Hans Eduart Schernberger Valdivia, se les identifica en la patrulla de Carabineros que concurrió al fundo Los Riscos y también como el grupo de Carabineros que fue a Huelleshue. Desde el inicio la privación de libertad de los hermanos Barria Bassay estaba al margen de todo derecho. Hay que hacer presente como se ponderó en la prueba anteriormente analizada, que al momento de la detención de los hermanos Héctor y Guido Barría estos fueron agredidos y obligados a desnudarse, quedando en calzoncillos. Estas personas además detenidos ilegalmente y apremiados fueron trasladados a la Comisaría de Rio Negro, donde también según la prueba rendida al proceso, fueron apremiados. Y los encargados de la protección y custodia de estas personas, privadas de libertad ilegalmente, eran los carabineros, en especial los que tenían mayor grado, los oficiales Schernberger Valdivia y Godoy Barrientos. Tal como se expuso en el auto acusatorio y en la reflexión de las consideraciones generales, que hace el profesor Claus Roxin, en especial tratándose de funcionarios de carabineros, no puede haber una ceguera jurídica en ese momento, en cuanto que “no existen causales de exculpación”. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera

podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho. Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena.

C. Que no es factible creer que no se hayan dado cuenta de que la detención y apremios eran totalmente antijurídicos, siendo ellos los que deben dar cuenta ante el derecho penal y la sociedad, el destino de los hermanos Barría Bassay, a estas personas no las dejaron en libertad ni los retiró otra autoridad y aquellos que de inicio le privaron de libertad, deben responder por lo que sucedió con ellos. **En consecuencia, por los razonamientos anteriores no se acoge la eximente alegada por los acusados y así se dirá en lo resolutivo.**

Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

50°) Atenuantes de responsabilidad penal.

A. Que el abogado Maximiliano Murath Mansilla en representación de **Luis Alberto Oyarzún Arriagada** de fs. 2404 a fs. 2479 (Tomo VII), solicita se le reconozcan las circunstancias atenuantes de responsabilidad contempladas en los artículos **103 y 11 N°6 y 9 del Código Penal**. Así también las contempladas en los artículos **211 y 214 del Código de Justicia Militar**.

B. Que el abogado Hernán Benavides Navarro en representación de **Hans Eduard Schernberger Valdivia** de fs. 2632 a fs. 2671 (Tomo VIII), solicita se le reconozcan las circunstancias atenuantes de responsabilidad contempladas en los artículos **N° 103 y 11 N°1 y 6 del Código Penal**. Así también las contempladas en los artículos **211 y 214 del Código de Justicia Militar**.

C. Que el abogado Tomas Zamora Maluenda en representación de **José Hernán Godoy Barrientos** de fs. 2342 a fs. 2400 (Tomo VII), solicita se le reconozcan las circunstancias atenuantes de responsabilidad contempladas en el artículo **N° 11 N°1, 6 y 10 del Código Penal**.

51°) Que el Tribunal reflexiona de la siguiente manera:

A. Que en relación a la atenuante de responsabilidad penal del artículo **11 N°1** del texto citado, las defensas de José Hernán Godoy Barrientos y Hans Eduard Schernberger Valdivia, no resulta posible dar lugar a ello en primer lugar, porque no hay un desarrollo de por qué debiera acogerse como atenuante y cuáles serían los requisitos que faltarían. Si por lo que se ha razonado anteriormente no

aparece materialmente posible dar lugar a dicha minorante, puesto que por el protagonismo y alto compromiso en los hechos de ambos oficiales, le resta valor a una petición de esta naturaleza. No es posible tomar la distancia de responsabilidad que quieren asumir estos acusados, en circunstancias que dos personas detenidas ilegalmente y llevadas a la Comisaria de Río Negro por estas autoridades no se sepan hasta el día el actual paradero. En consecuencia, en conformidad al mérito del proceso no existen elementos probatorios que den por configurada esa minorante. Así **no es posible dar lugar** a dicha circunstancia, respecto de los acusados antes indicados.

B. Que en relación a la atenuante de responsabilidad penal del artículo **11 N°6** del texto citado: Que analizando la solicitud de las defensas antes indicadas, **se da lugar** a esta minorante, en calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación, toda vez que, de sus extractos de filiación y antecedentes citados precedentemente al inicio de este fallo, se puede observar que no tenían antecedentes penales pretéritos, todos a la época de los hechos, esto es, octubre de 1973. Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia. Sin perjuicio de lo razonado precedente, se hace presente a la defensa de Oyarzún Arriagada, que en nada disminuye el razonamiento anterior las declaraciones juradas y declaraciones de los testigos presentados por su defensa, como son don Julio Cornelio Paredes, Manuel Germán Paredes Castro, Hugo Orlando Almonacid Arriagada, Claudio Hanns Heine Tapia, Rutz Elena Oliva Águila, Lusmarina del Carmen Valderas Mancilla, Tania Yerusha Núñez Osses, Marcelo Eduardo Hoffman Niklitschek, Juan Carlos Eppe Kemp, entre otros.

C. Que en relación a la atenuante de responsabilidad penal del artículo **11 N° 9 del Código Penal**, no se dará lugar respecto del acusado de Luis Alberto Oyarzún Arriagada toda vez que como se ha razonado precedentemente en la ponderación y relación integral de toda la prueba del proceso no es posible sostener que dicho acusado haya colaborado sustancialmente al esclarecimiento

de los hechos, en realidad ha sido todo lo contrario, han pasado más de 50 años y con otros elementos probatorios, no con los dichos del encausado se ha logrado determinar los hechos y la participación de los responsables. El hecho de que el acusado concurra a estrados a prestar declaraciones no es ninguna colaboración sustancial, sino que es una carga u obligación que tiene todo ciudadano, respecto a las reglas jurídicas en materia procesal penal. En consecuencia, **no se hace lugar** a la atenuante solicitada por el acusado de Luis Alberto Oyarzún Arriagada

D. Que en relación a la atenuante de responsabilidad penal del artículo **11 N° 10 del Código Penal**, solicitada por la defensa de José Hernán Godoy Barrientos, esto es “El haber obrado por celo de la justicia”. Cabe destacar a la defensa que, del mérito del proceso, la ponderación de las pruebas realizadas en conformidad a la ley, los hechos establecidos, no observa este tribunal ningún elemento serio que permita mínimamente dar por establecida esta atenuante. Al contrario, se obró por otros motivos que repugnan al derecho, en consecuencia, **se rechaza** la circunstancia modificatoria esgrimida por el encausado José Hernán Godoy Barrientos.

E. Que en relación al **artículo 214** del Código de Justicia Militar, solicitado por las defensas de los acusados Luis Alberto Oyarzún Arriagada y Hans Eduard Schernberger Valdivia, el Tribunal reflexiona lo siguiente. Esta aplica “*cuando se haya cometido un delito por la ejecución de una orden de servicio, el superior que la hubiere impartido será el único responsable*”. Luego de citar doctrina indica que nos ubicamos en el caso de obediencia debida, insistiendo que, en aquel escenario, quien cumple una orden injusta obedece a que en tales hipótesis el inferior se encuentre en una situación de inexigibilidad. Sobre lo anterior, no es posible acoger la eximente alegada, toda vez que: a) los hechos investigados, en primer lugar, no se tratan de orden de servicio, sino que delitos de lesa humanidad. b) En segundo lugar, no existe en el proceso ninguna representación de ilegalidad o antijuricidad al superior. c) En tercer lugar, nadie obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho participando en la ejecución de delitos de lesa humanidad. En efecto, no es posible acoger la alegación del artículo 214 del Código de Justicia Militar, ello por no explicar adecuadamente las defensas sus posiciones, no reunirse los requisitos que señalan dichas normas y que además debe tratarse de una orden del servicio o de una actividad castrense, lo

que claramente no concurre en la especie, porque aquí se trata de un acto ilícito. Además, no consta en el proceso que los acusados hayan representado o suspendido la orden al superior respectivo. Por los mismos razonamientos no es procedente la aplicación del Código de Justicia Militar. En consecuencia, **esta alegación es rechazada.**

F. Que en relación al artículo 211 del Código De Justicia Militar, solicitado por las defensas de Luis Alberto Oyarzún Arriagada y Hans Eduard Schernberger Valdivia, el Tribunal reflexiona lo siguiente. Esta alegación no puede ser acogida. En efecto, no se trata de la ejecución de la orden del servicio sino que se trata de la comisión de un delito de lesa humanidad, en este caso, apremios ilegítimos y secuestro calificado. Sobre la aplicación de esta atenuante en los delitos de lesa humanidad, podemos mencionar, entre otras, la causa rol N° 95096-16, dictada por la Excma. Corte Suprema, quien en su considerando 5° expresa: “Que en subsidio solicitó se considerara que en el caso de autos concurren las circunstancias eximentes de los artículos 211, 214, 334 y 335 del Código de Justicia Militar, denominadas “obediencia debida” y “cumplimiento de órdenes recibidas por un superior jerárquico”, las que no pueden ser acogidas, pues respecto de los mandatos del superior jerárquico dentro de una institución militar - de Ejército de Chile en este caso-, aparece de los hechos del proceso que la conducta de los acusados obedece a la materialización de sus propios designios, sin perjuicio de la situación de impunidad que el contexto imperante les proporcionaba, idea que se ha desarrollado en los apartados precedentes. Por ello esta defensa no puede ser atendida, pues dada la especial modalidad en que se cometió el delito, no hay antecedentes precisos de que éste haya sido el resultado del cumplimiento de una orden de carácter militar, presupuesto básico para alegar el cumplimiento del deber militar”. Asimismo, causa Rol N° 38766-2018, quien en su considerando 26° señala: “Que en lo referido las pretensiones de las defensas de Krassnoff, Zapata y Alfaro, para determinar si en la especie se configuran los errores de derecho denunciados es necesario tener en consideración que, de acuerdo al mérito de autos, las defensas de los recurrentes solicitaron durante la secuela del procedimiento, entre otras pretensiones, que se reconociera a favor de sus representados las circunstancias consagradas en los artículos 211 y 214 inciso 2° del Código de Justicia Militar. Esta pretensión fue rechazada por el

tribunal de primer grado, indicando en sus motivos 78°, 83° y 103° que en cuanto se invoca como circunstancia atenuante lo prescrito en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, no cabe sino su rechazo, pues no se ha acreditado que la participación en calidad de autor, en los delitos sub-lite, lo haya sido en cumplimiento de órdenes recibidas de un superior jerárquico. Por la misma razón no se dan tampoco los supuestos para la concurrencia de la eximente incompleta en relación con el inciso segundo del artículo 214 del Código de Justicia Militar.” Haciendo referencia a lo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en autos rol N° 2182-98. Teniendo además presente lo señalado en las consideraciones generales de esta sentencia, en especial lo expuesto en las directrices de la jurisprudencia alemana por el jurista Claus Roxin, en cuanto resulta inimaginable que quien actúa en una situación como la establecida en esta sentencia hubiera podido considerar que las detenciones ilegales, apremios ilegítimos y secuestros calificados resultaban conforme al derecho. En consecuencia, **esta alegación es rechazada.**

52°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual: con relación al artículo 103 del Código Penal, el Tribunal reflexiona lo siguiente:

A. Que en síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor Óscar López (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007**, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto

informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”)** ha manifestado sobre esta materia, en su motivo quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

B. Que ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excma. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karinna Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo

diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

C. Que recientemente la Iltrma. **Corte de Apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019,** pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su considerando tercero señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: "que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

D. Que del mismo modo, **Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidio calificado en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero,** acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la Iltrma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto

penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: “Noveno: Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”.

E. Que es dable puntualizar a la defensa lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 12 de marzo de 2024 conociendo el caso “Vega González y otros versus Chile”, en lo pertinente en su párrafo 253 sostiene que: “La Corte recuerda que la persecución de conductas ilícitas debe ser consecuente con el deber de garantía al que atiende, por lo cual es necesario que los Estados eviten medidas ilusorias que sólo aparenten satisfacer las exigencias formales de justicia. Por tanto, la regla de proporcionalidad exige que los Estados impongan penas que contribuyan a prevenir la impunidad, tomando en cuenta varios factores como las características del delito, la participación y la culpabilidad del acusado.” En definitiva, **se rechaza** la petición de los acusados, **Luis Alberto Oyarzún Arriagada y Hans Eduard Schernberger Valdivia**, y así se dirá en lo resolutivo del fallo.

53°) Agravantes de responsabilidad penal. Que a fs. 2011 a fs. 2015 (Tomo VI) la abogada Catalina Ross Fredes, en representación de la Unidad de Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, alega la agravante de responsabilidad penal para los acusados la contemplada en el **artículo 12 N°8** del Código Penal. Las defensas sobre esta agravante solicitaron su rechazo, atendido en lo pertinente que en el caso del encausado Hans Eduard Schernberger Valdivia esgrime se limitó a entregar una orden recibida de una

autoridad, más no a la parte operativa. Ahora bien, Luis Alberto Oyarzún Arriagada fundamenta que no es posible acoger la agravante solicitada, por cuanto la calidad de funcionario público, que el carácter público que tienen forma parte de la calificación del delito de secuestro calificado o agravado, no siendo posible ser parte del hecho punible y de la circunstancia agravante. En términos similares se pronuncia José Hernán Godoy Barrientos, en el sentido que no se puede re-calificar, de lo contrario sería investigar un mismo hecho con dos penas.

54°) Que haciéndose cargo el Tribunal, reflexiona de la siguiente manera:

A. Que en relación a la agravante del artículo **12 N°8** del Código Penal, solicitada por Catalina Ross Fredes, lo primero que se debe despejar es a qué delitos es aplicable de conformidad a las normas del Código Penal. No es aplicable a las detenciones ilegales, ni a los apremios ilegítimos (tormentos, aplicación de torturas) establecidos en los artículos 148 y 150 de Código Penal, respectivamente, vigente a la época de los hechos. Ello porque el propio párrafo establece que estos son delitos cometidos por funcionarios públicos, en consecuencia, el tribunal no puede considerar un elemento que ya el legislador ha establecido para este tipo de delito, como es la calidad de funcionario público. Si hipotéticamente es aplicable para el caso del secuestro, toda vez que en su párrafo 3° señala que estos delitos atentan a la libertad y seguridad cometidos por particulares.

B. Que como este Tribunal lo ha dicho en la causa rol 114.000, homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotzqui, en causa rol 44.305, homicidios calificados de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, en causa rol 113.992 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco homicidio calificado de Ramón Carrero Chanqueo, con un mayor estudio de los antecedentes y así lo ha resuelto en numerosas causas condenatorias, ya ejecutoriadas este Tribunal **acogerá** la agravante pedida del artículo 12 N°8 del texto punitivo para los acusados solo por los delitos de **secuestro, como se ha razonado**. En este punto hay que hacer una distinción importante. En efecto los delitos de lesa humanidad, como ya se han descrito, no es efectivo, que solo puedan ser cometidos por agentes del Estado, es decir, delito de lesa humanidad, no es igual a que se comentan por agentes del Estado. Los delitos de lesa humanidad también pueden ser cometidos por particulares. En la jurisprudencia nacional hay varios casos en que se ha

condenado a particulares, por ejemplo, en la causa rol N° 2.182-98, denominado “Episodio Liquiñe”, instruida por el señor Ministro en Visita Extraordinaria Alejandro Solís Muñoz. En ese sentido si bien el auto acusatorio en la descripción de los hechos por la facticidad misma describe a agentes del Estado, el hecho de ser funcionario público no implica automáticamente que la persona se prevalezca de su condición, por ello, lo especial de esta agravante, es decir, si los acusados no hubieran sido agentes del Estado, no habrían tenido la posibilidad de actuar con el resguardo para su impunidad, como lo hicieron, y eso es lo importante, el hecho de ser funcionarios públicos no es parte de los requisitos de los crímenes de lesa humanidad, como ya se describió en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo se requiere ser detenido por una política contra determinada población, no siendo necesario que sean agentes públicos. Además, el artículo 63 no es tajante en esta materia, puesto que la persona siendo funcionario público, podría no haberse aprovechado de esa calidad y ejecutar el delito por otros factores o circunstancias que es lo que se viene explicando, por ejemplo, por relaciones de amistad, por relaciones de trabajo o por otras situaciones, pero en este caso se aprovecha de la condición de la calidad de funcionario público. Además, el delito de secuestro calificado no tiene en el tipo el factor funcionario público, otros delitos tienen la calidad de ser cometidos por funcionarios públicos, pero este no es el caso. **Por ello es que debe acogerse la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal para los acusados por los delitos de secuestro calificado.**

55°) En la determinación de la pena. Se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos siguiendo a los autores Juan Pablo Mañalich en su obra Discrecionalidad Judicial en la determinación de la pena, en el libro de Defensoría Penal Pública, 07 de octubre de 2010; además en Memoria de Prueba, del libro determinación de la Prueba en Chile, Facultad de Derecho Universidad de Chile, 2007, Carolina Acevedo, Ángela Torres; Guillermo Oliver en Algunos problemas de aplicación de reglas de determinación legal de la pena en el Código Penal Chileno; René Pica Urrutia, Reglas para la aplicación de las penas. Las que se rigen por los artículos 10, 11, 12, 18 y siguientes, 50 y siguientes, 74 y 103 del Código Penal, 509 del Código de Procedimiento Penal, 164 del Código Orgánico de Tribunales. En lo que se deduce lo siguiente

- A. En primer lugar, la pena señala por la ley al delito.
- B. Grado de ejecución del delito.
- C. Forma de participación en el delito.
- D. Concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.
- E. Eximentes de Responsabilidad penal.
- F. Extensión del mal causado.
- G. Que finalmente la situación de los artículos 74 del Código Penal y 509 del Código de Procedimiento Penal, ello sin perjuicio de otras circunstancias especiales como eximentes incompletas, situación de los menores de edad.
- H. Que asimismo cabe hacer presente que tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el artículo 68 del texto punitivo, y si no es así el artículo 67 del texto citado. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los artículos 50 y siguientes del mismo texto.
- I. Que por otro lado tratándose en este caso de delitos de lesa humanidad como se explicará con posterioridad, atendida la gravedad y en consideración a la proporcionalidad de las penas, no procede que los encartados, aparte por la extensión de la pena, obtengan algún beneficio de la Ley 18.216 atendido a los estándares normativos e interpretativos existentes en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- J. Que también cabe precisar, que esta es la última etapa en la determinación de la pena, esto es el equilibrio adecuado entre el artículo 74 del Código Penal y el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente). Que de igual forma se ha razonado, debe estarse a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos de la Corte Interamericana sobre esta materia, en especial el sentenciador tiene que considerar la gravedad de los hechos y la proporcionalidad de la pena, pues se trata de delitos de lesa humanidad.

56°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a las figuras típicas de los delitos de apremios ilegítimos y secuestro calificado, en contra de Héctor Alejandro Barria Bassay y Guido Ricardo Barría Bassay, en la comuna de Riachuelo, desde el 16 de octubre de 1973. Delitos previstos y sancionados en los

artículos **150 N°1 y 141 del Código Penal**, en su carácter de **lesa humanidad**, vigente a la época de los hechos, que tienen asignada las siguientes penas:

A. Que el delito de apremios ilegítimos previsto y sancionado en el artículo 150 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, en su carácter de lesa humanidad tiene asignada la pena de Presidio o reclusión menores y suspensión en cualquiera de sus grados, más las accesorias legales correspondientes.

B. Que el delito de secuestro calificado previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal vigente a la época de los hechos, en su carácter de lesa humanidad tiene asignada la pena de Presidio Mayor en cualquiera de sus grados, más las accesorias legales correspondientes.

57°) Que Luis Alberto Oyarzún Arriagada, Hans Eduart Schernberger Valdivia y José Hernán Godoy Barrientos, están acusados como **autores** de los delitos de **apremios ilegítimos y secuestro calificado** en las personas de Héctor Alejandro Barría Bassay y Guido Ricardo Barría Bassay, perpetrados en la comuna de Riachuelo, a contar del 16 de octubre de 1973, respecto a los cuales se razona de la siguiente manera:

A. Que del análisis de las circunstancias atenuantes les beneficia a los acusados la minorante del artículo 11 N°6 del Código Penal y le perjudica la agravante del artículo 12 N°8 del Código citado, según se ha razonado. En consecuencia:

a. Que en el caso de los apremios ilegítimos es un delito inferido por funcionarios públicos y como se razonó anteriormente no le es aplicable la agravante del artículo 12 N°8 del Código Penal. Luego a todos los encartados en estos delitos les favorece la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal. En conformidad al artículo 68 del Código Penal, habiendo una sola minorante y no perjudicándole agravante, no puede aplicarse la pena en el grado máximo, quedando en este caso en la pena de presidio menor en su grado medio. En este caso de aplicarse el artículo 74 del Código Penal por cada delito de apremios ilegítimos le correspondería la pena de tres años de presidio (dando un total de seis años), si se aplica por otro lado el artículo 509 Código de Procedimiento Penal, siendo delitos de la misma especie y por la reiteración la pena queda fijada en **CINCO AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MÁXIMO** más las accesorias legales, beneficiándoles entonces esta última opción.

b. Que en el caso de los delitos de secuestro calificado les beneficia a todos los enjuiciados la atenuante del artículo 11 N°6 y les perjudica la agravante del N°8 artículo 12 ambas normas del Código Penal. Como ya se ha indicado este delito de secuestro calificado tiene la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, así la pena se fijará en presidio menor en su grado medio. Si se aplicare el 74 del Código Penal siendo dos delitos de secuestro calificado, la pena sobrepasa los veinte años. Si se aplica el 509 del Código de Procedimiento Penal, siendo delitos de la misma especie y por la reiteración se sube un grado la pena, quedando en **QUINCE AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÁXIMO**. Como se desprende le resulta más beneficioso a los sentenciados aplicar esta última opción, más las accesorias legales correspondientes.

58°) Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores. Que atendida la extensión de la pena impuesta y las razones que se van a exponer a continuación, no procede ningún beneficio de la ley N°18.216 aplicable a los acusados. Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente los acusados tuvieran una pena inferior de igual forma no puede acceder a cumplir la pena en libertad. En efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de Derechos Humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en las causas: rol 2-2013 ingreso de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia; rol 45.361 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; rol 114.051 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 45.357 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; rol 114.103 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 45.367 ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro; rol 114.017 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 2-2012 ingreso del Juzgado de Letras de Pucón; rol 114.034 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt; rol 113.969 ingreso del Primer Juzgado del Crimen de Temuco; rol 25-2011 ingreso de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

A. Que continuando con el racionamiento anterior, podemos indicar un **estándar en Derechos Humanos** corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas

apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al **artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución** que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, **pp. 27 - 53**). Agregando este Ministro que, a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre determinado estándar normativo.

B. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de fecha 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: *“La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos”. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte IDH, intérprete última de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”*.

C. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos **tanto en sede contenciosa como consultiva** para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que

dispone la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte IDH (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Santiago de Chile, Librotecnia, **pp.356-357**).

D. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la **Convención Americana sobre Derechos Humanos en especial los artículos N°1.1 y N°2**. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

E. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna opinión consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo en materia de Derechos Humanos**. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia. Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

a. Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el **párrafo 41**, expuso que: “*Considera inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones*

forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

b. Caso Almonacid Arellano y otros versus Chile, de 26 de septiembre de 2006, **párrafos 111 a 114**; la Corte IDH ha señalado: (...) “*Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes*”. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la **impunidad**, que la Corte IDH ha definido como: “*la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana*”. Asimismo, la Corte IDH ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el **Caso Barrios Altos** que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte IDH estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

c. Caso la Masacre de la Rochela versus Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, **párrafo N° 191**, señaló de manera expresa: (...) *“que en la investigación de graves violaciones a los Derechos Humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia”*.

d. Caso Cantoral Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú, de 10 de julio de 2007, en su **párrafo 190**, puntualiza: “La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz.” En particular, la Corte IDH recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

e. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de noviembre de 2009, en el **párrafo 129**, señala que ante esta situación: “la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad”. “En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por

contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...]. En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber”.

f. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) versus Brasil de 24 de noviembre de 2010 en el **párrafo 155**, indica: (...) “Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones.” Entre ellas, destaca [...] “el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares”.

F. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia, ha sostenido este **estándar en materia de Derechos Humanos** en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los Derechos Humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los Derechos Humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

G. Que sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común),

el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley N°18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33 de la ley antes mencionada**, permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el **artículo 1 y siguientes de la citada ley**. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe: “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

H. En esa idea de razonamiento, si bien la **Ley N°18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común**. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los autores consumados de determinados delitos, en este caso **de apremios ilegítimos y secuestro calificado**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira-, (...) “debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos N°1, N°2 y N°29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además los artículos N°26, N°31.1 y N°27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969”. (Nogueira, Humberto (2014): “Sistema interamericano de protección de Derechos Humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). “La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

59°) En consecuencia, aplicando el **control de convencionalidad**, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los estándares normativos e

interpretativos sobre Derechos Humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los Derechos Humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio). No es posible (además de lo antes razonado y de los estándares normativos) otorgarles algún beneficio de la ley N°18.216 a los acusados, en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. (Núñez, Constanza (2017):" El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos". Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la Ittma. Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha 4 de marzo de 2020, en causa **rol N°1.052-2019** (en relación a causa **rol 113.999** de este Tribunal); en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a Derechos Humanos (lesa humanidad). Lo anterior ha sido además ratificado por la **Ittma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). Lo mismo en causa **rol 114.034** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, no obstante las personas ser condenadas a tres años de presidio menor en su grado medio están cumpliendo pena efectiva, no otorgándosele beneficio. **En consecuencia, no es posible otorgarles a los acusados, ningún beneficio y deberán cumplir la pena efectiva impuesta como se dirá en lo resolutivo.**

60°) Que en cuanto a los informes solicitados respecto al acusado José Hernán Godoy Barrientos, de fs. 2863 a fs. (Tomo VIII), el Servicio Médico Legal, informe N°002-24, en lo pertinente informa que: “La condición del examinado no equivale a enajenación mental”. Que respecto al informe del Centro de Reinserción Social, en lo pertinente concluye que: “Se recomienda una pena de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva.”

61°) Que en cuanto a los informes solicitados respecto al acusado Hans Eduart Schernberger Valdivia: de fs. 2147 a fs. 2149 (Tomo VIII) el Centro de Reinserción Social de Valparaíso concluye en lo pertinente que: “Las acciones que podrían llevarse a cabo en la pena sustitutiva de libertad vigilada/ libertad vigilada intensiva aparecen como poco necesarias y eficaces frente a las características psicosociales criminológicas indicadas.” En relación al informe del Servicio Médico Legal, este no ha sido remitido al Tribunal, sin perjuicio a fs. 1985 (Tomo V) y de fs. 2804 (Tomo VII), se solicitó cuenta de dicho oficio. No obstante, ello no es óbice para que el Tribunal en virtud de la ley 18.216 pueda dictar el fallo.

62°) Que en cuanto a los informes solicitados respecto al acusado Luis Alberto Oyarzún Arriagada: respecto al informe del Centro de Reinserción Social concluye en lo pertinente que: “Se recomienda una pena sustitutiva de libertad vigilada- libertad vigilada intensiva”. En tanto el informe solicitado al Servicio Médico Legal, a fs. 2804 (Tomo VIII), el Tribunal pidió cuenta respecto al informe solicitado. No obstante, ello no es óbice para que el Tribunal en virtud de la ley 18.216 pueda dictar el fallo.

63°) Que respecto a las peticiones subsidiarias de **cumplimiento de pena en el domicilio**, solicitadas por los abogados Hernán Benavides Navarro y Maximiliano Murath Mansilla, en representación de Hans Eduart Schernberger Valdivia y Luis Alberto Oyarzún Arriagada respectivamente, basados en que el tribunal debe respetar los derechos de los adultos mayores privados de libertad y para ello citan principios y normativa internacional sobre la materia, en especial fundado en el principio de humanidad y en especial en el respeto al mandato de igualdad ante la ley de no discriminar entre los privados de libertad, solicitando que si se le condena a una pena privativa de libertad esta la cumpla bajo arresto o reclusión domiciliaria total.

64°) Sobre lo anterior, el tribunal razona lo siguiente:

A. Que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el capítulo 4° respecto a los derechos protegidos, prescribe en su artículo 5 la igualdad y no discriminación por razones de edad; en su artículo 10 el derecho a no ser sometido a tortura o tratos crueles o degradantes. De dichos derechos en modo alguno se desprende que el Estado de Chile no pueda investigar y sancionar a los autores de delitos de lesa humanidad que los tribunales consideren en sus sentencias que son responsables de dichos ilícitos. Sobre lo anterior los sentenciados por delitos de lesa humanidad a diferencia de la población ordinaria carcelaria tienen centros de cumplimiento especiales que implican mejores condiciones, integrales y mayores medidas de seguridad para cumplir las penas. A diferencia de los centros de cumplimiento penitenciarios comunes, donde de acuerdo a los informes públicos tanto de la Fiscalía Judicial del Poder Judicial como informes internacionales de público acceso, se observa cárceles sobrepobladas, con espacios inadecuados. Luego, el Estado de Chile, en relación a los condenados por delitos de lesa humanidad que tengan 60 años o más, está dando cumplimiento a la citada Convención.

B. Que por otro lado, no existen normas en la legislación interna y tampoco en el ámbito internacional que permitan que el sentenciado cumpla la pena en otro lugar que el recinto penitenciario, así se ha pronunciado sobre este asunto la Excelentísima Corte Suprema de Chile, en causa Rol 843-2018 exponiendo en su considerando octavo: "... conforme lo expuesto, estando fundada la resolución recurrida y no existiendo en el ordenamiento jurídico nacional normas que permitan dar lugar al requerimiento formulado en favor del recurrente como tampoco normas imperativas en los tratados de Derechos Humanos, no puede atribuirse ilegalidad a la decisión del Ministro Sr. Mario Carroza, y ésta no es arbitraria, toda vez que las personas condenadas ya sea por delitos comunes o de lesa humanidad cumplen sus condenas en recintos carcelarios sin atender a la sola circunstancia de tratarse de personas mayores.".

C. Que continuando con lo precedente, en causa rol 4154-2024 de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago en lo pertinente refiere: "Que considera esta Corte, que la sustitución de la misma sólo puede erigirse cuando concurra la constatación de enajenación mental del condenado, condición que en este caso no se encuentra determinada, sino únicamente en vías de ser resuelta mediante

pericia médica, cuyo mérito debe satisfacer y dar certeza del debido respeto a los intereses de todas las partes en la ejecución de la sanción impuesta. 3°) Que no se dejará de atender también, la importancia capital de los bienes jurídicos protegidos con la figura penal de los delitos de lesa humanidad, por los cuales se encuentra cumpliendo condena el apelante. 4°) Que, finalmente, atendiendo a la edad del sentenciado y a lo dispuesto en el artículo 10 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en cuanto establece el Derecho de éstas a no ser sometidas a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, esta misma Corte reitera lo que se ha ordenado a Gendarmería de Chile, en autos sobre Protección Nro.2650-2024, como deber de la administración penitenciaria, respecto de la mejora sustantiva y oportuna de las condiciones mínimas, tanto del personal de salud, como de la infraestructura, que debe satisfacer para la atención de los internos del pabellón del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, entre los que se encuentra el condenado.” **En consecuencia, no se da lugar a petición de cumplir la pena privativa de libertad en el domicilio y así se dirá en lo resolutive.**

En cuanto a la acción civil.

65°) Que de fs. 2083 a fs. 2108 (VI) el abogado Vladimir Alberto Riesco Bahamondes en representación de **1) Inés del Carmen Barria Bassay, 2) Zinia Amelia Barria Basay, 3) Ricardo Alejandro Barría Ralil, 4) Cecilia Andrea Barria Ralil y 5) Maria Cristina Barria Caro**, deducen demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por Álvaro Sáez Willer ambos domiciliados en calle Prat N° 847, oficina 202, Temuco, solicitando se condene al Fisco de Chile, representado por el abogado procurador Fiscal, Álvaro Sáez Willer, a pagar la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles, monto que deberá ser pagado con reajustes e intereses desde la fecha de la notificación de la demanda hasta el completo pago, más las costas del juicio o lo que Ssa., estime conforme a justicia. La cual para un mejor entendimiento se estructura de la siguiente manera:

A. Hechos. Comienza refiriéndose a lo establecido en el informe de Comisión de Verdad y Reconciliación respecto a Guido Barria Basay y Guido Barria Basay. Mismo relato que es reproducido por el sitio web del Museo de la

Memoria y los Derechos Humanos. Hacen una reseña de los hechos que rodearon la detención, apremios y secuestro de las víctimas. Destaca que una vez acontecido lo narrado la madre de los hermanos Barria Basay recurrieron a diversos organismos policiales, militares y judiciales para averiguar el paradero y destino de sus hijos, y hasta la fecha nadie le ha informado nada ni a sus hermanos. Reproduce relato de doña Inés Barria Basay, precisando que es difícil resumir tanta pena y dolor en casi cincuenta años de búsqueda de verdad y justicia. La demandante Maria Cristina Barria Caro es la única hija de Héctor Alejandro Barria Basay, quien al momento del secuestro tenía cuatro años de edad, afectando en todas las áreas de su vida la ausencia de su figura paterna, sin perjuicio de la estigmatización que implica ser hija de un detenido desaparecido.

B. Derecho. Que se encuentra establecido por diversos medios de prueba que el 16 de octubre de 1973 las víctimas fueron víctimas de la acción criminal de los agentes de estado indicados, lo cual lleva a demandar al Fisco de Chile como tercero responsable de las acciones desplegadas por sus agentes en el marco de la dictadura militar, tal como lo ha prescrito la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Excelentísima Corte Suprema en casos similares. Refiere creación y funciones de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Reproduce el artículo 38 de la Constitución Política de la República y la Ley 18.575. Por lo expuesto en las normas del Código Civil es que demandan de responsabilidad civil del estado de Chile por los homicidios de los familiares de los actores, acción que resulta oportuna por cuanto se está frente a un delito de lesa humanidad, teniendo un carácter imprescriptible e inadmisibles. En el mismo sentido constituye una infracción a lo establecido en los Convenios de Ginebra, específicamente lo estipulado en el artículo 3°, para lo cual reproduce las disposiciones allí indicadas. Por lo indicado en el homicidio de autos constituye una infracción grave a los citados convenios, por cuanto su persecución y castigo se fundan en principios del Derecho Internacional. Cita doctrina. Así que una eventual declaración de prescripción de la acción civil no resulta acorde al deber asumido por el Estado de Chile ante la comunidad internacional. En el mismo sentido han fallado desde los años 2005-2006 la Excelentísima Corte Suprema. En materia civil hubo fallos contradictorios, no obstante, desde el año 2012 a la fecha ha sido tendencia la

declaración de la imprescriptibilidad tanto en penal como en civil de los crímenes contra la humanidad. Cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema. De lo cual desprende que una diferenciación en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento desigual resulta discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar coherencia y unidad, indispensables en un Estado de Derecho democrático. Se refiere al fallo Almonacid-Arellano vs. Chile y Ordenes y otros vs. Chile. Reproduce criterios de la Corte Suprema. Destaca que las víctimas Guido Ricardo Barría Basay y Héctor Alejandro Barría Basay eran dos jóvenes trabajadores, que estaban recién formando sus nuevos hogares, por lo que este crimen de lesa humanidad, destruyó tres proyectos familiares, dejando marcas emocionales imborrables que se mantiene hasta el día de hoy. Arguye del daño moral y doctrina al respecto, puntualizando que los Tribunales han establecido una nítida diferencia entre los perjuicios patrimoniales o no patrimoniales, pues mientras respecto de los primeros se exige una acreditación completa y exigente, en cuanto a los segundos ella es preferida al entenderse, que dada su naturaleza, la prueba es imposible. Comunican los querellantes los criterios y factores a considerar para la evaluación del daño moral. De acuerdo al informe de la Comisión Nacional para la Verdad y Reconciliación en su tomo I, adopta las practicas que se reiteran monótonamente, tales como negar a la familia el hecho de la detención, ocultarle la muerte del detenido, larguísimas esperas para recibir alguna noticia de los detenidos, tratados los parientes con groserías o crueldad verbal ocasionalmente con violencia física y casi siempre prepotencia, entre otros. Reitera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha resuelto conforme al deber de integra reparación y garantía de no repetición que pesa sobre los estados signatarios de la misma, entre los cuales está el Estado de Chile

66°) Que de fs. 2262 a fs. 2305 (Tomo VI), **contesta demanda civil** el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Diego Acuña Gálvez, deducida por el abogado Vladimir Riesco Bahamonde en representación de Inés del Carmen Barría Bassay, Zinia Amelia Barria Basay, Ricardo Alejandro Barria Ralil, Ceclia Andres Barria Ralil y Maria Cristina Barría Caro , en la cual solicita se condena al fisco por indemnización de perjuicios la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles, con reajustes de

acuerdo al IPC, desde la fecha de notificación de la demanda, más intereses legales y costas del juicio. Esta parte solicita que la mencionada demanda sea íntegramente rechazada, por los siguientes fundamentos:

A. Excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización alegadas por haber sido ya indemnizados los demandantes que se indican:

a. Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas. Comienza aludiendo a la Justicia Transicional, que desde esa óptica se puede mirar en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. Que en ese sentido, las negociaciones del Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos.

b. La complejidad reparatoria. Comienza citando a Lira. Posteriormente señala que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación o también llamada “Comisión Rettig”, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación”. Dicho informe derivó en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, reflexiona respecto al mensaje de dicho proyecto de ley. Asumida esa idea reparatoria, tanto la Ley 19.123 como las leyes 19.980, 19.992 y otras normas jurídicas conexas, han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. En ese sentido, se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones a saber: **a) mediante transferencias directas de dinero.** Aduce a los costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones las que detalla y que ha significado a diciembre de 2019 la suma total de \$992.084.910.400; **b) Reparaciones mediante la asignación de nuevos derechos.** Que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. Señalando la normativa al respecto y las múltiples prestaciones con los desembolsos asumidos por el Estado en esas materias; **c)**

Reparaciones simbólicas: Que al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a la víctima de Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Ejemplifica algunas medidas.

c. La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas. Que todo lo expresado hasta ahora puede concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de Derechos Humanos no solo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los Derechos Humanos. Al efecto, funda sus argumentos citando fallos de la Excma. Corte Suprema, la Corte Interamericana de Justicia, normativa internacional y doctrina. cabe indicar que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, citando al efecto el caso Almonacid, jurisprudencia y doctrina atingente. Estando entonces la acción deducida los actores que invocan la calidad de cónyuge e hijos de la víctima directa, respectivamente basada en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cumulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, es que se opone la excepción de reparación y pago por haber sido ya indemnizada en conformidad a las leyes 19.123 y 19.980.

B. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes que comparecen en calidad de hermanas de ambas víctimas, sin perjuicio de la reparación satisfactiva. Que oponen esta excepción respecto de los demandantes civiles Inés del Carmen y Zinia Amelia, quienes invocan la calidad de hermanas de la víctima directa, por haber sido preteridas legalmente. Refiere a la justicia transicional la que desarrolla en el ambiente de infracciones a los Derechos Humanos. Que en este escenario 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación haciendo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos,

mediante prestaciones en dinero- preferentemente en cuotas mensuales. Detallando lo que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnización ha significado, a diciembre de 2019, y cuya suma total es de \$992.084.910.400.- Que para que ello fuera viable se determinó una indemnización legal, que optó por beneficiar al núcleo más cercano, esto es padres, hijos y cónyuge, preteriendo el resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos. Trae a colación el derecho comparado aludiendo al concepto de “loss of consortium”. De la misma forma aduce al artículo 43 de la ley 16.744. Adiciona que la pretensión económica demandada por las actoras Inés de Carmen Barria Basay y Zinia Amelia Barria Basay han obtenido reparación satisfactiva, que el hecho que los mencionados demandantes no tenga derecho a un pago de dinero, por preterición legal, no significa que no hayan operados otras formas de reparación. Cita doctrina atingente y enuncia las reparaciones simbólicas realizadas y jurisprudencia al respecto. Finalmente sostiene que estando las acciones de auto basadas en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias opone la excepción de reparación satisfactiva, por haber sido ya reparados el daño mediante el conjunto de reparaciones de diversos órdenes.

C. Excepción de prescripción extintiva:

a. Normas de prescripción aplicables. En subsidio opone la excepción de prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios deducida con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; por encontrarse prescrita la demanda, en todas sus partes. Apunta que, según lo expuesto en la demanda, por la detención secuestro y desaparición de los hermanos Héctor y Guido Barría Basay, la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas o familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 4 de marzo de 1991, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto

es, el 10 de enero de 2024, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2.515 del Código Civil.

b. Generalidades sobre la prescripción. Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Expresa que, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Que entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

c. Fundamento de la prescripción. Comunica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Que los planteamientos doctrinarios de los que se vale, le permiten concluir que la prescripción, es una institución estabilizadora. Que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención

a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, continua sus argumentos en ese contexto. Finalmente, refiere que en la especie, el ejercicio de la acción indemnizatoria ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

d. Jurisprudencia sobre la materia. Cita jurisprudencia y reflexiona en ese ámbito, en lo pertinente el fallo de la Excm. Corte Suprema del 21 de enero de 2013 el cual alega que el principio general que debe regir la materia es la de la prescriptibilidad de la acción de reparación civil. Que el plazo no debe contarse desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de Justicia.

e. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria. Ilustra que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. Que debe considerarse, lo planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece- como se dicho- al ámbito patrimonial.

f. Normas contenidas en el Derecho Internacional. Funda que en relación con las alegaciones expuestas por las actoras en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se hace cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, aduce que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente

incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, solicitando que con el mérito de lo expuesto se rechazase íntegramente la demanda, por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

D. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas. Vislumbra que en subsidio de las defensas y excepciones precedentes, opone alegaciones en cuanto a la naturaleza de las acciones indemnizatorias solicitadas y los montos pretendidos. Alega que los demandantes como compensación del daño moral solicitan una cifra absolutamente excesiva.

a. Fijación de la indemnización por daño moral. Que con relación al daño moral debe considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. En términos generales refiere que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgándole a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido. Citando la definición que ha realizado la Excma. Corte Suprema al respecto sobre el perjuicio moral.

b. En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales. Fundamenta que de no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

c. Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada. Hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Realiza argumentos en esa línea citando jurisprudencia de los tribunales superiores. Luego expresa que, en el hipotético caso de que se resolviera acoger las acciones de autos y se condene a su representado al pago de indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la

sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoria y su representado incurra en mora.

67°) Que haciéndonos cargo de la **contestación de la demanda efectuada por el Fisco de Chile**, y para un mejor entendimiento de la contestación efectuada, se reflexionará y estructurará su presentación de la siguiente forma:

A. Excepción de reparación integral. Improcedencia de las indemnizaciones alegadas por haber sido ya indemnizados los demandantes que se indican.

B. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de las demandantes que invocan la calidad de hermanas de la víctima, sin perjuicio reparación satisfactiva.

C. Excepción de prescripción extintiva.

D. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas.

A. En cuanto a las excepciones individualizadas en las letras A) y B) precedentes el Tribunal reflexiona de la siguiente manera: Las excepciones antes referidas, serán rechazadas por el Tribunal y así se estará en lo resolutivo, es especial por los siguientes fundamentos ya ponderados en las siguientes causas:

- 1. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue**, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;
- 2. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue**, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;
- 3. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;
- 4. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;
- 5. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

6. **Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín**, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;
7. **Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén**, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;
8. **Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;
9. **Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro**, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016,
10. **Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;
11. **Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufquén**, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;
12. **Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue**, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;
13. **Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;
14. **ñ. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;
15. **Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol**, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;
16. **Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;
17. **Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;
18. **Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt**, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

19. **Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;
20. **Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt**, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;
21. **Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017;
22. **Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria** seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017,
23. **Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco** para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018;
24. **Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro** seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020;
25. **Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;
26. **Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;
27. **Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia**, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;
28. **Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018;

29. **Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018;
30. **Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.
31. **Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco**, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.
32. **Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.
33. **Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.
34. **Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.
35. **Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas**, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.
36. **Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro**, seguida por el secuestro calificado de José Bernardino Cuevas, sentencia de 30 de marzo de 2019.
37. **Causa rol 113.991 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado en la persona de Ramón Carrero Chanqueo, sentencia de 21 de noviembre de 2022.
38. **Causa rol 113.478 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado en la persona de Luis Omar Torres Antinao, sentencia de 13 de junio de 2019.
39. **Causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el secuestro calificado de José Edulio Muñoz Concha, sentencia de 30 de abril de 2021.
40. **Causa rol 5-2013 del ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia**, seguida por delito de aplicación de tormentos en la persona de Harry Cohen Vera.

41. **Causa rol 63.551 de ingreso del Juzgado de Letras de Angol**, seguida por el delito de homicidio calificado en la persona de Patricio Rivas Sepúlveda.
42. **Causa rol 113.969 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera.
43. **Causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco**, seguida por el delito de apremios ilegítimos de Luis Alberto Chihuailaf Arriagada, sentencia del 02 de agosto de 2022;
44. **Causa rol 24.428 del Juzgado de Letras de Traiguén**, seguida por los apremios ilegítimos de Antonio Inostroza Segura y otros, sentencia del 30 de octubre de 2023.
45. **Causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt**, seguida por aplicación de tormentos y detención ilegal, sentencia del 09 de agosto de 2022. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el FISCO de Chile.

a. **Sobre lo anterior, además se reitera que esta excepción será rechazada.** En efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala ninguna norma de las leyes que cita, donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los Derechos Humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los Derechos Humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excma. Corte Suprema**, en especial: El fallo de 01 de abril de 2014, **rol 1424-2013**, sentencia de remplazo, considerando 13°, motivo que también cita

fallos en el mismo sentido, roles N° 2918-13, N°3841-12 y N°5436-10. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos: (...) “la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República”. Del mismo modo el hecho que la demandante hayan sido favorecida por el Estado por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

B. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación a los artículos 2.497 y 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código Civil: También será rechazada. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo rol 1424-2013 de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N°19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973- 1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Verdad y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones

y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

C. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas:

a) Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma, lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I, artículo 158, donde a los Tribunales se les denominaba “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N°2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (Antonio Pedrals: Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

b. Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en

un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (John Rawls. Una Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

c. Que en la misma línea, el autor citado en su obra Liberalismo Político, igual editorial, año 2013, páginas 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

d. Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo Alejandro Guzmán Brito en su artículo, La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno Claudio Nash Rojas, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro “Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007” (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro “Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena” (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en las páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el

ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de Alejandro Vergara Blanco, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni lus Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana en su artículo 63, el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte

Internacional de Justicia, establece el principio ex aequo et bono (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

e. Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la Excm. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13, que en su considerando décimo, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia, se procede a rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile.

f. Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excm. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en la causa rol N°5572-2029, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.

g. Que el fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021, sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:..."Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N°1 que fija el texto refundido, coordinado

y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N°18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la “falta de servicio”, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública”. En este sentido, en su parte resolutive “se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”.

h. Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre las indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido Delitos de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta

de servicio. En consecuencia, aparece justo y razonable que se otorgue un monto conforme al mérito del proceso y al daño ocasionado.

D. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, este pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.

F. Respecto de las costas de la causa: Que no obstante el fallo de la Corte IDH caso “**Órdenes Guerra y otros versus Chile**” de fecha 29 de Noviembre de 2018. Este demandado sigue insistiendo repetidamente que deben rechazar estas acciones, que no se debe pagar a las víctimas, invocando además la prescripción; ahora bien los últimos fallos que rechazan la prescripción por parte de la Excma. Corte Suprema. Luego si ha sido vencido en el juicio, debe pagar las costas.

68°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por los demandantes civiles, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia de los delitos de apremios ilegítimos y secuestro calificado en contra de las víctimas Guido Ricardo Barria Bassay y Héctor Alejandro Barria Bassay, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. Declaración judicial de Rodrigo Ignacio Martínez Gómez de fs. 2878 a fs. 2879 (Tomo IX) y Omar Rodrigo Santana Cárcamo de fs. 2880 a fs. 2881 (Tomo IX), quienes declaran sin tacha y legalmente examinados que conocen a los demandantes civiles, destacan que Zinia e Inés son hermanos y Ricardo con Cecilia son hijos de Guido y Maria Cristina es hija de Alejandro. Anexan que fueron testigos de la constante búsqueda que hicieron los familiares por encontrar a Guido y Héctor, buscándolos, sin perjuicio que la madre de ambos hermanos falleció sin poder sepultar a sus hijos. Presumen que los demandantes civiles han sido perseverantes en la búsqueda.

B. Oficio ORD. N° 618-2024 del Registro Civil e Identificación en lo pertinente, informa respecto a Héctor Alejandro Barria Bassay, en lo pertinente informa que su hija es Maria Cristina Barria Caro y sus hermanos son Guido

Ricardo, Inés del Carmen, Zinia Amelia, Luis Eliser, Elia Estelvina, Juana Elvecia y Oscar Eduino, todos Barria Bassay. Que respecto a Guido Ricardo Barria Bassay informa que no mantiene hijos y que sus hermanos son Héctor Alejandro, Inés del Carmen, Zinia Amelia, Luis Eliser, Elia Estelvina, Juana Elvecia y Oscar Eduino, todos Barria Bassay, de fs.2917 a fs. 2920 (Tomo IX).

C. Informe integral de daño de Cecilia Andrea Barria Ralil, de fs. 2808 a fs. 2818 (Tomo IX), que en lo pertinente concluye que el impacto se inicia en su primera infancia con la desestructuración de su grupo familiar, pérdida del rol paterno y de proveedor principal de la familia, se le niega la posibilidad de conocer y crecer bajo la figura de afecto de un padre, sumándose a ello el alejamiento del vínculo materno, tras su exposición a situaciones de vulnerabilidad, que al día de hoy evita reconocer y enfrentar en su discurso.

D. Informe integral de daño de Inés del Carmen Barria Bassay, de fs. 2819 a fs. 2827 (Tomo IX), que en lo pertinente concluye que al día de hoy se encuentra en un proceso de duelo traumático a causa de no haber podido encontrar aun a sus hermanos. Se suma, además, la experiencia de vida marcada por el estigma social y angustia de recibir información errónea constantemente.

F. Informe integral de daño de Maria Cristina Barria Caro, de fs. 2828 a fs. 2839 (Tomo IX), en lo pertinente concluye que las circunstancias familiares en torno a la desaparición de su padre y tío, marcan y originan inevitablemente daños irreversibles en su estructura de personalidad. En términos afectivos, sociales y económicos se determinan carencias emocionales y de seguridad básicas. A esto se suma la inestabilidad y exposición a la que es expuesta Maria Cristina, observando, violencia directa de Carabineros hacia sus seres queridos, así como a ella misma siendo solo una niña, todo esto se configura como una grave vulneración a los derechos del niño, niña y adolescente.

G. Informe integral de daño de Ricardo Barria Ralil, de fs. 2840 a fs. 2848 (Tomo IX), en lo pertinente concluye que se encuentra en proceso de duelo suspendido dada la dura experiencia desde su niñez, marcada por la vulnerabilidad, lo que generan la aparición de sentimientos de frustración, angustia y desamparo, generando una base traumática en el tiempo.

H. Informe integral de daño de Zinia Barria Bassay, de fs. 2849 a fs. 2859 (Tomo IX), en lo pertinente concluye que al día de hoy se encuentra en un

proceso de duelo traumático a causa de no haber podido encontrar aun a sus hermanos. Se suma, además, la experiencia de vida marcada por el estigma social y angustia de recibir información errónea constantemente.

I. Certificado de nacimiento de Inés del Carmen Barria Bassay de fs. 2076 (Tomo VI), consta que sus padres son Elvecia Bassay Alvear y Pedro Alejandro Barria Navarro.

J. Certificado de nacimiento de Zinia Amelia Barria Bassay de fs. 2077 (Tomo VI), consta que sus padres son Elvecia Bassay y Pedro Alejandro Barria Navarro.

K. Certificado de nacimiento de Maria Cristina Barria Caro de fs. 2078 (Tomo VI), consta que sus padres son Héctor Alejandro Barria Bassay y Rosa Emilia Caro Pino.

M. Certificado de nacimiento de Ricardo Alejandro Barria Ralil de fs. 2079 (Tomo VI), consta que sus padres son Guido Ricardo Barria Basay y María Sofía Ralil Altamirano.

N. Certificado de nacimiento de Cecilia Andrea Barria Ralil de fs. 2080 (Tomo VI), consta que sus padres son Guido Ricardo Barria Basay y María Sofía Ralil Altamirano.

Ñ. Certificado de nacimiento de Guido Ricardo Barria Basay de fs. 2081 (Tomo VI), consta que sus padres son Elvecia Basay Alvear y Pedro Alejandro Barria Navarro.

O. Certificado de nacimiento de Héctor Alejandro Barria Basay de fs. 2082 (Tomo VI), consta que sus padres son Elvecia Basay Alvear y Pedro Alejandro Barria Navarro.

69°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman los actores, provocado por los delitos de apremios ilegítimos y secuestro calificado de Héctor Alejandro Barría Bassay y Guido Ricardo Barría Bassay, **está plenamente acreditado**. Que en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedentes las indemnizaciones que se demanda, esto es: **a)** la perpetración de los delitos por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por los demandantes; y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización,

si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por los actores y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para los actores, por los ilícitos de apremios ilegítimos y secuestro calificado de Héctor Alejandro Barría Bassay y Guido Ricardo Barría Bassay, cometido por los Agentes del Estado, esto es para Inés del Carmen Barria Basay; Ricardo Alejandro Barria Ralil; Zinia Amelia Barria Basay; Cecilia Andrea Barria Ralil y Maria Cristina Barria Caro, **la suma de \$ 710.000.000 (setecientos diez millones de pesos)** que se desglosa de la siguiente manera:

A.\$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para los demandantes civiles, que ostentan la calidad de hijos, a saber Ricardo Alejandro Barria Ralil; Cecilia Andrea Barria Ralil y Maria Cristina Barria Caro.

B.\$130.000.000 (ciento treinta millones de pesos) para los demandantes civiles, que ostentan la calidad de hermanos de las víctimas, a saber Inés del Carmen Barria Basay y Zinia Amelia Barria Basay.

70°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 10 N°10, 11 N° 1, 6, 9 y 10, 12 N° 8, 14, 15, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29,30, 50, 51, 52, 56, 61, 68, 69,74,93,94 103, 148,141, 150 N°1 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes,433, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 460, 471 y siguientes, 474 y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 211 y 214 del **Código de Justicia Militar**; artículos 2.314 y siguientes del **Código Civil**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216**; **Ley**

19.123 y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980; Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949, se declara:**

EN CUANTO A LA ACCION PENAL:

I. QUE NO HA LUGAR a la excepción de fondo de cosa juzgada interpuesta por los abogados Tomas Zamora Maluenda en representación de José Hernán Godoy Barrientos en su presentación de fojas 2342 y siguientes (Tomo VII)

II. QUE NO HA LUGAR a las excepciones de fondo de prescripción de la acción penal, amnistía y cosa juzgada interpuestas por el abogado Hernán Benavides Navarro en representación de Hans Eduart Schernberger Valdivia en su presentación de fojas 2632 y siguientes (Tomo VIII) y Maximiliano Murath Mansilla en representación de Luis Alberto Oyarzún Arriagada de fs. 2404 a fs.2479 (Tomo VII).

III. QUE SE CONDENA con costas a JOSÉ HERNÁN GODOY BARRIENTOS, R.U.N 6.079.250-K, ya individualizado, por los siguientes delitos:

A. Delitos consumados de apremios ilegítimos en las personas de Héctor Barría Bassay y Guido Barría Bassay, en su carácter de lesa humanidad, previsto y sancionado en el artículo 150 N°1 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, perpetrados en la comuna de Riachuelo desde el 16 de octubre de 1973, en calidad de autor a la pena de **5 años de presidio menor en su grado máximo** y a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

B. Delitos consumados de secuestros calificados en las personas de Héctor Barría Bassay y Guido Barría Bassay, en su carácter de lesa humanidad, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, perpetrados en la comuna de Riachuelo desde el 16 de octubre de 1973, en calidad de autor a la pena de **15 AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado máximo** y a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

IV. QUE SE CONDENA con costas a HANS EDUART SCHERNBERGER VALDIVIA, R.U.N 3.607.882-0, ya individualizado por los siguientes delitos:

A. Delitos consumados de apremios ilegítimos en las personas de Héctor Barría Bassay y Guido Barría Bassay, en su carácter de lesa humanidad, previsto y sancionado en el artículo 150 N°1 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, perpetrados en la comuna de Riachuelo desde el 16 de octubre de 1973, en calidad de autor a la pena de **5 años de presidio menor en su grado máximo** y a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

B. Delitos consumados de secuestros calificados en las personas de Héctor Barría Bassay y Guido Barría Bassay, en su carácter de lesa humanidad, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, perpetrados en la comuna de Riachuelo desde el 16 de octubre de 1973, en calidad de autor a la pena de **15 AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado máximo** y a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

V. QUE SE CONDENA con costas a LUIS ALBERTO OYARZÚN ARRIAGADA, R.U.N 6.564.748-6, ya individualizado por los siguientes delitos:

A. Delitos consumados de apremios ilegítimos en las personas de Héctor Barría Bassay y Guido Barría Bassay, en su carácter de lesa humanidad, previsto y sancionado en el artículo 150 N°1 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, perpetrados en la comuna de Riachuelo desde el 16 de octubre de 1973, en calidad de autor a la pena de **5 años de presidio menor en su grado máximo** y a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

B. Delitos consumados de secuestros calificados en las personas de Héctor Barría Bassay y Guido Barría Bassay, en su carácter de lesa humanidad, previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, perpetrados en la comuna de Riachuelo desde el 16 de octubre de 1973, en calidad de autor a la pena de **15 AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado máximo** y a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para

cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

VI. Que respecto al acusado **JOSÉ HERNÁN GODOY BARRIENTOS** según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

A. ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el 21 de abril de 2023 como consta a **fs. 1744 (Tomo V)**, cuando es notificado del auto de procesamiento de **fs. 1707 a fs. 1725 (Tomo V)**, en virtud del cual se decreta su arresto domiciliario total.

B. ARRESTO DOMICILIARIO PARCIAL NOCTURNO: de a fs. **2594 (Tomo VII)**, del 29 de abril de 2024 en la cual se dictó el cúmplase, respecto a la resolución de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco que revocó la medida cautelar por arresto domiciliario parcial y nocturno, actualmente vigente.

VII. Que respecto al acusado **HANS EDUART SCHERNBERGER VALDIVIA** según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

A. ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el 28 de abril de 2023, como consta a **fs. 1770 (Tomo V)**, cuando es notificado del auto de procesamiento de **fs. 1707 a fs. 1725 (Tomo V)**, en virtud del cual se decreta su arresto domiciliario total, actualmente vigente.

VIII. Que respecto al acusado **LUIS ALBERTO OYARZÚN ARRIAGADA** según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216. En consecuencia, deberá cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

A. ARRESTO DOMICILIARIO TOTAL: Desde el 18 de abril de 2023 como consta a **fs. 1736 (Tomo V)**, cuando es notificado del auto de procesamiento de **fs. 1707 a fs. 1725 (Tomo V)**, en virtud del cual se decreta arresto domiciliario total.

B. ARRESTO DOMICILIARIO PARCIAL NOCTURNO: Desde el 30 de agosto de 2024, según consta en notificación de fs. **2950 (Tomo IX)**, respecto a la resolución de la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco que revocó la medida cautelar por arresto domiciliario parcial y nocturno, actualmente vigente.

IX. Que en cuanto a las peticiones de cumplimiento de la pena en el domicilio solicitada respecto de los acusados Luis Alberto Oyarzún Arriagada y Hans Eduart Schernberger Valdivia, según los razonamientos precedentes, **NO SE HACE LUGAR.**

X. Que la pena impuesta a los condenados comenzara a regir desde que **se presenten o sea habidos en la presente causa.**

XI. Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto la medida cautelar personal impuesta a los acusados, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

XII.- Que **NO HA LUGAR** a las **excepciones** interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Diego Acuña Gálvez, en su presentación de fs. 2.262 y siguientes (Tomo VI), esto es:

A. Excepción de reparación integral. Improcedencia de las indemnizaciones alegadas por haber sido ya indemnizados los demandantes que se indican.

B. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes que invocan la calidad de hermanas de ambas víctimas, por haber obtenido reparación satisfactoria.

C. Excepción de Prescripción extintiva. Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

XIII. Que HA LUGAR a la demanda civil interpuesta por el Abogado Vladimir Alberto Riesco Bahamondes en representación de: 1) Inés del Carmen Barria Bassay; 2) Ricardo Alejandro Barria Ralil; 3) Zinia Amelia Barria Bassay; 4) Cecilia Andrea Barria Ralil y 5) Maria Cristina Barria Caro de **fs. 2083 a fs. 2108 (Tomo V)**, en contra del Fisco de Chile. Condenándose a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto de los delitos

de apremios ilegítimos y secuestro calificado en las personas de Héctor Alejandro Barria Bassay y Guido Ricardo Barria Bassay, las sumas de:

A. \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para Ricardo Alejandro Barria Ralil; Cecilia Andrea Barria Ralil y Maria Cristina Barria Caro.

B. \$130.000.000 (ciento treinta millones de pesos) para Inés del Carmen Barria Bassay y Zinia Amelia Barria Bassay. Lo cual arroja la suma total de **\$710.000.000 (setecientos diez millones de pesos)**, según se ha indicado precedentemente.

XIV. La suma anterior deberá ser **reajustada en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

XV. Que se condena en costas al FISCO de Chile.

Notifíquese esta sentencia personalmente a los sentenciados, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere, facultándose al Tribunal para que cite a los sentenciados personalmente, bajo apercibimiento de arresto o se constituyan en sus domicilios si fuera necesario, realizando todas las diligencias para el oportuno cumplimiento de la notificación de esta sentencia, pronunciándose sobre las peticiones que hiciera los sentenciados en el acto de la notificación, en especial si presentaran verbalmente recurso de apelación.

Considerando la pena decretada en contra de los sentenciados y teniendo presente las medidas cautelares vigentes, **fórmese** cuaderno separado **“cuaderno de medidas cautelares”** y otras situaciones que afecten a los sentenciados de este proceso. Incorporándose a este lo referente a revisión de medidas cautelares; tales como prisión preventiva, arresto domiciliario total, arresto domiciliario parcial, obligación de firma mensual, y arraigos nacionales según corresponda. Agréguese a dicho cuaderno copia de los poderes vigentes y copia de la última resolución en que conste la medida cautelar que cada uno de los sentenciados cumple hasta esta fecha.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al FISCO de Chile a través de Receptor de turno del presente mes. En el caso de encontrarse en la Secretaría del Tribunal notifíquese personalmente en esas dependencias.

En el caso del querellante Programa Continuación Ley 19.123, del Ministerio de Justicia, notifíquese personalmente en Secretaría del Tribunal, a cualquiera de los abogados que tenga representación.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo **509 bis del Código de Procedimiento Penal**, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra del sentenciado para informarle sobre las decisiones del presente fallo y en su oportunidad, archívese.

Consúltese si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1973 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N°1-2016.

Dictada por don **ÁLVARO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Delitos de apremios ilegítimos y secuestro calificado
de Héctor Alejandro Barría Bassay y Guido Ricardo
Barría Bassay
Sentencia Definitiva de 385 fojas.

Autoriza don Germán Varas Cicarelli, Secretario de la Iltma. Corte de Apelaciones
de Temuco.

En Temuco, a veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué por el
estado diario la resolución precedente. (FRF).